

Las Venas (aún) abiertas por el neoliberalismo en América Latina

**Medio siglo de contrarreformas
y contrarrevolución (1973-2023)**

coords.

Efraín León

Gabriela Roffinelli

José Francisco Puello-Socarrás

Carolina Jiménez Martín



Las venas (aún) abiertas por el Neoliberalismo en América Latina

Diseño de tapa: Erandi Casanueva
Corrección: Gemma Argüello Manresa
Diseño interior: Erandi Casanueva

Las venas (aún) abiertas por el Neoliberalismo en América Latina

Medio Siglo de Contrarreformas y
contrarrevolución (1973-2023)

Efraín León

Gabriela Roffinelli

José Francisco Puello-Socarrás

Carolina Jiménez Martín

(Editoras y editores)



PLATAFORMAS PARA
EL DIÁLOGO SOCIAL





CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Pablo Vommaro - Directora Ejecutiva

Gloria Amézquita - Directora Académica

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial



Librería

Latinoamericana
y Caribeña de
Ciencias Sociales

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Las venas (aún) abiertas por el Neoliberalismo en América Latina.

Medio siglo de contrarreformas y contrarrevolución (1973-2023) (México: CLACSO, octubre de 2024).

ISBN 978-607-30-9564-8



© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> |

<www.clacso.org>

Índice

PRESENTACIÓN.....	1
-------------------	---

PRIMERA PARTE: TENDENCIAS MUNDIALES EN NUESTRA AMÉRICA

La liberación como forma de la ofensiva del Capital	
<i>Julio César Gambina</i>	11
“Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”: imperialismo, orientación del capital y política económica	
<i>Xabier Arrizabal, Francisco Javier Murillo y Mario del Rosal</i>	33
Territorio, espacio político y neoliberalismo en América Latina. Tendencias históricas y disputas geopolíticas entre clases sociales	
<i>Efraín León Hernández</i>	57
El desconcierto del neoliberalismo latinoamericano	
<i>Claudio Katz</i>	79

SEGUNDA PARTE: EL CASO CHILENO A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO AL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

Salvador Allende. El Tránsito Pacífico del Capitalismo al Socialismo en Chile. 1970-1973	
<i>Orlando Caputo y Graciela Galarce</i>	105
Chile. Reinterpretación Histórica del Neoliberalismo y de los Chicago Boys en Chile (1973 a mayo de 2023)	
<i>Graciela Galarce</i>	141
Chile: el fracaso de la propuesta constituyente y la derrota del bloque histórico progresista3. O giro multiterritorial em uma abordagem de(s)colonial	
<i>Cristian Jamett Pizarro</i>	173

TERCERA PARTE: ÉLITES INTELECTUALES, DEPENDENCIA Y LÍMITES DEL PROGRESISMO EN EL CONO SUR

Argentina en la encrucijada de las políticas neoliberales (1976-2023) <i>Gabriela Roffinelli</i>	191
Contradicciones destructivo-constructivas en torno a los determinantes históricos de la formación social paraguaya <i>Luis Rojas Villagra</i>	217
Brasil: Sinuosidades del neoliberalismo verde y amarillo <i>Hernán Ramírez</i>	237
Neoliberalismo e Dependência na Particularidade Brasileira <i>Epitácio Macário y Marcelo Dias Carcanholo</i>	259

CUARTA PARTE: VIOLENCIA Y NEOLIBERALISMO EN LA REGIÓN ANDINA

Auge y crisis de la doctrina neoliberal en Bolivia <i>Rebeca Peralta y Robert Quintero Leguizamon</i>	281
Perú, 30 años del pishtaqo neoliberal <i>Aníbal García Fernández</i>	303
Cincuenta años de soledad. Capitalismo tardío y Neoliberalismo (en armas) en Colombia <i>José Francisco Puello-Socarrás y Carolina Jiménez Martín</i>	329
A 50 años del neoliberalismo. Caso Venezuela <i>Pasqualina Curcio Curcio</i>	365

QUINTA PARTE: ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL NEOCOLONIALISMO EN EL GRAN CARIBE

Neoliberalismo en Panamá; retrospectiva desde el golpe militar de 1968 <i>William Hughes</i>	397
Los vaivenes del neoliberalismo en el Gran Caribe. Balance de una época <i>Nayar López Castellanos</i>	423
México 1983-2018: 35 años de neoliberalismo <i>Josefina Morales</i>	447

Presentación

En el año 2023, se cumplieron cincuenta años del golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile.

El 11 de septiembre de 1973 es una fecha por demás lacerante en la historia de América Latina que sin lugar a duda dejó huella en la sociedad chilena y emblemáticamente marcó el inicio de un largo periodo de terror pánico en toda la región. Este momento de nuestra historia reciente se inició con la intensificación de la represión política y la puesta en marcha de diversos dispositivos contrainsurgentes militar y paramilitar por parte de las clases dominantes en nuestras naciones en absoluta subordinación al ejercicio geopolítico de los Estados Unidos de América. Nos referimos al periodo instaurado por las dictaduras militares latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX.

La profunda reestructuración del capitalismo dependiente de las últimas cinco décadas, que hoy (re)conocemos como *neoliberal*, desplegó terribles implicaciones políticas, sociales, culturales y ecológicas contra los y las trabajadores, las sociedades y los pueblos de Nuestra América. Su inicio fue definido a partir de la implementación de un proyecto político de clase que incluyó reformas jurídicas, institucionales y de políticas públicas (monetarias, mercantiles, productivas, territoriales, de gasto social, entre muchas otras), las cuales, en su materialización dieron vida a un modelo económico, político

y social que condenó a la marginación, la pobreza y la invisibilidad de la mayor parte de la población de nuestra región: un proyecto que, en estos largos años, de manera directa e indirecta, además de la sistemática e incesante generación de miseria, ha cobrado la vida de muchas más personas que las propias dictaduras.

Se trata de medio siglo de la miseria de los horrores y de los horrores de la miseria que se enmarcan en una Larga Crisis de la sociedad capitalista contemporánea. Una crisis que es más que sólo una crisis financiera e incluso económica, porque se trata de una crisis de la propuesta civilizatoria capitalista para la sociedad mundial la cual paulatina, pero progresivamente sigue profundizándose, intensificándose.

Por ello, el año 1973 se propone no apenas como una fecha icónica a conmemorar, sino como una referencia que permite establecer una mirada desde una temporalidad privilegiada que deja ver la emergencia, el auge y el despliegue de las políticas neoliberales en la región y el mundo.

Además de la mirada privilegiada de cinco décadas, pensar este periodo desde América Latina y el Caribe es también una espacialidad favorecida para el conocimiento de la larga data de neoliberalismo global. Asimismo, permite entender la manera particular en la que este proyecto político y sus políticas económicas fueron implementadas en cada una de nuestras naciones y, por ello, la especificidad latinoamericana además permite comprender ampliamente las dinámicas y las contradicciones del sistema capitalista mundial en su fase neoliberal, sobre todo, la reestructuración de la reproducción ampliada capitalista en correspondencia e interdependencias funcionales con los Estados Unidos, Europa y en general con el mercado mundial.

No todos los momentos y lugares de la historia brindan una oportunidad como esta. Porque los cincuenta años desde el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende coinciden con una crisis estructural del capitalismo nunca antes registrada y así este hito resulta especialmente afortunado para enmarcar, analizar y actualizar

retrospectiva y prospectivamente las dinámicas y las transformaciones desde una crítica a la economía política mundial.

Los balances críticos que miran al futuro, que fortalecen perspectivas superadoras de lo que también se ha caracterizado como la larga noche del Holocausto neoliberal en el capitalismo actual, se hacen urgentes ante la inminencia de forjar y reforzar los nuevos horizontes de visibilidad que desde alternativas populares vienen siendo protagonistas de cambios actuales y transformaciones potenciales desde Nuestra América Latina y el Caribe.

¿Qué ofrece este libro?

El libro que tiene en sus manos propone un primer acercamiento desde esta perspectiva de larga duración que mira el neoliberalismo en la temporalidad de cinco décadas, en su singularidad latinoamericana y en la organicidad de la región con el mercado mundial capitalista.

Lo conforman cinco partes que en su interior pretenden dar cuenta de dos aspectos centrales. En primer lugar, la primera parte explora el papel del neoliberalismo latinoamericano en el mercado mundial, sus cualidades particulares y dinámicas, e implicaciones diversas en estas cinco décadas. En segundo lugar, sin perder esta perspectiva, las siguientes cuatro partes se aproximan a las maneras en que el neoliberalismo se ha expresado al interior de las distintas regiones, al tiempo que busca caracterizar sus principales rasgos, contraindicaciones e impactos.

La primera parte, *Tendencias mundiales en Nuestra América*, está conformada por cuatro artículos. El escrito de Julio C. Gambina, “La liberalización como forma de la ofensiva del capital”, problematiza el neoliberalismo mundial como un transcurso de sistemático avance de las relaciones monetario mercantiles que solo ha encontrado obstáculos que lo demoran en los intentos de una construcción socioeconómica alternativa que logre la desmercantilización el orden

económico. Luego, en el texto de Xabier Arrizabalo, Francisco Javier Murillo y Mario del Rosal, “Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”: imperialismo, orientación del capital y política económica”, problematizan, a partir de la experiencia chilena de los últimos cincuenta años, ciertos enfoques críticos que explican los padecimientos de las clases trabajadoras en el despliegue del neoliberalismo, desenfocando el análisis acerca de las causas reales de los problemas, a saber: la mencionada naturaleza intrínseca del capitalismo.

Por su cuenta, Efraín León en su texto “Territorio, espacio político y neoliberalismo en América Latina. Tendencias histórica y disputas geopolíticas entre clases sociales” propone una mirada de largo aliento respecto a las grandes transformaciones del orden territorial latinoamericano como un proceso de sistemática subsunción del territorio por parte del capital neoliberal en el marco de espacios políticos totalitarios que transitaron a otros de corte liberal autoritario, hoy día en crisis. Finalmente, Claudio Katz, en su escrito “El desconcierto del neoliberalismo latinoamericano” pone en la mesa la paradoja que se ha abierto en la actual crisis de la hegemonía estadounidense respecto al papel que pueden jugar los gobiernos progresistas de la región y el resurgimiento del mito del gran desarrollo en los gobiernos de izquierda.

La segunda parte de este libro, *El caso chileno a 50 años del golpe de estado al gobierno de Salvador Allende*, ofrece un tratamiento puntual del caso chileno, por tratarse del caso emblemático que abre el período que explora la tesis principal de este libro. Orlando Caputo y Graciela Galarce inician esta sección, y de algún modo la tesis principal de este libro, con un trabajo titulado “Salvador Allende. El tránsito pacífico del capitalismo al socialismo en Chile. 1970-1973” en el que se realiza un balance crítico sobre los resultados de la llamada “Vía pacífica al socialismo” y cómo en la contraofensiva imperial no solo se perpetuó un golpe militar y un cambio en la correlación de fuerzas políticas, sino que marcó el inicio de las reformas económicas que hoy denominamos neoliberales. Posteriormente, Graciela

Galarce, en su trabajo “Reinterpretación histórica del neoliberalismo y de los Chicago Boys en Chile” nos plantea cómo el contexto de la contraofensiva/ofensiva imperial a la experiencia chilena de Salvador Allende, además de servir de escarmiento para Europa y el resto de América Latina, sirvió como laboratorio en el que se implementó y ensayó el programa neoliberal creado por la denominada Escuela de Chicago y su ya conocido Plan de Gobierno Alternativo, así como el conjunto de repercusiones que trajo consigo en la sociedad chilena hasta el estallido social de la segunda década del siglo XXI. Finalmente, Cristian Jamett Pizarro en su trabajo “Chile: el fracaso de la propuesta constituyente y la derrota del bloque histórico progresista” coloca la perspectiva en la correlación de fuerzas de larga data que permitió la llegada del gobierno de Gabriel Boric, pero que también delineó sus límites en el marco de la crisis política del Estado.

La tercera parte, *Elites intelectuales, dependencia y límites del progresismo en el cono sur*, está conformada por cuatro artículos que exploran las experiencias de esta región al sur de América Latina. El trabajo de Gabriela Roffinelli “Argentina en la encrucijada de las políticas neoliberales (1976-2023)” aborda la transformación del patrón de reproducción capitalista dependiente en Argentina con la llegada de la dictadura cívico militar de 1976 y la aplicación de las denominadas políticas neoliberales; transformaciones estructurales que han persistido y en la actualidad se agudizan con la embestida de la derecha neoliberal. El escrito de Luis Rojas “Contradicciones destructivo-constructivas en torno a los determinantes históricos de la formación social paraguaya” propone una trayectoria histórica del desarrollo del capitalismo en Paraguay. A su vez sugiere que en la actualidad se asiste a un modelo ampliamente liberalizado y desregulado soportado en una estructura primario exportadora bajo el control latifundista de tenencia de la tierra; y que, por su inserción subordinada y dependiente del mercado mundial, no ha desarrollado un significativo sector industrial, pero si un gran sector caracterizado por la alta informalidad, la precariedad laboral, el cuentapropismo y la inseguridad económica. En consecuencia, la estructura

económica se complementa con un Estado funcional de tipo oligárquico y clientelar.

El trabajo de Hernán Ramírez, “Brasil: sinuosidades del neoliberalismo verde y amarillo”, da cuenta del devenir del neoliberalismo brasileño y su historia particular, aunque sobre todo cómo se permeó ideológicamente. Mientras tanto, Epitácio Macário y Marcelo Dias Carcanholo contribuyen con la profundización de este panorama en su trabajo “Neoliberalismo e dependência na particularidade brasileira” haciendo hincapié en la estructura dependiente de la economía brasileña.

La cuarta parte, *Violencia y neoliberalismo en la región andina*, está conformada por cuatro artículos. El primer trabajo, “Auge y crisis de la doctrina neoliberal en Bolivia”, de Rebeca Peralta y Robert Quintero Leguizamon aproxima una perspectiva de larga data sobre el neoliberalismo en Bolivia, desde su implementación con la Nueva Política Económica, hasta el quiebre del proyecto con el ascenso de un proyecto antineoliberal. Por su parte, Aníbal García Fernández en “Perú, 30 años del *pishtaqo* neoliberal” hace lo propio desde la experiencia peruana, explorando sus antecedentes, instauración y consolidación en el gobierno de Alberto Fujimori, para culminar con sus transformaciones y continuidades en lo que va corrido del siglo XXI.

En “Cincuenta años de soledad. Capitalismo tardío y Neoliberalismo (en armas) en Colombia”, Carolina Jiménez y José Francisco Puello-Socarrás registran los hitos y las trayectorias de la larga construcción del proyecto neoliberal en Colombia desde la década de los sesenta para incorporar la noción del *neoliberalismo en armas* como una forma de destacar la impronta neoliberal-para-militar desplegada en Colombia. La reflexión sobre el caso de Venezuela realizada por Pasqualina Curcio Curcio “A 50 años del neoliberalismo. Caso Venezuela” sintetiza analíticamente los tiempos neoliberales en este país entre los años 1980 y 1998, para luego explorar el tránsito desde el neoliberalismo hacia el socialismo exponiendo un contraste entre ambos periodos útil para las comparaciones.

La quinta y última parte, *Entre el neoliberalismo y el neocolonialismo en el Gran Caribe*, la conforman tres artículos más. William Hughes abre la reflexión sobre la subregión con su trabajo “Neoliberalismo en Panamá; retrospectiva desde el golpe militar de 1968”. Igualmente, enmarcado en el contexto de la crisis económica de la década de 1960, su autor presenta una descripción de cómo la emergencia del neoliberalismo se dio en el medio de una dictadura militar iniciada en 1968, pero que tomo concreción una década después con los acuerdos de 1979 con el Fondo Monetario Internacional. En su trabajo entrega un amplio balance sobre las características de estas políticas económicas, así como de sus impactos económicos, sociales y políticos.

En el trabajo “Los vaivenes del neoliberalismo en el Gran Caribe. Balance de una época” Nayar López presenta una valoración integral de esta gran subregión latinoamericana mientras pone el acento la imposibilidad de articularlos a un elemento común en este periodo, dado que no solo nos encontramos frente a una región, por demás heterogénea, en la que se registran algunos de los aspectos más característicos de la economía de libre mercado, como los paraísos fiscales, sino que, por su condición colonial, muchos de los rasgos de sus economías nacionales no sufrieron cambios sustanciales con la llegada de este modelo económico. Esta situación refleja un tipo de heterogeneidad, que por supuesto también repercutió en la diversidad de resistencias a este modelo que se fraguaron en su seno, así como de los alcances efectivos.

Finalmente, Josefina Morales en “México 1983-2018: 35 años de neoliberalismo” examina la formación del neoliberalismo en México, que con la privatización de la empresa pública llevó a una recomposición del Estado y de su oligarquía nacional, y a la formación de un capitalismo neocolonial; situación que se presenta dentro del marco de medio siglo de crisis estructural del capitalismo, abierto a partir de la década de 1960, mientras que el trabajo caracteriza a la crisis como de tipo multidimensional (económica, financiera, social, política, geopolítica, ambiental) acompañada de crisis económicas

recurrentes en el contexto de la decadencia de la hegemonía mundial estadounidense.

De esta manera, el libro aborda el objetivo complejo que se propone: reabrir el debate sobre la fase histórica del capitalismo mundial y el neoliberalismo dependiente de la región durante estas cinco décadas. Tanto en la escala general, como en la particular, los esfuerzos son desplegados bajo dos ejes transversales: desde sus ámbitos más estructurales de corte económico, que no economicista, se responde al reto de caracterizar algunas de las configuraciones neoliberales en los países de América Latina y el Caribe, y además profundiza en cómo en ello se ha jugado la lucha política entre clases dominantes y las luchas políticas populares.

El conjunto de los artículos que componen el libro deja planteadas importantes interrogantes sobre los derroteros del progresismo en la región, los límites de estas experiencias y la necesidad de profundizar la lucha de clases para poder caminar en un horizonte realmente contra-hegemónico.

Por último, queremos destacar que este texto es fruto del diálogo entre diversos investigadores e investigadoras de los Grupos de Trabajo de CLACSO: Crisis y economía mundial, Marxismos y resistencias del sur global y Geopolítica, integración regional y sistema mundial; y es liderado editorialmente por las y los docentes de cuatro importantes universidades públicas de la región: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), La Universidad Nacional de Colombia (UNAL), La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

De manera especial destacamos el trabajo interinstitucional entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), específicamente la articulación entre el Seminario Espacio política y capital en América Latina, de la FFyL y el Grupo de Trabajo Crisis y Economía Mundial hizo posible la edición y publicación de este libro.

Esperamos que las contribuciones aquí propuestas contribuyan al fortalecimiento del estudio crítico de Nuestra América y a la búsqueda y construcción de horizontes alternativos.

Las y los editores
(Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, agosto de 2023)

PRIMERA PARTE:

TENDENCIAS MUNDIALES EN
NUESTRA AMÉRICA

La liberalización como forma de la ofensiva del Capital

Julio C. Gambina¹

Introducción

El régimen capitalista avanza en el ámbito mundial extendiendo las relaciones monetario mercantiles. En efecto, la mundialización de las relaciones capitalistas se expande en una continuidad histórica solo limitada o demorada por los intentos de construcción alternativa.

La revolución en Rusia y la construcción de un “campo socialista” a fines de la segunda guerra mundial derivó en un “imaginario social” bipolar entre capitalismo y socialismo, más allá de las contradicciones desarrolladas y no resueltas entre la URSS y China.

¹ Doctor en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, República Argentina. Profesor Titular concursado de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, República Argentina. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.

Incluso, más allá de cualquier consideración de avance anticapitalista en la experiencia por el socialismo.

Entre otros fenómenos, esos dos mundos, “capitalismo y socialismo”, como expresión política, y no necesariamente en el plano de las relaciones económico sociales, dieron lugar a la emergencia de un “tercer mundo”, oscilando los países bajo esa categoría, en sus relaciones económicas y políticas con ambos mundos. El tercer mundo, de hecho, potenció la interacción en sus relaciones internacionales con ambos mundos.

Un tercer mundo que asoció su identidad con la “no alineación”, en una búsqueda de autonomía política, limitada por el carácter mundial de la economía capitalista. Una dimensión escasamente asumida como condicionante de las políticas económicas nacionales. Estas últimas están, en definitiva, subordinadas a una lógica mundial del desarrollo de las relaciones sociales de producción y distribución del capitalismo. La omnipotencia de lo “nacional” hizo pensar que en tiempos de avance de la transnacionalización podía habilitarse un proyecto de “capitalismo nacional”, de aliento a “burguesías nacionales”, siendo un gran error de diagnóstico con impacto político regresivo.

Lo que pretendemos enfatizar es que más allá de los propósitos identificados como objetivo socialista o crítico al capitalismo, las realidades de las relaciones sociales de producción no superaron el orden asociado a la valorización, impulsado desde capitales privados en el capitalismo y desde el Estado (URSS) y cierto nivel de injerencia privada en el campo del socialismo (Yugoslavia como ejemplo). La experiencia a nombre del socialismo no superó la lógica monetario mercantil que define la ley del valor de Marx.

Más allá del “imaginario social” y las experiencias bajo la nominación “socialista”, lo que aconteció resultó ser una extensión de las relaciones monetarios mercantiles capitalistas, lo que nos convoca a profundizar la tradición de la crítica al capitalismo iniciada por Carlos Marx a mediados del siglo XIX y que la mundialización verifica en estos tiempos, ya entrada la tercera década del siglo XXI. La

tendencia a la mundialización contemporánea exige profundizar en la inconclusa línea de investigación programada por Marx y enunciada en los *Grundrisse*.

El capital es el sujeto que construye la civilización contemporánea desde su tradición histórica y, claro, bajo las condiciones o límites de la resistencia o sumisión de las clases subalternas, explotadas, oprimidas y excluidas.

Las luchas de las clases subalternas pretendieron otra organización socioeconómica desde procesos de revolución política, que a la luz de la experiencia histórica no termina de organizar una sociedad alternativa, y otra forma de organización socioeconómica sustentada en la producción de valores de uso, es decir, por fuera y en contra de la ley del valor. Es algo que está en los debates del Che en los tempranos 60, al inicio del proceso revolucionario cubano y que hoy anima las propuestas por des-mercantilizar el orden económico.

La crítica como invariante

La dinámica del inversor, del capital, continúa definiendo el presente civilizatorio y sus consecuencias sociales y ambientales que denuncia el movimiento social contemporáneo, incluso más allá de cualquier protocolo global en defensa del medio ambiente y en crítica al cambio climático. La búsqueda de la ganancia y su acumulación es primigenia a cualquier otro objetivo humanitario o ambiental.

El sujeto organizador del capitalismo actúa ante cada crisis mundial con nuevas y renovadas iniciativas para la producción y reproducción de la lógica por la valorización de capitales. Es un proceso que se desarrolla en el marco de la recurrente concentración y centralización de capitales. Y es una dinámica subordinada a la lógica de la ley del valor desarrollada por Marx, más allá de la crítica teórica sustentada desde las corrientes tradicionales “neoclásicas” o

algunos de pasado asociados a la “continuidad” teórica del fundador de la teoría de la revolución².

Solo en la crisis del 30 del siglo pasado, la iniciativa política del capital fue a la “defensiva”, fenómeno sintetizado en las innovaciones teóricas sugeridos por Keynes, en crítica al sentido común neoclásico, e implementadas de manera generalizada desde el keynesianismo hegemónico luego de 1945, en tanto intento de mecanismos de freno a cualquier iniciativa de carácter alternativo, de reformas profundas o de revolución.

El recetario de política económica keynesiano supuso definir los rumbos deliberados para facilitar la reanimación del ciclo de valorización interrumpido por la crisis, al tiempo que desestimular la iniciativa política por transformaciones revolucionarias.

Las “reformas” en el marco del capitalismo asumieron un carácter progresivo, habilitando mecanismos para la instrumentación de reivindicaciones democráticas, sin cuestionar la lógica esencial del capital.

A eso se lo denominó “Estado de bienestar”, política del Estado capitalista en la gestión del orden socioeconómico para favorecer lo esencial, la lógica de la ganancia y de la acumulación para la dominación en tiempos de construcción de una fuerte subjetividad sociopolítica crítica al capitalismo.

Es una etapa excepcional, de defensiva del capital, a contramano de una tendencia histórica a la ofensiva desde la acumulación originaria. El único momento de defensiva del sujeto dominante, el capital, transita entre la emergencia de una propuesta anticapitalista, más allá de sus verdaderos logros y efectividad, hasta el límite civilizatorio de esa experiencia, especialmente de la URSS.

Lo importante es reconocer la existencia de un sujeto que asumió la crítica al orden capitalista, no solo desde la revolución y el intento del socialismo, sino por la extensión de las luchas reivindicativas

² Una crítica a las corrientes ortodoxas y de vínculo con la tradición de Marx que pretenden discutir a Marx, puede leerse en Andrew Kliman (2020).

de las trabajadoras y los trabajadores, de los pueblos en lucha, de su organicidad sindical, social, cultural y política, en tanto mecanismos socio políticos de experimentación civilizatoria en la crítica al orden capitalista.

Todas las luchas reivindicativas construidas por más de un siglo de historia del movimiento sindical y social mundial devinieron en una acumulación de poder de negociación con el sujeto hegemónico del orden capitalista, arrancando concesiones expresadas en derechos sociales, individuales y colectivos.

El capitalismo reformista es producto de una confrontación entre la dominación y las/os dominadas/os, desde una multiplicidad de situaciones, que involucran procesos institucionales a nombre del socialismo y a variadas experiencias de luchas y organización de sectores subalternos.

La crítica tiene expresión teórica y política, como procesos dinámicos de experimentación intelectual, de organización socio política y de lucha.

En la práctica cotidiana de la lucha teórica y política se necesita profundizar por el camino iniciado por Marx e insinuado en borradores no concluidos que se fueron publicando y conociendo en cuenta gotas hasta el presente, en un trayecto a completar la crítica al orden capitalista bajo sus formas desarrolladas desde la acumulación originaria hasta hoy.

Hemos sostenido que la única invariante en Marx es la crítica y por eso no resultó, ni resultan adecuados imaginarios que omitan la continuidad de la dinámica de la valorización, incluso la errónea descripción de lo coyuntural dominado por la esfera de la circulación, concepción que alude a una hegemonía de la “financiarización”. El régimen del capital supone producción y circulación en conjunto.

Valorar la experiencia de las revoluciones, sus intentos, logros y fracasos, no debe ocultar los límites humanos para superar el orden capitalista en continua expansión desde su origen³.

La revolución es un sueño eterno, una búsqueda desde la lucha y organización de las clases subalternas, una asignatura pendiente que ilumina la expectativa esperanzada por otro orden socioeconómico.

No puede escindirse el proceso de producción del de circulación, una unidad dialéctica explicitada en los tres tomos de *El Capital*, más aún con la historia reciente de la expansión de las cadenas de valor y la mundialización de las relaciones capitalistas de producción y distribución, e incluso el papel de la renta en dinero para la acumulación contemporánea, especulación financiera y alza de precios mediante.

Al mismo tiempo se necesita historiar la experiencia humana de lucha social, económica, cultural y política en la diversidad de la organicidad popular desplegada por más de dos siglos de organización y lucha en sindicatos, cooperativas, agrupamientos diversos, y corrientes culturales, de pensamiento y de acción en contra y más allá del capitalismo.

Lo que trato de señalar es la necesidad de comprender al capitalismo como una relación social, desde la acumulación originaria al presente, siempre en contexto de lucha de clases, lo que implica la experiencia de la dominación y de los dominados, y quiénes despliegan iniciativas con mayor o menor éxito en sus cometidos, para reanimar y desplegar lo impensado y enigmático de la producción y reproducción del valor, de la plusvalía y en definitiva de la desigualdad, la pobreza y la concentración del ingreso y la riqueza.

Un déficit de la crítica al capitalismo deviene de la ausencia de síntesis teórica y política sobre la evolución del régimen del capital y la experiencia humana por transformar la realidad. Más allá de cualquier opinión que merezca el texto de Enzo Traverso “Revolución,

³ Existe un importante texto de balance sobre el debate de política económica en la experiencia del socialismo real, que puede leerse en José Luis Rodríguez (2016).

una historia intelectual” (2022), es ese precisamente el propósito de la reflexión, y requiere ser profundizada.

La crítica involucra al régimen del capital, pero también a la experiencia humana por superar al capitalismo.

Ofensiva del capital

Es la inmensa acumulación de poder popular generada entre los 60/70 del siglo pasado la que genera una brutal respuesta desde el capital concentrado en el ámbito mundial para retomar el rumbo de la ofensiva capitalista. El dato es la verificación de la caída de la tasa de ganancia a fines de los 60 y comienzos de los 70, como resultado directo de la acumulación de poder popular de las clases subalternas y las concesiones arrancadas a los propietarios de medios de producción.

La contraofensiva fue en todo el territorio mundial, pero adquirió especificidad territorial en Sudamérica ante el ensayo de las políticas neoliberales favorecidas desde el terrorismo de Estado. Sudamérica y el terrorismo de Estado constituyeron el territorio adecuado para la experiencia ultra-liberal inspirada en la Escuela de Chicago (Galarce, 2021) y con Chile desde 1973 visibilizamos el inicio de la concepción neoliberal que inspira la construcción del capitalismo contemporáneo por medio siglo (1973-2023).

El sur de América es territorio de ensayo “neoliberal” que asume carácter de paradigma universal con su instalación en el norte hegemónico de Gran Bretaña en 1979 y de EEUU en 1980.

La restauración conservadora liderada por Margaret Thatcher y Ronald Reagan otorga carta de ciudadanía a una política a impulsar desde los Estados capitalistas para la restauración de la ofensiva capitalista, frenada por los procesos políticos a nombre de la revolución.

El neoliberalismo, asumido desde el poder estatal de las dos potencias imperialistas en la hegemonía capitalista por dos siglos, no tardará en extenderse, de la mano de la socialdemocracia europea y,

como señalamos, la caída de la URSS habilitó su expansión hacia el este de Europa.

La debacle soviética comienza en los ochenta (Hobsbawn, 1995), haciendo visible el fenómeno la crisis polaca y la renovación en la cúpula de la Iglesia con la designación de Juan Pablo II. Es coincidente en el tiempo con la “modernización” China desde 1978 bajo la dirección de Deng Xiaoping.

Una “modernización” desplegada con el acceso de inversores capitalistas del mundo, ávidos por extender la explotación facilitada por fuerza de trabajo barata en condiciones de control estatal del conflicto social.

China, desde la hegemonía política en el Estado aseguraba la expansión global de las relaciones capitalistas, por lo que las inversiones externas directas fluyeron desde occidente hacia oriente, en una dinámica que transformó al gigante asiático en la gran fábrica del mundo en cuatro décadas.

La ofensiva del capital se desplegaba en todo el planeta, sin el límite que suponía el imaginario social de la bipolaridad entre capitalismo y socialismo. Se trata de un fenómeno consolidado en la última década del Siglo XX en donde China no reproducía, ante la debacle de la URSS, las condiciones de la bipolaridad global.

De ese modo, se instaló la máxima del “fin de la historia” y del “marxismo” como proyecto alternativo. El triunfo del capitalismo sobre la experiencia socialista se constituía en proyecto global y así, la mundialización del capital no tenía límite territorial.

El paradigma “neoliberal” iniciado en Sudamérica se había extendido por todo el planeta. La colonización neoliberal mundial era un hecho, por lo que la liberalización económica fue la voz de mando para el avance del modelo productivo y de desarrollo en todo el mundo.

Libre comercio, libre cambio o libre competencia, paradigmas impulsores del capitalismo en origen y consignas emblemáticas de los primeros sintetizadores de la Economía Política, adquirirían

nuevamente referencia en la construcción teórica de las relaciones económicas y sociales.

Todo volvía a la “normalidad” y se abandonaba la época excepcional del capitalismo reformista, condicionado por el avance de la lucha y organización popular condensada en el proyecto de la revolución anticapitalista, ahora derrotada.

La restauración de la ofensiva capitalista era el objetivo. La ofensiva del capital se concentró en revertir las concesiones arrancadas desde la lucha de las clases subalternas y por eso se inició una etapa de reaccionarias reformas a la relación entre el capital y el trabajo, en una dinámica que arrastra una historia de medio siglo que continúa y se profundiza con la iniciativa política restauradora del poder capitalista.

El cambio de funciones del Estado constituye otro nivel de la ofensiva del capital y, así, las sucesivas reformas regresivas del Estado se definen en los procesos de desregulación y privatización, que en América Latina y el Caribe se propagaron en los 90 del siglo pasado bajo las consignas del Consenso de Washington.

Con esos cambios se hizo necesario modificar las relaciones económicas internacionales, habilitando procesos de eliminación de barreras a la circulación de los capitales y las mercancías, proliferando acuerdos que sostenían el libre comercio o la defensa de los intereses de los inversores privados en el ámbito mundial.

La liberalización de la economía suponía entonces cambios en las relaciones laborales, flexibilizando salarios y condiciones de trabajo; reformas estatales para sustentar el avance de la iniciativa privada y la libre circulación y movimiento de capitales internacionales, lo cual requería de un blindaje jurídico favorecido por la institucionalidad global, más aún con el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995, completando el proyecto originario al fin de la segunda guerra y el surgimiento de los organismos financieros internacionales, el FMI y el Banco Mundial. Ratificando esas tendencias, China se incorporó a la OMC.

Con esa institucionalidad global, la ofensiva capitalista consolidó su proyecto que parecía no tener límites. Vale recordar la emergencia de la resistencia a esa estrategia desplegada por el movimiento en contra del neoliberalismo y la liberalización, que obstaculizó la ronda del milenio de la OMC, pensada para 1999 en Seattle y que la “batalla de Seattle” sepultó hasta la respuesta militarizada de EEUU a los atentados en las torres gemelas de Nueva York en septiembre de 2001.

La cumbre pensada para 1999 solo pudo realizarse en noviembre del 2001 bajo presión represora de la política definida por EEUU ante el atentado de ese año. La ofensiva encontraba sus límites en la resistencia popular renovada en el movimiento internacional de impugnación al neoliberalismo y al capitalismo, lo que suponía tensiones a su interior, entre quienes imaginaban que el problema era el neoliberalismo y quienes sostenían que el problema a confrontar era el capitalismo. Es una contradicción latente en los debates actuales.

Réplica a la ofensiva

En simultáneo a la fortísima ofensiva capitalista, iniciada en territorio latinoamericano, la resistencia de los pueblos opera desde la misma geografía con un conjunto de luchas populares que abren un tiempo de esperanzada expectativa en la impugnación a la hegemonía del paradigma capitalista bajo lógica liberalizadora.

Sea desde Caracas en el recorrido de la rebelión de 1989 a la elección presidencial de 1999, o el levantamiento zapatista en Chiapas, México, en 1994, la rebelión popular de la Argentina en 2001 o la dinámica política en Brasil que hizo posible la reunión del Foro Social Mundial (FSM) en Porto Alegre en 2001.

Todos son episodios que evidencian un nuevo ciclo de luchas y organización del movimiento popular en la región, que habilitó cambios políticos trascendentes hacia el cambio de siglo.

En la primera década del Siglo XXI se presentan señales de una experiencia sociopolítica que motivó el interés en el ámbito mundial.

La región pasó a ser objeto de estudio ante nuevas expresiones, no solo de impugnación al orden capitalista y la política de liberalización, sino que aparecieron elementos diferenciadores que podían anticipar rumbos alternativos al orden vigente.

En primer lugar, debe reconocerse la emergencia de un sujeto popular movilizado en la crítica a la liberalización, el neoliberalismo y al orden capitalista, claro que, con matices, de quienes imaginaban e imaginan que se puede confrontar las políticas liberalizadoras en el marco del capitalismo y el retorno a formas “desarrollistas” que recreen ciertas condiciones del estado benefactor.

De hecho, el gran debate en el marco del cambio político emergente en la región en este Siglo XXI, atraviesa la ilusión de un desarrollo capitalista autónomo, no dependiente y de carácter nacional, desde un imaginario de reconstrucción del “capitalismo nacional”. Es una polémica que se reproduce en todas las articulaciones populares en estas décadas, no solo en la región, sino en el ámbito mundial.

Entre esos sujetos populares aparece una diversificación social que amplía el abanico de la confrontación, más allá de la contradicción esencial entre el trabajo y el capital y así, el movimiento indígena, de larga tradición de resistencia adquiere nueva significación en la disputa política, incluso ejerciendo hegemonía en el acceso al gobierno en Bolivia (2006).

No solo se extiende la lucha y organización de trabajadorxs, sino que junto al movimiento indígena originario campesino, se proyectan las luchas y demandas de los feminismos y diversidades; de los ecologismos y las luchas en contra de la depredación y mercantilización de los bienes comunes; de un conjunto de articulaciones populares en defensa de los derechos en contra de la mercantilización de la educación, de la salud y otras demandas sociales.

Un sujeto social amplio, de base trabajadora, en donde la lucha no se contiene solamente en el ámbito de trabajo, afectado por la ofensiva capitalista. Por ende, lxs trabajadrxs actúan en el ámbito

laboral y en el territorio de vivienda o en múltiples construcciones de organización de la resistencia a la lógica liberalizadora que mercantiliza la vida cotidiana.

La segunda consideración remite al programa construido desde esa dinámica de lucha y organización popular desarrollada desde la resistencia a las políticas neoliberales de reestructuración regresiva del orden capitalista.

Ese programa pasó del rechazo a la ofensiva del capital en campañas emblemáticas como el “No al ALCA”, o al libre comercio, el “No al pago de la deuda o al FMI”, el “No a la militarización y a la guerra”, a un conjunto de proposiciones creativas derivadas de la experiencia popular.

Desde el movimiento de los trabajadorxs sin tierra y la articulación campesina emergió la consigna por la soberanía alimentaria, ofreciendo más que una consigna una propuesta programática de organización de la producción de alimentos armonizando las necesidades de la población sin afectar el metabolismo de la naturaleza.

Esa proposición se extiende a la lucha por la soberanía energética o la soberanía financiera, en tanto la energía constituye un insumo productivo esencial que en tanto mercancía define el modelo productivo del orden capitalista. Del mismo modo que las finanzas constituyen el origen del proceso de valorización capitalista.

Con Marx aprendimos que el dinero se transforma en capital en el proceso de valorización capitalista, por lo que reivindicar usos alternativos del dinero en el proceso de producción nos lleva a un debate promovido, en su momento, por Ernesto Guevara en contra y más allá de la reproducción mercantilista de la ley del valor. Solo pensar en soberanía financiera puede hacernos razonar sobre la des-mercantilización del proceso de producción y circulación de bienes y servicios.

El derecho a la energía constituye una consigna que levantan trabajadorxs del sector y usuarios a todo nivel en el consumo energético o como insumo productivo, más aún con la prevalencia de los hidrocarburos, como insumo estratégico de la producción capitalista y

con influencia preponderante en el deterioro del medio ambiente y la contaminación creciente del planeta.

Se trata de un programa a contramano de la dominación de las transnacionales petroleras y que asume una estrategia más allá de las declamaciones por la transición energética y el cambio de la matriz energética sustentada en imposibles programas, contruidos desde la diplomacia de los estados capitalistas del sistema mundial.

Es un programa superador del “New Green Deal” enunciado desde los demócratas estadounidenses y un coro de voces que imaginan cambios desde las reformas y acuerdos político sociales sin confrontación con el poder real, el del capital invertido en la producción de hidrocarburos, sin escatimar nuevas fuentes de contaminación, caso de la fractura hidráulica.

Las reformas constitucionales de Venezuela (1999), de Bolivia (2009) y Ecuador (2009), instalaron modificaciones institucionales que hacen visible un rumbo programático de transformaciones estructurales hacia otro orden social.

Entre otros aspectos se legisla sobre la “democracia”, discutiendo su límite electivo para proyectarse a la dimensión participativa en la toma de decisiones. Incorporan la dimensión sobre “derechos de la naturaleza” y muy especialmente en la boliviana se institucionaliza la “economía comunitaria”. Más amplio aún emerge la concepción civilizatoria ancestral traída al presente con el “vivir bien” o el “buen vivir”.

Fuera de las constituciones, el socialismo retorna como proyecto civilizatorio, con los adjetivos del “siglo XXI” o “comunitario”, pero ante la imposibilidad de sostenerse en el imaginario popular masivo, las propuestas reaniman la discusión sobre la posibilidad de ir en contra y más allá del orden capitalista.

El cambio político emergente en la primera década del Siglo XXI retoma expectativas en torno al proyecto democrático y sus alcances, matizado según las experiencias nacionales, pero, más aún, en lo relativo a las perspectivas anticapitalistas y antiimperialistas en la tradición de la propuesta cubana, sostenida en contra del genocida bloqueo y todo tipo de obstrucción impulsada desde EEUU.

La región latinoamericana constituyó una referencia de impugnación a las políticas liberalizadoras hegemónicas en el cambio de siglo, lo que motivó una contraofensiva para la restauración del orden liberal o neoliberal del capitalismo en la región.

Contraofensiva restauradora

El proceso de cambio político alimentó una nueva institucionalidad, que incluyó la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, desde el 2011.

La CELAC supuso una articulación principalmente política que excluye a EEUU y a Canadá, en un trayecto de avance de una integración con pretensión de autonomía, puesta de manifiesto en proyectos por una “nueva arquitectura financiera” y diversas propuestas de articulación productiva en materia de energía o de alimentos, de comunicación y cultural.

En ese marco de confluencia de impugnación matizada al proyecto liberalizador crecieron propuestas de cambio en muchos países de la región, afirmando una tendencia crítica, aún sin sustentar propuestas anticapitalistas.

No obstante, y ante el temor de mayor radicalización emergieron nuevas formas de “golpes institucionales”, como en los casos de Honduras en 2009, Paraguay en 2012, Brasil en 2016 o Bolivia en 2019. Procesos acontecidos en el marco de la postcrisis 2007-09 y el recrudecimiento de una ofensiva capitalista ante la desaceleración económica para restablecer capacidad de generar y apropiar plusvalor. Una ofensiva que necesitaba de la iniciativa política desde los

Estados y, por ende, en donde se pudiera, se obturaba la orientación de promoción del “cambio” de impugnación a la liberalización.

Con ese trasfondo en defensa de los intereses del capital hegemónico y sus inversiones se impulsaron diversas iniciativas, entre ellos, los golpes institucionales, diferentes a la clásica intervención militar de años anteriores, pero definitorios al momento de interrumpir procesos que amagaban con la radicalización política de sujetos sociales para la confrontación con el neoliberalismo y en definitiva en contra del capitalismo.

La campaña ideológica del poder y los límites del reformismo y el desarrollismo en esos procesos de cambio político habilitó la emergencia de propuestas de ultraderecha con liderazgos que disputaron consenso electoral, casos de Argentina en 2015 con Mauricio Macri, Jair Bolsonaro en 2019 en Brasil, o Nayib Bukele en El Salvador desde 2019 y Luis Lacalle Pou en Uruguay desde 2020.

Estos fenómenos se sumaban a la tradición gobernante de derecha de los últimos decenios en Chile, Colombia o Perú, países de instalación de la lógica liberalizadora y subordinada a la política exterior estadounidense.

Se trataba con golpes y consensos electorales para volcar el rumbo político de la región bajo la hegemonía de la liberalización y para consolidar en el marco de la crisis capitalista de 2007-09 un rumbo favorable a la mercantilización y valorización capitalista.

La dinámica popular y sus resistencias y levantamientos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia o Haití, junto a procesos electorales que desplazaron a las corrientes más reaccionarias de los gobiernos, otorgaron nuevamente aires a la perspectiva cuestionadora y de impugnación a las políticas neoliberales.

Otra vez, la resistencia, movilización y organización popular habilitó procesos discursivos críticos a la liberalización, aunque no necesariamente induciendo políticas de confrontación con el poder y el orden capitalista.

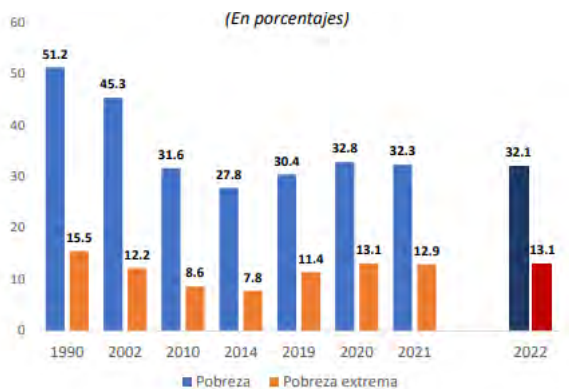
En esas condiciones, la región latinoamericana y caribeña transita caminos de incertidumbre política en un marco de deterioro de

las condiciones socioeconómicas de la población, con mayor desigualdad, lo que supone una elevada concentración del ingreso y de la riqueza en pocas manos y una extensión del empobrecimiento de la población.

La Comisión Económica para América Latina⁴, mediante su Secretario Ejecutivo señala que el “Crecimiento económico mundial se desacelera”, igual que el comercio mundial, y que “la inflación continuaría alta en 2023 y muy por encima de su promedio pre pandemia”, persistiendo las “altas tasas de interés en economías desarrolladas” con impacto por altos “costos de financiamiento para los mercados emergentes incluida América Latina”, todo lo cual se replica e impacta regresivamente en la región latinoamericana y caribeña.

Es un tema que se manifiesta en la reversión de la tendencia a la baja de la pobreza y la pobreza extrema, tal como muestra la gráfica siguiente:

América Latina: pobreza y pobreza extrema, 1990-2022



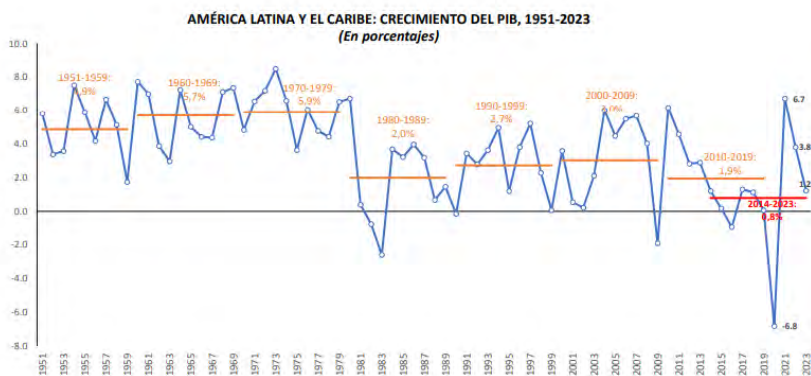
Fuente: Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022. Nota: 2022 es proyección.

⁴ Salazar-Xirinachs, José (2023) *Presentación del Secretario Ejecutivo de CEPAL: Política fiscal para el crecimiento, la redistribución y la transformación productiva. Reunión de Ministras y Ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)*. CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/230514_ppt_celac_jmsx_esp.pdf

Resulta interesante profundizar el tema con la evolución del PBI en la región desde 1951. Allí se verifica el cambio de la tendencia en la generación del producto entre 1951 y el inicio del nuevo modelo desde 1980. Hemos señalado que con las dictaduras de los años setenta, se instauran las políticas liberalizadoras, inspiradas en las políticas emanadas del marco teórico de la escuela de Chicago y el Premio Nobel de Economía a Milton Friedman (1976).

El paso de la “industrialización por sustitución de importaciones, ISI, al modelo de inserción subordinado en la lógica liberalizadora de la transnacionalización de los 80 supuso una tendencia al crecimiento empobrecedor, exacerbando la lógica de disputa de los sectores más concentrados por apropiarse de un ingreso que conlleva el empobrecimiento de una amplia porción de la población de menores ingresos. Se aprecia en la siguiente gráfica:

El crecimiento económico para la década 2014-2023 es inferior al de la “década pérdida” de la crisis de la deuda de los años ochenta



Fuente: Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. Nota 2023 son proyecciones.

Lo que vemos para la región, siguiendo la información del Secretario Ejecutivo de la CEPAL es una tendencia a la baja del crecimiento del empleo con elevación de la informalidad y la irregularidad, con merma de la seguridad social, con crecimiento del empobrecimiento y la

desigualdad; con la pobreza en ascenso al 32,1% y la pobreza extrema en el 13,1%.

Respecto del crecimiento se observa en tiempos de la ISI una expansión del PBI entre 1951 y 1980 oscilando entre el 5 y 6% acumulativo anual, para bajar al 2% en la denominada década perdida por la CEPAL para el decenio entre 1980 a 1989. Los decenios posteriores muestran crecimientos leves, del 2,7% en los 90', del 3% en los 2000 y de 1,9% entre 2010 y 2019.

Sin embargo, la presentación resalta la evolución de la última década, entre 2014 y 2023, con un crecimiento del 0,8%, que compara con el 2% de la década perdida de los 80'.

Estos últimos diez años, luego de la crisis del 2007/09 más pandemia y guerra, asociadas a fenómenos globales de desaceleración y crecimiento de los precios, impacta regresivamente sobre la realidad de los pueblos en nuestra América.

Opciones

La discusión resulta estratégica para los pueblos de América Latina y el Caribe. Una opción transita por la continuidad de la lógica del capital bajo las variantes ortodoxas u heterodoxas, o transitar, con incertidumbre las líneas de confrontación con el poder del capital que se esbozaron en la experiencia de impugnación a la liberalización en la primera década de este siglo, lo que suponía relanzar la propuesta anticapitalista y antiimperialista.

El primer camino conlleva la liberalización a ultranza profundizando la inserción subordinada en la dinámica de la internacionalización de la producción y la transnacionalización del capital en las condiciones del debate geopolítico contemporáneo. En ese sentido, la región es demandada por la importancia de sus bienes comunes, mercantilizados en la perspectiva de insumos estratégicos de la producción mundial.

Una liberalización subordinada a algunos de los bloques organiza la mundialización, en este tiempo de sanciones unilaterales y de búsqueda de nuevas articulaciones productivas y de circulación de bienes y servicios, algo que está detrás de la conflictividad entre EEUU y China principalmente. Es cierto que no es lo mismo EEUU, con larga historia de intromisión y explotación a la región, que China, de creciente presencia comercial, económica y financiera, que preocupa especialmente a EEUU y que, incluso, la región no aborda de manera integrada, favoreciendo relaciones bilaterales que no potencian la capacidad de acción conjunta de América Latina y el Caribe.

Hay quienes imaginan en este marco de opciones la existencia de una posibilidad para cierto grado de autonomía nacional o regional, algo que la propia construcción europea muestra sus límites.

Es una situación que se verifica ante la subordinación europea a la OTAN y, en definitiva, a EEUU en las condiciones de confrontación militar en Ucrania. Europa paga con elevación de costo energético y alimenticio un boicot a la importación de gas, producto del alineamiento y subordinación a la hegemonía estadounidense en el bloque aliado que sustenta la ortodoxia liberalizadora.

Hay que reconocer que se piensa en la multilateralidad del sistema capitalista mundial, sustentado en la declinación del poder unilateral de EEUU y el creciente peso productivo, no necesariamente económico de China. Claro que el poder se conjuga más allá de lo económico, en lo militar e ideológico, dos ámbitos de la fortaleza estadounidense.

Transitar la opción de la confrontación requiere profundizar la constitución de sujetos conscientes en la lucha y organización popular para un rumbo alternativo, no solo contra el capitalismo y el imperialismo, sino contra toda forma de discriminación y racismo.

Supone, al mismo tiempo, hacer realidad el programa construido en estos tiempos de luchas populares y favorecer un proceso de creatividad en la construcción de mecanismos que resuelvan las demandas democráticas y revolucionarias con base en la experiencia popular.

Ello requiere de una ruptura epistemológica y de las prácticas cotidianas de construcción de instrumentos políticos para la transformación social, que resulta la gran asignatura pendiente en la práctica política de nuestro tiempo.

Solo a modo de ejemplo remitimos a la pueblada chilena del 2019 y al triunfo hacia una nueva constituyente, derrotada en el proceso de legitimación reciente, y que derivara en un nuevo proceso de reforma constitucional con mayoría de votos de la ultraderecha y condiciones para ratificar el rumbo reaccionario de la Constitución de la dictadura pinochetista.

En el mismo sentido, podemos señalar la experiencia peruana y el triunfo electoral de Pedro Castillo con un final de muertes y prisión del presidente e incertidumbre de la dinámica política presente y de corto plazo.

Curiosamente, en Ecuador, el Presidente en ejercicio disuelve el Parlamento para impedir el juicio político que lo destituya y, sin embargo, se mantiene temporalmente en el gobierno, con capacidad de gobernar por decreto en un avance por la liberalización.

Perú y Ecuador nos devuelven una realidad de incertidumbre que se manifiesta en el conjunto de la región. Chile nos provoca la reflexión sobre la acumulación de poder popular, más allá de gigantescas movilizaciones populares; un fenómeno que nos lleva a la discusión del proyecto estratégico del movimiento obrero y social en conjunto.

En rigor, la definición por un proyecto de transformación revolucionaria tuvo carnadura teórica y política con los cimientos contruidos desde la crítica con Marx y una experiencia revolucionaria que encontró sus límites en la última década del Siglo XX, se piense lo que se piense sobre la experiencia del socialismo real, la bipolaridad y las contradicciones que incluyeron al tercer mundo.

Hace más de 30 años que se derrotó el imaginario social sobre la potencialidad de una transformación anticapitalista, iniciando un nuevo ciclo de la lucha de clases, obligado a recoger la tradición histórica de la organización y lucha popular, resignificando la estrategia

en función de los cambios ocurridos en el capitalismo contemporáneo, sea en la relación capital-trabajo, en las nuevas funciones del estado capitalista o en las nuevas relaciones internacionales gestadas especialmente en los últimos años de desorden mundial.

América Latina y el Caribe fueron territorios de ensayo de la lógica liberalizadora, neoliberal y vienen siendo territorios de expectativa esperanzada asentada en la dinámica de la lucha y organización popular, generando condiciones de posibilidad para la reinstalación de un proyecto político en contra del capitalismo y más allá.

Persistir en la crítica y en la acumulación de poder popular

No hay fin de la historia, ni está asegurado un resultado en el sentido requerido por el capitalismo en crisis. La reestructuración capitalista en curso, como ofensiva del régimen del capital en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad, sigue teniendo en frente al conjunto de fuerzas sociales subalternas que luchan y se organizan por sus reivindicaciones inmediatas, democráticas y que en ese camino transitan la búsqueda de una estrategia articuladora en la lucha por el poder, lo que define una acumulación política en demanda de una síntesis por la revolución.

Insistiremos con Marx en la crítica al capitalismo y en la historia de la lucha y organización popular por construir una estrategia que dispute el poder cotidianamente en la perspectiva de emancipación social, contra la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes y toda forma de patriarcalismo, discriminación y racismo, contra el orden capitalista y por el socialismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Galarce, Graciela (23 de enero de 2021). Chile, cuna del neoliberalismo, los Chicago Boys, estallido social, plebiscito, y pandemia. *Le Monde diplomatique*. <https://www.lemondediplomatique.cl/chile-cuna-del-neoliberalismo-los-chicago-boys-estallido-social-plebiscito-y.html>
- Hobsbawn, Eric (1995). *Historia del Siglo XX*. Buenos Aires: Crítica.
- Kliman, Andrew (2020). *Reivindicando El Capital de Marx: una impugnación del mito de su incoherencia*. Traducción de Guillermo Murcia López y Antonio Dorado Seldas. Barcelona: El viejo topo.
- Rodríguez, José Luis (2016). *El derrumbe del socialismo en Europa*. Panamá: Ruth Casa Editorial.
- Traverso, Enzo (2022). *Revolución; una historia intelectual*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

“Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’: imperialismo, orientación del capital y política económica¹”

Xabier Arrizabalo, Francisco Javier Murillo y Mario del Rosal²

*En el cincuenta aniversario del golpe de Estado en Chile, en
memoria de las víctimas del terrorismo de Estado que incluye su
política económica*

¡Arriba las y los que luchan!

Presentación

Sólo hay un posible punto de partida para el análisis conectado con la intencionalidad emancipatoria de la humanidad de toda forma de opresión y, por tanto, de superación del capitalismo. Este punto de partida es la legítima aspiración de la mayoría de la población, la que vive de su trabajo, a la vida digna cuya base material hace posible

¹ La primera parte del título es una frase de Chomsky, procedente de una entrevista publicada el 1 de abril de 2023 en <https://rebelion.org/neoliberalismo-es-un-termino-enganoso-vivimos-una-guerra-de-clases/>: “Durante más de 40 años, hemos estado viviendo en un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”. Este capítulo se apoya en gran medida en dos publicaciones previas: Arrizabalo (2023) y Arrizabalo (2021b).

² Profesores de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadores del Diploma de Formación Continua de la misma universidad, titulado “Análisis crítico del capitalismo: el método marxista y la economía mundial actual”.

precisamente su trabajo. Una aspiración legítima, porque emana de ella, de la propia clase, ante su cotidiana constatación de que su vida es cada vez más precaria y porque efectivamente es posible gracias a su productividad.

Sobre la base de esa aspiración se ha desplegado históricamente el movimiento de la clase trabajadora, concretado en dos aspectos interrelacionados: las reivindicaciones en las que se concreta la lucha por la vida digna y la organización con la que poder lograrlas, dada la imposibilidad de una salida individual a los problemas sociales. Su voluntad de lucha está fuera de discusión, lo que no equivale a decir que su despliegue esté asegurado, sobre todo porque acaba requiriendo de una mediación organizativa en torno a la cual puede haber problemas. Por eso, es un disparate, profundamente reaccionario, señalar que la clase está rechazada o fórmulas similares. El estado de la clase no se encuentra preestablecido, sino que se construye, si hay voluntad de hacerlo (lo que no es el caso de las direcciones políticas que subordinan toda reivindicación a su hipotético logro bajo el capitalismo, a cuyo sostenimiento se consagran, antes que nada).

En efecto, como hemos dicho, la emancipación de la humanidad de toda forma de opresión exige la superación del capitalismo. Porque la fuerza impulsora de la acumulación capitalista, que es la rentabilidad, exige un aumento permanente de la explotación de clase, plasmada en la reducción del valor de la fuerza de trabajo del que vive la mayoría. Es lo propio del último estadio del capitalismo, el imperialista, cuyo origen data ya de más de cien años, y cuya concreción última —además de la formación y expansión del capital financiero, junto a la plena conformación del mercado mundial— es la transformación de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, tal y como se explica más adelante, de acuerdo con lo planteado por Marx y Engels ya en 1845 en *La ideología alemana*. Porque el agravamiento de los problemas sociales no se debe a una determinada forma de gestionar el capitalismo —como ilusoriamente sugería Hobson (Arrizabalo, 2014, pp. 171-176)—, sino a su naturaleza intrínseca —como rigurosamente explicó Lenin (1916)—.

Sin embargo, una idea se ha extendido enormemente en las filas de las organizaciones que declaran reclamarse de los intereses de la mayoría: la idea de que el problema principal hoy es el neoliberalismo, ya se identifique como una política económica, como un proyecto o estrategia del capital o incluso como una nueva fase del capitalismo. Esta idea es un fetiche, una ilusión que desenfoca el problema acerca de las causas de los problemas de la mayoría, que no dejan de agravarse: la mencionada naturaleza intrínseca del capitalismo, a cuyas contradicciones cada vez más agudas se subordina inevitablemente cualquier política económica que respete los límites infranqueables del Estado burgués como tal.

En el presente texto se aborda esta cuestión, tomando como punto de apoyo la experiencia chilena de los últimos ya cincuenta años. Un caso en el que aparentemente sí se verifica que el meollo de los problemas radica en el carácter neoliberal de la política económica que se impone por la dictadura, al servicio de un proyecto o estrategia del capital —y que se mantiene plenamente vigente hoy, tras tantos gobiernos de distinto color político declarado—. La prueba estaría en particular en la formación en Chicago de los cuadros que finalmente la aplicarían y en la participación directa de los más connotados teóricos neoliberales, como Milton Friedman, en la planeación de la política económica allí: i.e., en su pública complicidad con la terrible dictadura³. ¿Pero acaso la política económica la deciden los teóricos? En función del predominio de tal o cual corriente, ¿podrían aplicarse políticas distintas? ¿De qué depende que predominen unas u otras teorías?

Para abordar todo esto se tratan sucesivamente cuatro cuestiones. En primer lugar, la relación entre el proceso de acumulación capitalista y la política económica como campo de intervención del Estado burgués en la economía, con el objetivo de situar los determinantes

³ Para acceder a una contundente prueba de esta complicidad puede verse Arrizabalo (2023, pp. 29-32), en donde se recogen las explícitas reivindicaciones de las formas dictatoriales de Mises y Hayek, así como los vínculos directos de Friedman con el sanguinario dictador Pinochet, etc.

de ésta. En segundo lugar, la contextualización histórica del periodo actual en el que se impone la política que habitualmente se asocia con la noción de neoliberalismo. Son los últimos cincuenta años, que pueden sintetizarse, de forma muy esquemática, en la secuencia crisis-ajuste-crisis⁴. En tercer lugar, la conclusión de lo anterior en cuanto al carácter de fetiche que adquiere la noción de neoliberalismo. En cuarto lugar, la consideración del caso chileno, para ilustrar el contenido profundo de la política impuesta y su significado histórico, así como la resistencia ante ella. Cierra el texto un breve apartado de conclusiones, concentradas en los posibles escenarios, ligados a lo que constituye el motor de la historia, que no es ni podría ser otro que los sujetos principales de la sociedad capitalista actuando de acuerdo con sus intereses y por tanto conflictivamente. Vale decir, la lucha de clases.

Acumulación del capital, Estado y política económica

El capital es una relación social. Una relación social de dominación de la clase capitalista —propietaria en general de los medios de producción y en particular de los grandes medios de producción— sobre la clase trabajadora —el proletariado, que carece de medios de producción—. Como toda sociedad de clases, la base material de la sociedad capitalista se asienta en el trabajo no pagado, es decir, en la explotación. Solo que se diferencia de otras sociedades, como las esclavistas o las feudales, porque en ella el trabajo no pagado aparece camuflado, escondido, no observable a primera vista. En las esclavistas los esclavos producen todo y sin embargo prácticamente no reciben nada, salvo algo de comida y apenas ropa; en las feudales, el pequeño campesinado debe trabajar gratis en las tierras del señor o cederle parte de su producción.

⁴ Puede verse al respecto Arrizabalo (2014). Para la concreción del ajuste en el caso español, Murillo (2019).

Pero en las capitalistas aparentemente se remunera todo el tiempo que trabaja la clase trabajadora. Y no es así, pero no porque se extiendan fenómenos ilegales como el de “firmas 6 horas diarias, pero trabajarás 12”, que obviamente también, sino porque necesariamente todas las horas se pagan por debajo del valor generado por el trabajo durante ese tiempo. En otros términos: la riqueza nueva en cada periodo es lo aportado en él, esto es, el trabajo vivo, ya que el trabajo muerto sólo puede transferir su valor, no crear más. De modo que el trabajo vivo que desarrolla la clase trabajadora no solo produce el valor expresado en su salario, sino también el valor excedente, la plusvalía que se apropia como ganancia la clase capitalista⁵. En definitiva, la dominación de la clase capitalista se asienta en la explotación, cuyo contenido preciso es el trabajo no pagado.

Valga esta somera explicación para situar el punto de partida ineludible: la identificación de los sujetos en torno a los cuales se lleva a cabo la reproducción social, las clases sociales, cuya actuación en conflicto constituye el motor de la historia, como hemos consignado. Las clases actúan en función de su nivel de organización, retroalimentado por su grado de conciencia acerca de su condición de clase, su posición en la estructura social, etc. Para la clase trabajadora esto toma históricamente la forma del movimiento obrero, concretado en partidos, sindicatos y otras organizaciones, en torno a un programa de reivindicaciones y acción para lograrlas. La clase capitalista también tiene sus organizaciones y en particular una: el Estado (es decir, el Estado burgués). Éste se define por la función constitutiva que precisa su condición burguesa: preservar la dominación de la clase capitalista. En palabras de Marx y Engels (1848: 282): “el Poder

⁵ Las relaciones de producción capitalistas coexisten con otras relaciones de producción distintas, pero no a igual título, sino subordinándolas. Por eso nos referimos a las capitalistas para explicar la dinámica general de la economía mundial actual. Marx (1867, p. 43) lo explica con precisión en la mismísima frase inicial de *El capital*: “La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un ‘enorme cúmulo de mercancías’ y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza”.

del Estado moderno no es más que el comité encargado de administrar los negocios comunes de toda la clase burguesa”.

Por consiguiente, como también se ha señalado, la política económica sólo puede ser comprendida en su condición de instrumento de intervención del Estado burgués, de cara a favorecer la acumulación del capital o, más precisamente, de determinada fracción del capital⁶. Acumulación del capital significa reproducción ampliada de la explotación de clase y, por tanto, preservación de los intereses de la minoría poseedora que es la clase capitalista. Conviene enfatizar esta palabra: intereses, porque es precisamente lo que constituye el determinante de la reproducción social, la conflictiva actuación de las clases de acuerdo con sus intereses respectivos. Es decir, insistimos, la lucha de clases como motor de la historia (¿cuál si no?).

Ahora bien, ¿el capital puede tener opciones distintas, estrategias alternativas, puede impulsar políticas económicas sustantivamente distintas? ¿Puede tener proyectos distintos? Nada de esto puede responderse sin situar la cuestión del momento histórico en el que se encuentra la economía capitalista mundial hoy.

La política económica en los últimos 50 años de crisis-ajuste-crisis

La acumulación del capital, marco de la reproducción social a escala mundial hoy, no es resultado de la casualidad, sino que obedece a las

⁶ Aunque los integrantes de la clase capitalista comparten interés frente a la clase trabajadora —reducir lo máximo posible el trabajo pagado, para aumentar así el no pagado, del que se apropian—, están enfrentados inevitablemente entre sí, por el reparto de todo ese trabajo no pagado, la plusvalía, como ganancias respectivas de cada capital.

En cuanto a si dentro de un Estado burgués podría aplicarse una política favorable a los intereses de la mayoría, la respuesta es sencilla: siempre que no comprometa las exigencias de la rentabilidad... que cada vez dejan menos margen, por lo que se explica en el siguiente apartado. Por tanto, cualquier gobierno que verdaderamente pretendiera atender esos intereses mayoritarios se situaría en una posición de ruptura o, si se quiere, sería situado en dicha posición. Véase Luxemburg (1899).

causalidades permanentes que la dirigen, esto es, las leyes propias del capitalismo. En particular hay una ley que explica el comportamiento de la rentabilidad, que es la fuerza impulsora de la acumulación del capital. El contenido de esta ley es que la tasa de ganancia, concreción de la rentabilidad, tiende a caer y, aunque esa tendencia puede contrarrestarse, lograrlo es cada vez más complicado (Marx, 1894, pp. 309-341). Es decir, el capitalismo no sólo es contradictorio, en tanto sus problemas proceden de su propia dinámica de acumulación, sino que cada vez es más contradictorio (lo que, por cierto, señala sus límites históricos).

El problema no estriba en la productividad, porque para el capital no se trata de producir valores de uso, sino de producirlos como medio para producir una plusvalía suficiente y realizarla con la forma de su apropiación individualizada como ganancias⁷. Y como el conjunto del proceso —la valorización del capital— se hace de cara al mercado, el tamaño de éste importa. Pero el mercado, que es ya es el mercado mundial, no crece al ritmo de la productividad sino mucho más lentamente, de modo que se queda pequeño, como explicaba Engels en el prólogo a la edición inglesa de *El capital* en 1886: “Mientras que la fuerza productiva crece en progresión geométrica, la expansión de los mercados avanza, en el mejor de los casos, conforme a una progresión aritmética” (Marx, 1867, p. 28).

En definitiva, el despliegue histórico del capitalismo es el despliegue de sus contradicciones, lo que culmina en que el desarrollo —que es el desarrollo de las fuerzas productivas— se hace cada vez más incompatible con la supervivencia del capital.

Fuerzas productivas que encontraban en la propiedad privada una traba entorpecedora (...) Estas fuerzas productivas, bajo el régimen de la propiedad privada, sólo experimentan un desarrollo

⁷ Por eso resulta ilusoria la idea de que la tecnología pueda resolver los problemas. Pero no sólo eso, sino que precisamente la incorporación tecnológica a la producción capitalista causa el aumento de la composición del capital, que es la premisa de la tendencia descendente de la tasa de ganancia.

unilateral, se convierten para la mayoría en fuerzas destructivas (...) En el desarrollo de las fuerzas productivas, se llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de males, que ya no son tales fuerzas de producción, sino más bien fuerzas de destrucción (Marx y Engels, 1845, pp. 69 y 81).

Hoy esto se concreta es el imperialismo, que no una opción del capital entre otras posibles, sino donde conduce inevitablemente el dominio del modo de producción capitalista. Esto es la última fase del capitalismo (Lenin, 1916), dicho en el sentido de que no hay nuevos despliegues posibles con carácter general, una vez ya establecido el mercado mundial, etc.; nada que ver por tanto con las tesis del derrumbe o autoderrumbe (Kliman, 2021). Es una fase que se extiende desde el cambio del siglo XIX al XX hasta la actualidad y, por tanto, en ella se encuadran los últimos 50 años, que resumimos en la mencionada secuencia crisis-ajuste-crisis; una secuencia que revela el carácter de huida hacia delante que supone la supervivencia del capitalismo.

En realidad, la secuencia no se agota con esta formulación. La expresión crisis-ajuste-crisis no es sólo la conexión de la crisis de finales de los sesenta y primeros setenta con el ajuste inmediatamente posterior impuesto por el capital financiero estadounidense por medio del FMI, y de éste con la crisis que estalla en 2007-2008. La crisis y el ajuste se retroalimentan sin solución de continuidad, puesto que las políticas que se aplican ante la crisis contribuyen a que la economía mundial desemboque en nuevas explosiones de crisis⁸.

Pero ¿existe alternativa para el capital? ¿Tiene el capital un plan b, podría tenerlo? No, ni tiene ni podría tenerlo, porque no es ya que el capital no tenga un plan b, es que ni siquiera tiene un plan a. En

⁸ Las políticas de ajuste tienen por único objetivo el de tratar de establecer condiciones de valorización para el capital, en particular eliminando trabas para la explotación laboral y el saqueo de los recursos naturales; para lo que se concreta el ajuste en las políticas de apertura acelerada e indiscriminada, desregulación y privatizaciones.

efecto, la acumulación del capital es, por definición, desordenada. Es el resultado de decisiones individuales, descoordinadas, que son las que adoptan, separadamente, los focos individuales de acumulación, los capitales —cada uno de ellos—, con el único objetivo de lograr valorizarse al menos en la proporción suficiente para sobrevivir como tales. Ahora bien, cuando decimos el capital nos estamos refiriendo al capital en su conjunto, a la clase capitalista en su conjunto. Una clase cuyos integrantes pugnan entre sí, pero que también comparten posición en su conflicto inevitable con la otra clase principal de la sociedad capitalista, la clase trabajadora.

De modo que a la pregunta con la que acabamos el primer apartado se responde inequívocamente que no, que el capitalismo no es reformable, porque los problemas no derivan de una determinada forma de gestionarlo, sino de su naturaleza intrínseca⁹. Y que, por tanto, la clase capitalista como tal no tiene opciones distintas, no dispone de estrategias alternativas, no puede impulsar políticas económicas sustantivamente distintas. No puede haber otra política económica que la centrada en favorecer la explotación, en proveer los medios para aumentarla, además de otros medios para contribuir a la valorización del capital que domina a los Estados, como el de eliminar trabas para el saqueo de los recursos naturales. Entonces ¿por qué denominar neoliberalismo a lo que impone el capital, dado que es la única posibilidad para él, la opción imperialista, la estrategia imperialista, la política económica imperialista?

No es extraño que desde el capital se promueva esta idea, la de que existen opciones distintas. Pero ¿por qué desde otros sectores, que dicen reclamarse de los intereses de la mayoría, se defiende esa quimera, la de que existe otra posible gestión capitalista, llámese keynesiana o como se la quiera llamar? Con un correlato político de primera importancia: si el neoliberalismo es el capitalismo malo,

⁹ Un ejemplo muy claro de esto es la falacia de un supuesto “modelo sueco” en el que se habrían conciliado los intereses de la clase explotadora y la clase explotada (del Rosal, 2015).

¿entonces podría haber un capitalismo bueno? ¿Cómo se puede conjugar esto con el hecho de que la explotación aumente y que la lucha de clases se agudice, inevitablemente?

El fetiche del neoliberalismo

La orientación del capital y su concreción en la política económica —y más allá— no obedece a un criterio ideológico o teórico. De hecho, ¿acaso la política económica que impone o trata de imponer el capital es liberal... o deja de serlo? Sólo desde una perspectiva idealista puede imaginarse que el capital actúa de acuerdo con criterios distintos de sus intereses materiales, en cada momento histórico. Las políticas que impone no son por tanto neoliberales o keynesianas; son imperialistas, lo que se concreta no en más o menos intervención del Estado, sino en qué tipo de intervención, determinada en función de cómo se desarrolle la lucha de clases y también la pugna competitiva¹⁰:

restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo

¹⁰ Por eso caracterizamos las políticas aplicadas como fondomonetaristas, no como neoliberales (Arrizabalo, 2014, pp. 371-388). Sabiendo que al decir fondomonetarista aludimos al principal organismo imperialista, que representa su concreción en términos de la dominación mundial del capital financiero estadounidense.

De hecho, la dirección de la política por parte del FMI se explicita a través de la condicionalidad: *“cuando un país obtiene crédito del FMI, el gobierno se compromete a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera a la comunidad internacional. Las condiciones de estos préstamos también sirven para cerciorarse de que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI. En los últimos años el FMI ha simplificado la condicionalidad para fomentar la identificación de los países con políticas sólidas y eficaces”* (FMI, 2011).

que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados, debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social [...]

(Cize y otros, 1990, p. 151).

En definitiva, la política económica no es una variable exógena al proceso de acumulación. Un partido que llega al gobierno no puede elegir libremente qué política aplicar de forma autónoma, independientemente de las exigencias de la rentabilidad general y, particularmente, de los sectores dominantes del capital. Para ello, tendría que poner en el centro los intereses de la mayoría, una pretensión que lo colocaría en el punto de mira del capital y lo llevaría indefectiblemente, o bien a un giro en sus políticas, o bien al intento de su derrocamiento, como tantas veces nos ha mostrado la historia. De modo que el mantenimiento de esa orientación en favor de la mayoría le llevaría inevitablemente a un escenario de ruptura, más pronto que tarde. En el resto de los casos, la política económica que se impone no obedece a ningún debate teórico, ni guarda fidelidad a posición teórica alguna. Obedece, simplemente, a la exigencia fundamental de rentabilidad del capital, a menos que la clase trabajadora consiga arrancar conquistas que acaben institucionalizadas en el Estado burgués, por contradictorio que resulte. Estas conquistas tomarán la forma de derechos legales o políticas económicas que el capital asumirá (transitoriamente) como mal menor ante el riesgo de perderlo todo, es decir, para contener cualquier posible decantación revolucionaria en momentos de explosividad social masiva.

Hay un ejemplo histórico muy elocuente al respecto. En 1981, tras su triunfo en las elecciones presidenciales francesas, el gobierno de Mitterrand puso en marcha una serie de medidas relativamente rupturistas incluidas en el llamado Programa Común, acordado entre el Partido Socialista del que era miembro y el Partido Comunista: nacionalizaciones, impuesto a las grandes fortunas, subida del salario

mínimo, etc. Sin embargo, estas medidas no llegaron a mantenerse ni dos años. En marzo de 1983, su gobierno dio giro radical para atender las exigencias del imperialismo estadounidense, a través del llamado proceso de integración europea.

La conclusión es clara: estas políticas distintas sólo podrían haberse mantenido si el gobierno hubiera optado por apoyarse en la clase trabajadora, asumiendo por tanto la posibilidad real de una ruptura con el Estado burgués. Dicho de otro modo: bajo el sometimiento a las exigencias del capital financiero sólo hay una política posible, que es la del cuestionamiento de las conquistas obreras y democráticas arrancadas por el movimiento obrero a lo largo de decenios. Y esta política se impone con total desconsideración de lo que diga ninguna corriente de pensamiento, de forma ajena a toda posible coherencia con algo distinto de los intereses de dicho capital.

Obviamente esto no impugna que en el terreno de la propaganda sí se exprima la supuesta fundamentación teórica de la política económica. Una propaganda para la que el fetiche del neoliberalismo es útil para vender la idea de que el problema es la intervención del Estado, cuando en realidad lo que se quiere liquidar es únicamente la parte de esa intervención que materializa las conquistas de la clase trabajadora:

[...] no es arriesgado afirmar que la teoría y las políticas monetarias interpretan mejor en momentos de estanflación las necesidades de la burguesía internacional y de muchas burguesías nacionales que el keynesianismo, al sugerir remedios radicalmente reaccionarios para afrontar el malestar burgués: inducir abiertamente el desempleo (...) para “darles una lección a los sindicatos” (...) destruir el capital “ineficiente” por medio del libre cambio y altas tasas de interés; reducir los impuestos sobre las ganancias y los altos ingresos, aumentar los que pagan los asalariados, cortar

“Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”: imperialismo, orientación del capital y política económica

drásticamente el gasto público especialmente en dirección a reducir el salario social [...]”¹¹.

Sin embargo, como señalamos al principio, desde distintos sectores obreros y populares se identifica al neoliberalismo como el responsable de los problemas, de su agudización. Para ellos no se trata, por tanto, de la naturaleza intrínseca del capitalismo que, en su estadio imperialista, exige aún más aumentar el grado de explotación, principal concreción, aunque no única, de una sistematización cada vez mayor de la destrucción de fuerzas productivas. Se trata del neoliberalismo, al que proclama así *de facto* como capitalismo malo; lo que, por tanto, supone abrir la opción de otro posible capitalismo, un capitalismo bueno o al menos no tan malo.

Chile, a 50 años del golpe y la instauración de la dictadura: ¿neoliberalismo o fondomonetarismo?

El caso de Chile es identificado como el paradigma del neoliberalismo, lo que resulta lógico considerando la complicidad directa de los principales propagandistas liberales con la dictadura pinochetista. Pero esa identificación se debilita cuando se constata el contenido de las políticas aplicadas, que no significan una reducción de la intervención estatal en la economía, así como el hecho de que el capital no podía tener otra alternativa. Unido a que desde, entonces, habiendo transcurrido más de treinta años desde la finalización formal de la dictadura, el modelo económico se mantenga incólume por parte de gobiernos de muy distinto color político declarado. Entonces, ¿todo es neoliberalismo?

¿Cómo acontecen las cosas en Chile? La secuencia cronológica se presenta como la explicación, de modo que el golpe de Estado del 11 de septiembre instaura una dictadura que, por su parte, impone

¹¹ Kalmanovitz, S. (1983, p. 262), tomado de Valenzuela (1991: 31).

la política económica identificada como neoliberal. Pero ¿podría el golpe haber dado lugar a otro tipo de régimen? Y la dictadura, ¿podría haber impuesto otra política? Obviamente las respuestas a ambas preguntas son negativas. Porque la secuencia explicativa es otra y sólo puede entenderse abordando una pregunta previa: ¿por qué triunfó el golpe de Estado? La subversión del régimen democrático-burgués expresa la decantación golpista de las clases dominantes chilenas tuteladas por el imperialismo estadounidense. Pero para explicar su triunfo es imprescindible considerar qué hicieron la clase trabajadora y los sectores populares, lo que a su vez permite comprender dicha decantación golpista. Y lo que hicieron fue actuar en el terreno que les es propio ante los límites del reformismo gubernamental, una actuación que inevitablemente acabó llevando a elementos abiertamente revolucionarios, como fueron los cordones industriales, la utilización de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), las marchas en Santiago reclamando poder popular de un millón de personas —de una población del país de menos de diez millones—, etc. (Arrizabalo, 2023, pp. 115-139).

Pero la revolución fue derrotada y la responsabilidad de ello no fue de la clase trabajadora, sino de las direcciones de sus organizaciones. Y el golpe fue la respuesta de las clases dominantes ante lo que acertadamente identificaban para ellas como riesgo revolucionario. Un golpe que instaure el régimen que destruya, literalmente, las organizaciones obreras, así como a una buena parte de sus militantes. Y que también, lógicamente, imponga la política que exige el capital, precisamente en el contexto de la crisis mundial que ya está explotando, una política que, sin disimulos, descarnadamente, elimine las conquistas históricas de la clase obrera chilena, incluidas las libertades democráticas. Política para la cual es útil la retórica liberal, dado que se trata de eliminar toda traba a la explotación laboral y el saqueo de los recursos naturales (Arrizabalo, 2023, pp. 198-200).

Sin embargo, eso no significa que el Estado intervenga menos, sino que interviene de una forma diferente. Más allá de una visión formal, se constata que el Estado dictatorial chileno sí fue

intervencionista y mucho, aunque obviamente con cambios cualitativos importantes en lo que históricamente había sido su línea de actuación. Cuatro argumentos respaldan esta afirmación. En primer lugar, que los indicadores convencionales no muestran una reducción: tomando datos del Banco Central, los gastos e ingresos fiscales promedio del período 1974-89 son superiores, respectivamente, en más de tres y de cinco puntos porcentuales a los del período 1960-70. En segundo lugar, que el margen de actuación del ejecutivo militar es mucho mayor en la medida en que no está supeditado a otros poderes. En tercer lugar, que la capacidad de intervención de la dictadura también estaba fortalecida por los recursos procedentes de la minería nacionalizada que no llegó a ser privatizada. Y, en cuarto lugar, que puede ser mucho más influyente el control de pocos precios, pero estratégicos, que controlar muchos de menor importancia neurálgica (Arrizabalo, 2023, pp. 187-189):

(...) la experiencia de la poscrisis 1981-83 evidencia que el Estado dictatorial dispuso de un poder de intervención extraordinario. Ello le permitió reorganizar al capitalismo chileno de manera violenta y celérica, [sic] a costa de los más pobres y de los trabajadores. Más allá del discurso neoliberal, puede concluirse que nunca antes en la historia chilena el Estado había sido tan poderoso (SOCHEP, 1990, p. 12. Afirmación de Álvaro Díaz).

En definitiva, en Chile no se comienza a imponer la política económica de la dictadura por alinearse con los planteamientos liberales o neoliberales, sino por los intereses en juego, en un contexto histórico muy específico, tanto a escala del país (el ascenso revolucionario ante los límites del reformismo) como a escala mundial (el estallido de la crisis). Y en Chile no se mantiene la política económica incluso por gobiernos liderados por dirigentes del Partido Socialista o de organizaciones autosituadas a su izquierda como el actual de Boric, sino por su orientación respecto a los intereses en juego, concretada en su subordinación a las exigencias del capital.

La experiencia de los primeros gobiernos de Boric, en los que ocupan un lugar central los dirigentes del PC, es muy significativa, con ejemplos inequívocos de dicha subordinación como el pleno mantenimiento del sistema de las AFP, la entrada en el TPP11 (Arrizabalo, 2023, pp. 255-322).

Conclusiones: no es la lucha contra el neoliberalismo, sino la lucha incondicional por las reivindicaciones *ergo* la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo

Los problemas sociales no dejan de agravarse: “casi un millón de personas podría caer en la pobreza extrema en 2022, al mismo ritmo al que la pandemia ha ido creando un nuevo millonario (uno cada 30 horas)” (Oxfam, 2022).

Ni que decir tiene que una u otra política económica —situadas en el marco de la defensa del capitalismo— puede tener alguna influencia en este fenómeno, acelerándolo o incluso atenuándolo. Pero resulta ilusorio pensar que es su causa y que, por tanto, otra política económica —también respetuosa de las exigencias de la rentabilidad del capital— podría resolverlos. Hace ya más de 150 años, Marx formula la Ley general de la acumulación capitalista, “que produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital [...] la acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital” (Marx, 1867, p. 805)¹². Es una ley del capitalismo, algo que acontece necesariamente, que está en su naturaleza intrínseca.

¹² En 1980 el propio FMI reconoció que la clave no estaba en la gestión de la política económica, sino en las condiciones de base: “*Retrospectivamente, aparece claramente que no es sobre todo la gestión de la economía, sino la existencia de condiciones de crecimiento excepcionalmente favorables la que está en el origen de los resultados económicos generalmente buenos de los años cincuenta y sesenta*”. (FMI, Informe anual 1980)

El despliegue de esta ley está ligado a otra ley del capitalismo, también formulada por Marx y que, de hecho, es la conclusión principal de *El capital*: la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia. Una ley que sustancia el carácter no sólo contradictorio, sino crecientemente contradictorio del capitalismo, revelando la imposibilidad de reformarlo. Es decir, la imposibilidad de un capitalismo bueno, no desigual, no excluyente, no destructivo. Sin embargo, sectores del movimiento obrero y democrático colocan al llamado neoliberalismo como el “enemigo público número uno”, la causa de los problemas. Identifican con el término neoliberalismo a una política económica al servicio de un proyecto o estrategia del capital. Pero el capital no tiene proyectos o estrategias distintos de lo que le define constitutivamente como tal: la preservación de su valorización, que es la forma de proveerse de la base material de su dominación; una dominación que le confiere privilegios (cuya otra cara es la transformación cada vez mayor de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas). Y esta valorización exige aumentar de forma constante el grado de explotación. Todo lo demás, y en particular la política económica, no es sino el medio específico para lograrlo, que prevalece en su condición de tal frente a toda ilusión de que sea la prevalencia de tales o cuales formulaciones teóricas las que deciden la política económica. A pesar de su debilidad, la idea de que los graves problemas sociales actuales proceden del neoliberalismo encierra peligro, porque prepara el estéril terreno de reivindicar una supuesta política económica distinta... de favorecer la explotación laboral que es el fundamento ineludible de la sociedad capitalista.

Entonces, ¿la clase trabajadora qué debería reivindicar respecto a la política económica? Luxemburg lo explica con claridad en el inicio de su libro *Reforma o revolución*:

Es posible que el lector se sorprenda, *prima facie*, por el título del presente trabajo. ¿Puede declararse la socialdemocracia en contra de las reformas? ¿Debemos oponer la revolución social, la transformación del orden existente, última meta a la que aspiramos, a las reformas sociales? Por supuesto que no. La lucha diaria por las reformas,

por el mejoramiento de la condición de los trabajadores dentro del sistema social y por las instituciones democráticas, ofrece a la socialdemocracia el único medio de tomar parte activa en la lucha de clases al lado del proletariado y de trabajar en dirección a su objetivo final: la conquista del poder político y la supresión del trabajo asalariado. Entre las reformas sociales y la revolución existe para la socialdemocracia un lazo insoluble: la lucha por las reformas es su medio; la revolución social, su fin (Luxemburg, 1990, p. 9).

Pero ¿cuál puede ser el alcance de esa política económica? “Expresado desde el punto de vista económico, no es una amenaza a la explotación capitalista, sino simplemente la regulación de esta explotación” (Luxemburg, 1990, p. 39).

Esto mismo resuelve, a nuestro entender, la cuestión de la participación en gobiernos que subordinan su actuación al marco capitalista:

[...] cabe imaginar a primera vista que un socialista puede en el gobierno, así como el parlamento, servir a la causa del proletariado esforzándose por arrancar en su favor todo que sea posible obtener en el ámbito de las reformas sociales. Pero, de nuevo, aparece un hecho que siempre olvida la política oportunista, el hecho de que en la lucha de la socialdemocracia, no es el qué sino el cómo lo que importa. Mientras los representantes de la socialdemocracia están tratando de lograr en los órganos legislativos reformas sociales, ellos tienen todas las oportunidades de su oposición simultánea a la legislación y al gobierno burgués en su conjunto —que encuentra su expresión manifiesta en el rechazo del presupuesto, ejemplo— también de dar su lucha por reformas burguesas un carácter socialista y principal, el carácter de una lucha de clases proletaria. Por el contrario, un socialdemócrata que está tratando de introducir las mismas reformas sociales en tanto que miembro del Gobierno, es decir, apoyando al mismo tiempo al Estado burgués, en realidad está reduciendo su socialismo (diciendo las cosas lo mejor posible) a

un democrátísimo burgués o una política obrera burguesa. Así, mientras que el aumento de los socialdemócratas en las representaciones populares permitió el fortalecimiento de la lucha de clases, su penetración en el gobierno sólo puede traer la corrupción y el desorden en las filas de la socialdemocracia. Los representantes de la clase obrera no pueden, sin negar su razón de ser, entrar en un gobierno burgués más que en un solo caso: para tomarlos y transformarlo un gobierno de la clase trabajadora adueñándose del poder (Luxemburg, 1899)¹³.

La clase trabajadora no tiene nada que ganar identificando el enemigo en una determinada corriente burguesa y las formulaciones teóricas o pseudoteóricas de sus propagandistas; no tiene nada que ganar identificando el enemigo en el neoliberalismo. Porque el debate entre liberalismo (o neoliberalismo) y keynesianismo es un debate entre burgueses, todos los cuales comparten que las conquistas obreras y democráticas deben ser desmanteladas, de acuerdo con las necesidades de la acumulación capitalista. Y porque por eso mismo es un debate falso ya que las medidas que se implementan, no se adoptan atendiendo a disquisiciones teóricas, sino a los intereses directos de la clase capitalista o su fracción dominante.

De hecho, la alineación del movimiento obrero con una corriente burguesa, sea keynesiana o cualquier otra, es literalmente su alienación. El movimiento obrero pervierte su condición. Construido para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, se reorienta en función de la ilusión falaz de un capitalismo bueno, a cuya construcción debe contribuir, en particular por la vía del llamado diálogo social. Es decir, se convierte en pilar del orden burgués. Al igual que ocurre con la fórmula tan en boga de “colaboración público-privada”, mera

¹³ En el párrafo inmediatamente posterior ella explica una posible excepción cuando estén muy amenazados la libertad del país o de los logros democráticos, “como la República”, “pero incluso en este caso, la participación de los socialdemócratas debe practicarse en formas que no dejan a la burguesía ni la gente la más mínima duda sobre el carácter pasajero y el objetivo exclusivo de su acción”.

charlatanería que oculta su contenido real de poner los recursos públicos en manos del capital privado, el diálogo social es simplemente la autoanulación de las organizaciones obreras, que se ponen al servicio del capital, comprometiéndose en un supuesto bien común que no lo es ni podría serlo, dado que su fundamento es la explotación de trabajadoras y trabajadores, además necesariamente en aumento, por las leyes que inexorablemente rigen la sociedad capitalista.

Y entonces, ¿qué debería hacer la clase trabajadora? La respuesta es sencilla: defender sus reivindicaciones de una forma incondicional y, por consiguiente, hasta el final. Por supuesto, sin menospreciar cualquier conquista parcial que se alcance, en el buen entendimiento de que estas conquistas tienen una doble virtud: por una parte, práctica, en tanto permiten aliviar la explotación capitalista en el “mientras tanto”. Por otra parte, pedagógica, por cuanto favorecen la toma de conciencia de la clase acerca de esa condición de conquista, es decir, de mejoras que son resultado —y no podría ser de otro modo— de su actuación política independiente, que van de la mano de su organización política asimismo independiente. Claro que con el horizonte de una sociedad sana y por tanto no presidida por la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de una sociedad comunista. Pero concentrada en lo que toca en cada momento, porque no hay atajos.

El problema no es el neoliberalismo, simple propaganda de las exigencias del capital en su estadio imperialista, tremendamente exacerbadas hoy. El problema son estas exigencias del capital, ineludibles para él, que impugnan frontalmente todas las conquistas arrancadas y toda aspiración a una vida verdaderamente digna para el conjunto de la población. Problema que sólo se puede combatir exitosamente mediante el agrupamiento político que permita la defensa de conquistas y aspiraciones hasta el final¹⁴.

¹⁴ Arrizabalo (2014, pp. 815-837).

“Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”: imperialismo, orientación del capital y política económica

BIBLIOGRAFÍA

Arrizabalo, Xabier (2023). *Chile: milagro o quimera (Significado histórico del modelo económico de la dictadura a 50 años del golpe)*. Madrid: Instituto Marxista de Economía.

_____ (2021a). Seis apuntes sobre la crisis crónica del capitalismo y la pandemia. En Gabriela Roffinelli, Lucas Castiglioni y Alejandro López (eds.), *Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia. Una mirada desde Nuestra América*. Buenos Aires: CLACSO.

_____ (2021b). El neoliberalismo, trampantojo del imperialismo. En Paula Vidal, *Dilemas del trabajo y las políticas laborales*. Ariadna Ediciones.

_____ (2020). La crisis crónica del capitalismo. *Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos*, 6.

_____ (2018). *Enseñanzas sobre la Revolución rusa*. Madrid: Instituto Marxista de Economía.

_____ (2014). *Capitalismo y economía mundial*. Madrid: Instituto Marxista de Economía-ARCIS-UdeC.

Cize, Pierre; Dauberry Michel; Fostier, Christian; Gauthier, Lucien y Gliksstein, Daniel (1990). *Le Fonds monétaire: Une entreprise de pillage des peuples*. Paris: Selio.

del Rosal, Mario (2015). *El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista. Una crítica marxista del modelo Rehn-Meidner* [Tesis de doctorado]. Universidad Complutense de Madrid.

Fondo Monetario Internacional (2011). La condicionalidad del FMI, Ficha técnica. *Fondo Monetario Internacional*. www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/conditios.htm

Gill, Louis (1996). *Fundamentos y límites del capitalismo*. Madrid: Trotta.

- Kliman, Andrew (2021). El modelo del derrumbe de Henryk Grossman: sobre la causa real de la tendencia ficticia al derrumbe. *Marixst humanities Initiative*. www.marxisthumanistinitiative.org/economics/henryk-grossmannsbreakdown-model-on-the-real-cause-of-the-fictitious-breakdown-tendency.html.
- Lenin, Vladimir (1916). El imperialismo, fase superior del capitalismo. En Vladimir Lenin (1976), *Obras escogidas en doce tomos*, tomo V. Moscú: Editorial Progreso.
- Luxemburg, Rosa (1974). *Reforma o revolución*. España: Grijalbo.
- _____ (1899 [1867-1894]); “Una cuestión táctica”, en www.marxists.org/espanol/luxem/1899/7/tac.htm.
- Marx, Karl (1975-1981). *El capital. Crítica de la economía política*. México: Siglo XXI.
- Marx, Karl y Engels, Friedrich (1985 [1845]). *La ideología alemana*. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos.
- _____ (1988). Manifiesto del partido comunista. En Karl Marx y Friedrich Engels, *Obras fundamentales*, Vol. 4. México: Fondo de Cultura Económica (original publicado en 1848).
- Murillo, Francisco Javier (2019). *El milagro económico español. Dinámica salarial e impacto sobre la estructura de propiedad*. Madrid: Maia Ediciones.
- Oxfam (23 de mayo de 2022). *Nota informativa: Beneficiarse del sufrimiento*. <https://www.oxfam.org/es/informes/beneficiarse-del-sufrimiento>
- Puello-Socarrás, José Francisco (2013). Ocho tesis sobre el neoliberalismo (1973-2013). *Espacio Crítico*, 18.
- Roffinelli, Gabriela (2020). Tiempos de pandemia y de crisis de la civilización capitalista. *Boletín Nuestra América XXI. Desafíos y alternativas*, 43.
- Sociedad Chilena de Economía Política (1990). Problemas y perspectivas del actual modelo de desarrollo. Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Programa Regional de Investigaciones Económicas y Sociales del Cono Sur (PRIES), Santiago, 15 de diciembre.

“Un período de guerra de clases salvaje, engañosamente llamado ‘neoliberalismo’”: imperialismo, orientación del capital y política económica

Trotsky, Leon (1923). La curva del desarrollo capitalista. En VVAA (1979) *Los ciclos largos: ¿una explicación de la crisis?* Madrid: Akal.

Valenzuela, José (1991). *Crítica del modelo neoliberal*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Territorio, espacio político y neoliberalismo en América Latina. Tendencias históricas y disputas geopolíticas entre clases sociales

Efraín León Hernández

El recuento de cinco décadas de neoliberalismo en América Latina se valora aquí desde la emergencia, el auge y la actual crisis del proceso de sometimiento funcional y material del territorio por parte del capital, en el marco de espacios políticos nacionales que transitaron de regímenes totalitarios a otros de corte liberal autoritarios; éstos últimos, hoy día en franca crisis.

Consideramos esta mirada de larga duración como una excepcional oportunidad para la praxis política de las clases y sectores populares, porque permite desde algunas de sus diversas dimensiones, apreciar y caracterizar integralmente los rasgos que identificaron el avance del capitalismo neoliberal y su ejercicio político de domino, junto al despliegue de la praxis política que resistió a estos procesos.

En el primer apartado se exploran y caracterizan las prácticas geopolíticas que configuraron geográficamente nuestra región en cada una de sus escalas, al igual que la consistencia técnica y organicidad funcional del orden territorial latinoamericano para la acumulación de capital neoliberal. Este ejercicio lo relajamos en dos grandes momentos de avance de este modelo económico: la

subsunción formal del territorio por parte del capital neoliberal y la *subsunción real del territorio por parte del capital neoliberal* —esta última alberga orgánicamente en su seno el avance técnico y ecosistémico de este proceso, junto a la continuidad de diversas modalidades de sometimiento formal—. En esta exploración se ofrece una propuesta de lectura que evidencia además un avance sistemático de este proceso sin resistencias efectivas que le disputaran el sentido general al neoliberalismo, en la que se evidencia una clara asimetría entre las fuerzas políticas que las impulsaron; mismas que fueron dinamizadas por las tensiones y contrasentidos de una pujante praxis territorial de las clases dominantes, frente a la de las cada vez más disminuidas fuerzas populares.

En el segundo apartado se ofrece una valoración de los espacios políticos que caracterizaron estas cinco décadas, los cuales se definieron en dos grandes momentos de prevalencia de tipos de correlaciones de fuerza nacionales e internacionales, de regímenes políticos y órdenes de gobierno y, en consecuencia, de marcos de posibilidad común para la praxis política de las clases antagónicas. En el primero, acontecido durante los años 1970 y 1980, es en el que se continuaron los *espacios políticos nacionales totalitarios* que se abrieron en Europa durante las décadas pasadas, dirigidos a la anulación de la fuerza política y el exterminio de las clases y los sectores populares. El segundo momento aconteció en las siguientes tres décadas; un periodo durante el cual se generalizaron los *espacios políticos nacionales de corte liberal con ejercicios de dominio autoritario*, en los que bajo una máscara de respeto a los derechos civiles y políticos hiper individualizados se continuó con regímenes de violencia y terror que criminalizaron la protesta e impidieron la reconstitución de la organización política de las clases populares. Y, como reacción a este proceso, en el que emergieron, además, regímenes de corte liberal nacional popular de resistencia al neoliberalismo.

Finalmente, la última parte del trabajo expone la situación de los años recientes en la región en la que, después de tres décadas de espacios políticos liberal autoritarios, comienzan a definirse nuevas

condiciones de disputa y de reordenamiento del campo político en el que vuelve a la escena el viejo fantasma del totalitarismo y de los regímenes de anulación política y exterminio, en los que se radicalizó el dominio de grupos ultraconservadores fundado en el terror. Por lo que concluimos que en América Latina se ha abierto un nuevo periodo de dominio, sometimiento del territorio y condiciones comunes para la praxis política de las clases y los sectores populares, que abre nuevos marcos de posibilidad política e impone nuevos desafíos para las luchas políticas y la labor comprometida de la ciencia crítica. Estamos convencidos que la perspectiva de totalidad que ofrece este trabajo aprovecha esta situación como una oportunidad política para fortalecer a las luchas populares, porque valora integralmente la confrontación geopolítica entre las clases sociales antagónicas desde una perspectiva que explicita enseñanzas útiles para afrontar los retos que nos pone el presente para la construcción política de un futuro verdaderamente alternativo.

I. Geopolítica entre clases antagónicas y la subsunción del territorio por el capital

Sabemos que durante estas cinco décadas la praxis geopolítica¹ entre clases sociales se configuró a distintos ritmos y en diversas modalidades de acuerdo a cada una de las experiencias nacionales, sus correlaciones de fuerza internas y las maneras en que se establecieron alianzas o disputas al exterior. Sin embargo, grosso modo, podemos

¹ Entendemos por geopolítica y más explícitamente por praxis geopolítica los procesos de disputa por territorios y sus riquezas, por supuesto, tal como lo definió la geopolítica clásica. Pero, además, entendemos que van más allá de la disputa por territorios, porque también lo es por su disposición geográfica, consistencia técnica y organicidad espacial ligadas a intereses y finalidades específicas (León, 2020). Por lo que en última instancia, en tanto que soporte material, se trata de una disputa por insertar un orden territorial a un proyecto social o civilizatorio. Por lo que, siguiendo la tradición del discurso crítico de Marx, entendemos que con ello no sólo está en juego la disputa por insertarlo a la producción y reproducción social, sino que se establece en la disputa por las condiciones comunes en las que realizan la totalidad de las luchas políticas (León, 2016).

establecer dos grandes momentos de organización del orden territorial neoliberal latinoamericano en las que se definió esta disputa, es decir, dos grandes momentos de subordinación o sometimiento del territorio por parte del capital neoliberal o de organización del campo instrumental o universo de fuerzas productivas (Echeverría, 2013, p. 1): 1) el momento de implementación jurídica e institucional del proyecto neoliberal, en la que se llevó a cabo la subsunción formal del territorio por parte del capital neoliberal o, dicho de otra manera, la de la incorporación funcional del territorio previamente existente a sus necesidades crecientes; y 2) el momento de implementación y puesta en acto del proyecto neoliberal propiamente territorial que condensó materialmente los nuevos avances técnico científicos dirigidos a la producción, los retos de la colosal e inocultable crisis ambiental global y un nuevo diseño geográfico que confirió una nueva organicidad al orden territorial de la producción, la circulación y el consumo en América Latina, es decir, el de la subsunción real del territorio por el capital neoliberal².

Estos dos momentos, no son apenas dos estadios de desarrollo o de aumento de la complejidad y consistencia del orden territorial latinoamericano del último medio siglo y, por supuesto, de los órdenes

² Sabemos del uso teórico riguroso de las nociones de subsunción formal y real del proceso de trabajo por parte del capital en la obra de Marx (2001) y de su importancia para dar cuenta del avance del dominio del capital en la sociedad moderna, por lo que en estricto sentido habría que hablar de la subsunción formal y real del territorio por parte del capital en una temporalidad de mayor profundidad a la del neoliberalismo. Sin embargo, esa reflexión nos desviaría del propósito específico de este trabajo. Por lo que, sabiendo del uso laxo de estos conceptos, aquí nos permitimos hablar de la subsunción real del territorio por parte del capitalismo neoliberal, con la generalización de su modelo económico técnico productivo, y de su etapa previa, la de la subsunción formal o funcional, soportada y dominada por el modelo técnico productivo keynesianismo. Aunque una mirada de más largo plazo, nos mostraría que en realidad las dos etapas que referimos tendrían que considerarse como momentos particulares de la subsunción real del territorio por el capital, y, por ello, del mundo del trabajo en su conjunto. La cual, inició su marcha en América Latina desde la Colonia, con la primera gran modernización técnica de las producción azucarera y la revolución de los medios de transporte transatlánticos, pero ya como proceso generalizado dominante en el mundo entero, en los albores del siglo XIX.

territoriales particulares que contiene, sino dos de sus elementos constitutivos y dos formas particulares de vigencia del sometimiento territorial neoliberal que se complementan en el presente. Y que, desde hace tres décadas, se presentan como caminos alternativos u opciones políticas orgánicamente articuladas para la continuación del dominio territorial del capital y sus clases dominantes.

Subsunción formal del territorio latinoamericano por parte del capital neoliberal

El primer momento, el de la subsunción formal del territorio por parte de este capital, fue en realidad el de la emergencia y consolidación formal del proyecto neoliberal. El modelo neoliberal como ideología no era una novedad para los intelectuales demiurgos del capital, pero sí lo fue como estrategia de intervención ampliamente consensuada por las clases dominantes imperiales y las oligarquías locales latinoamericanas, para intentar restaurar los ciclos de acumulación de capital que habían sido interrumpidos por la crisis económica de la década de 1970. Fue en esta década cuando en algunos estados nacionales como el chileno, de la mano de los *Chicago Boys* y bajo una dictadura militar totalitaria, se inició la ejecución de las llamadas reformas estructurales –jurídicas, institucionales y administrativas–, mismas que apenas una década después, ya en la década de los años ochenta, tendrían vida político-institucional en prácticamente todas las naciones de América Latina, en el marco del hoy ampliamente conocido Consenso de Washington.

El territorio no fue tocado materialmente en este nuevo escenario neoliberal, pero sí se le otorgaron nuevas funciones coherentes a este nuevo esquema de ordenanza, o, como diría el propio neoliberalismo, acorde al nuevo paradigma de libre mercado. Por lo que el campo instrumental que soportó este primer estadio de vigencia del neoliberalismo, que en términos generales fue heredado de las décadas pasadas, escasamente registró cambios en su consistencia

técnica, disposición geográfica y organicidad material. Y, en consecuencia, el mundo del trabajo en su conjunto también registró transformaciones restringidas al ámbito formal o funcional: disminución de salarios, aumento de la jornada laboral, pérdida de derechos y, por supuesto, masificación del desempleo.

Subsunción real del territorio latinoamericano por parte del capital neoliberal

El segundo momento, el de la subsunción real del territorio, fue en el que se implementaron una multiplicidad de proyectos de ordenamiento territorial en diversas escalas, con los que no sólo se transformó la función, sino –como dijimos arriba– la consistencia técnica, disposición geográfica y organicidad material del territorio latinoamericano, en una multiplicidad de escalas y cambios de sentido. Nuevos desarrollos técnico científicos aplicados a la producción, como la informática y las tecnologías de la información, la robótica y las neurociencias, la biotecnología y la nanotecnología, así como la incorporación de los nuevos materiales, modificaron cualitativamente el campo instrumental, hasta ese momento dominado por la petroquímica, la combustión interna y el acero. Acompañados de la llamada revolución logística y una proliferación sin precedentes de centros académicos de geografía y ordenamiento territorial, se emplazaron proyectos de corredores industriales, mercantiles y de flujos de energía y, con ellos, se reconfiguraron de conjunto las venas abiertas desde la colonia y las que se agregaron durante los esfuerzos industrializadores de los siglos XIX y XX. Y, por supuesto, se ampliaron las fronteras de extracción de recursos naturales en mares y tierras emergidas (León, 2023), con especial salvajismo en los territorios

hoy día ocupados por pueblos originarios, indios, afrodescendientes y campesinos mestizos³.

Cada una de las naciones modificaría su orden territorial nacional dirigido a la exportación en perjuicio de su organicidad productiva y mercantil interna. Por lo que, en su conjunto, estos procesos imprimieron una nueva organicidad geográfica que combinó y articuló lo nuevo con lo viejo en un mismo propósito: la producción para la exportación, desde la que se imprimió geográficamente un orden territorial que hoy día penetra al continente desde los litorales para movilizar por igual producción altamente especializada, maquila y extracción destructiva de riquezas naturales de todo tipo para conectarlas al mercado internacional, sin privilegiar en ningún momento el tipo de conectividad interna –nacional o regional– necesaria para impulsar los mercados internos de producción y consumo en América Latina.

Con ello, el mundo del trabajo fue cualitativamente transformado y jerárquicamente reorganizado. Nuevas especialidades operativas se exigieron para la fuerza de trabajo, al tiempo de que la otrora mano de obra altamente capacitada fue marginada o, incluso, no requerida por el arribo de una nueva ola de maquinización, ni por la decadencia de los sectores económicos perdedores en la carrera neoliberal. Los órdenes territoriales latinoamericanos se reorganizaron en disposiciones geográficas polares que, por un lado, emplazaron orgánicamente la maquinización y la superexplotación de la fuerza de trabajo y, por el otro, el saqueo de las riquezas naturales y la destrucción de ecosistemas. Así, la hiper especialización y flexibilización del trabajo quedó orgánica y geográficamente articulada a la precarización, el desempleo y la marginación, al igual que a las agresiones ambientales de la más diversa índole; con todo y que la mayor

³ Para una valoración teórica e histórica de estos procesos recomendamos las lecturas: *La disputa asimétrica por el mar. Prácticas geopolíticas entre clases sociales en los litorales y mares de México y América Latina* (León, 2023) y *La disputa silenciosa. Ensayo teórico sobre procesos geopolíticos entre clases sociales en litorales, mares y océanos* (León, 2021)

parte de los proyectos de intervención territorial fueron implementados cínicamente bajo el paradigma del desarrollo sustentable.

Tal como sucedió en durante la subsunción formal del territorio –con diferencias importantes según la experiencia nacional que observemos–, en el momento de subsunción real los programas de ordenamiento territorial articularon tanto la maquinización y la producción altamente especializada, como la super explotación de la fuerza de trabajo y la destrucción de la naturaleza, como versiones alternativas localmente emplazadas y espacialmente complementarias como verdaderas opciones políticas vigentes para el ejercicio de las clases dominantes. A estas modalidades locales de dominio territorial se debe también la reacción geopolítica diferenciada de las clases populares, especialmente a partir de la primera década del siglo XXI.

II. Geopolítica entre clases antagónicas y el espacio político

En el ámbito político, a grandes rasgos, la geopolítica entre clases antagónicas en América Latina también coincidió con estos dos momentos de subsunción o sometimiento del capital neoliberal, enmarcados temporalmente en la crisis de la década de 1970 y la actual crisis. Dos momentos del neoliberalismo que se caracterizaron, además, por acontecer en campos o espacios políticos⁴ con condiciones

⁴ Partimos aquí de la noción de *espacio político* en el segundo nivel de vigencia que teoriza Henri Lefebvre en su obra *La producción del espacio* (2013). En él, se reconoce al espacio como el campo de disputa política por excelencia. Por un lado, al constituirse en el tejido que define la confrontación entre fuerzas políticas vigentes y, por otro lado, en su concreción material como escenario heterogéneo y asimétrico de la lucha de clases: como territorio. Es decir, constituido no como escenario imparcial e inocente sino como una forma dinámica que al tiempo de constituirse de una red de ordenes políticos, materializa las relaciones históricas de fuerzas de toda la sociedad. Por ello, el espacio es aquí una forma de concreción de la disputa histórica entre las fuerzas políticas de la sociedad capitalista, especialmente entre sus clases antagónicas. Una forma que además conserva su vigencia como determinante o fuerza particular de la

diferenciadas, es decir, en el marco de órdenes políticos y correlaciones de fuerzas disímiles que definieron formas y sentidos también singulares para la praxis política de las clases antagónicas en estos dos momentos. El primero de ellos, fue circunscrito en las últimas dos décadas de la llamada Guerra Fría: lo que aquí denominamos espacios políticos totalitarios. Esto es, condiciones políticas comunes definidas por regímenes políticos total-autoritarios, dictaduras militares y estados de contrainsurgencia. Ya en curso la llamada apertura democrática en América Latina, el segundo momento se definió en lo que aquí denominamos espacios políticos liberal autoritarios, o sea, en el marco de condiciones políticas comunes definidas por regímenes políticos liberales de corte autoritario con continuidad en la persecución y la criminalización de las luchas sociales, pero en los que además inició un tipo ejercicio de dominio con un amplio espectro de estrategias que ocultaron la radicalización del liberalismo económico, bajo diversas máscaras de disfrute de derechos democráticos y supuesto respeto a los derechos humanos.

Espacios políticos totalitarios en América Latina

Las primeras dos décadas de neoliberalismo se definieron bajo espacios políticos nacionales totalitarios aún en un momento de confrontación entre el capitalismo y el proyecto comunista. La especificidad de la praxis política de las clases dominantes latinoamericanas se definió así con el respaldo de la política imperial estadounidense. En este marco, la embestida de las clases dominantes contra el socialismo realmente existente y la fuerza política de la clase trabajadora organizada, se desplegó bajo el totalitarismo criminal de estados civiles y militares, los llamados estados de contrainsurgencia,

confrontación entre clases, tanto en la disputa vigente en la unidad histórica, como en las disputas particulares que se definen en cada uno de los espacios nacionales y locales que engloba (León 2016).

constituidos en verdaderos instrumentos de anulación política y exterminio fundados en el terror sobre la organización política de las clases y los sectores populares (Marini, 1978).

Por su parte, desde la especificidad de la praxis política de las clases y los sectores populares, estas décadas fueron en las que paulatinamente se disolvió su unidad política de clase, en su momento sostén de la agenda revolucionaria de la clase trabajadora y del ideario de la construcción de una sociedad alternativa verdaderamente común: el comunismo. Con lo que se desmotó, además, la centralidad estratégica de la disputa por el Estado como medio político necesario para edificar una alternativa desde y para la mayor parte de la sociedad, así como para operar y dirigir el proceso revolucionario de transformación social. De esta manera, se abriría un proceso de paulatina atomización de las luchas políticas y de reducción del campo de las luchas estatales de las clases populares al restringirse, en el mejor de los casos, a la obtención de derechos civiles, y, cuando no, simplemente oponiéndose a los gobiernos y las instituciones estatales por considerarlos adversarios representantes de las clases dominantes e instrumentos de su ejercicio.

Espacios políticos liberal autoritarios en América Latina

En segundo lugar, con el inicio del periodo de la llamada apertura democrática en la última década del siglo pasado en América Latina, inició un viraje en la consistencia de los espacios políticos nacionales latinoamericanos del totalitarismo al liberalismo autoritario. Por lo que, ya iniciada la subsunción real del capital neoliberal, el dominio se continuó bajo órdenes políticos que dieron continuidad disimulada al terror, bajo regímenes supuestamente democráticos en los que bajo diferentes mascarar se ocultaron tipos de autoritarismos, que en ciertos aspectos garantizaban el disfrute de algunos derechos civiles, especialmente las libertades económicas y algunos derechos políticos, generalmente hiperindividualizados. En este marco

fue donde históricamente se abrieron las dos versiones del tipo de sometimiento territorial, que implementarían las clases dominantes en su praxis política ligada al proyecto neoliberal como verdaderas opciones políticas locales para cada uno de los territorios particulares. Es decir, la posibilidad de, por un lado, optar por continuar con la incorporación formal del territorio iniciada dos décadas atrás y, por el otro, apostar en el inicio de la reconfiguración técnica y geográfica propiamente neoliberal: una verdadera estrategia que abrió una doble alternativa complementaria de conveniencia económica, geográfica e ideológica, y, por ello, una modalidad de gobernabilidad liberal autoritaria de doble consistencia territorial.

En la opción abierta de continuar con la subordinación en el ámbito formal o funcional, hay que subrayar que además de las formas territoriales generadas durante los periodos pasados de industrialización, se incluyeron las que acontecieron desde la Colonia y la primera etapa independiente de los estados latinoamericanos. Es decir, la opción incluyó también la de avanzar con la subsunción real del proceso de trabajo sobre los territorios de los pueblos originarios o la de mantener sus formas de producción particulares bajo una variedad de tipos de sometimiento del capital estrictamente formales o funcionales en el que ya se encontraban.

Ya bajo el control pleno de los estados por parte de las clases dominantes neoliberales y bajo condiciones liberal autoritarias, se abriría un periodo de disidencias políticas de resistencia, en cierta medida inocuas en referencia a su falta de fuerza y a la de un proyecto alternativo que permitiera disputar el sentido de la transformación social a las clases dominantes. Un periodo, en cierta medida aún vigente, en el que en lo general las luchas políticas de las clases populares se mantuvieron fragmentadas, aisladas entre sí e, incluso, en muchos casos contrapuestas. Lo que sí es que durante estas décadas se registró también un lento proceso de reflujo a la fragmentación; de reconstitución de la unidad política, alimentado de una multiplicidad de luchas de protesta y reivindicación social aún en marcha, que han logrado avances importantes en aspectos como las luchas

contra el racismo y el etnicismo, las luchas por la igualdad de género y respecto a diferencias sexuales y, por supuesto, las luchas comunitarias en defensa de territorios y ecosistemas, entre muchas otras. Por lo que, en atención a la fuerza vital que caracteriza a las luchas populares, en el seno de sus propias prácticas políticas, ha comenzado a madurar una nueva necesidad de reconstituirse como fuerzas plurales y unitarias que hoy día puja por rearticularse en foros sociales y, sobre todo, en las expresiones de masas en procesos electorales que apoyan a gobiernos democráticos de corte popular de resistencia al neoliberalismo.

En relación a la tendencia común de la praxis territorial de las clases y sectores populares y del conjunto de sus luchas políticas abiertas en las últimas tres décadas, quizá el rasgo más característico fue su desvinculación política casi total de la otrora agenda de los trabajadores y del proyecto social comunista que resultó de la férrea crítica al dominio capitalista, que en su ejercicio de dominio cotidiano más íntimo se expresa en la subordinación del mundo del trabajo. Con todo y que el territorio, en su rasgo más notable y común a todas las prácticas que lo involucran y reivindican, no es otra cosa que la expresión sintética del soporte material de la reproducción económica, social, cultural y comunitaria de toda sociedad histórica, y de las sociedades particulares que contiene en su seno (León y Ceroni 2020)⁵.

⁵ Es decir, como lo diría el propio Marx en el capítulo V de *El capital* (2001), se trata del horizonte sintético de las condiciones comunes para la producción o de las fuerzas productivas técnicas y ecosistémicas. Y por consecuencia, nosotros agregamos, de la condición material fundamental para la edificación de un nuevo orden social verdaderamente alternativo, no solo al neoliberalismo, sino al del propio capital.

Correlaciones de fuerza y versiones liberales de los espacios políticos nacionales

Consecuencia de las luchas democráticas de los sectores y las clases populares, y de acuerdo a las correlaciones de fuerza en cada una de las experiencias nacionales, en este segundo momento de generalización de espacios políticos nacionales liberal autoritarios se registrarían dos grandes tendencias que, en dos versiones diferenciadas, apenas permitieron a las clases populares disminuir el impulso del proyecto territorial neoliberal, pero no detener su marcha y, menos aún, disputar el sentido impreso por las clases dominantes en ellos; las que en escalas locales se opusieron a proyectos territoriales específicos y a sus nuevos emplazamientos, al igual que las que lograron disputar democráticamente el Estado bajo parámetros liberales, pero sin un proyecto territorial realmente alternativo al propuesto por el capital neoliberal y, menos aún, sin un proyecto alternativo de sociedad.

Por ello, mirado de conjunto, el espacio político liberal definido en las correlaciones de fuerza nacionales durante las primeras dos décadas del siglo XXI, a veces en vaivenes pendulares, en otros casos con líneas claras de continua de radicalización del neoliberalismo, se configuró en dos grandes modalidades o versiones de órdenes políticos de acuerdo a las correlaciones de fuerza vigentes (León, 2017). Lo cual permitiría la emergencia de dos tendencias de alianzas entre clases, de estrategias de gobierno, de proyectos económicos y de prácticas territoriales. Es decir, dos grandes grupos de experiencias liberales o tipos de campos de batalla comunes para todas las luchas y ejercicios de dominio en cada una de las naciones que, por supuesto, también especificaron los procesos geopolíticos entre clases sociales y la subsunción real del territorio por el capital neoliberal en su etapa liberal y, en una perspectiva más amplia, de subordinación real del proceso de trabajo.

- a) En el primer grupo de experiencias liberales, se mantuvieron gobiernos que radicalizaron el neoliberalismo y su proyecto territorial, al perpetuar las ligas de sus clases dominantes con las estadounidenses y las de sus aliados en el continente. En ellos, el ejercicio de dominio se mantuvo en regímenes cada vez más autoritarios, que paulatinamente perdieron legitimidad en las masas y que sólo lograron mantenerse soportados en un binomio constituido, por un lado, en el ejercicio del miedo, la invención de estados fallidos y, por el otro, con la propuesta de restituir las condiciones mínimas de orden social para, con ello, supuestamente reestablecer el bienestar social, bajo el ampliamente difundido paradigma de *securitización* (León, 2021).
- b) El segundo grupo, por su parte, posibilitó experiencias de corte liberal nacional popular en las que a partir de las luchas democráticas se establecieron alianzas políticas entre sus propias clases antagónicas nacionales. Estas experiencias nacionales de resistencia popular democrática, como dijimos arriba, aún manteniendo el neoliberalismo como plataforma común, posibilitaron ciertos cambios en los órdenes sociales y territoriales de acuerdo a intereses y sentidos nacional populares, sobre todo en escalas locales; el cuidado del mercado interno, una mayor redistribución de la riqueza y el restablecimiento de algunas garantías laborales, como mejoras salariales, anulación de la terciarización del trabajo, restablecimiento de sistemas educativos y de salud, créditos a la vivienda y apoyos de diversa índole. En algunos aspectos y pequeñas escalas, estas experiencias lograron diluir el antagonismo de la geopolítica entre clases al interior de sus fronteras y frenaron, aunque no lo suficiente, el alegre avance que durante décadas ha mantenido el neoliberalismo en el sometimiento funcional y real del territorio, en particular, y del proceso de trabajo en su conjunto.

La tendencia común de las versiones liberales de los espacios políticos latinoamericanos

No obstante, lo que sí es que estos dos grupos de experiencias liberales nacionales acompañaron e impulsaron intentos de integración con agendas económicas, políticas y territoriales comunes y en cierta medida articuladas. En ambos casos, la fuerza de los sectores populares y el sentido que imprimieron fueron insuficientes para frenar el impulso de las clases dominantes y el emplazamiento geográfico de su agenda territorial. Las correlaciones de fuerza nacionales expresaron con claridad la asimetría política de ambas fuerzas antagónicas. Por lo que, mientras las clases populares no sólo carecieron de un proyecto común y una fuerza unitaria efectiva capaz de disputar el sentido general del orden territorial latinoamericano, las clases dominantes concretaron la agenda territorial neoliberal en un complejo rompecabezas de procesos geopolíticos particulares desplegados en escalas diversas que combinaron, decíamos, el sometimiento material con el meramente funcional. No sin contradicciones importantes entre ellas, en la escala regional tomaron cuerpo en los proyectos de ordenamiento territorial: Plan de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) o ex Plan Puebla Panamá, la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la Política de Transporte Comunitaria, incluida en el Capítulo V de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Por lo que, sin importar que surgieran de experiencias de gobiernos democráticos de corte nacional popular o de gobiernos neoliberales, la correlación de fuerzas cargada en favor de las clases dominantes definió una forma y sentido común en la praxis territorial latinoamericana que materializó la correlación de fuerzas vigente en un nuevo orden territorial neoliberal que dejó atrás el viejo paradigma nacionalista de impulso de un desarrollo regional equitativo con justicia regional o espacial. Por lo que se trató de un tipo de orden territorial neoliberal en el que

las clases dominantes fortalecieron su ejercicio a partir del dominio rutinario ejercido con el comercio, la producción y el flujo del capital financiero.

Fractura de los espacios políticos liberales nacionales en América Latina

Sin embargo, un conjunto de acontecimientos recientes ha venido a reconfigurar la correlación de fuerzas políticas en la última década y, con ellos, la posibilidad efectiva de sectores y clases populares de desplegar su praxis política y territorial. Entre ellos, la crisis económica (Mattick, 2014) y de hegemonía del neoliberalismo (León, 2021), que inició a finales de la primera década de este siglo, que se continuó en la fase de contracción del capital que desde esa fecha se abriría, y que tendría su más reciente estallamiento durante el perdido de aislamiento social que resultó de la pandemia mundial de COVID-19. Crisis económicas que han contribuido con la pérdida de legitimidad de gobiernos de todas las extracciones políticas, y han detonado vaivenes pendulares de gobiernos de radicalización autoritaria del neoliberalismo y de gobiernos democráticos de corte nacional popular de resistencia al neoliberalismo.

En este escenario, la polarización social, la proliferación de los llamados “golpes de estado blandos” (Vollenweider, 2016) contra regímenes instaurados democráticamente y la radicalización de las clases dominantes en grupos cada vez más fundamentalistas han traído nuevamente a la escena política el fantasma del terror que fundamentó los regímenes totalitarios de anulación política y exterminio de la organización de las clases y sectores populares, para mantener o imponer los proyectos de dominio económico, político e ideológico de las clases dominantes. En este espacio de transformación de

los actuales espacios políticos liberales latinoamericanos se abre un conjunto de retos a futuro para las luchas políticas que encarnan las clases y los sectores populares, que vuelve necesaria la revisión auto-crítica de los propios postulados científico-críticos que dominaron el espectro durante estas cinco décadas de neoliberalismo.

III. Geopolítica y la disputa ideológica; el viejo dilema de ciencia crítica

La disputa geopolítica en la que se expresó la asimetría entre las clases antagónicas también se llevó a cabo en el ámbito ideológico y, más aún, en el plano de la cultura política y la praxis de la ciencia crítica. Un ámbito en el que no sólo interesa describir su condición en las últimas cinco décadas, sino que, al hacerlo, se vuelve imperativo contribuir en el fortalecimiento de las clases y sectores populares; al examinarlas a partir de los retos políticos que nos pone la actual crisis y la posible edificación de un futuro alternativo socialmente común. Particularmente nos interesa subrayar cómo durante estas cinco décadas de disputas geopolíticas entre clases sociales enmarcadas en el orden neoliberal, se expandió una cultura política en las luchas de las clases populares y en la academia crítica, que redujo la consideración de la unidad territorial histórica y la del espacio político, a su vigencia como meras expresiones del dominio del capital y del Estado. Y, con ello, se omitió también el papel central del territorio social (nacional, regional y mundial) y del mundo del trabajo para la edificación de un nuevo orden social realmente alternativo, al igual que sucedió con la unidad de la fuerza política popular como agente político capaz de dar dirección y sentido revolucionario.

La consecuencia de esto es que la ciencia crítica en el neoliberalismo, sobre todo en las últimas décadas, a nombre del rescate de la diferencia y de las voces silenciadas, en la manera de hacerlo, paradójicamente reprodujo, y en muchos casos incluso impulsó, la fragmentación del sujeto político popular, desligándolo de su concreción histórica común, es decir, en su concreción social global, y de la

búsqueda de un proyecto alternativo social en la misma escala. Especialmente en América Latina, donde incluso a nombre del rescate del pensamiento propio, en muchos casos se estableció una franca oposición a concepciones científicas críticas que mantuvieron interés en el mundo del trabajo y la consideración de la totalidad política, por provenir de latitudes donde se originó geográficamente el actual dominio civilizatorio del capitalismo y, sólo por ello, supuestamente, reproducirlo.

En primer lugar, porque al desgarrar al sujeto político de su vida objetiva, como sujeto social y sujeto productor-consumidor, dejó de contemplarse la interdependencia social de la actividad práctica interindividual e intercolectiva y la de su campo instrumental con el mundo del trabajo, es decir, que fue artificialmente desgarrado de la actividad práctica y del soporte territorial de los que realmente depende su reproducción material en escalas más allá de la local comunitaria y sobre la que habría que generar también una alternativa. Así, por ejemplo, mientras innumerables estudios críticos dieron cuenta de la consistencia material y política del proyecto territorial neoliberal y de la praxis de las clases dominantes de las últimas tres décadas, es decir, la que impulsó la subsunción real del territorio por el capital neoliberal, en paralelo no pasaría lo mismo con el análisis crítico de la praxis territorial de las clases populares, porque en su análisis fue marginada la valoración efectiva del alcance de las propuestas territoriales a la defensiva o prefigurativas apenas en escalas locales y, como consecuencia, dejó de valorarse el paulatino alejamiento político de esta praxis territorial del universo general de necesidades y capacidades históricas.

En segundo lugar, porque al desmembrar el sujeto político en individuos, grupos, comunidades y territorios yuxtapuestos, se omitió su integridad como sujeto político social más allá de reconocerlos en su relación a partir de la solidaridad o el conflicto, lo cual tuvo como consecuencia que la autarquía territorial local se concibiera erróneamente fuera del marco de los espacios políticos que los enmarca, y como tal desligados de las condiciones que los genera y de las

opciones de posibilidad para sus propias prácticas políticas; mismas sobre las que, al igual que el aspecto anterior, también sería necesario intervenir en un proyecto político alternativo.

La consecuencia de considerar yuxtapuestos los fragmentos del sujeto social fue que la ciencia crítica en estas últimas décadas, en términos generales, dejó fuera de marco de reflexión el momento de la caracterización de las prácticas políticas de las clases populares en su capacidad de construcción un proyecto socialmente alternativo y de la fuerza común necesaria para disputarle sentido al capital. Esto fue especialmente llamativo en los llamados estudios territoriales y las propias luchas políticas que dieron vida a los movimientos territoriales de las últimas dos décadas que, al continuar esta cultura política, fragmentaron el territorio en escalas locales; paradójicamente, poniendo especial atención a la destrucción de ecosistemas y culturas, pero, decíamos, desligándolo del mundo del trabajo y de las correlación de fuerzas y espacios políticos en los que se desplegaron.

Sabemos que, en realidad, la cultura política en la academia crítica no puede desarrollarse de manera independiente de las propias luchas políticas del momento. Sin embargo, potencialmente van más allá de ser un mero reflejo y pueden constituirse en verdaderas fuerzas que impulsen cambios en las prácticas políticas de las clases populares.

El reto es mayor porque, hoy día, que la crisis económica sostenida parece anunciar el límite del neoliberalismo en la fractura de su hegemonía entre las clases dominantes, nada parece indicar un vuelco vertiginoso en la consistencia y organicidad neoliberal de los órdenes territoriales latinoamericanos, pero sí en el espacio político liberal autoritario que lo ha soportado en las últimas tres décadas. Y esto es resultado de que se ha abierto la disputa por mantener órdenes políticos liberales democráticos o por reestablecer regímenes totalitarios del tipo que vieron emerger el neoliberalismo en sus primeras dos décadas. Así, mientras que estamos convencidos de que el actual orden territorial será el soporte material de la acumulación del futuro, al menos en las décadas inmediatas, no pasa lo mismo con el

orden político liberal como condición común de la lucha entre clases sociales.

Se trata, entonces, de la convergencia de los ritmos diferenciados de las transformaciones de los órdenes territoriales y los espacios políticos. Un ritmo lento, por un lado, en el que acontece el sometimiento real del territorio por parte del capital neoliberal, y, en consecuencia, la continuidad del agotamiento de recursos, de destrucción de ecosistemas y de la precarización del trabajo, junto a los malestares sociales y las luchas populares que ha desencadenado. Y, por otro lado, del potencial cambio vertiginoso en el espacio político del presente que trae consigo el fantasma del totalitarismo y que, como nunca en el presente siglo, coloca las luchas democráticas en la agenda común popular.

En realidad, se trata de un escenario no sólo para cada una de las naciones latinoamericanas porque es un fenómeno que se replica en todas las regiones del mundo. En él, y en la correlación de fuerzas entre clases sociales antagónicas que se reconfigura, las clases y los sectores populares, en sus prácticas y luchas políticas tendrán aún mucho por decir.

BIBLIOGRAFÍA

- Echeverría, Bolívar (2013). *Modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotaciones a partir de una lectura de Brudel y Marx*. México: Ítaca.
- Lefebvre, Henri (2013). *La Producción del espacio*. España: Capitán Swing.
- León, Efraín (2023). Vigencia histórica de la oceanopolítica entre clases sociales en América Latina. En Efraín León (Coord.), *La disputa asimétrica por el mar. Prácticas geopolíticas entre clases sociales en los litorales y mares de México y América Latina*. México: FFyL Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2019). Crisis de legitimidad del neoliberalismo en América Latina y el paradigma de la securitización social en un periodo de transición. En Edmundo Hernández-Vela y Valeria Olvera (Eds.), *Política internacional. Temas de análisis Volumen 7*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2021). *La disputa silenciosa. Ensayo teórico sobre procesos geopolíticos entre clases sociales en litorales, mares y océanos*. México: FFyL Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2020). *A liberdade territorial. A práxis territorial popular na América Latina*. Brasil: Concequências. Coleção Território e Práxis Popular.
- (2017). Espacio histórico y praxis espacial en América Latina: inflexiones en el campo de disputa geopolítica entre clases sociales. En Efraín León, (Coord.). *Praxis espacial en América Latina. Lo geopolítico puesto en cuestión*. México: FFyL Universidad Nacional Autónoma de México e Ítaca.
- (2016). *Geografía crítica. Espacio, teoría social y geopolítica*. México: FFyL Universidad Nacional Autónoma de México e Ítaca.
- León, Efraín y Ceroni, Mauricio (2020). El territorio en su “forma social-natural y la determinación capitalista: Reflexiones desde el discurso crítico de Marx. En Efraín León y Jaime Breilh (Eds.), *Espacios de capital, territorios de libertad. Miradas críticas desde la geografía y el vivir saludable*. México-Ecuador: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Andina Simón Bolívar.

Marini, Ruy Mauro (1978). El Estado de contrainsurgencia. *Cuadernos Políticos*, 18.

Marx, Karl (2001). *El capital*. México: Siglo XXI.

Mattick, Paul (2014). *Crisis económica y teorías de la crisis. Un ensayo sobre Marx y la “ciencia económica”*. Madrid: Maia Editores.

Vollenweider, Camila (julio de 2016). Golpes de Estado siglo XXI: nuevas estrategias para viejos propósitos. Los casos de Honduras, Paraguay y Brasil. *Celag*. <http://www.celag.org/golpes-siglo-xxi-nuevas-estrategias-para-viejos-propositos-los-casos-de-honduras-paraguay-brasil-por-sabrina-flax-silvina-romano-y-camila-vollenweider/>

El desconcierto del neoliberalismo latinoamericano

*Claudio Katz*¹

Presentación

El retroceso de Estados Unidos no disuade la tradicional sumisión de los neoliberales al dominador del Norte. Sus voceros afirman que es el momento de aprovechar la actual preeminencia de la vertiente globalista de Biden, para crear incentivos a la llegada de inversores yanquis (Oppenheimer, 2022).

En ciertos países alientan ese curso con el remate de minerales, tierras o cuencas marítimas. En otras naciones propician la instalación de fábricas o el desenvolvimiento de servicios con mano de obra barata y alto grado de explotación.

Con ese discurso retoman los mitos del gran desarrollo, que acompañaría a la presencia protagónica de la primera potencia en su "Patio Trasero". Pero no explican el fracaso padecido por ese mismo rumbo durante las últimas décadas. El extractivismo minero

¹ Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

enriqueció a las compañías que apadrina Washington, sin ninguna contrapartida favorable para la región. Y lo mismo ocurrió con el modelo fragmentario de las maquilas, que ha sido la antítesis de un crecimiento incluyente de América Latina.

Adversidades del mismo tipo se verifican en la carga laboral afrontada por los jóvenes de la región, que han sido integrados a los auspiciados *Call Centers*. Esa actividad no mejora la calificación o la educación de esos sectores y tampoco apuntala circuitos virtuosos de expansión del poder adquisitivo.

Fantasías del buen servidor

Los neoliberales repiten un discurso del pasado, sin registrar siquiera las propias reticencias inversoras de las empresas estadounidenses. La mayoría de esas firmas buscan ganancias rápidas con reducido riesgo propio y no ofrecen las imaginarias oportunidades que propagan sus admiradores del Sur. Trump transparentó con su conocida brutalidad esas restricciones, que Biden vuelve a enmascarar con los habituales engaños de la propaganda imperial.

Esas reservas de los capitalistas yanquis sintonizan con los enormes desequilibrios de las economías latinoamericanas. En lugar de constatar esa estructural adversidad, los neoliberales continúan culpando a sus propios conciudadanos por las desgracias de la región. Enfatizan las responsabilidades de los “gobiernos populistas”, que desperdician la oportunidad de recuperar la condescendencia del Norte con renovados actos de docilidad (Oppenheimer, 2022). Pero no enuncian un sólo ejemplo exitoso de esa mansedumbre.

El balance de los presidentes latinoamericanos más obedientes de Washington ha sido funesto, tanto para las mayorías populares como para el desenvolvimiento de sus países. Las penurias del capitalismo dependiente fueron invariablemente potenciadas por esas gestiones. Ha sido tan nefasto el cenit neoliberal de comienzo del nuevo siglo (Salinas, Cardoso, Menem, Aylwin), como su reproducción

durante la reciente restauración conservadora (Macri, Duque, Peña Nieto, Bolsonaro, Piñera).

Los neoliberales sustituyen la evaluación de esas trayectorias por la repetición de lugares comunes. Reiteran que los “problema son nuestros” y ajenos a la presencia estadounidense, como si la dominación ejercida por la primera potencia durante más de siglo, fuera irrelevante para las desventuras de la región.

Esa mirada atribuye el subdesarrollo a la idiosincrasia, las costumbres y los comportamientos de la población. Pero omite que, en la mayor parte de la historia regional, el rumbo de la sociedad no estuvo dictado por las mayorías populares, sino por los capitalistas y sus funcionarios de turno.

Esa élite desprecia a sus compatriotas, exhibiendo una inocultable admiración por las potencias que dominaron a Latinoamérica, lucrando con la apropiación de los bienes comunes y la explotación de la fuerza de trabajo. Primero ensalzaron al opresor europeo y luego a su reemplazante estadounidense.

Desde el siglo XIX el liberalismo regional ostenta una manifiesta fascinación por el Norte y un simétrico desdén por los pueblos originarios de sus territorios. Forjaron sus propios Estados exaltando la civilización estadounidense, en contraposición a la barbarie que observaban en el Sur. Esa tradición elitista nunca desapareció y recobró fuerza en todas las coyunturas políticas de preeminencia conservadora (Rinke, 2015: 72-75).

Algunos herederos de ese legado reconocen con mayor realismo, que Estados Unidos ya no opera como la indiscutida potencia hegemónica. Constatan que la pérdida de ese liderazgo torna muy difícil la mera alabanza o la simple sumisión. Pero, igualmente, postulan la conveniencia de preservar un lazo de dependencia, señalando la ventajosa conexión que ofrecería un poder debilitado, frente a la ascendente gravitación de China (Barrenechea, 2022).

Sin embargo, no aclaran por qué razón ese continuado padrinazgo de Washington sería beneficioso para América Latina. Recurren a un curioso razonamiento invertido, donde la atadura a una potencia

declinante augura ganancias. Si el postulado neoliberal de las ventajas del status dependiente es insostenible, los provechos adicionales que aportaría la fidelidad a una potencia en retroceso son más inhallables. Es sabido que los imperios en declive multiplican la exacción de recursos de las periferias sometidas.

El mito de la latinización

Otro argumento de la derecha neoliberal para renovar la subordinación a Estados Unidos es la acelerada latinización de la primera potencia. Subrayan las ventajas generadas por el aumento de la población de origen hispano. Ese grupo sería igual en el 2060 al segmento anglosajón, en un país que ya tiene una significativa masa de hablantes en español. Consideran que por esa vía emergerá una fusión demográfica, idiomática y cultural de ambos polos del continente, que apuntalará el demorado desarrollo del Sur (Barrenechea, 2022).

Ciertamente la presencia de los latinos en la vida estadounidense se ha multiplicado, al compás de un sector que se expande a mayor ritmo que el resto. Pero esa incidencia no genera por sí misma efectos positivos sobre América Latina. Quienes ponderan en forma ciega esa influencia, omiten las enormes tensiones que genera en el escenario político estadounidense.

La irrupción del *trumpismo* es la expresión más contundente de esa tirantez. La ultraderecha contemporánea se forjó con mensajes de hostilidad, desprecio y confrontación hacia la inmigración latina. Exige mayor punición en la frontera, despliegue de patrullas, confinamiento de los recién llegados y expulsión de los indocumentados. Ha reavivado el imaginario conservador, atribuyendo el declive del *sueño americano* a la afluencia de trabajadores foráneos. Azuza el resentimiento de los blancos empobrecidos, para propagar los proyectos de ampliación del muro fronterizo y medidas para separar a las familias que llegan desde el Sur.

Con esas campañas siembra una fractura entre los trabajadores, que favorece a los capitalistas y permite incrementar la explotación de ambos sectores. Los derechistas ocultan, además, que los jóvenes extranjeros compensan el envejecimiento de la fuerza laboral y contribuyen a solventar la seguridad social. En algunos casos realizan labores descartadas por los trabajadores nativos y en otros nutren de cerebros a los sectores más dinámicos.

El *trumpismo* alienta el resentimiento de los blancos empobrecidos contra los latinos, con un viejo libreto de odio de las clases medias hacia los desamparados. Ha retomado la antigua receta del racismo sureño contra los afroamericanos, para crear un antagonismo hacia los hispanos.

Esa tensión es ignorada o minusvalorada por los neoliberales de América Latina, que continúan presentando a Estados Unidos como una tierra prometida. Suponen que a la larga predominará una integración indolora de la masa hispana a ese país, olvidando que esa agraciada asimilación nunca fue el destino de los masacrados pueblos originarios o de los esclavizados afroamericanos.

Lo ocurrido con este último sector refuta la ingenua creencia en florecientes mixturas de todos los arribados al territorio estadounidense. La opresión de la enorme minoría de origen afro ha perdurado en la modalidad brutal del racismo, que retoma Trump y en la vertiente hipócrita del multiculturalismo, que encarna Biden.

En ambas versiones se reciclan formas complementarias de discriminación, para garantizar la exclusión de un segmento oprimido del manejo elitista del Estado. No hay ninguna razón para suponer que a la mayoría de los latinos les espera un porvenir diferente. La experiencia de lo ocurrido con los afroamericanos también demuestra, que cualquier avance efectivo de los derechos de la población hispana, sólo será conquistado a través de la lucha. Esa resistencia es categóricamente contrapuesta al imaginario neoliberal.

El crecimiento demográfico y la gran presencia idiomático-cultural de esa minoría son gravitantes, cuando apuntalan esa acción y crean puentes con América Latina para una batalla convergente

contra el imperialismo (Grosfogel, 2020). Los enlaces entre el Norte y el Sur -que el neoliberalismo evalúa en términos de subordinación panamericana- deben ser observados con esa óptica contrapuesta de lucha común contra el mismo opresor.

La ilusión neoliberal de una fusión amigable de la primera potencia con sus sometidos del continente, a través del enlace inmigratorio ha dado lugar a incontables panegíricos. La alabanza más corriente ensalza el nuevo universo de “transamérica” que emergería de ese entrelazamiento. Ese tipo de fantasías es propagado para ocultar la redoblada explotación laboral, que sufre el grueso de los trabajadores hispanos, contratados en los empleos mal remunerados del Norte. Con ese ensueño se enmascara también la política bipartidista de penalización de los inmigrantes, que implementan todos los administradores de la Casa Blanca.

Con Biden se contuvo la construcción del muro y se frenó la deportación de los *dreamers*, pero la militarización de la frontera persiste, con la misma intensidad que la persecución de los inmigrantes. El sucesor de Trump sólo ha optado por negociar con López Obrador la retención del éxodo centroamericano, en localidades más alejadas de la frontera. Pero la tragedia social que imponen las políticas imperiales recrea las caravanas de los desposeídos, que buscan alguna forma supervivencia cruzando el Río Grande.

Disyuntivas frente a dos poderosos

La idealización neoliberal de Estados Unidos continúa atada al enaltecimiento de los tratados de libre comercio, que la primera potencia ya no puede sostener. Sus fascinados seguidores de la región no han tomado nota de esa contradicción. Simplemente mantienen el viejo libreto de reivindicación de los convenios que promovía el *Consenso de Washington* y que ahora no encuentran sustitutos amoldados al declive del Norte.

El devenir que ha seguido la *Alianza del Pacífico* es muy representativo de ese incierto escenario. Esa asociación —gestada bajo directa instigación estadounidense por gobiernos neoliberales de México, Colombia, Perú y Chile— es elogiada por los economistas ortodoxos, como un ejemplo exitoso de su paradigma. Realzan los principios de apertura comercial que guían ese entramado y reivindican la variedad de acuerdos suscriptos con múltiples países (Pastrana y Castro, 2020).

Pero lo que se pondera como una acabada expresión del “regionalismo abierto y cruzado”, implica en los hechos una intensificación de la dependencia de las cuatro economías, con sus proveedores y clientes del exterior. La apertura comercial, la liberalización financiera y la flexibilización laboral que introdujeron esos acuerdos, multiplicaron la desigualdad, la explotación laboral y el extractivismo que impera en esos países.

Estas adversas consecuencias son omitidas por los cultores del tratado, que resaltan la gran afluencia de inversiones extranjeras que sucedió a la suscripción del convenio (Schamis, 2021). Eluden aclarar que esas colocaciones de capital se efectivaron en sectores que acentuaron la primarización o en eslabones básicos de la industria, divorciados de cualquier proyecto de desarrollo inclusivo.

La *Alianza del Pacífico* está sujeta al mismo patrón de dependencia que predomina en toda la región. Sus auspiciantes no logran indicar algún rasgo que diferencie a ese cuarteto del resto de América Latina. Los elogios que despliegan los neoliberales (desde su lanzamiento en el 2011) no se asientan en ninguna justificación.

La AP no incrementó el crecimiento, la productividad o la competitividad de sus integrantes. La ponderada estabilidad que mantuvieron durante una década quedó abruptamente socavada en los últimos años por las masivas revueltas populares, que estallaron en tres de los cuatro países del bloque.

Esos levantamientos transparentaron el terrible nivel de opresión, desigualdad y explotación que afianzó el convenio del Pacífico. Si ese tratado hubiera despejado el horizonte de desarrollo que

ensalzan sus auspiciantes, no habría irrumpido tanto malestar (en forma tan coincidente) entre los suscriptores de esa Alianza.

Ese entramado ni siquiera mejoró la capacidad negociadora de sus integrantes, puesto que nunca actuó como un mini bloque comercial en las tratativas con sus interlocutores. Un abismo separa en ese terreno a la Alianza de otros conglomerados regionales del mundo (González, 2020).

La AP tampoco se ha extendido a otros países. Esa carencia de nuevos integrantes confirma su ausencia de atractivo. Ecuador buscó una membresía asociada, compatible con los tratados bilaterales que ya tiene con Estados Unidos y con la dolarización integral de su economía. Pero ni siquiera ese amoldamiento alcanzó para incluirlo. Costa Rica y Panamá iniciaron un proceso de adhesión, que nunca desbordó los protocolos iniciales.

La *Alianza del Pacífico* ha operado como brazo económico de los proyectos políticos más derechistas de la región. Sintonizó con Bolsonaro, Macri, Lenin Moreno y Añez y tuvo el auspicio de Trump y su Grupo de Lima, para crear un efímero “Foro para el Progreso de Suramérica” (PROSUR).

Pero la impronta librecambista de la AP chocó con el proteccionismo del magnate estadounidense, que intentó transformar ese acuerdo en un bastión de la guerra arancelaria contra China. Aspiraba a introducir en el convenio, las mismas normas de veto a los acuerdos con el gigante asiático que impuso en el T-MEC con México. Ese objetivo quedó incumplido con su propia salida de la Casa Blanca.

Frente al vacío generado por el abandono que consumó Trump del proyecto librecambista del Pacífico propiciado por Obama (TPP), el cuarteto latinoamericano optó por sumarse a la iniciativa sustituta que mantuvo Japón (CPTPP), durante el mandato proteccionista del magnate estadounidense. También exploraron convenios con Australia Nueva Zelanda, Corea del Sur y avanzaron en negociaciones específicas con Singapur (PASFTA).

Pero la AP no ha definido una postura nítida frente al gran jugador chino, que propone acuerdos fulminantes para avanzar hacia una rápida desgravación arancelaria. Para consumir esa remodelación, ofrece el marco que está forjando en la región Indo-Pacífica.

Frente a ese desafío Biden propaga mensajes de globalismo liberal, sin definir una estrategia alternativa. Tan sólo refuerza las presiones para distanciar al cuarteto latinoamericano de cualquier acuerdo con China.

Los fascinados neoliberales de la AP no encuentran un libreto común para lidiar con esa disyuntiva. Propician negocios con la nueva potencia oriental, pero preservan una gran dependencia política, ideológica y cultural del mandante estadounidense. La misma presión a intensificar los negocios con China o aceptar las restricciones que exige Estados Unidos, sobrevuela al MECORSUR.

Los neoliberales han perdido la brújula frente al escenario actual. Por un lado, propician las iniciativas de los grupos capitalistas que motorizan las lucrativas tratativas con China y por otra parte, mantienen su alineamiento tradicional con Washington. Ninguna de las dos opciones, incluye algún desarrollo económico con avances sociales para la región.

Secuencia de adversidades

El libreto neoliberal es particularmente funesto en el escenario actual. La región se ha transformado en un gran botín de dos potencias, que apetece su inmenso caudal de recursos naturales. Con el 7% de la población mundial, América Latina dispone del 42-45% del agua dulce, la mitad de la biodiversidad e inconmensurables reservas de petróleo, gas y minerales. Alberga, además, el 80% del litio, el 93% del estroncio, el 61% de la fluorita, el 59% de la plata, el 56% del renio, el 54% del estaño y el 44% de la platina.

Esta variedad de materias primas ha recobrado gravitación por su enorme disponibilidad e incidencia en las cadenas globales de valor.

Esos circuitos demandan una provisión constante de insumos, que muy pocas zonas pueden facilitar con la cuantía que ofrece Latinoamérica. Por su proximidad geográfica, el control de ese manantial de insumos es la gran prioridad del imperialismo estadounidense.

La coyuntura bélica que ha sucedido a la pandemia ha potenciado la incidencia de esas fuentes de abastecimiento. La guerra de Ucrania ha encarecido abruptamente los alimentos y los combustibles, que la región puede proveer en grandes cantidades y a costos reducidos. Pero, esa revalorización de la zona recrea la vieja adversidad de una especialización en exportaciones básicas, que el neoliberalismo enaltece y convalida.

Este repliegue a los eslabones básicos de la actividad productiva acentúa el despilfarro de la enorme renta de la región, que no es utilizada para los procesos endógenos de acumulación y crecimiento sostenido. Esa masa de fondos se filtra al exterior en desmedro del desarrollo interno. Los modelos neoliberales que administran ese drenaje, impiden aprovechar los momentos favorables de altos precios de las materias primas y agravan los efectos de los períodos opuestos de depreciación de las exportaciones.

Este desmanejo explica las recurrentes asfixias financieras, que generan el estrangulamiento del sector externo, los desbalances comerciales y las fugas de capital. Y esas agudas tensiones frecuentemente se procesan a través de dramáticas situaciones de inflación, devaluación y retracción del poder adquisitivo.

Las adversidades del capitalismo dependiente de América Latina que gestiona el neoliberalismo salieron a la superficie con gran dramatismo en la reciente crisis de la pandemia. La región no sólo careció de recursos para lidiar por sus dismanteladas estructuras de salud pública. También debió afrontar un nuevo agravamiento de la pobreza (33% de la población) y la indigencia (13,1% de los habitantes). Ambos indicadores registraron el mayor incremento anual de las últimas dos décadas. Esa regresión extendió también el número de individuos subalimentados.

Como en todo el mundo, la desocupación se expandió en América Latina durante esa crisis, pero a diferencia de las economías avanzadas, la miseria golpeó especialmente al sector informal que aglutina a la mitad de los trabajadores urbanos.

La misma escala de padecimientos se observó con la desigualdad, que el neoliberalismo ha potenciado en la región más inequitativa del planeta. En una zona donde el 10% más rico acapara el 71% de la riqueza total (2014), el número de multimillonarios (patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares) saltó de 76 a 107 y sus fortunas se incrementaron de 284.000 a 480.000 millones de dólares (2020).

Además, el derrumbe de producto bruto durante la pandemia duplicó el declive registrado en resto del mundo. América Latina comenzó el actual decenio arrastrando otra “década perdida”. El PBI del 2020 fue prácticamente igual a su equivalente del 2011.

También el producto per cápita ha quedado relegado en comparación a la media mundial y, para colmo de males, la recuperación que sucedió a la pandemia ha sido inferior al resto del mundo. Los pronósticos de varios organismos internacionales auguran un crecimiento de América Latina inferior a los promedios internacionales. El neoliberalismo acentúa esas adversidades en todos los terrenos.

Recetario de frustraciones

Con las prescripciones neoliberales, América Latina tiende a repetir su larga historia de subdesarrollo y dependencia. Esa desventura ha sido durante dos siglos la contracara de la expansión estadounidense, que idealizan los cultores del Norte. Siempre subrayaron el contraste entre ambas trayectorias, sin notar que sus recetas consolidan esa brecha.

Los neoliberales no observan ninguna adversidad en la actual especialización de latinoamericana en el extractivismo minero. Al contrario, realzan ese rumbo olvidando que desde la conquista española

implicó el desangre de la población autóctona, la hemorragia de los recursos y el atraso de la economía.

Los conquistadores se apropiaron del sistema preexistente de explotación, mediante la cooptación de la aristocracia indígena, aprovecharon las luchas fratricidas y utilizaron la evangelización para agotar la fuerza de trabajo en los socavones. En los siglos XVI- XVII potenciaron el servilismo hasta niveles inéditos, para extraer minerales de los yacimientos gestionados por las civilizaciones precolumbinas. Enriquecieron a la corona y a sus servidores pulverizando esas sociedades (Guerra, 2006).

Esa misma depredación recobró fuerza posteriormente, para proveer los materiales básicos que exigía la industrialización de las economías avanzadas. Las grandes familias de la oligarquía local se asociaron con las empresas mineras euro-americanas, para devastar el subsuelo regional y multiplicar las ganancias de las principales firmas de Occidente (Vitale, 1992).

Ese estrago vuelve a reaparecer en el siglo XXI bajo el auspicio de empresas foráneas, que han convertido a Latinoamérica en la gran localización del extractivismo minero. El acaparamiento de esos recursos suscita un permanente conflicto entre compañías extranjeras de distinto origen.

Los neoliberales convalidan también la regresión que entraña el afianzamiento de la especialización agroexportadora de la región, ocultando que ese perfil determinó el subdesarrollo de toda la zona. Auspician, además, los modelos de concentración de la propiedad agraria que condujeron a un estancamiento económico. Omiten que el despegue del admirado rumbo estadounidense se asentó en un contrapuesto dinamismo de los pequeños propietarios (*farmers*).

En el grueso de Hispanoamérica se conformó desde el inicio de la conquista, una clase terrateniente señorial que acaparó propiedades con privilegios de casta. Por el contrario, en Nueva Inglaterra florecieron a partir del siglo XVII las colonias de campesinos libres, que cimentaron la pujanza capitalista.

Las elites neoliberales de América Latina siempre idealizaron la competencia y el mercado fuera de su radio de influencia, mientras usufructuaban del manejo de plantaciones, haciendas y latifundios. Por un lado, enaltecían el modelo de pureza capitalista estadounidense y, por otra parte, consolidaban la gestión improductiva de sus incommensurables extensiones de territorio. Esta misma duplicidad se verifica en la actualidad. Los herederos de los viejos terratenientes exaltan ahora el capitalismo globalizado y digital del socio norteamericano, mientras refuerzan la primarización de sus propias economías

Existen innumerables debates entre los historiadores sobre las condiciones económicas, los desenlaces sociales y los cursos políticos, que determinaron la trayectoria antagónica de Estados Unidos y América Latina. Algunos realzan el contexto geográfico dispar y la gran diferencia de desarrollo entre las poblaciones preexistentes, otros remarcan la enorme divergencia entre modelos de colonización capitalista y precapitalista. Mayores controversias suscita la evaluación de cuál fue el momento de consolidación de la brecha histórica entre ambas regiones.

Las tesis que fijan esa fractura desde la misma llegada de los conquistadores europeos, contrastan con los enfoques que atribuyen la gran divergencia, a la forma en que se resolvieron las grandes epopeyas en ambas zonas (Guerra de la Independencia y Guerra de Secesión). Pero, no cabe que duda que la maduración de dos configuraciones contrapuestas de capitalismo agrario y parasitismo oligárquico desembocaron en cursos antagónicos de industrialización autocéntrica y mero subdesarrollo (Cardoso, Pérez Brignoli, 1979, cap 4).

El camino norteamericano de desenvolvimiento agrario dio lugar a un intenso desarrollo fabril. En cambio, el curso bismarriano de acaparamiento territorial obstruyó en el sur, el despunte de los mercados internos requeridos para transitar ese sendero. Las haciendas, plantaciones y latifundios sólo reciclaron la dependencia y el retraso de América Latina. Con ese trasfondo de disparidad estructural, las

empresas del Norte capturaron posteriormente los mercados del Sur e impusieron la dominación imperial de todo el “Patio Trasero”.

Los liberales siempre atribuyeron esas bifurcaciones a la supremacía anglosajona, frente a la ineptitud latina. Nunca evaluaron las condiciones que indujeron a esa contraposición de comportamientos de las elites gobernantes.

Esa omisión impide registrar hasta qué punto el neoliberalismo contemporáneo reproduce el mismo patrón de frustraciones del pasado. El extractivismo minero, la primarización exportadora y la especialización en los eslabones básicos de la cadena industrial de valor, recrean las viejas patologías económicas. La distancia con Estados Unidos y la monumental brecha con China vuelve a reciclarse, porque el neoliberalismo contemporáneo ofrece el mismo recetario de fracasos que sus antecesores.

Contrastes históricos aleccionadores

El desarrollo de América Latina fue obstruido por la anulación liberal de la soberanía regional. Ningún Estado de la zona maneja con plenitud o efectividad ese atributo por el sometimiento que ha impuesto la custodia estadounidense. El modelo neoliberal de las últimas décadas recortó nuevamente todos los márgenes de esa independencia.

Todos los países de la región reúnen formalmente las características de los Estados nacionales, pero en los hechos operan como formaciones sometidas a los vetos que dispone el Departamento de Estado. Washington hace valer en forma explícita o disimulada su gran supervisión, mediante controles geopolíticos y condicionamientos económicos. En los momentos críticos, la injerencia de sus embajadores es directa e incide en las decisiones cotidianas de los gobiernos.

Esa carencia de soberanía efectiva, impide a los países latinoamericanos desenvolver las políticas económicas autónomas, que se

requieren para superar el subdesarrollo. Esa dependencia recicla, a su vez, la inserción periférica de la región en el capitalismo mundial.

Para los liberales contemporáneos la carencia de soberanía no constituye ninguna adversidad. Subrayan que esa ausencia es natural, en el contexto de la "interdependencia" imperante entre todos los países del planeta. Pero omiten registrar que esa amalgama no es equitativa. Opera con normas de jerarquía, dominación y subordinación.

Tampoco atribuyen ninguna gravitación a la carencia histórica de soberanía, que contrapuso el devenir de Estados Unidos con América Latina desde el siglo XIX. Explican esa brecha por alguna inferioridad cultural legada por la herencia aborigen, frente a la pujante modernidad anglosajona. Pero el curso real de la historia se entiende con miradas críticas de esos mitos.

La primera potencia desenvuelve un rol particularmente dominante en todo el continente, al lo largo de un proceso histórico que situó a Estados Unidos en un lugar contrapuesto a Hispanoamérica. Esa trayectoria le permitió conquistar y consolidar desde el siglo XIX, la soberanía efectiva que sus vecinos del Nuevo Mundo no lograron conservar.

Estados Unidos obtuvo ese manejo pleno del Estado en dos secuencias diferenciadas de la revolución burguesa, que pavimentaron el excepcional desarrollo económico del país. El primer hito de la Independencia (1776) permitió crear las instituciones que favorecieron ese desenvolvimiento. Los grupos agro-mercantiles dominantes del Norte lideraron un largo proceso de disputa con las potencias coloniales de la época (Gran Bretaña, Francia y España), que aspiraban a fraccionar ese territorio para preservar su poder en el continente.

El capitalismo se expandió en el Norte sin ningún resabio ni obstrucción de las formaciones históricas precedentes. Transformó el genocidio de los indios en un proceso de expansión agrícola de pequeñas producciones altamente competitivas.

El segundo momento del despegue estadounidense fue la Guerra de Secesión, que estalló cuando el capitalismo del Norte se tornó

inconciliable con el esclavismo del Sur. Los sucesivos compromisos entre ambos sistemas afrontaron un punto de quiebre, cuando la ampliación geográfica de las plantaciones chocó con el desarrollo del mercado interno. Con el triunfo del Norte se consumó la primacía definitiva de la industria, en sintonía con un nuevo ciclo de ensanchamiento de la frontera, mediante la entrega de tierras a los granjeros blancos (Bender, 2011, pp. 171-184).

Pero el capitalismo se consolidó derrotando a las corrientes democrático-radicales del Norte y reconstituyendo el poder de los plantadores en el Sur, que recuperaron sus posiciones y reemplazaron la esclavitud por nuevas formas de opresión de los afroamericanos. Con ese pacto entre las elites de ambas zonas, la renovada exportación de algodón aportó las divisas requeridas por la industria (Post, 2011, pp. 93-103).

De ese desenlace emergió el poderoso Estado-nación, que comandó la conquista del resto del territorio y la posterior dominación de todo el continente. Ese control comenzó con el desplazamiento del centro económico a Nueva York y con la constitución de una estructura monetaria y financiera centralizada, que sostuvo las subsiguientes fases de la industrialización. Esta sucesión de acontecimientos y desenlaces permitió a Estados Unidos transformarse en la potencia imperial dominante del siglo XX.

América Latina siguió una trayectoria totalmente opuesta, pero no desde el debut de su Independencia. Esa emancipación fue un proceso semejante al curso seguido por Estados Unidos. Las élites criollas actuaron con la misma motivación de sus pares angloamericanos, bajo las mismas influencias de la Ilustración y con los mismos propósitos de aligerar la carga impositiva. Desarrollaron tanteos parecidos de mera autonomía inicial y posterior búsqueda de alianzas con las potencias rivales de su dominador (Knight, 1998)

También fue semejante la ruptura final de las elites con los funcionarios del Rey y el consiguiente inicio de una revolución burguesa, signada por el cambio del grupo dominante en el manejo del Estado. Los criollos asumieron ese control, pero al cabo de una guerra

de Independencia mucho más radicalizada que la prevaleciente en Norteamérica. Las contiendas bélicas fueron más intensas y devastadoras, con mayor movilización popular y participación de negros e indios, que frecuentemente impusieron el inmediato fin de la esclavitud.

Ese carácter jacobino de las revoluciones hispanoamericanas se zanjó –al igual que en anglo américa– con un resultado regresivo para los sectores populares. En los dos casos se verificaron los efectos de la contrarrevolución social, que sucedió a la victoriosa revolución política.

En estas secuencias despuntaron asimetrías entre los dos polos del Nuevo Mundo, pero el resultado final fue semejante. En ambos lugares se logró la Independencia y la posterior consolidación de clases dominantes locales. La gran diferencia radicó en la naturaleza social contrapuesta de esos sectores.

En América Latina no se consumó ninguna Guerra de Secesión, como la verificada entre el Norte y el Sur estadounidense. En lugar del capitalismo industrializado que sucedió a esa conflagración se consolidó de entrada una formación económico-social de subdesarrollo agrario. El predominio de los latifundios, las haciendas y las plantaciones fue el dato dominante de ese período.

En América Latina la revolución burguesa quedó a mitad de camino, al cumplir tan sólo la meta política de la independencia. No abrió rumbos para el desenvolvimiento capitalista acelerado que prevaleció en Estados Unidos. En la región se conformó una multitud de Estados oligárquicos, que obstruyeron la gestación del ruralismo competitivo y bloquearon el despegue de una industrialización intensiva (Kossok, 1990, pp. 3-7).

Esa estructura social contrapuesta de ambas regiones se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la ausencia de una agricultura capitalista en Latinoamérica sofocó definitivamente el despegue industrial. Esa obstrucción afianzó la especialización regional en insumos agro-mineros básicos de exportación. Los terratenientes que lucraban con ese tipo de explotación afianzaron la inserción

internacional subordinada de la región. Consolidaron Estados oligárquicos que sellaron el status dependiente de América Latina.

El capitalismo que emergió de esa configuración quedó aprisionado en el subdesarrollo por el acaparamiento inicial de la propiedad territorial. Nunca emergió el protagonismo de los granjeros que en Estados Unidos se entrelazaron con la industria. En América Latina ambos procesos quedaron obstruidos por las oligarquías liberales, que abrieron las aduanas a la importación manufacturera, como contrapartida de sus ventas de materias primas a las metrópolis.

El crecimiento intensivo y autocentrado que caracterizó a la economía estadounidense contrastó con el estancamiento, que predominó en las haciendas en México, Colombia o Guatemala, en las plantaciones de Brasil y en los latifundios del Río de la Plata.

Ese curso no sólo obstruyó un desarrollo capitalista desde abajo, sino que impidió también un desenvolvimiento alternativo desde arriba. Por eso quedaron bloqueados los modelos bismarkianos, que en otros lugares (Alemania, Japón) despuntaron por medio de la capitalización de la vieja nobleza.

En América Latina prevaleció una variedad dependiente de ese prusianismo, que combinó el predominio de los grandes propietarios de la tierra, con su asociación subordinada al capital extranjero. La oligarquía no transformó su enriquecimiento en procesos internos de acumulación. Recicló transferencias de valor al exterior, que perpetuaron el atraso económico-social de toda la región (Cueva, 1986, pp. 79-101).

La balcanización reciclada

La mirada liberal enaltece a Estados Unidos y denigra a Latinoamérica, contraponiendo la cohesión que caracteriza a la primera potencia con las fracturas, inconsistencias y fragilidades que prevalece al sur del Río Grande. Pero no aporta ninguna interpretación sobre ese contrapunto. Solo da rienda suelta a su repetido contraste entre la

inferioridad congénita de la región y la asombrosa magnificencia anglosajona.

En ningún momento analiza cómo esa asimetría estuvo determinada por la envergadura de los estados nacionales de ambas regiones. En el Norte primó una estructura continental unificada y en América Latina un disperso cúmulo de fracturas balcanizadas.

Esa diferencia resultó decisiva durante la gestación del capitalismo, que despuntó en torno a mercados internos cohesionados por las reglas de cada Estado nacional. En el intrincado proceso de absorción de etnias y lenguas –que entre 1830 y 1880 devino en Occidente en la conformación de esos Estados– hubo una selección final, que reordenó las incontables posibilidades previas. En ese filtro el tamaño se transformó en un ingrediente decisivo de la gravitación alcanzada por los emergentes estados nacionales.

Esa envergadura territorial facilitó la ubicación de ciertos países en la cúspide de la jerarquía mundial, frente a los competidores de menor dimensión geográfica. Cuando el poderío económico y militar coincidió con el primer atributo, esa primacía quedó asegurada. Estados Unidos contó con un soporte territorial que América Latina nunca logró plasmar.

Luego de la Guerra de Secesión se forjó en un polo del continente, el estado-nación centralizado que reemplazó al modelo confederado. En Washington se consolidó un poder efectivo que dejó atrás el esquema asociativo, mediante partidos que ocuparon el lugar de las alianzas interregionales. De la conscripción masiva emergió a su vez una ciudadanía uniforme, con identidades nacionales definidas por la pertenencia a un país unificado.

El viejo equilibrio federal quedó disuelto y la política exterior se transformó en una nítida atribución del Poder Ejecutivo. A medida que el telégrafo y el correo enlazaron a un territorio ampliado por sucesivas oleadas de inmigrantes, el imaginario continental empalmó con un estado moderno, regido por el sistema presidencial.

América Latina quedó signada por una trayectoria radicalmente opuesta. Contaba con ventajas iniciales, en la gestación pionera de

la nacionalidad por élites ilustradas que compartían una lengua común. Esa cohesión idiomática introdujo un elemento de enorme homogeneidad en un inmenso territorio (Anderson, 1993: cap 7). Pero la Independencia fue sucedida por una fragmentación de Repúblicas, cuyo trazado quedó condicionado por el molde previo de las unidades administrativas del imperio español.

Esos segmentos funcionaban de manera vertical bajo el mando de la Corona, que bloqueaba las relaciones horizontales y la integración zonal, mediante prohibiciones al comercio intercolonial. Esa obstrucción de los virreyes al ascenso de los criollos fomentó un desarrollo protonacional separado, que no fue revertido por la Independencia.

En el largo período de las guerras civiles se definieron las fronteras y los estados que alumbrarían a las distintas naciones de América Latina. En esa etapa se delimitó el contorno de esa formación, sin dilucidar la eventual convergencia en una estructura continental unificada. Los fuertes choques entre unitarios, federales y confederales, entre defensores del proteccionismo y el libre comercio zanjaron el triunfo de los distintos grupos dominantes, que finalmente moldearon la conformación de cada estado al servicio de sus intereses.

Esa definición siguió en todos los casos el mismo patrón de balcanización, que alimentó la gran variedad de organismos nacionales finalmente gestados. Esa diversidad de estados oligárquicos consumó, a su vez, una alianza con la potencia imperial dominante (Inglaterra), que convalidó la fractura de América Latina en una veintena de estados de insignificante peso internacional. Las destructivas guerras posteriores (Paraguay, Pacífico, Chaco) consolidaron esa fragmentación en islotes mono productores de insumos, apropiados por los terratenientes y sus socios extranjeros.

Ese desemboque de la historia latinoamericana en pequeñas, dispersas e impotentes unidades afianzó definitivamente la brecha con el poderoso estado continental, que se forjó en el Norte. Ambos procesos fueron resultantes de grandes desenlaces político-militares. Estados Unidos emergió como una potencia ascendente de la Guerra

de Secesión y América Latina se deslizó hacia la marginalidad periférica, luego de la derrota del proyecto de unificación continental de Bolívar.

Esa iniciativa tenía un basamento convergente con San Martín y se configuró en el curso de la propia batalla por la Independencia. Esa lucha exigió extender geográficamente la guerra e incorporar masivamente a los plebeyos para vencer al enemigo realista. En dicha confrontación irrumpieron las fuertes tendencias al separatismo regional, que asumieron distintas modalidades del liberalismo federalista (Kohan, 2013, pp. 69-113).

Bolívar propició un esquema centralista, para combinar en una sola articulación la confederación de estados nacionales emergentes. Pero no pudo neutralizar la reacción de las oligarquías locales, reacias a compartir los lucros de cada localidad. Esos grupos dominantes quedaron además espantados por la movilización militar de los esclavos y los indios (Soler, 1980).

La derrota del proyecto de unidad continental acentuó la balcanización de América Latina y facilitó nuevas guerras, que potenciaron las sub fracturas ulteriores de las Provincias del Sur, la Gran Colombia, la Confederación Peruano-boliviana y las cinco Repúblicas Centroamericanas (Guerra, 2006, pp. 82-95). Esta fragmentación contrastó con la sólida unificación continental de Estados Unidos, que comenzó a concretar su dominación del “Patio Trasero”, a partir de esa descomunal diferencia de poderío.

Ciertamente, la mera unidad latinoamericana no garantizaba, de por sí, un curso de sostenido desarrollo, equiparable al logrado por la potencia del Norte. Basta notar que Brasil mantuvo y acrecentó su dimensión continental y al mismo tiempo compartió el destino de atraso que imperó en Hispanoamérica. Un territorio inmenso, gestionado con la estructura importada por un emperador lusitano que consolidó la esclavitud, cargaba con las mismas adversidades que sus vecinos.

Pero el ideario bolivariano no se limitaba al enlace unitario y sentaba los cimientos para una trayectoria alternativa a la dependencia.

La balcanización ha legado, en cambio, la tradición de impotencia política y servilismo al imperio que corporiza el neoliberalismo. Los sucesores de esa corriente recrean la larga historia de subdesarrollo y privaciones populares que ha caracterizado a la región. En nuestro próximo artículo analizaremos la alternativa socialista a esa desventura

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Benedict (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Barrenechea, José Gabriel (24 de mayo de 2022). Del antiamericanismo al panamericanismo. *Cuba encuentro*. <https://www.cubaencuentro.com/internacional/articulos/del-antiamericanismo-al-panamericanismo-341128>
- Bender, Thomas (2011). *Historia de los Estados Unidos, una nación entre naciones*. Siglo XXI.
- Cardoso Ciro F. S, Pérez Brignoli Héctor (1979). *Historia económica de América Latina*. Barcelona: Crítica.
- Cueva, Agustín (1986). *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Grosfogel, Ramón (18 de septiembre de 2020). Ocho tesis acerca del imperialismo estadounidense y las luchas antiimperialistas en el siglo XXI. *Rebelión*. <https://rebelion.org/ocho-tesis-acerca-del-imperialismo-estadounidense-y-las-luchas-antiimperialistas-en-el-siglo-xxi/>
- González, Susana (2020). Ponen bajo la lupa resultados de la Alianza del Pacífico. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/02/20/ponen-bajo-la-lupa-resultados-de-la-alianza-del-pacifico-2118.html>
- Guerra Vilaboy, Sergio (2006). *Breve Historia de América Latina*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Knight, Alan (1998). Latinoamérica: un balance historiográfico. *Historia y gráfica*, 10.
- Kossok, Manfred (1990). *Historia del ciclo de las revoluciones de España y América Latina (1790-1917)*. La Habana: Universidad de La Habana.
- Kohan, Néstor (2013). *Simón Bolívar y nuestra independencia*. La Rosa Blindada: La Rosa Blindada.

- Oppenheimer, Andrés (24 de junio de 2022). Las 3 grandes oportunidades de América Latina. *El nuevo Herald*. <https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article262863903.html>
- Pastrana, Eduardo y Castro, Rafael (18 de febrero de 2020). Auge y estancamiento de la Alianza del Pacífico. *Fundación Carolina*. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/02/AC-7.2020.pdf>
- Post, Charles (2011). *The American Road to Capitalism*. Boston: Brill.
- Rinke, Stefan (2015). *América Latina y Estados Unidos. Una historia entre espacios desde la época colonial hasta hoy*. Madrid: El Colegio de México y Marcial Pons.
- Schamis, Héctor (1 de mayo de 2021). Diez años de la Alianza del Pacífico. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/opinion/2021/05/01/diez-anos-de-la-alianza-del-pacifico/>
- Soler, Ricaurte (1980). *Idea y cuestión nacional latinoamericanas. De la independencia a la emergencia del imperialismo*. México: Siglo XXI.
- Vitale, Luis (1992) Modos de producción y formaciones sociales en América Latina. *Mazinger*. www.mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio.

SEGUNDA PARTE:

EL CASO CHILENO A 50 AÑOS DEL
GOLPE DE ESTADO AL GOBIERNO DE
SALVADOR ALLENDE

Salvador Allende. El tránsito pacífico del capitalismo al socialismo en Chile (1970-1973)¹

*Orlando Caputo y Graciela Galarce*²

Presentación

El Gobierno de Salvador Allende, 1970-1973, por primera vez en el mundo se puso en práctica el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo respetando la institucionalidad democrática, pluralista y libertaria, que caracterizaba a Chile. Allende triunfó en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, como candidato de

¹ Este documento que se publicará en este libro es un resumen de nuestro documento “La Unidad Popular: La Economía en el Gobierno de Allende 1970-1973” que se publicó como capítulo del libro colectivo en inglés y castellano, “An Economic History of Chile”, editado por Manuel Llorca-Jaña y Rory Miller.

² Economistas, Universidad de Chile, Investigadores del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía Mundial y Crisis”. Orlando Caputo fue el representante de Allende en el Comité Ejecutivo de la Corporación del Cobre, CODELCO y Gerente General de CODELCO, institución que se hizo cargo de las empresas de la Gran Minería de cobre nacionalizadas. Al momento del golpe militar de 1973, era Gerente General de Andina, una de las empresas nacionalizadas. Por su parte, Graciela Galarce se desempeñaba como economista en el Banco Central de Chile al momento del golpe.

la Unidad Popular (UP), con una mayoría relativa de solo 36,6%. La UP estaba constituida por los Partidos Socialista, Comunista, principales partidos de la izquierda chilena, que por décadas tuvieron una fuerte presencia en la clase trabajadora. En la UP también participaban el Partido Radical, y otros partidos menores.

La 'Vía Pacífica al Socialismo' planteaba profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que concitaron gran expectación mundial. El Programa de la UP recogió y profundizó las propuestas de las tres anteriores campañas presidenciales de Allende: Nacionalización del Cobre, principal riqueza de Chile, que era propiedad de grandes empresas mineras mundiales estadounidenses (Anaconda y Kennecott); Reforma Agraria, que terminaría con el latifundio en Chile, creado desde la Colonia, que había perdurado tres siglos; Área de Propiedad Social, APS, conformada por las principales empresas monopólicas del sector industrial, de la distribución y de la Banca. Serían empresas de 'Propiedad Social', no estatal, con participación de los trabajadores. El Programa de la UP, tenía como objetivo fundamental la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y sectores populares.

Las transformaciones antimperialistas, anticapitalistas y anti-oligarquía por la vía pacífica se pusieron en práctica en forma simultánea al inicio del Gobierno de Allende. Estas se concretaron en gran medida en 1971, con amplio apoyo político y popular, a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos, de la derecha chilena y sus medios de comunicación. Dichos actores desarrollaron permanentes intentos de sedición. Días antes de que Allende fuese proclamado Presidente de la República por el Congreso Nacional, asesinaron al Comandante en Jefe del Ejército chileno, el General René Schneider, hecho que conmovió a Chile y al mundo.

Desde noviembre de 1970 a septiembre de 1973, se produjeron profundas modificaciones de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas. En 1971 las nuevas correlaciones de fuerza social y política posibilitaron importantes avances para el cumplimiento del Programa, en crecimiento económico, empleo y redistribución del ingreso.

A mediados de 1972 se fue consolidando una confrontación de fuerzas políticas equivalentes, que culminaron con el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, instaurándose en Chile una de las Dictaduras más represivas en la historia contemporánea.

Concentrar el análisis de la economía solo en el comportamiento de las categorías macroeconómicas es completamente insuficiente para comprender en toda su magnitud el proceso de transformaciones estructurales de la UP (Bitar, 1979, pp. 14-17; Ramos, 1972, pp. 15-79). La macroeconomía supone definida la propiedad del capital y de recursos naturales. La experiencia de la UP se basó en un cambio profundo de la propiedad del capital y de los recursos naturales. Su estudio, por tanto, debe considerar un análisis conjunto de dichas transformaciones económicas, y las modificaciones de las correlaciones de fuerzas políticas en las dos etapas señaladas hasta el 'Desenlace': Golpe de Estado y muerte de Allende en 'La Moneda'.

La 'Vía Pacífica al Socialismo'. Principales Antecedentes.

Allende fue categórico al señalar la originalidad de la 'Vía Pacífica al Socialismo' en sus discursos en Chile, en otros países y ante las Naciones Unidas. En su primer Mensaje Presidencial al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971, Allende profundizó y marcó diferencias de su Programa de Gobierno con las vías del llamado 'socialismo real' y con la experiencia cubana.

Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían las naciones más desarrolladas, probablemente Italia o Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista [...] Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben,

o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa [...] Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario [...] Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido [...] En la Rusia del año 17 [...] se edificó una de las formas de la construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado. En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones [...] No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista [...] Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana (Allende, 1971a, pp. 197-213).

Del Programa de la UP Destacamos la Caracterización de Chile Como Economía y Sociedad Dependiente:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada. Los problemas en

Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas [...] ¿Qué es entonces lo que ha fallado? Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, Más aún, se acentúa cada vez más en su dependencia [...] De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, 1970, pp. 3-6).

Los principales cambios estructurales del Programa del Gobierno de Allende pretenden cambiar la estructura económica. El Programa era antiimperialista porque rescata el cobre, la principal riqueza básica de Chile, que estaba en manos de las grandes mineras mundiales estadounidenses, que tenían gran poder en el estratégico mercado mundial del cobre. El Programa era antioligárquico, porque la Reforma Agraria perseguía terminar con el latifundio y, rescatar las tierras usurpadas al pueblo mapuche. El Programa era anticapitalista porque expropiaba un reducido número de grandes empresas monopolísticas que controlan todos los sectores de la economía nacional, para constituir el Área de Propiedad Social (APS), que sería la dominante con aproximadamente 200 grandes empresas monopolísticas más las empresas del Estado. También se contemplaba un Área de Propiedad Privada mayor número de empresas, en 1967, eran 30.500. Finalmente, el Área de Propiedad Mixta constituida por empresas privadas nacionales o extranjeros con participación estatal.

Paralela a las reformas estructurales se propusieron medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo. Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado. Diversificar las exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados.

[...] Las aspiraciones económicas y sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer: viviendas dignas; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; reajustes automáticos, trabajo estable; atención médica y dental preventiva y oportuna; extender previsión social y pensiones dignas; jardines infantiles; servicios básicos domiciliarios y comunales. [...] Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos ... una adecuada legislación de divorcio con disolución de vínculo, con pleno resguardo de la mujer y los hijos (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular 1970, pp. 24 -25).

De las 40 medidas del Programa de la UP, destacamos: limitación de los altos sueldos de los funcionarios de confianza; jubilaciones justas, no millonarias; previsión para todos; educación gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares para la enseñanza básica; medio litro de leche diaria a todos los niños de Chile (Lawner, 2008, pp. 397-401).

La ‘Vía Chilena al Socialismo’: Impacto Mundial

La experiencia chilena de la UP coincide con el retroceso general de Estados Unidos en la Guerra Fría, su derrota en Vietnam, la crisis financiera de Estados Unidos y el fin del Patrón Oro, y el auge del movimiento popular mundial. Como parte de este proceso surgió la teoría de la dependencia económica, social, política y cultural, que plantea la imposibilidad de desarrollar un capitalismo nacional e independiente en el Tercer Mundo. La política de Allende era original. Planteaba un camino socialista alternativo como forma de superación del capitalismo dependiente. Era tan inédita la propuesta de Allende que a la fecha no existía ninguna experiencia política en el mundo que se atreviera a proponer una transición al socialismo por la vía pacífica, a través de un proceso electoral (Dos Santos, 2009, pp. 11-12).

En sus Memorias, Kissinger, secretario de Estado de los EE. UU. al asumir Allende, afirmó que la ‘Vía Pacífica al Socialismo’ de Allende era una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo.

Nixon y sus principales consejeros estaban convencidos de que Allende representaba un desafío para los Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental. La promesa de Allende de nacionalizar las empresas de propiedad norteamericana no era nuestra principal preocupación [...] Dos gobiernos anteriores a Nixon habían coincidido en que una victoria por parte de Allende ponía en peligro nuestros intereses en el hemisferio occidental. Ellos otorgaron importantes sumas de dinero al Partido Demócrata Cristiano para bloquear a Allende en las elecciones presidenciales de 1964 y a su coalición en las elecciones en el Congreso de 1968. [...]. Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre –de 1970– por Agustín Edwards, el editor de El Mercurio, el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende [...] El éxito de Allende habría tenido importancia también para el futuro de los partidos comunistas de Europa Occidental cuyas políticas inevitablemente socavarían la Alianza Occidental (Millas, 1996, pp. 90-91).

Salvador Allende, del Triunfo Electoral a su Proclamación Como Presidente

Desde los 50's la efervescencia económica, social y política crece. En 1952 Allende como candidato a presidente obtuvo el 5%. Días después, en el Senado señaló: “Nunca pensamos triunfar. Pero esos 52.000 sufragios constituyen la expresión de otras tantas conciencias limpias, que sabían que votaban por un programa, por una idea, por algo que

estaba apuntando hacia el futuro” (Corvalán, 2008, p. 41). En 1958, Allende con la consigna “Ahora le toca al Pueblo”, fue segundo entre cinco candidatos (28,9%). Alessandri, de derecha ganó con 31,6%, Un diputado de izquierda le restó fuerzas a Allende con 3,34%.

Marzo de 1964. Fallece un Diputado socialista y médico. En la elección extraordinaria su hijo, médico y socialista, con un triunfo aplastante provocó un terremoto político, que repercutió en la elección presidencial de septiembre. La derecha volcó su votación hacia Frei Montalva, DC, que obtuvo mayoría absoluta de 56%, el doble de 27,4% de la DC en marzo. El Programa de Frei se conoció como “La Revolución en Libertad”. Allende obtuvo un 38,9%, similar al 39,7% de marzo. El candidato de derecha obtuvo un 5% contrastando con el 33% que la derecha había obtenido en marzo.

La cuarta fue la vencida. En septiembre de 1970 triunfó Allende con 36.6%. Segundo, el derechista Jorge Alessandri, 35,3%; tercero Radomiro Tomic, DC, 28,1%. Dicho triunfo estuvo precedido por una efervescencia económica, social, política y cultural (Varas, 2008, pp. 353-366) que intensificó las campañas de todos los candidatos. En la campaña de Allende se crearon múltiples Comités Allendistas en las ciudades y barrios de Chile.

Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, fueron un símbolo político, que presagió el triunfo de Allende. En 1970, por primera vez, la UP Universitaria triunfa en la FECH derrotando a la DC, que la había presidido desde 1957. En la noche del 4 de septiembre, en su primer discurso, desde los balcones de la FECH, Allende proclamó: ¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al Pueblo de Chile y al Pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes! [...] La Juventud de la Patria fue vanguardia en esta gran batalla [...] Le debo este triunfo al Pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre (Allende, 1970, p. 64).

A pesar de obtener la primera mayoría, no era seguro que se siguiera la tradición que el Congreso ratificara como Presidente a Allende. Estados Unidos y la oposición chilena llevaron a cabo tres

operaciones destinadas a impedir la proclamación de Allende como Presidente. Primero, que Alessandri hiciera un llamado al Congreso pidiendo ser electo y luego renunciaría. En la nueva elección, apoyarían a Frei como candidato. Segundo, Andrés Zaldívar, Ministro de Hacienda de Frei, en exaltado discurso profundizó los problemas económicos de la 'Campaña del Terror' de la derecha apoyada por la CIA. Tercero, a solo 48 horas del pronunciamiento del Congreso Nacional, fue asesinado el Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider considerado por la derecha y el gobierno de Nixon como un constitucionalista opositor a un posible Golpe de Estado. (Bitar, 1979, pp.69-70).

Previo a la campaña presidencial se inicia una fuerte caída del precio del cobre. Los precios frente a la Nacionalización deberían subir. Sin embargo, los precios bajaron. Hasta fines de los 60's, la industria del cobre estaba concentrada en reducido núcleo de empresas privadas, mayoritariamente estadounidenses, con elevado poder monopólico controlando la oferta y la demanda a través de su participación en la manufactura de cobre. Regulaban el precio también a través de los inventarios. (Moussa, 1999, pp. 14 y 15).

La fuerte disminución del precio del cobre, fue una de las acciones más importante del plan sedicioso de Estados Unidos y de sus empresas mineras, afectando el corazón de la economía chilena desde antes de las elecciones y durante el gobierno de Allende.

El cobre representaba el 70% de las exportaciones chilenas. El precio del cobre, en diciembre de 1969 era de 77,1 centavos de dólar la libra, en septiembre de 1970 bajó a 56,6 y en noviembre de 1970 bajó a 49,2 (i.e. una disminución de 38% desde diciembre de 1969 a noviembre de 1970). Esta profunda disminución se produjo cuando el precio del aluminio – el principal sustituto del cobre-subió y también el del níquel, plomo, estaño, y el zinc– (Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, 1988, pp. 88-90).

Luego de las elecciones presidenciales, se unieron las fueras allendista y las que apoyaron a Tomic por la similitud de sus programas que representaban las aspiraciones de la mayoría de la sociedad

chilena. Las fuertes movilizaciones de las organizaciones sociales permitieron enfrentar los diferentes planes sediciosos. Al interior de las Fuerzas Armadas, el frustrado rapto del General Schneider, que terminó en su asesinato, fortaleció a los sectores constitucionalistas. El reconocimiento mayoritario de la sociedad de que debería respetarse la tradición histórica de elegir al candidato con la primera mayoría, y el acuerdo entre la UP y la DC sobre ‘Garantías Democráticas’ permitieron superar el tenso período, con la definitiva proclamación del Congreso Nacional a Salvador Allende como presidente de la República el 4 de septiembre de 1970.

Las Reformas Estructurales del Gobierno de la UP

Desde los primeros días de su gobierno Allende empezó a implementar su programa facilitado por la fuerte participación del Estado en la economía —importantes empresas estatales, significativa inversión pública, Banco del Estado, elevadas regulaciones económicas— y, el carácter presidencialista y con facultad de designar los cargos ejecutivos superiores de las instituciones y de las empresas del Estado

La Nacionalización de la Gran Minería del Cobre (GMC)

Salvador Allende denominó al cobre “El Sueldo de Chile”. Chile tenía y tiene las mayores reservas mundiales de cobre (30%). En 1970 produjo 692 mil toneladas métricas de cobre fino. El 80% de esta producción correspondía a las grandes empresas mineras estadounidenses: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, denominadas ‘Gran Minería del Cobre’ (GMC). Anaconda explotaba Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande del mundo, y la mina El Salvador. Kennecott explotaba El Teniente, empresa minera subterránea más grande del mundo.

En 1970, los Estados Unidos con 1,56 millones de toneladas métricas de cobre fino era el principal productor mundial de cobre. Chile era el segundo con 692 mil, y Zambia, el tercero con 684 mil toneladas de cobre fino. Chile y Zambia eran los principales exportadores mundiales (COCHILCO, 1988, p. 47) En 1970 el 20% de los ingresos fiscales provenían de la GMC. Esto pone de relieve que durante muchos años la suerte de un Estado soberano e independiente estuvo entregada a las decisiones de estos poderosos consorcios industriales extranjeros (Novoa, 1972, p.14).

El presidente Frei (1964-1970) impulsó dos iniciativas: la ‘chilenización del cobre’ y la ‘nacionalización pactada’. La primera, que debía durar 20 años fracasó y a los cuatro años debió ser sustituida por la ‘nacionalización pactada’, la que sufrió igual suerte (Soto, 2008, p. 403). El fracaso se reconoció por el increíble incremento de las utilidades de Anaconda y Kennecott, resultado de las iniciativas señaladas.

CUADRO 1: UTILIDADES Y PRODUCCIÓN DE LA ANACONDA Y KENNECOTT, 1965-1970						
	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Producción (Miles de TM de cobre fino)	478,6	524,9	536,4	519,3	540,2	540,7
Utilidades (Millones de dólares)	43,9	81,9	174,5	177,1	220,0	265,9
Fuente: Construido a partir de Novoa (1972, pp. 101 y 103).						

Teniendo presente que en 1964 la producción fue de 527,6 mil toneladas, entonces en el período 1965-1970, la producción varió muy poco (523 mil toneladas en promedio). Las utilidades promedio anual del periodo 1960-1964 fueron de 42,8 millones de dólares, en 1965 fueron 43,9 millones de dólares y siguieron aumentando hasta 265,9 millones en 1970 (i.e. 500%). Fueron tan desmedidas las utilidades que el Profesor de la Universidad de Harvard T.H. Moran aludió a ellas diciendo que “han sido tan estupendas, que son prácticamente una vergüenza”. Las cifras oficiales indican que entre 1965 y 1970, las compañías norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas por 605

millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile (Novoa, 1972, p. 59).

Tomic, señaló: “La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de Anaconda y de Kennecott en Chile” (Novoa, 1972, p. 59). Tomic denunció que las compañías norteamericanas, ante la inminente nacionalización se dedicaron a explotar los sectores de mayor ley y dejaron de remover 20 millones de toneladas de material estéril (floreo de minas), para obtener el máximo de utilidades en el menor tiempo posible. Redujeron la mantención, las inversiones e incrementaron la deuda con instituciones estadounidenses. (Soto, 2008, pp. 403-404).

En noviembre primeros días de su gobierno, Allende designó a sus representantes en los directorios de las sociedades para asumir la dirección, evitar sabotajes, dar estabilidad a los técnicos extranjeros, promover a los técnicos nacionales, la participación de los trabajadores, corregir los daños ocasionados y asegurar los niveles de producción (Soto, 2008, p. 404).

En diciembre de 1971 Allende envió el Proyecto de Nacionalización al Congreso (Allende, 1971b, pp. 402-424), afirmando: “La Independencia de España en 1810, marcó la Independencia Política, en tanto la ‘Nacionalización del Cobre’ significaba la Independencia Económica de Chile. Por tal razón, la ‘Nacionalización del Cobre’ debería quedar plasmada en la Constitución Chilena”.

Allende rescató la Resolución de Naciones Unidas sobre ‘Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales’ (1.803, XVII, 14 de diciembre de 1962), que declara: “El derecho de los pueblos y de las naciones, a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado” (Allende, 1971b, pp. 398-401)

En su mensaje, Allende hizo un contrapunto entre los intereses de las empresas estadounidenses y los intereses de Chile: a Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas

elaboradoras. A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país. A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial y altos salarios, quede en la metrópoli. A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible (Allende, 1971b, p. 407).

El apoyo mayoritario del pueblo permitió que la Nacionalización del Cobre fuera aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en Pleno el 11 de julio de 1971, día que Allende denominó 'Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional'. Dignidad, porque Chile rescataba la principal riqueza básica del país, Solidaridad, porque sus recursos permitirían mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno en ese momento, y para las futuras generaciones. La Constitución afirma que el Estado tiene: el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Declaró automáticamente nulos todos los contratos establecidos en la Gran Minería y los mecanismos para las indemnizaciones de acuerdo con el valor

CUADRO 2. NACIONALIZACIÓN DEL COBRE: CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN (MILLONES DE DÓLARES)					
	CHUQUICAMATA	EL SALVADOR	EXÓTICA	EL TENIENTE	ANDINA
Valor Libro	241,96	68,37	14,81	318,80	20,14
Deducciones por derechos mineros	-5,40	-0,35	-0,25	-0,22	-1,53
Bienes en mal estado	-13,06	-5,60	-4,55	-20,52	-0,34
Revalorización de activos	0,00	0,00	0,00	-198,58	0,00
Indemnización	235,50	62,42	10,01	99,48	18,27
Deducciones por utilidades excesivas	300,00	64,00	0,00	410,00	
Fuente: Reproducción del cuadro iv-6, Bitar (1979, p. 117)					

libro de sus activos, a los que debería restársele, la rentabilidad excesiva a partir de 1955, que excedieran el 12% sobre el valor libro.

Las deducciones fueron muy elevadas (Cuadro 2). Kennecott y Anaconda no recibirían retribuciones del Estado chileno, Exótica y Andina, que iniciaron sus operaciones en 1971, se estimaron indemnizaciones. Las compañías y el Estado chileno apelaron al Tribunal Especial del Cobre, que estaba contemplado en el Proyecto de Nacionalización. Este Tribunal falló a favor del Estado chileno (Soto, 2008, p. 406)

El gobierno debió enfrentar también múltiples presiones de Estados Unidos, de Anaconda y de Kennecott Además de bajar el precio del cobre, prohibieron la exportación de repuestos e insumos norteamericanos para la minería chilena; así como los préstamos internacionales a Chile. Recurrieron a los tribunales europeos para embargar el cobre producido por las empresas nacionalizadas, sin mayor éxito judicial (Soto, 2008, p. 407).

CUADRO 3: PRODUCCIÓN DE CHUQUICAMATA, EL SALVADOR Y EL TENIENTE 1968-1973 (MILES DE TM DE COBRE FINO)						
	1968		1970	1971	1972	1973
Producción	519,7	540,3	534,5	517,7	538,7	559,2
Fuente: Construcción basada "Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988". (COCHILCO, 1989).						

A pesar de las dificultades, la producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente en 1971, 1972 y 1973 se mantuvo cercana a los valores de 1970 y superiores a la producción de 1968 (cuadro 3). Considerando que desde 1968 a 1970 los niveles de producción de las mineras administradas por las empresas extranjeras fueron favorecidos por el ‘floreo de las minas’, la producción total durante el gobierno de Allende es muy meritoria comparado con los tres años anteriores, sobre todo, con 1968.

La producción de la Gran, Mediana y Pequeña Minería aumentó, y los precios disminuyeron sustancialmente, el valor de las exportaciones disminuyó cada año. La suma de las disminuciones del valor

de las exportaciones de cada año entre 1970-1972, respecto a 1969 es de 577,3 millones de dólares (Cuadro 4). El gobierno de Allende no contó con esos dólares. Tuvo que financiar en una cifra similar las importaciones de alimentos, que entre 1971 y 1972 aumentaron y sumaron 510 millones de dólares, para enfrentar el acaparamiento y desabastecimiento

CUADRO 4. CHILE: PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN Y PRECIOS DEL COBRE 1969-1973					
	1969	1970	1971	1972	1973
Producción (Miles de toneladas cobre fino)	688,1	691,6	708,3	716,8	735,4
Precio (Centavos de dólar la libra)	66,6	64,2	49,3	48,6	80,8
Exportación (Millones de dólares)	925,5	839,8	701,8	657,6	1025,6
Fuente: Elaboración propia basada en 'Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988' (COCHILCO, 1989, pp. 4, 12 y 88).					

Paradójicamente, el precio promedio anual del cobre que en 1972 fue de 48,6 centavos de dólar/libra, después del Golpe de Estado, el precio promedio de octubre de 1973 subió a 94, y en noviembre y diciembre superó los 100 centavos de dólar/libra (COCHILCO, 2019a).

Resumiendo, creemos que la nacionalización del cobre fue la principal medida económica, política y social de Chile en el siglo XX. Posteriormente, Pinochet pagó indemnizaciones a las empresas estadounidenses e inició la desnacionalización inconstitucional de los nuevos y ricos yacimientos de cobre, proceso que se concretó en los gobiernos post-dictadura. CODELCO, que con la nacionalización controló el 100% de la GMC, con la desnacionalización controla alrededor del 30% en 2018 de la producción chilena de cobre. El 70% es controlado por las grandes empresas mineras privadas, especialmente extranjeras. (COCHILCO, 2019b)

Finalmente, cabe destacar que, “La Caravana de la Muerte en ‘El Salvador y Chuquicamata asesinó a los Presidentes, ejecutivos, varios dirigentes sindicales y trabajadores. Paradójicamente, la nacionalización del cobre del Presidente Allende fue y ha sido una de las principales fuentes de los ingresos del Estado para la represión y el

funcionamiento del capitalismo neoliberal en Dictadura y en los gobiernos post Dictadura.

La Reforma Agraria

Este apartado está basado fundamentalmente en Chonchol (2008, p.181-189). Jacques Chonchol fue Ministro de Agricultura entre 1970 y 1972. Para la historia rural de Chile 'la hacienda' o 'fundo' fue una institución que, proviniendo de la colonia, a través de las Mercedes de Tierras y las Encomiendas otorgadas a los conquistadores, se organizó desde el siglo XVIII hasta la década de los 60 en el siglo XX, cuando la Reforma Agraria le puso término. La hacienda fue un factor primordial de acumulación y concentración de la propiedad agraria. Las mismas generaron el denominado complejo latifundio-minifundio, que caracterizó la producción agrícola durante varios siglos. Los grandes latifundios representaban poco más del 1% del total de las explotaciones, pero poseían el 73% de la superficie agrícola nacional (Censo de 1965; Ramos, 1972, p. 120).

En los años 60's se incrementaron las luchas campesinas, influidas por la Reforma Agraria en Cuba y la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, que recomendaba la Reforma Agraria. En 1962, el gobierno de derecha del Presidente Jorge Alessandri aprobó la primera Reforma Agraria, creó un número limitado de huertos familiares, se conoció como "Reforma Agraria de Macetero". Ese mismo año, dos máximas autoridades de la Iglesia Católica distribuyeron las tierras de la Iglesia en sus respectivas zonas.

Una segunda Reforma Agraria se inició con el Gobierno de Frei, influenciado por la 'Alianza para el Progreso' y por las activas organizaciones campesinas. La Ley de Reforma Agraria de Frei fue promulgada en 1967. Principalmente limitaba la propiedad de la tierra a un máximo de 80 hectáreas de riego básico. Ese mismo año, se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina. Después de tres años de promulgación de la Ley se podrían expropiar todas las tierras

independientemente de su tamaño por mala explotación. Bajo el gobierno de Frei se asignaron 1.319 fundos, con 3,4 millones de hectáreas, con el 13% de la superficie cultivada del país, beneficiando a 30.000 familias.

Con la Reforma Agraria de Allende se implementó bajo una fuerte presión campesina, agudizada al final del Gobierno de Frei. Las huelgas rurales habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y las tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 1970. Como Allende no tenía mayoría en el Congreso para mejorar la Ley “óptó por implementar a fondo la Ley Vigente”. Como la Ley permitía que pasados tres años de su promulgación expropiar las tierras mal trabajadas, este mecanismo, y otros, permitió al gobierno acelerar el proceso expropiatorio.

La Reforma Agraria de Allende fue fuerte y sistemáticamente resistida por los propietarios agrícolas y latifundistas que utilizaron diversos mecanismos –legales y extralegales– para impedir que el Estado tomara posesión de las tierras expropiadas. Las combativas movilizaciones campesinas llevaron a que fuerzas políticas de la UP y del MIR apoyaron la toma de predios no contempladas en la Ley de Reforma Agraria creando dificultades al gobierno con agricultores medianos y pequeños (Bitar, 1979, p. 146).

En el Gobierno de Allende se expropiaron 4.490 predios que abarcaban 6,6 millones de hectáreas. En septiembre 1973 había desaparecido en Chile el gran latifundio, excepto las grandes viñas. Asimismo, se había duplicado la fuerza sindical campesina, respecto del gobierno anterior, alcanzando los 200 mil afiliados. Finalmente, la extensión de la Reforma Agraria a las comunidades indígenas fue uno de los grandes logros del Gobierno de Allende.

Los conflictos políticos entre los partidos de la UP y con la DC, los conflictos entre los diferentes tipos de trabajadores del campo, y la fuerte resistencia patronal, afectaron seriamente la producción agrícola. Por otra parte, la Ley de Reforma Agraria no incluyó tomar posesión de maquinarias, equipos, ni animales, que tenían que negociarse caso a caso, lo que requería tiempo. Adicionalmente,

existieron dificultades para obtener repuestos para las maquinarias y equipos, lo que también afectó la producción agrícola. Esto forzó al gobierno a aumentar el gasto en importación de alimentos, lo que fue posible al comienzo, pero después se dificultó por la falta de divisas, créditos y capacidad portuaria. Finalmente, en 1972, la huelga de los camioneros afectó el transporte de la producción y seriamente las siembras de primavera (Bitar, 1979, p. 146).

El Área de Propiedad Social (APS) y la Estatización de la Banca

El apartado sobre el APS está basado fundamentalmente en el documento de Martínez (1997, pp. 26-82). El APS era fundamental en el Programa de la UP. En ella se planteaba la transformación de las grandes empresas capitalistas a empresas del Área de Propiedad Social con amplia participación de los trabajadores. Era el núcleo urbano de tránsito al socialismo. La economía chilena estaba dominada por un reducido número de empresas monopólicas u oligopólicas que controlaban la producción, distribución y venta, que además estaban protegidas de la competencia externa por elevados aranceles a las importaciones. Por todo lo señalado, estas empresas ejercían fuerte dominación sobre la pequeña y mediana industria. Las inversiones privadas eran limitadas, bajo el desarrollo del mercado interno y la limitada canasta de exportaciones industriales,

El papel inversor y productor del Estado por décadas pasó a ser esencial en la creación de empresas públicas estratégicas: energía eléctrica, petróleo, carbón, petroquímica, acero y otras, con lo que pasó a jugar un rol esencial en la reproducción del capitalismo en Chile. Sin embargo, el Estado se vio limitado por la resistencia empresarial al aumento de impuestos. De este modo, se promovió la inversión extranjera en la industria a través de filiales de las empresas matrices las que se asociaron a empresas nacionales que controlaban el mercado interno.

A la dependencia externa se agrega la dependencia del sector industrial. Con este nuevo carácter de la dependencia se acentuaron las tendencias más negativas: el lento crecimiento del empleo, la baja participación de los salarios en la producción global, una elevada concentración del ingreso, y crecientes y altas remesas de utilidades e intereses de la inversión extranjera (Caputo y Pizarro, 1970; Ramos, 1972, pp. 83-116). Además, un mercado interno limitado y orientado a la producción de productos suntuarios de la época.

La agricultura, minería e industria dependían cada vez más de la necesidad y capacidad de importar. Ésta, a su vez, dependía de la exportación del cobre en manos de empresas estadounidenses, que fijaban precios bajos al cobre chileno. En 1966 el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 69,5 centavos de dólar la libra. El precio productor EE. UU. fue de 36,2 centavos de dólar la libra, precio efectivo que fijaban al cobre chileno (COCHILCO, 1988, p.88). Se debió recurrir a financiamiento externo, que gatilló el aumento de la deuda externa. En efecto, Chile era el país con el más alto endeudamiento per cápita de América Latina, y altamente concentrado en Estados Unidos. El nivel de importaciones y la actividad económica, era altamente vulnerable a una presión norteamericana (Bitar, 1979, p. 46). El APS tenía como premisa el agotamiento de la estructura señalada. El bajo crecimiento subsistía con una gran capacidad instalada ociosa, que sería clave en el funcionamiento del APS. La expropiación debía afectar, como se ha señalado, a un pequeño grupo de empresas, en torno a 200, de un total de 30.500 en 1967.

Los principales objetivos del APS eran: liberar al país de la dependencia del capital extranjero; utilizar al máximo la capacidad instalada; orientar la producción para satisfacer a la mayoría de la población; aumentar el empleo; controlar la inflación; nacionalización del comercio exterior. Para contrarrestar el boicot económico, desde antes y al inicio del Gobierno, se promovió el rápido control de los principales monopolios. A través de negociación y requisición o intervención. Lo último, consistía en la toma del control administrativo de las empresas privadas, –por acaparamiento, especulación,

paralización, toma de empresas por los trabajadores, etc.– que no alteraba la propiedad, la que se negociaba posteriormente (Bitar, 1979, pp. 118-125).

Desde 1971 el fuerte aumento de la demanda fue enfrentada utilizando la capacidad ociosa de las empresas públicas y de las nuevas empresas incorporadas al APS. Se amplió la ocupación y se utilizaron parte de las reservas internacionales.

Pronto, el APS se convirtió en el principal conflicto interno. La burguesía nacional opuso férrea resistencia. La ausencia de un listado de empresas y la puesta en duda de la legalidad del APS, posibilitó generar incertidumbre en los empresarios medianos y pequeños, y en las clases medias. La toma de empresas medianas promovidas por los partidos y trabajadores UP y del Movimiento de izquierda Revolucionaria, MIR, profundizó el conflicto interno, generando una creciente unidad de acción DC con el derechista Partido Nacional (Ramos, 1972, pp. 320-321). El MIR, se constituyó en 1965, siendo partidario de 'La Vía Armada', inspirado en la Revolución Cubana. El MIR criticó la Vía Pacífica de la UP, apoyando críticamente al gobierno de Allende.

El Gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto especial a fines de 1971. Simultáneamente la oposición presentó otro proyecto sobre la materia, cuyos objetivos eran: reducir ampliamente el APS; someter cada caso a la aprobación del Parlamento; crear un cuarto sector de empresas de trabajadores.

A partir de allí, los conflictos legales, sociales y económicos se mezclaron y profundizaron. El APS continuó ampliándose. En 1973 el APS llegó a 350 empresas, de las cuales 235 eran industriales. Las empresas tuvieron pérdidas y los reajustes salariales superiores al incremento del Índice de Precios, generaron grandes déficits del APS.

Estatización del Sistema Bancario

El control del Sistema Financiero era vital para el funcionamiento de la economía y de todas las reformas estructurales del Programa de la UP. El 30 de diciembre de 1970 Allende anunció la estatización de la banca.

La banca privada controlaba el 63% de los activos y el Banco del Estado de Chile el 37%. Ese año había 22 bancos nacionales y 5 extranjeros. El 60 % de los depósitos estaban concentrados en 5 bancos nacionales y la mayor parte de los créditos eran otorgados a empresas relacionadas (Walder, 2008). Una propuesta de Ley para estatizar la Banca no sería aprobada por el Congreso Nacional.

Así, el camino elegido correspondió a la lógica del mercado capitalista: a inicios de 1971 se compran los bancos extranjeros con poca gravitación en el sistema. A los bancos privados nacionales se les propuso comprarlos a través de adquisición de acciones. Accionistas mayoritarios expresaron su disposición de vender sus títulos. Otros buscaron condiciones más favorables, pero en definitiva el peso que tenía el Estado a través del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco del Estado los llevó a buscar acuerdos. (Fazio, 2008). A fines de 1971, el control estatal del sistema bancario era casi total. De ellos, 16 bancos controlaban el 90% de todo el crédito.

Primer Período del Gobierno de Allende: noviembre de 1970 a Mediados de 1972

Patricio Meller señala que en 1971 la economía chilena vivió un auge sin precedentes resultado de políticas económicas expansivas. Mejoramiento generalizado en el nivel de vida. La producción creció 8% en 1971, más del doble de 1970. Tasa de crecimiento anual más alta desde 1950. La inflación bajó de 36,1% a 22,1%, el desempleo bajó de 5,7% a 3,8% (Cuadro 5). Primera vez en la historia un desempleo tan

bajo. Los salarios reales de obreros aumentaron 39% y los de empleados en 10% en 1971 (Meller, 1996, p. 118-137).

CUADRO 5. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 1970-73 (PORCENTAJES)				
Variables	1970	1971	1972	1973
Tasa de crecimiento (PGB)	3,6	8,0	-0,1	-4,3
Tasa de inflación (IPC)	36,1	22,1	260,5	605,1
Tasa nacional de desempleo	5,7	3,8	3,1	4,8
Incremento anual de salarios reales	8,5	22,3	-16,6	-25,3*
Fuente: Meller (1996). *Corresponde a los tres primeros trimestres de 1973.				

La participación del trabajo en el PGB subió de 52,2% (1970) a 61,7% (1971). Los gastos del gobierno crecieron en 36%. La participación del gasto fiscal en el PGB pasó de 21% en 1970 a 27% en 1971. En 1970 se construyeron 24.000 casas y en 1971 se iniciaron 76.000 casas. Se distribuyeron gratuitamente medio litro de leche diaria a cada niño, 1.800.000 desayunos y 560.000 almuerzos escolares y útiles escolares. Entre 1970 y 1973 el precio real de la electricidad cayó 85 % y otros servicios domiciliarios y combustibles tuvieron sustanciales disminuciones entre 1970 y 1972.

Aumento del Gasto Público y Limitaciones de los Ingresos Públicos

En vez de excedentes el APS tuvo grandes déficits. La Nacionalización del Cobre mantuvo la producción, pero su valor disminuyó por caída de precios. En 1971 los ingresos corrientes del Estado se mantuvieron alrededor del 38%; en tanto, los gastos corrientes aumentaron considerablemente de 31% a cerca de 40% del PIB por aumento de remuneraciones superiores a lo estimado (Cuadro 6).

Si se agregan las inversiones del Estado en infraestructura y viviendas se llegó en 1971 a un gasto total del sector público de 50% del PGB.

CUADRO 6. CHILE: SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO CONSOLIDADO 1970-73 (%PGB)				
Variables	1970	1971	1972	1973
Ingresos Corrientes	38,14	37,7	34,48	21,26
Impuestos Directos	7,73	6,2	4,28	6,68
Gastos Corrientes	30,86	39,45	46,41	41,05
Sueldos y salarios	15,83	19,54	20,50	15,76
Pago de la previsión social	8,6	11,87	11,86	6,03
Saldo de Ingresos y Gastos Corrientes	7,28	-1,79	-11,93	-19,79
Inversión del Sector Público	10,41	10,48	9,64	8,65
Gasto Total (Gasto Corriente + Inversión)	41,27	49,93	56,05	49,39
Fuente: Meller (1996)				

CUADRO 7. DÉFICIT GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO (%PGB)				
	1970	1971	1972	1973
Déficit global	- 6,69	-15,28	-24,53	-30,28
Déficit del Gobierno General	- 3,51	-9,76	-14,12	-10,52
Déficit de las Empresas Públicas	- 3,19	-5,52	-5,81	-10,46
Déficit Área de Propiedad Social			-4,57	-9,52
Fuente: Meller (1996).				

Extraordinario déficit estatal, emisión monetaria e inflación

Dado que el crecimiento del gasto fue cada vez más elevado que los ingresos, se generaron crecientes déficits del sector público en todos sus ítems (Ver cuadro 7).

El déficit global del sector público 1970 ya era muy elevado y preocupante. Se financió con emisiones monetarias del Banco Central. Los éxitos de 1971 en producción, empleo e inflación no permitieron una reflexión crítica, se pensaba que la inflación era controlable apoyada en la teoría estructuralista, adecuando los problemas de demanda y oferta de productos, y la adecuación a través del comercio exterior. En la elaboración del programa, se afirmaba que la APS, las

empresas públicas y el sector agrario contaban con capacidad ociosa frente a aumentos de demanda. Clodomiro Almeyda, académico y Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Allende, señaló que, en los primeros años, estas profundas transformaciones no lograrían tal crecimiento de la producción (Almeyda, 1987, pp. 172-179). La inflación en 1972 se transformó en una hiperinflación de 260,5% (Cuadro 5).

Las principales corrientes teóricas en economía asignan un rol primordial al incremento desproporcionado de la cantidad de dinero en la explicación de la elevada inflación. Para Marx el dinero es el equivalente general que mide el valor de las mercancías, es decir, el trabajo presente y pasado incorporado. El valor del dinero, aun en la forma de signo de valor, debe ser cautelado. La cantidad de dinero en circulación debe corresponder a la cantidad necesaria para hacer circular las mercancías. Su desvalorización es, al mismo tiempo, desvalorización del trabajo humano. Marx afirma que, si se aumenta 15 veces la cantidad de dinero, –signos de valor–, “todos los precios de las mercancías se elevarían 15 veces [...], el alza de los precios no sería más que una reacción del proceso de circulación.” (Marx, 1974, p. 142).

Principales acciones de Estados Unidos para desestabilizar la economía Chilena

Estados Unidos conocía perfectamente la vital dependencia de la economía chilena. El Informe Church, señala días después del triunfo de Allende, Nixon dio instrucciones de “hacer chillar a la economía chilena” ... el embajador Korrry le señala al gobierno de Frei, “Que bajo Allende no se permitirá que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca” (Schatán, 2008, p. 216).

También el Informe Church señala: la ayuda bilateral de Estados Unidos bajó de 35 millones de dólares en 1969 a poco más de un millón en 1971; los créditos del Eximbank, por 237 millones de dólares

CUADRO 8. STOCK MUNDIAL DE COBRE 1968-1973 (TONELADAS DE COBRE FINO)					
	PRODUCTORES	CONSUMIDORES	BOLSAS	COMERCIANTES	STOCK TOTAL
1969	244	191	22	10	467
1970	364	278	88	11	741
1971	322	263	159	11	755
1972	307	225	236	22	790
1973	321	204	40	21	586

Fuente: 'Estadísticas del Cobre. Anuario 1988' (COCHILCO, 1989).

en 1967, desaparecieron en 1971; los préstamos del BID bajaron de 46 millones de dólares en 1970 a 2 millones de dólares en 1972 (Schatán, 2008, p. 216).

Las empresas estadounidenses tenían poder oligopólico y de integración vertical con la industria manufacturera del cobre podían controlar el precio a nivel mundial, ajustando la producción, la demanda y modificando rápidamente los stocks. El Stock en las Bolsas se incrementó en forma inusual, de 22 mil toneladas (1969) a 159 mil toneladas (1971). Es decir, un incremento de más de 600%. Los 'Stocks Totales' y los 'Stocks de las Bolsas' aumentaron nuevamente en 1972. En 1973, para favorecer a la Dictadura, éstos disminuyeron abruptamente (Cuadro 8) generando un fuerte incremento de los precios internacionales del cobre como lo hemos señalado.

En 1971 la suspensión de los créditos internacionales (318 millones de dólares), combinado con la disminución del valor por las exportaciones de cobre (223,7 millones de dólares) entre 1969 y 1971, significó que Chile dejó de recibir alrededor de 540 millones de dólares, casi tres veces las importaciones de alimentos de 1971 (192 millones de dólares).

Segundo Período del Gobierno de Allende: Mediados de 1972 al Golpe de Estado de 1973.

Los acuerdos UP-DC fueron muy importantes durante 1970 y 1971. La derecha de la DC ganó influencia a raíz del asesinato de del Ex Ministro del Presidente Frei, Edmundo Pérez Zujovic (1971), lo que liquidó el Acuerdo con la UP sobre la presidencias en el Parlamento. Además, la DC presentó el Proyecto Constitucional Hamilton-Fuentealba de octubre de 1971, que pretendía crear el Área de Propiedad Privada y detener el Área de Propiedad Social de Allende. Este cambio se manifestó también en las bases: la marcha de las cacerolas en noviembre de 1971, y el acto de masas de constitución del Área de Propiedad Privada en diciembre de 1971. A inicios de 1972 la derechización DC se intensifica. La DC liquidó el acuerdo sobre las áreas de la economía, alcanzado entre Allende y la DC. Asimismo, se profundizan las diferencias en la UP, conocidas como “Discusiones de Lo Curro”, que se mantendrán hasta septiembre de 1973. Esta dualidad lesionó, sin dudas, su unidad de dirección y su capacidad combativa (Martínez, 2008, p.114).

Como se ha señalado, la ‘Vía Pacífica al Socialismo’ situaba todo el proceso a través de la institucionalidad existente, y a través de ella misma se pretendía transformar la institucionalidad. De las dos corrientes que se expresaban, la mayor de ellas era la del Partido Comunista, y otros partidos que coincidían con Allende, la que “ponía el acento en el carácter democratizador del Programa; sus propuestas tendían a profundizar y hacer más real la democracia y en tal sentido se abría camino al socialismo, pero no se trataba ya de una revolución socialista. Se trataba de un proyecto más por etapas ... necesariamente más gradual y acotado en su desarrollo”. La otra corriente tenía más sustento en el partido socialista, propugnando una marcha más acelerada de carácter socialista, que coincidía con otras fuerzas de izquierda al margen de la UP, como el MIR (Martínez, 2008, pp.97-98). Tomás Moulián señala que las diferencias entre

el Partido Comunista y el Partido Socialista se presentaban en forma aguda desde hacía unas décadas (Moulián, 2005, pp. 35-50).

Consolidación del Cambio en la Correlación de Fuerzas Políticas 1972

La profunda modificación política no fue claramente percibida a nivel de las fuerzas sociales, como lo muestran las masivas resistencias al paro patronal de octubre de 1972, y en los resultados de las elecciones de marzo de 1973, en que la UP obtuvo el 43,7% de los votos emitidos. El cambio se expresó más bien en una consolidación en todos los sectores contrarios a la UP, en un fuerte desplazamiento en esa dirección de sectores medios inicialmente neutrales o inactivos, y en un aumento excepcional de su capacidad de acción y de combate. Con ello pasan a constituir una fuerza social de una envergadura, por lo menos similar, a la del movimiento popular. Tanto es así que en octubre de 1972 se atreven a desencadenar el primer intento subversivo de masas. Estos mismos acontecimientos muestran que el desplazamiento de fuerzas no alcanza aun al campo militar, donde todavía continuará una neutralización interna por algunos meses (Martínez, 2008, p. 115).

En el plano político, el ala derecha de la DC logra, en lo fundamental, el control de su partido, imponiendo un entendimiento permanente con el Partido Nacional y el imperialismo norteamericano para terminar con el gobierno de Allende. Esta alianza moviliza todas las fuerzas disponibles para paralizar la acción del gobierno en cualquier sentido, actuando a través de instituciones políticas del Estado, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, de profesionales, de vecinos y sindicatos de trabajadores. Se pretendía presionar el cerco externo, extremar el sabotaje y el entorpecimiento de la producción, el acaparamiento, la especulación, la evasión de impuestos y todo lo que contribuyera a la desorganización económica del país (Martínez, 2008, p. 115).

Acaparamiento, Mercado Negro, Especulación, y Paro Patronal octubre 1972

El acaparamiento y desabastecimiento fueron agresiones muy importantes para socavar el gobierno de la UP antes del triunfo de Allende, la cual se agravó de manera previa a que asumiera la Presidencia el 4 de noviembre de 1970. Eran organizadas por el Partido Nacional, sectores de derecha DC y con reiteradas operaciones encubiertas de la CIA

Del Informe Church mencionamos algunas: el 14 de octubre de 1970 se aprueban 60.000 dólares para una estación de radio; el 19 de noviembre de 1970, 750.000 dólares para acciones clandestinas; el 28 de enero de 1971, aprueban 1.240.000 dólares para la compra de otra estación de radio y periódicos, también para apoyar candidatos municipales y actividades anti-allendistas; y el 9 de septiembre de 1971 aprueban 700.000 dólares para apoyo al periódico más importante en Chile: El Mercurio.

La reactivación de la economía de los primeros meses del Gobierno de Allende superó el desabastecimiento, no así el acaparamiento que continuó en los sectores acomodados. A mediados de 1971, el Gobierno creó la empresa Distribuidora Nacional (DINAC), que negoció y adquirió casi la totalidad de las grandes empresas distribuidoras. Los dueños de la gran distribuidora nacional, CODINA, prefirieron vender a la Cámara de Comercio Minorista, que promovía el desabastecimiento y que posteriormente apoyó los paros patronales. DINAC creó la canasta popular de alimentos a precios oficiales repartidas por Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) en los barrios a través de país.

A mediados de 1972, camioneros y gremios empresariales comenzaron a preparar el paro nacional indefinido que se inició el 9 de octubre de 1972, paralizando gran parte de país. El paro patronal fue una verdadera sedición.

El Informe Church señaló que a lo menos 8 millones de dólares se gastaron secretamente durante 1970-1973 para boicotear la

economía de Allende, de los cuales más de 3 millones de dólares cambiados en el mercado negro para financiar el paro patronal. (Schatán, 2007, p. 223).

En relación con el trigo demostramos que si existió desabastecimiento fue por acaparamiento y mercado negro, y no por falta de este producto. La producción interna de trigo disminuyó en 560.000 toneladas entre 1970 y 1973. Las importaciones de trigo aumentaron en 751.000 (de 200.000 toneladas en 1970 a 951.000 toneladas en 1973). En síntesis, existió exceso de trigo, pero gran acaparamiento y mercado negro (Meller, 1996, p. 127 y p.158). Inmediatamente, después del Golpe de Estado, aparecieron, repentinamente y casi milagrosamente, los productos acaparados.

Las Fuerzas Armadas Fueron Llamadas a Integrar el Gobierno de Allende

El General Prats, Comandante en Jefe del Ejército, fue nombrado Ministro del Interior. Prats con el ejército, trabajadores, estudiantes y organizaciones poblacionales derrotaron el Paro Patronal de Octubre. Se realizaron las cruciales elecciones parlamentarias de marzo de 1973, donde el gobierno obtuvo el 44% de los votos.

En entrevista en Revista Ercilla N° 50 de noviembre-diciembre de 1972, el General Prats señaló que:

El paro significó un vuelco completo... Fue un paro mayoritariamente empresarial y profesional. No quiero decir que no hubo sectores de trabajadores que se plegaron. Pero en los gobiernos anteriores los paros los realizaban trabajadores contra patrones [...] ahora se invirtió el esquema. La mayoría parlamentaria solidarizó con el paro, lo que no había ocurrido antes. Los medios más influyentes de comunicación en su mayoría también [...] Si

los trabajadores no hubiesen dado un ejemplo de disciplina social pudo haberse producido un enfrentamiento. Piensen ustedes [...] cuando el clima de tensión crecía. Bastaba un fósforo.

El General de Aviación, Alberto Bachelet fue designado Director de la Secretaria Nacional de Distribución, apoyado por organismos estudiantiles que organizaron la distribución de artículos de primera necesidad a la población, especialmente a los sectores populares (Soto, 2008b, pp. 142 y 143).

Los Resultados Económicos del Gobierno de Allende en 1972

Los desequilibrios iniciales de 1971 se profundizaron, generando una desorganización que no se reflejó en los resultados macroeconómicos de 1972. El Informe del Comité Económico de Ministros de noviembre de 1972 señala que “en el segundo semestre de 1972 se ha ido perfilando -cada vez con mayor nitidez, los síntomas evidentes de una recesión económica en la industria y agricultura” (Bitar, 1979, p. 328).

Sin embargo, el PGB en 1972 apenas disminuyó en 0,1%. La tasa nacional de desempleo bajó bastante, de 3,8% en 1971 a 3,1% en 1972. Diferente fue la inflación que pasó de 22,1% en 1971 a 260,5% en 1972 afectando los salarios de los trabajadores. (Cuadro 5). Los déficits del presupuesto público se agravaron (Cuadro 7). En 1972 bajaron sustancialmente los ingresos y subieron los gastos (Cuadro 6). Ingresos y gasto fueron afectados por el paro patronal

La profundización de los problemas económicos se reflejó en un empate de las fuerzas políticas y sociales. El intento subversivo de octubre de 1972 “mostró que, si bien había mejorado sustancialmente su fuerza de masas, ella no era suficiente para imponer su proyecto”. Una consecuencia de lo anterior fue que la batalla se trasladó al campo militar (Martínez, 2008, p. 116).

Apartado Final: El Desenlace

Este apartado se basa fundamentalmente en Hernán Soto (2008b, pp. 146-147). Es importante destacar que la elección parlamentaria de marzo de 1973 significó un apoyo al gobierno (un 43,7%). No obstante, la situación siguió siendo muy incierta. Hubo un doble e insalvable obstáculo: el sector que dominaba la DC, encabezada por Eduardo Frei y Patricio Aylwin, estaba por derribar el gobierno de la Unidad Popular. En la UP un fuerte sector rechazaba acuerdos con la DC. Ambos grupos parecían buscar una definición irreversible. Esa era también la posición del gobierno estadounidense que promovía un Golpe de Estado.

Después de las elecciones el General Prats dejó las tareas de gobierno. Los agudos problemas económicos se profundizaron en 1973: inflación, desabastecimiento y escasez de divisas para las importaciones (la inflación acumulada a septiembre de 1973 llegó a 286,8%. En octubre subió a 528,4%. Este último aumento se debió a la libertad de precios y congelación de salarios decretados por la Dictadura).

Los sabotajes dañaron la economía y atemorizaban a la población. En los últimos meses del Gobierno se realizaron más de veinte actos terroristas a las torres de alta tensión, líneas férreas, y empresas del APS. “Patria y Libertad”, junto a oficiales y suboficiales de la Armada, estarían organizados en una “Base Operacional de Fuerzas Especiales” (BOFE), para realizar acciones terroristas (Gaudichaud 2016).

Los esfuerzos desestabilizadores se concentraron al interior del ejército y contra el General Prats. Los enfrentamientos callejeros se hicieron cotidianos. Algunos mandos comenzaron a usar la Ley de Control de Armas contra los trabajadores.

El 29 de junio de 1973, en un intento de golpe denominado “Tanquetazo”, los tanques llegaron muy cerca de La Moneda apoyados por el grupo paramilitar “Patria y Libertad”. Fue sofocado en horas por la decidida intervención del Comandante en Jefe del Ejército, General Prats.

El 25 de julio se inició un nuevo paro de camioneros, patronal, de comercio y de jóvenes de derecha de la Universidad Católica. Según el Informe Church la CIA participó y financió este paro. Dirigentes sindicales DC y de derecha paralizaron la minera 'El Teniente'.

El 26 de julio de 1973, fue asesinado el Edecán Naval del Presidente Allende, Comandante Arturo Araya, inculcando falsamente a la izquierda

Nuevamente fueron llamados los militares al gobierno con Prats como Ministro de Defensa. La mayoría de los Generales no respaldó a Prats, quien fue víctima de provocaciones callejeras de los grupos subversivos y de esposas de oficiales. Prats renunció el 22 de agosto. Allende nombra al General Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército

Un acuerdo de la Cámara de Diputados, apoyado por democrata-cristianos y derechista declaró que el gobierno actuaba al margen de la Constitución. Se legitimaba de antemano el Golpe que estaba por venir.

La división de las fuerzas de la UP impedía actuar con oportunidad y eficacia. No hubo acuerdo para llamar a un Plebiscito Nacional sobre las diversas áreas de la economía, buscando así una salida a la crisis. Esa era la voluntad del Presidente que solo fue aprobada el 9 de septiembre por la totalidad de los partidos de la UP. El 11 de septiembre el Presidente Allende anunciaría el Plebiscito. No alcanzó a hacerlo. El Golpe Militar comenzó a primera hora encabezado por el General Augusto Pinochet.

BIBLIOGRAFÍA

- Allende, Salvador (1970). *Discurso de la Victoria. Textos Salvador Allende 1970*, 64-68. Chile: Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista.
- (1971a). Mensaje al Congreso Pleno, 21 de Mayo 1971. Textos Salvador Allende 1971, 197-213. Chile: Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista.
- (1971b). Mensaje del Ejecutivo y Proyecto de Reforma Constitucional. En E. Novoa, *La batalla por el cobre* (1972). Chile: Editorial Quimantú.
- Almeyda, Clodomiro (1987). *Reencuentro con mi vida*. Perú: Editorial Ornitorrinco.
- Bitar, Sergio (1979). *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena*. México: Siglo XXI.
- Caputo, Orlando y Pizarro, Roberto. (1970). *Desarrollismo y capital extranjero: las nuevas formas del imperialismo en Chile*. Chile: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado.
- Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (1989). *Estadísticas del Cobre, Anuario 1988*.
- Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (2019a). *Precios Mensuales. Base de Datos*.
- Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (2019b). *Anuario Estadístico del Cobre y Otros Minerales, 1999-2018*.
- Corvalán, Luis (2008). Salvador Allende. Presidente del Pueblo. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la Ausencia*. Santiago de Chile: LOM y CENDA.
- Chonchol, Jacques (2008). Profundización de la Reforma Agraria. En Miguel Lawner y Hernán Soto (Eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 35-55). Santiago de Chile: LOM y CENDA.

- Dos Santos, Theotonio (2009). *¡Bendita Crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende* (181-189). Caracas: Fundación Editorial el perro y la rana.
- Fazio, Hugo (2008). Mapa de la extrema riqueza: antes, durante y después. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 191-205). Santiago de Chile: LOM y CENDA.
- Gaudichaud, Frank (2016). Chile 1970-1973: Mil días que estremecieron al mundo. LOM.
- Lawner, Miguel., et al. (2008). Las primeras 40 medidas del gobierno popular. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 397-401). Santiago de Chile: LOM y CENDA.
- Manns, P. (2008). Recuento. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 363-377). Santiago de Chile: LOM y CENDA.
- Martínez, Alberto (1977). El Área de Propiedad Social y Mixta (APSM) del sector Industrial Durante el Gobierno de la Unidad Popular. *Revista de Investigación Económica*, 36(2), 27-82.
- Martínez, Alberto (2008). Economía y correlación de fuerzas sociales en la transición: el caso de Chile en el período 1970-1973 En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia*. Santiago de Chile: LOM y CENDA.
- Marx, Karl (1974). *Contribución a la Crítica de la Economía Política*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- Meller, Patricio (1996). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*. México: Editorial Andrés Bello.
- Millas, Orlando (1996). *Memorias 1957-1991. Una digresión* Vol. IV. Chile: Ediciones Chile América CESOC.
- Moulián, Tomás (2005). La vía chilena al Socialismo: Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular. En Julio Pinto (coord.), *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*. Chile: LOM.

- Moussa, Nicole (1999). *El desarrollo de la minería del cobre en la segunda mitad del siglo XX*. Serie recursos naturales e infraestructura. CEPAL.
- Novoa, E. (1972). *La Batalla por el Cobre. Comentarios y Documentos*. Chile: Empresa Editora Quimantú.
- Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular (1970). Unidad Popular. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7738.html>
- Ramos, Sergio (1972). *Chile. ¿Una economía en transición?* La Habana: Casa de las Américas.
- Varas, J. M. (2008). El sol de la cultura. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 353-361). Santiago de Chile: Editorial LOM/CENDA.
- Schatán, Jacobo (2008). El desabastecimiento: la conspiración de EE.UU. que derrotó a la UP. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (207-223). Chile: Editorial LOM/CENDA.
- Silva, J. (2008) ¿Era viable el proyecto de la Unidad Popular? En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 93-105). Santiago de Chile: Editorial LOM/CENDA.
- Soto, H. (2008). La nacionalización del cobre. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 403-407). Santiago de Chile: Editorial LOM/CENDA.
- (2008b). El gobierno de Allende y las Fuerzas Armadas. En Miguel Lawner y Hernán Soto (eds.), *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (pp. 104-149). Santiago de Chile: Editorial LOM/CENDA.
- Walder, Paul (2008). ¿Qué pasó con la estatización de la banca? *Revista Punto Final*, 665.

Chile. Reinterpretación histórica del neoliberalismo y de los Chicago Boys (1973 a mayo de 2023)¹

Graciela Galarce

“Un soneto me manda a hacer Violante que en mi vida me he visto en tal aprieto; catorce versos dicen es soneto; burla burlando van los tres delante.” (Lope de Vega)

“El “modelo chileno”, admirado, vitoreado, escarnecido o simplemente mirado con un dejo de escepticismo, ha llegado a ser una especie de marca registrada en el continente y más allá de él. Identifica al Chile actual,” (Fernando J. 2007)

Presentación

Al igual que Lope de Vega, y relacionado con la cita sobre el ‘modelo chileno’, nos encontramos ante la dificultad de presentar un artículo para el libro *Medio Siglo del Neoliberalismo en América latina (1973-2023). Balances críticos*, debido a las recientes y profundas incertidumbres en Chile. Esta tarea la vislumbramos como difícil de

¹ Este texto se terminó de escribir el 15 de mayo de 2023

abordar en pocas páginas porque deberíamos analizar el proceso de décadas anteriores que llevó a que se diera el Golpe Cívico-Militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile, y la situación del '*modelo chileno*' actual. El análisis se debería orientar, al menos, en dos grandes niveles: la situación a nivel mundial y la situación en Chile.

El presidente Truman, en 1949, al asumir su segundo mandato a la presidencia de los Estados Unidos, en su Discurso Inaugural, señaló que, a propósito de la confrontación con la Unión Soviética por la hegemonía mundial, los Estados Unidos debe lograr la hegemonía económica anunciando un '*Plan Estratégico*' para el mundo con énfasis a los países en desarrollo, especialmente, para América

En Chile los Partidos Socialista y Comunista tenían una fuerte presencia desde la década de los cincuenta. Salvador Allende fue candidato a la presidencia en cuatro oportunidades. El Programa de Gobierno con que triunfó Allende en 1970 profundizaba los programas anteriores. Planteaba por primera vez en la Historia de la Sociedad, la '*Vía Pacífica al Socialismo*' a través de profundas transformaciones: Nacionalización del Cobre, principal riqueza de Chile, que era propiedad de grandes empresas mineras mundiales estadounidenses (Anaconda y Kennecott); Reforma Agraria, que terminaría con el latifundio en Chile, creado desde la Colonia, que había perdurado tres siglos; Área de Propiedad Social, APS, conformada por las principales empresas monopólicas del sector industrial, de la distribución y de la Banca. Serían empresas de 'Propiedad Social', no estatal, con participación de los trabajadores (Caputo y Galarce, 2023).

Estados Unidos no permitiría que la experiencia chilena tuviera éxito, porque ésta se podría reproducir en Europa, por ejemplo, en Francia e Italia y cambiar la geopolítica a nivel mundial. Por estas razones, el Golpe de Estado Cívico-Militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile fue duramente represivo, como una Contra Revolución económica, social y política en base al neoliberalismo. La experiencia chilena ha sido la más profunda, la más pura y prolongada, en el sentido de la aplicación estricta de los fundamentos del neoliberalismo.

Reinterpretación histórica del origen de los Chicago Boys y del Neoliberalismo en Chile. (Galarce, 2021)

En las últimas décadas, se ha generalizado la visión sobre el origen académico del '*exitoso modelo económico chileno*', que se debía a la determinante y crucial participación de estudiantes de economía de la Universidad Católica de Chile, que fueron a hacer sus estudios de posgrado a la Universidad de Chicago, en un convenio académico entre ambas universidades. Y que, a partir de dicho convenio, se formaron los denominados '*Chicago Boys*', también considerados los '*Arquitectos del modelo neoliberal*'

Sin embargo, se ha invisibilizado su carácter político y geopolítico, ya que el Convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile, hace parte del Programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El convenio entre ambas universidades se consideró en la academia en Chile como una '*rareza*'.

Nos surgen tres interrogantes: ¿Por qué era '*raro*' que el Departamento de Estado de los Estados Unidos promoviera este convenio? ¿Cómo se financiaba? ¿Por qué se eligió Chile para desarrollar esta experiencia académica?

Con el objetivo de resolver estas las tres interrogantes, analizamos en diferentes documentos dicho convenio académico. En todos ellos, se señalaba, sin mayores detalles, –y asumiendo como conocido– que los Estados Unidos financiaron dicho convenio académico bajo un Programa denominado '*Punto Cuarto*'.

Nuestros estudios por encontrar el Programa '*Punto Cuarto*', de los Estados Unidos, nos condujo al '*Discurso Inaugural de Harry Truman, del 20 de enero de 1949*', quien, al asumir por segunda vez su mandato como presidente, presentó el '*Plan Estratégico*' de su mandato, conocido como '*Four Point Speech*'. Los objetivos políticos de dicho plan los sintetiza magistralmente y los desglosa en cuatro puntos.

Del '*Four Point Speech*' de Harry Truman, el '*Punto Cuarto*' ha pasado a ser el más importante, a través del cual los Estados Unidos enfrentarían su política exterior a partir del significativo período

histórico: fines de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría. Este período se caracterizó, por el **enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética**, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), para lograr imponer sus hegemonías al resto del mundo.

El '*Punto Cuarto*' fue diseñado y se presenta como un compromiso del gobierno de los Estados Unidos para prestar apoyo técnico y económico a las regiones en desarrollo, en particular con América Latina. Pero en realidad, el '*Punto Cuarto*', -como hemos mencionado-, es un Programa para asegurar y consolidar la hegemonía de los Estados Unidos.

No se puede analizar la experiencia económica, social y política de un país en forma aislada, sin tener presente que cada país es parte de una economía mundial que debe ser analizado en el contexto histórico de la geopolítica mundial.

El Discurso Inaugural de Truman, 20 de enero de 1949 (Truman, 1949).

En 1949, el Presidente Truman es categórico en su discurso y sentencia:

En el mundo hoy día nos enfrentamos con el peligro de que la demanda creciente de los pueblos en todas partes para lograr la libertad y una vida mejor puede ser corrompida y engañada por las promesas falsas del comunismo.[...] Este reto a nosotros es más que un desafío militar.

La relevancia histórica de los objetivos geopolíticos de los Estados Unidos en 1949, quedan de manifiesto en el discurso del presidente Truman, cuando declara que el '*Punto Cuarto*' para los Estados Unidos '*es más que un desafío militar*', con el compromiso de '*fomentar la inversión de capital [estadounidense] en áreas que necesitan desarrollo*'.

En 1950 Julián Verplaetse, profesor de derecho internacional, luego de conocer y analizar el *‘Discurso Inaugural del presidente Truman del 20 de enero de 1949’*, sentenció: *“El punto cuarto es el más grandioso proyecto de construcción de una nueva era que el mundo ha presenciado”* (Verplaetse, 1950)

El ‘Punto Cuarto’, el Programa de Asistencia a Chile y los ‘Chicago Boys’

¿Por qué Chile es Elegido por los Estados Unidos para Implementar la Propuesta Económica Basada en el ‘Punto Cuarto’?

Los Estados Unidos comprobaron que Chile tenía una institucionalidad democrática relativamente estable, con crecientes e importantes partidos marxistas que era necesario frenar. Además, en 1948, se creó e instaló en Chile, la *‘Comisión Económica para América Latina’*, CEPAL, que desarrolló teóricamente la experiencia latinoamericana muy intensa, posterior a los años treinta, y formuló como modelo de desarrollo económico la *‘Industrialización por Sustitución de Importaciones’*, ISI, basado en la activa participación del Estado en la economía a través del proteccionismo y la planificación. Relacionaban que el pensamiento de la CEPAL estaba muy influenciado por el marxismo. Por esto, “había que atacar al león en su propia cueva” (Fontaine Talavera, 1992).

Dentro del *‘Punto Cuarto’* se crearon varios programas de asistencia técnica a los países en desarrollo. Destaca el *“Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en Chile”*, conocido como *“Chile Project”*, que debía implementar la asistencia técnica al sector agrícola definido como prioritario para enfrentar los problemas de hambre y pobreza.

En **1953**, veinte años antes del Golpe de Estado Cívico-Militar en Chile de 1973, se produce un significativo cambio en la orientación del ‘Punto Cuarto’ para América Latina. Albion Patterson, Director del Instituto de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos en Chile, influido por el destacado economista estadounidense, –Theodore Schultz, futuro Premio Nobel de Economía–, convence a los responsables estadounidense para la asistencia técnica que el proyecto de cooperación más influyente en América Latina debía ser **la educación universitaria en economía**: “*Olvidemos la agricultura*”, le dijo al entonces rector, [de la Universidad Católica], ...“**y trabajemos juntos en la economía** [en la formación de economistas]” (Valdés, 2020).

Inicio y operación en Chile del Neoliberalismo

Programa de Asistencia Técnica Estadounidense en formación de Economistas

En 1955, una vez que se concretó el proyecto de asistencia en economía, entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago se dio inicio a dicho Convenio Académico, cuyo objetivo explícito era alentar el pluralismo de las teorías económicas que se enseñaban en Chile en esos años. En tanto, el objetivo implícito, era combatir lo que era definido como la “*ideología socialista*” de la economía chilena y cambiar las cosas de tal manera de poder transformar la administración económica del país dentro de una década: ‘Crear un antídoto a la influencia de la CEPAL en Chile y en América Latina’.

*Agustín Edwards, Propietario de ‘El Mercurio’ y su Estrecho
Vínculo con los Gobiernos de los Estados Unidos.*

La familia Edwards, propietaria de El Mercurio, desde casi un siglo, como primer periódico nacional juega un papel primordial en la

conformación de la opinión pública, en el desarrollo económico, político y social de Chile. Este ‘Cuarto Poder’ es muy relevante en Chile.

Ningún Agustín Edwards en sus negocios y en su auténtica vida [...] ha hecho de alma y de facto pacto con la nación. En cambio, sí lo hicieron hasta los años veintitantos con la Gran Bretaña, imperio mayor hasta entonces, y luego con el mayor imperio, los Estados Unidos, desde entonces. El más poderoso desde que en la historia del mundo hay imperios y, por ende, el más peligroso para el país pequeño y débil, Chile (Uribe, 2011, p. 15).

Edwards fue un asset.

El asset no es un agente ni un funcionario del servicio de inteligencia. Mucho menos es remunerado regularmente. Se trata de un contacto superior de la agencia disponible para ella y consciente de sus servicios especiales con ella. En numerosos libros y documentos de casos pasados se revela que assets han sido presidentes de sus países, jefes de gobierno y Estado (Uribe, 2011, p. 23).

Kissinger, en sus Memorias, señala la participación de Agustín Edwards en la candidatura de Allende en 1970:

Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre –de 1970– por Agustín Edwards, el editor de El Mercurio, el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende (Millas, 1996, p. 91). **“El Mercurio por cien años ha sido más que partidos políticos y otras instituciones, el estado mayor de las “clases” pudientes o, más bien de la casta que ha dirigido y domina el país”** (Uribe, 2011, p. 17. Énfasis y negritas nuestras)

Agustín Edwards y sus Estrechas Relaciones con los Chicago Boys y con los Militares Golpistas.

Para enfrentar la confluencia de las fuerzas allendistas, y la izquierda Demócrata Cristiana, “El Mercurio llama a varios Chicago Boys para que se incorporen como redactores de la página Editorial, y desarrollen, además, una Sección Económica”. E “incorporan a la línea Editorial planteamientos que vinculan el sistema de propiedad privada, la libertad de expresión y la democracia” (Fontaine Talavera, 1992, p. 97).

Agustín Edwards recluta a un destacado ex oficial de la Marina, Hernán Cubillos, quien junto con Emilio Sanfuentes, economista de Chicago crean un Centro de Estudios para constituirse como el primer think tank liberal chileno, que denominaron CESEC (Fontaine Talavera, 1992, p. 98).

En 1968 Agustín Edwards, junto a Hernán Cubillos, crean ‘La Cofradía Náutica del Pacífico Austral’. Pertenecen a dicha Cofradía, oficiales activos de alto rango: José Toribio Merino, [Futuro integrante de la Junta Militar en representación de la Armada], Patricio Carvajal y Arturo Troncoso, entre otros, que jugaron importantes roles en la organización y concreción del Golpe Cívico- Militar de 1973.

Los Chicago Boys y sus primeras incursiones en la Política Chilena

En el documental “Chicago Boys”, se relata que el entonces Presidente Jorge Alessandri (1958-1964), de derecha, invitó a los Chicago Boys a La Moneda para que le expusieran su “Plan Neoliberal” —posteriormente publicado como “El Ladrillo”—, para conocer nuevas medidas para resolver problemas económicos de su gobierno. La reacción del Presidente Alessandri, partidario de la corriente económica estatista, le pidió a uno de sus ministros, “*¡Sáquenme estos locos de aquí!*”. (Fuentes, et al, 2015).

Una de las principales actividades de los economistas de Chicago se orientó a participar en la elaboración del Programa Presidencial del candidato derechista Alessandri para las elecciones de 1970. “Aquí surgen choques entre los partidarios de abrir la economía rápidamente y los empresarios alessandristas tradicionales, habituados a operar en mercados protegidos”. En CESEC no logran imponerse en la campaña de Alessandri. “La penetración de los Chicago Boys era superficial aún dentro de la derecha” (Fontaine Talavera, 1992, p. 98)

Sin embargo, “Tres años más tarde será el gobierno militar el que, contrariando a los empresarios tradicionales y al alessandrismo, optará por un plan de CESEC: “El Ladrillo”. (Fontaine Talavera, 1992, p. 99).

Los Chicago Boys durante el Gobierno de Allende, 1970-1973.

A principios de 1971, sectores de derecha chilena piden a los Chicago Boys, un estudio global de la situación económica, en la esperanza de que las cifras sean muy negativas y posibiliten la caída del gobierno de Allende a fines de 1971. Sin embargo, los resultados fueron extraordinariamente positivos: el PGB creció 8% en 1971, más del doble que el 3,6% de 1970. Asimismo, la inflación bajó desde 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo disminuyó desde 5,7% a 3,8% en los mismos años (Meller, 1996).

No obstante estos resultados, los Chicago Boys siguen analizando el desempeño de la economía chilena, y elaboran sistemáticamente estudios de divulgación orientados a las organizaciones empresariales opositoras al gobierno de Allende las que planificaron los paros de octubre de 1972 y el paro escalonado de agosto de 1973 que terminó con la caída de Allende.

El Ladrillo”. Plan de Gobierno Preparado por los Chicago Boys

Los Chicago Boys y otros economistas afines, durante el gobierno de Allende, prepararon un ‘Plan de Gobierno Alternativo’, denominado ‘El Ladrillo, que contiene un diagnóstico global y 13 capítulos sobre políticas específicas que incluyen la política de descentralización, de comercio exterior, de precios, monetaria y fiscal, tributaria, de mercado de capitales, de previsión y seguridad social, de distribución del ingreso, de inversión extranjera, del área social, del área agrícola e industrial. Este programa considera medidas para el corto, mediano y largo plazo y señala que se hace abstracción de las restricciones políticas que pudieran existir si se aplica lo diseñado. El plan propuesto hace posible “realizar una síntesis clara de los aspectos económicos fundamentales que debería considerar cualquier política de gobierno”.

En El *Ladrillo*, se insiste en las ventajas de un “cambio radical”, en la necesidad de entender el **programa como un todo ya que no es aplicable por parcialidades**. Se propone como meta que bastarán 10 años con políticas económicas racionales que logren un 7,0% anual para duplicar el Producto Nacional.

Sergio De Castro, el Principal Chicago Boy y un Breve Historial Académico.

“No se encontrarán en él la cultura y la universalidad [...] en De Castro valen la fuerza de su carácter, el rigor perseverante de sus objetivos y la devoción al poder. No a la figuración ni a los honores. Sí al doblegamiento de la voluntad de los demás; a la realización de una gran tarea a través de y por hombres que él conduce”. “En el mundo hay programadores y programados”, dice De Castro en alguna oportunidad. “Ciertamente él no ha estado nunca entre los programados”. (Fontaine Aldunate, 1988, p. 26)

En la Universidad De Castro destaca, “por su seguridad intelectual, su claridad didáctica y su adhesión sin vacilaciones a lo que aprendió en la Universidad de Chicago [...]. De Castro sentencia: “*Que no se*

te olvide nunca cuando la teoría y la práctica están en desacuerdo, quiere decir que la práctica está mal" (Fontaine Aldunate, 1988, p. 26. Destacado y negritas nuestras).

A **finés de 1965**, recibe el nombramiento de Decano de la Facultad de Economía, y junto a Pablo Baraona, que desde 1964 era Director de la Escuela de Economía, forman una "collera poderosa". Ambos Chicago Boys fueron ministros de las áreas más importantes en la Dictadura. Baraona fue ministro de Agricultura, sector económico en donde se dio una de las mayores represiones a campesinos y a mapuches.

En **septiembre de 1973**, De Castro fue designado asesor del General González, Ministro de Economía, y como primera medida, sorprendiendo a los militares sugirió que se decretara la libertad de precios, lo que se concretó a escasos días del Golpe Militar. La libertad de precios aceleró aún más la eliminación del desabastecimiento, pero también gatilló un aumento de la inflación en los últimos meses de 1973. Hasta septiembre de 1973, la inflación en doce meses fue de 286% y creció adicionalmente en los primeros meses de la dictadura alcanzando en diciembre 508% (Banco Central de Chile).

De Castro [se transforma] en el epicentro de las decisiones económicas. Luego se desempeñará con energía y abnegación en el Ministerio de Economía (1974-1976) y de Hacienda (1976-1982) (Fontaine Talavera, 1992, p. 101).

Milton Friedman Visita Chile en Marzo de 1975 y 'Plan de Shock'.

En abril de 1975 el Ministro de Hacienda, Jorge Cauas propone el "Plan de Recuperación Económica", el cual es aceptado por la Junta Militar. Entre otras medidas propone un fuerte ajuste fiscal para detener la inflación, con disminución del 15% del gasto en moneda nacional y una n del 25% en moneda extranjera. Estas medidas han sido conocidas como el "Plan de Shock", medidas que fueron

recomendadas en la Conferencia que Milton Friedman impartió en su visita a Chile en marzo de 1975 (Friedman, 1975).

José Piñera, el Economista Neoliberal más Radical y Agresivo.

A fines de la década de los setenta la situación económica aparece consolidada, superando el Plan de Shock y la economía comienza a crecer. Es en esas condiciones que José Piñera Echeñique, economista con doctorado en Harvard, implementa las medidas más radicales.

Primero. Como Ministro del Trabajo y Previsión Social elaboró el Plan Laboral (1979), que en síntesis consiste en fortalecer la posición de los empresarios y debilitando en grado extremo la situación de los trabajadores y del movimiento sindical.

Segundo. Elaboró la Reforma Previsional (1980), basado sólo en el ahorro forzoso individual de los trabajadores, fondos que pasaron a ser administrados privadamente por las Asociaciones de Fondos de Pensiones, AFP, también diseñadas por él. Estos fondos se transforman en la principal fuente de recursos de las inversiones de los grandes grupos empresariales.

Tercero. Inició la privatización del Sistema Público de Salud, creando las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES, institución de salud privada, que compite con el sistema público, Fondo Nacional de Salud, FONASA. En la práctica, se ha fortalecido a las ISAPRES en desmedro de FONASA.

Cuarto. Como Ministro de Minería, fundamenta la desnacionalización del cobre, principal riqueza básica del país, –y que Allende denominó, ‘*El Sueldo de Chile*’–, afirmando que el cobre quedaría obsoleto. Que era necesario explotar la mayor cantidad de cobre en el menor tiempo posible. Y que, por el carácter subsidiario del Estado, afirma que solo las grandes mineras mundiales podrían iniciar exploraciones y explotaciones de los nuevos y ricos yacimientos de cobre. Para incentivar al capital privado, especialmente extranjero, afirma que era necesario entregarles la máxima seguridad. Con este

fin crea la “Concesión Plena”, que entrega, gratuitamente, en propiedad privada los nuevos y ricos yacimientos de cobre a la inversión extranjera, otorgándoles más y más amplias garantías que la propiedad privada tradicional.

‘Las Siete Modernizaciones’ Elaboradas por José Piñera. (Piñera, 1979)

Las profundas transformaciones económicas creadas por la dictadura, fueron calificadas con palabras que sugieren transformaciones positivas. Sin embargo, *‘Las Siete Modernizaciones’*, en realidad, están orientadas a beneficiar a las empresas privadas creando graves problemas sociales a la mayoría de los chilenos. Éstas son las bases fundacionales del capitalismo **neoliberal, y están presentes en la Constitución de la Dictadura de 1980 y en “El Ladrillo. Las siete modernizaciones se elaboraron 10 años antes del conocido “Consenso de Washington”**

- **El Libre Mercado.** Fundamento principal de la organización económica y social de Chile. *Estado Subsidiario:* Disminuir al máximo el papel del Estado: Privatización y desnacionalización de las empresas del Estado y de los recursos naturales de Chile. El Estado solo puede desarrollar aquellas actividades que no la puedan emprender los privados: defensa, seguridad pública, asistencia social.
- **Disminución del Gasto Social:** Privatización de la educación; salud; vivienda y previsión. Todo se transforma en mercancía y negocios privados.
- **Reforma Tributaria.** Incentiva la inversión de las empresas. Disminución del impuesto a las ganancias empresariales. Impuesto

al valor agregado, –IVA–, como la fuente de recursos más importantes para el presupuesto del Estado.

- **Libre Comercio y Apertura al Capital Extranjero.** Disminución de los aranceles que protegían a la industria nacional y promoción de Tratados de Libre Comercio. Incentivo a la inversión extranjera, más y mejores garantías que a las empresas nacionales.
- **Desregulación Laboral.** Eliminación de la legislación laboral que protegía a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales.
- **Protección y Promoción a la Propiedad Privada.** Otorgar propiedad privada a través concesiones de los Recursos Naturales: cobre, salitre, y otros minerales, tierra, industria forestal, recursos del mar, y el agua.

Estas ‘Siete Modernizaciones’, constituyen las bases de lo que se ha denominado como ‘*Contra Revolución*’ para destruir las transformaciones económicas, sociales y políticas de los gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende, y reinstalar el capitalismo bajo la forma de ‘Capitalismo Neoliberal’.

Últimos años de la Dictadura e inicio de los Gobiernos Postdictadura.

El fuerte crecimiento del PIB chileno en esos años motivó que a nivel mundial se calificara como el ‘*Milagro Económico Chileno*’. Se planteaba que el crecimiento continuaría y que Chile pasaría ser un país desarrollado. Alejandro Foxley, ministro de Hacienda del primer gobierno de la Concertación, afirmó que ‘*Chile era una buena casa en un mal barrio*’.

Los sucesivos presidentes de Chile postdictadura señalaron que en diez años Chile llegaría a ser un país desarrollado. Sin embargo, fueron postergando la concreción de esta ‘profecía’.

La difusión en Chile, y a nivel mundial del exitoso modelo económico chileno, nos llevó a publicar en 2010, como síntesis de investigación, el documento ‘*La propaganda engañosa sobre Chile: el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal chileno*’, que fue puesto en duda en varios seminarios críticos sobre el capitalismo. Esto reflejaba que la insistencia sobre el éxito chileno también había sido aceptada en los medios académicos críticos del capital. En nuestro documento 2010 mostramos que la economía chilena había tenido un crecimiento muy elevado desde los últimos años de la dictadura, 1987-1997, en promedio anual la economía creció en cerca de 8,0%; en el período 1998-2009, el crecimiento promedio anual cayó drásticamente a 3,2% iniciándose una tendencia decreciente del crecimiento de la economía chilena (Galarce, 2010).

Destacábamos, sin embargo, que varios analistas internacionales señalaban que Chile continuará teniendo una tasa de crecimiento ‘*impresionante*’. Por ejemplo, Ángel Gurría, como secretario general de la OECD señaló: “La vía chilena y su experiencia enriquecerá el acervo de la OECD en cuestiones claves” y “La combinación de un robusto crecimiento económico con mayor bienestar social”.

El neoliberalismo plantea que el éxito económico se debe principalmente a la propiedad privada, la preeminencia del libre mercado, en contraposición de la participación del Estado, y la apertura de la economía chilena.

En nuestro documento señalábamos las causas fundamentales que explican la primera etapa: el fuerte aumento de las ganancias, por aumento de la explotación del trabajo, la represión sindical y política, la apropiación –a bajos precios–, de más de doscientas grandes empresas del área de propiedad social creadas en el gobierno de Allende. Además, contaron con los recursos generados por la nacionalización del cobre, por la Reforma Agraria y fin del latifundio de

Allende, que permitió a la dictadura decretar el mercado libre de tierras y generar el desarrollo del capitalismo en el campo.

Los problemas sociales se profundizaron en el periodo de alto crecimiento y continuaron cuando disminuye el crecimiento: mala distribución del ingreso, pobreza, educación, salud, vivienda, previsión y salud mental. En el documento citado analizamos los dos primeros.

Chile. Una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo

En 1970, antes del gobierno de Allende la participación de los salarios en el PIB era superior a 42%. Con Allende se supera el 50%. Con Pinochet bajó drásticamente a 35%, pero en los últimos años 1986-1990, supera el 40%. Durante la Concertación empieza a disminuir nuevamente y cae drásticamente a cerca del 35% entre 2005 y 2007. Junto a la mala distribución del ingreso se da una gran dispersión de salarios. Un grupo minoritario pero significativo de trabajadores, empleados y profesionales tienen salarios muy elevados que les permite un buen nivel de vida.

La información funcional del ingreso se complementaba con la distribución personal del ingreso. Para el año 1990, el 10% más pobre captaba sólo el 1,4% del ingreso, porcentaje que bajó en 2006 a 1,2% y en 2009 cayó a 0,9%. El 20% más pobre que sólo captaba el 4,3% en 1992 cayó a 3,6% en 2009 (Encuesta de Caracterización Socio Económica, CASEN).

Chile. Elevados niveles de pobreza

Felipe Larraín, ministro de Hacienda en el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, afirmó en 2007, basándose en un estudio riguroso: “Como país y especialmente desde el punto de vista de los pobres, no conviene que vivamos en la quimera de que la pobreza afecta sólo al

13,9% de la población, cuando en realidad es del 29%”. La medición de la pobreza en Chile ha sido muy cuestionada. La CASEN de 2020, corrigió las cifras y para 2007, da una pobreza de 29%. En el documento afirmábamos que la pobreza en Chile sigue siendo elevada y es superior a la que existía en Chile antes del gobierno de Salvador Allende.

En las conclusiones del documento de 2011 señalábamos:

Sin embargo, el control de los medios de comunicación por Estados Unidos y otras potencias, y por las grandes empresas han logrado controlar la mente humana, incluso, de sectores de izquierda de América Latina y de otras regiones, presentando la experiencia neoliberal chilena, desde la dictadura hasta ahora, [2011], como una experiencia exitosísima que debiera reproducirse en América Latina.

Movimientos Sociales en Chile, 2006 -2011

En el período de alto crecimiento, los partidos de la Concertación paralizaron la gran movilización social que se había desarrollado en la lucha contra la dictadura. La disminución del crecimiento económico coincide con el incremento de las reivindicaciones sociales y surge con gran fuerza el movimiento estudiantil secundario que se potenció en 2006, con una movilización a nivel nacional. Este movimiento relacionó su lucha reivindicativa por la educación, con la desnacionalización del cobre y las elevadas ganancias de las mineras extranjeras. De aquí surgió la consigna, *‘El cobre por el cielo. La educación por el suelo’*. El gobierno de la presidenta Bachelet superó la crisis política aceptando algunas reivindicaciones y el movimiento estudiantil secundario se debilitó sin lograr recuperar su fuerza.

Algo similar sucedió con manifestaciones sociales con impacto nacional. Por ejemplo: la larga huelga de 37 días de ‘Minera Escondida’ –en 2007–, principal empresa extranjera de cobre; la huelga de

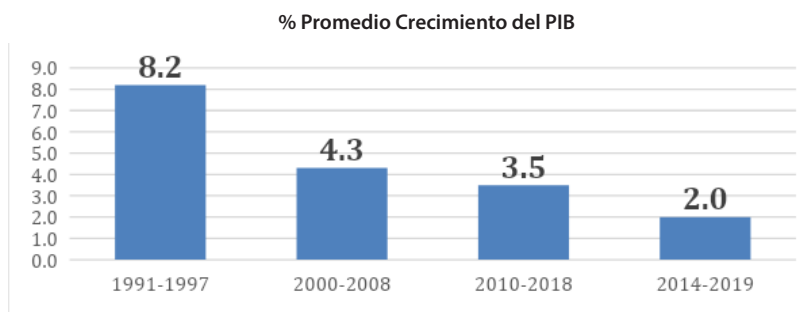
más de un mes de la ‘Confederación de Trabajadores Contratistas del Cobre’,-CTC-, que paralizó a Codelco, la empresa nacional del cobre. La CTC surgió como una nueva organización de la clase obrera, organización que fue criticada por los gobiernos, por los empresarios y por el Consejo Minero que representa las grandes mineras extranjeras. La CTC finalmente ha perdido fuerza y ha mediatizado sus combativas y reivindicativas posiciones.

En 2011, resurgen los movimientos estudiantiles, esta vez los estudiantes universitarios de reconocida fuerza y combatividad a nivel universitario nacional. Este movimiento logró un masivo apoyo social y reconocimiento internacional. Posteriormente, fueron debilitados y prácticamente han desaparecido de la lucha social. Sus principales dirigentes, entre otros, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson fueron elegidos diputados y desde 2022, son parte importante del actual gobierno del presidente Boric.

La Economía Chilena. La tendencia decreciente del PIB se profundiza 2010-2019

En algunos años posteriores a 2010, resultado de un gran Plan de Reconstrucción Nacional del Estado chileno, con una fuerte inversión pública, se dio un importante crecimiento económico como respuesta a los graves daños en Chile del gran terremoto de febrero de 2010. Esta situación fue prevista en nuestro el documento de 2011 y se señaló que posteriormente se retomaría la tendencia decreciente de crecimiento. En el conjunto del período 2010`-2018 el crecimiento promedio del PÍB fue de 3,5%. De 2014 a 2019, la economía chilena promedio anual creció solo un 2% y el PIB per cápita fue de 0,7% (CEPAL).

La tendencia del bajo crecimiento y el agotamiento relativo es explicada en gran medida, porque una parte significativa del valor generado en la economía chilena es transferida al exterior por el creciente dominio del capital extranjero en Chile. El stock de la



Fuente: Construcción propia a partir del 'Anuario Estadístico 2018' y 'Balance Preliminar de la Economía de América Latina 2022', CEPAL.

*Se excluyeron los años de crisis.

inversión extranjera directa es mayor que el PIB chileno, lo que refleja que controlan los principales sectores de la economía chilena. Por su lado, la Deuda Externa Global chilena ha tenido un crecimiento muy elevado, principalmente por las deudas de las empresas extranjeras. Comparado con otros países de América Latina tanto el stock global de las inversiones extranjeras, como la Deuda Externa Global, han crecido muchísimo más en Chile que en otros países de la región.

Como conclusión, las remesas globales por utilidades, intereses, depreciación, amortización son superiores a la inversión global de la economía chilena, o a la formación bruta de capital fijo, tanto de maquinaria y equipo como las inversiones en construcción habitacional e infraestructura. Esta es una de las principales causas que expresa las nuevas formas de dependencia de la economía chilena en la globalización de la economía mundial actual. Las limitaciones de la inversión explican el bajo crecimiento y el agotamiento relativo del capitalismo neoliberal chileno.

Para lograr un crecimiento elevado, se requiere una inversión en la economía nacional en torno al 30% del PIB anual por muchos años, como ha sucedido en varias economías del Sudeste Asiático. La economía chilena podrá seguir creciendo, pero a un nivel limitado, con más desnacionalizaciones, profundizando su dependencia y la especialización en exportación de recursos naturales. En el cobre y en el litio Chile tiene las principales reservas mundiales, y ambos recursos

son esenciales en la nueva base energética de la economía mundial. La economía chilena podría crecer y promover nuevos desarrollos si se concreta la Empresa Nacional del Litio y la industrialización en Chile de una parte de su producción, lo que ha sido propuesto por el actual gobierno de Boric.

Mala distribución del ingreso

En un documento del año 2013. ‘Serie de documentos de Trabajo 379. Facultad. De Economía y Negocios de la Universidad de Chile’ Ramón López, y otros, se señala:

El 1% de los más ricos, en Chile capta el 30% de los ingresos, un tercio más que en los Estados Unidos; más del doble que en Canadá y en Alemania y el triple que Japón, España y Suecia.

El 0,001 % de los más ricos -1.200 personas-, captó en el promedio -2005-2010-el 10,1% del ingreso total. “La parte del León: Nuevas estimaciones de participación de los super ricos en Chile.

Elevados niveles de pobreza

En el estudio de la Fundación SOL, se corrige la cifra oficial de 11,7% sin incluir las transferencias del Estado ni el alquiler imputado de las casas habitación. La pobreza así sube a 29% (Kremerman y Durán, 2017). La derecha y los partidos de la ex Concertación destacan dos indicadores: el gran aumento del PIB per cápita, que ha llevado a Chile a los primeros lugares de América Latina. Esto es efectivo. Sin embargo, pierde fuerza frente a la mala distribución del ingreso; la gran disminución de la pobreza, la CASEN de 2020, corrigió las cifras para 2007, de 13,9% a una pobreza de 29%, corrección que había señalado Felipe Larraín, cuando criticó la CASEN de 2007. La Fundación Sol

con estudios muy rigurosos ha corregido permanentemente los indicadores de la encuesta CASEN.

Pensiones muy bajas

En el documento ‘Pensiones bajo el Mínimo [---]’ de la Fundación Sol, se afirma que “a Diciembre de 2020, prácticamente el 80% de las pensiones pagadas son menores al Salario Mínimo [...] la mitad de los pensionados reciben una pensión igual o inferior a 150 mil bajo la línea de la pobreza (Gálvez y Kremerman, 2021).

Endeudamiento de los hogares

Los hogares en relación con el ingreso disponible han crecido sistemáticamente, 38% en 2003. La deuda a 60 % en 2010; 76% en 2018; y 82% en 2022. En 2022 la deuda de los hogares representa el 49,2 % del PIB (Banco Central).

Endeudamiento de los jóvenes

Uno de los endeudamientos que más aflige a los jóvenes es el Crédito con Aval del Estado, CAE, para los estudiantes cuyas familias no podían financiar sus estudios universitarios, el cual fue la alternativa de la Concertación a las demandas estudiantiles de ‘Educación Superior pública gratuita y de calidad’. A mayo de 2022, más de 770 mil jóvenes están endeudados y la morosidad del CAE es de 61%. En general ha sido un costo muy elevado para el Estado y un gran negocio para los bancos. El monto global actual del CAE asciende a US\$ 10.000 millones. 3.5% PIB, el 13% de presupuesto del Estado. La condonación del CAE está en el Programa del Gobierno de Boric y es muy difícil de cumplir, más aún con el rechazo de la Reforma Tributaria por el

Parlamento, en el que el Gobierno de Boric tiene minoría. (Ministerio de Educación).

Desprestigio de las Instituciones del Estado, de los Partidos Políticos, de la Iglesia y de las Organizaciones Empresariales.

Junto al estancamiento económico y la agudización de los problemas sociales se acelera el desprestigio del Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado, de los Tribunales de Justicia, y en las jefaturas del Ejército y de Carabineros se descubrieron, y sancionaron por los Tribunales de Justicia, apropiaciones personales de cuantiosas cantidades de dinero de los presupuestos de esas instituciones.

En los partidos políticos se ha producido una fuerte disminución de sus militantes junto al aumento del rechazo social. Además, hay un aumento de nuevos partidos políticos resultado de divisiones al interior de partidos tradicionales y también la aparición de nuevos partidos creados por una persona que asumen su liderazgo, por ejemplo, el 'Partido de la Gente' y el 'Partido Amarillo'.

La Iglesia Católica que gozaba de un gran prestigio en décadas anteriores, fue sancionada por números casos de abuso sexual por décadas de menores especialmente en colegios católicos de gran prestigio, abusos sexuales sobre monjas y sacerdotes. Estos casos adquirieron tal connotación nacional, que comprometió seriamente la visita del Papa a Chile.

Las organizaciones empresariales se vieron comprometidas en el financiamiento de políticos de la casi totalidad de los partidos políticos, –con excepción del partido comunista–, que favorecían y reproducían textos de las organizaciones empresariales en las leyes. La mayoría de los políticos involucrados no han sido sancionados por los Tribunales de Justicia. Solo un Senador ha sido encarcelado, en tanto, los dirigentes empresariales han recibido amonestaciones y enviados a '*clases de ética*'.

Carabineros de Chile. Mencionamos dos montajes contra el Pueblo Mapuche.

‘Operación Huracán’, 2017. Amplia acción de inteligencia dirigida en contra de organizaciones mapuches detuvo a ocho de los principales dirigentes bajo la acusación de una asociación ilícita terrorista. La investigación judicial demostró en 2018 que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros habría manipulado las pruebas. Fue un montaje dirigido por las más altas autoridades de Carabineros.

“Comando Jungla”, 2018. Asesinato por un disparo por la espalda al joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. Fue un montaje y se demostró que no hubo enfrentamiento. Este asesinato conmovió al país y se organizaron manifestaciones en las principales ciudades del país y la bandera chilena y la bandera mapuche se transformaron en símbolo de las protestas del pueblo chileno.

Los Movimientos Sociales se reactivaron en el periodo de Crecimiento Lento.

Destacamos dos Movimientos que a Nivel Nacional Tomaron Fuerza Antes del ‘Estallido Social’.

Movimiento ‘No +AFP’. Proponen eliminar las Asociaciones de Fondos de Pensiones, –AFP–, debido a las bajas pensiones y a sus cuantiosas utilidades. Se dieron masivas manifestaciones pacíficas que convocaron a familias enteras. Los jubilados marcharon acompañados por sus hijos y nietos. Se denuncia que con los Fondos de Pensiones de los trabajadores se financia a los grandes grupos empresariales.

Movimiento Femenino. El 8 de marzo de 2019 una movilización de millones de personas contra del patriarcado, las diferencias de remuneraciones con relación a los hombres y por el trabajo femenino no remunerado. “Las Tesis”, grupo que interpreta una extraordinaria

puesta en escena denuncias de las mujeres sintetizadas en las letras de su canción, por ejemplo: ‘El Estado Patriarcal es un Macho Violador’, ‘el Estado es un Estado Represor’, que adquirieron connotación nacional y mundial.

Estallido Social de octubre de 2019

El Estallido Social del 18 de octubre de 2019 se desencadenó ante el alza del pasaje del Metro de \$30. No son \$30 pesos, son 30 años de abusos de las políticas neoliberales. Se paraliza completamente la capital. El mayor acto de violencia fueron los incendios simultáneos de la mayoría de las estaciones del Metro y muchos vagones. Todo el sistema es de una muy alta tecnología. Y con cámaras de seguridad en todos los lugares. Los lugares estratégicos quedaron abandonados por carabineros quienes solo se dedicaron a reprimir. El presidente Piñera afirmó que se había declarado una guerra en Chile. Habló de agentes externos. Hay justificadas dudas de que haya sido un auto atentado. No se investigó y a la fecha, –mayo 2023–, esta situación ha quedado en el olvido.

A partir de octubre de 2019, movilizaciones diarias en todas las ciudades del país. En Santiago se congregan más de un millón y medio de chilenos y más 2 millones a nivel nacional. La Plaza Baquedano fue denominada “*Plaza de la Dignidad*”. Se realizaron Cabildos y Asambleas Territoriales en los que se discutieron los principales problemas de Chile y lo que se debería incorporar en una Nueva Constitución. La crisis política fue muy profunda. El Ministro de Economía y el Ministro de Hacienda fueron destituidos. El Presidente Piñera llegó a obtener un 8% de aceptación. Se pedía cambiar la Constitución de Pinochet y la renuncia del Presidente Piñera.

Reacción del Gobierno de Piñera

El 12 de noviembre, el presidente Piñera convoca a todo el país a un ‘Acuerdo por la Paz, Justicia Social y una Nueva Constitución’, que se concreta el 15 de noviembre, en el Parlamento. El Acuerdo estipula un plebiscito ciudadano para abril de 2020, en el cual se harán dos consultas: si se quiere o no una Nueva Constitución; y si se acuerda hacer una Nueva Constitución se consulta sobre la elección de convencionales, todos elegidos por votación popular; o 50% elegidos por votación popular y 50% elegidos por los actuales diputados y senadores. Este acuerdo fue aprobado por todas las fuerzas políticas, excepto por el partido comunista. Parte de las fuerzas progresistas señalaban que este acuerdo era una jugada del gobierno para apropiarse de la bandera del pueblo.

La pandemia en Chile

La pandemia golpeó a Chile y, junto al Acuerdo por la Paz Social, ayudó a salvar al presidente Piñera de su posible destitución. La pandemia dejó en evidencia todos los problemas generados por capitalismo neoliberal en Chile. Por la pandemia, se postergó la fecha del Plebiscito para octubre de 2020.

El apoyo económico del gobierno fue tardío, desordenado, especialmente orientado a las empresas y con ciertos niveles de corrupción. Los trabajadores recurrieron a sus propios recursos: seguro de cesantía y retiros del 10% de sus fondos previsionales.

El Plebiscito del 20 de octubre de 2020 y la Elección de Convencionales mayo 2022

Lo anterior, junto a las demandas sociales del Estallido, posibilitaron un gran triunfo del pueblo en el Plebiscito del 20 de octubre, que un

80% ganó la opción Nueva Constitución y por el mismo porcentaje ganó la opción de la libre elección de todos los convencionales en votación no obligatoria con inscripción automática.

Posterior al Plebiscito de octubre, se acordó que la Convención fuese paritaria, e incorporara cupos para los pueblos originarios. En las elecciones de convencionales de mayo 2022 triunfaron las fuerzas que apoyaban hacer una Nueva Constitución obteniendo 118 convencionales (76%) de un total de 155, pero de 13 organizaciones, en tanto la derecha, - con 3 partidos-, eligió solo 37 convencionales (24%). En votación no obligatoria con inscripción automática.

El Plebiscito de Salida del 4 de septiembre 2022

En el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre 2022, se presentó el documento final de la Convención, '*Propuesta de la Constitución Política de Chile*, que fue Rechazada con 62% y un 38% del Apruebo. En una votación obligatoria e inscripción automática

El gran triunfo de la derecha que lidero la campaña por el Rechazo se basó en una crítica agresiva, a convencionales, a la convención durante sus meses de trabajo y al documento mismo. Aprovechó ciertos errores que fueron magnificados y con falsedades presentes y futuras. Por señalar una, se criticó que se postulara que Chile era un Estado plurinacional. En sí mismo se rechazaba, porque solo el 10% de la población pertenecía a los pueblos originarios y Chile es muy racista. Adicionalmente, se argumentaba que el país se podría dividir

El triunfo del *Rechazo* fue utilizado por la derecha, como una derrota del gobierno de Boric y de su Programa de Transformaciones. Junto a esto, se agregó la crítica al gobierno de no enfrentar la agudización de la violencia, del narcotráfico y la masiva llegada de migrantes. Estos problemas se han incrementado a partir de gobiernos anteriores. Por ejemplo, la *Visa Democrática* de Piñera y el incentivo a las migraciones provenientes de Venezuela.

El Gobierno de Boric propuso al Congreso continuar con el cambio hacia una Nueva Constitución

Ante el fracaso de la Convención Constitucional, el gobierno propuso la continuación para el cambio de la Constitución de Pinochet y entregó al Congreso su conducción. Allí se acordó crear una *Comisión Experta* compuesta por 24 miembros, una *Comisión de Admisibilidad* compuesta por 14 juristas, y un *Consejo Constitucional* de 50 personas elegidas libremente por votación popular el 7 de mayo de 2023. Todos estos organismos serán paritarios.

La *Comisión Experta* deberá proponer al Consejo Constitucional un anteproyecto para una Nueva Constitución. El Consejo Constitucional discutirá el anteproyecto teniendo presente los 12 bordes constitucionales definidos por la Comisión de Admisibilidad.

La Elección de Consejeros Constitucionales el 7 de mayo de 2023

Las elecciones del 7 de mayo de 2023, con votación obligatoria e inscripción automática, como paradoja, fue un triunfo del Partido Republicano, –de ultra derecha–, que se opuso al proceso para una Nueva Constitución, planteando que se debería continuar con la Constitución de Pinochet. El Partido Republicano obtuvo el 35,4% de la votación eligiendo a 22 Convencionales, los otros Partidos de derecha, obtuvieron el 21,1% eligiendo 11 Consejeros Convencionales, y los partidos de gobierno obtuvieron 28,6% eligiendo 16 Convencionales. Entre votos nulos y blancos aproximadamente fueron 2,7 millones de personas, lo cual equivalente al 22% de la votación de 12, 5 millones de votantes.

El funcionamiento del Consejo Constitucional se iniciará el 7 de junio 2023, y se discutirá el anteproyecto para una Nueva Constitución elaborada por la Comisión Experta, y presentará su

anteproyecto de Nueva Constitución al Plebiscito del 17 de diciembre de 2023, en votación obligatoria e inscripción automática, que planteará dos alternativas: ‘A Favor’ o ‘En Contra’.

La derecha, que participó activamente en el proceso y el Partido Republicano que no participó, tienen una amplia mayoría. El Partido Republicano ha manifestado que participará en el proceso para la Nueva Constitución, que en realidad es probable que no sea muy diferente a la Constitución de la Dictadura de Pinochet.

José Antonio Kats creó el Partido Republicano del cual es el líder absoluto. Es admirador de Trump, de Bolsonaro y de la ultra derecha de Europa. En última elección presidencial obtuvo la primera mayoría en primera vuelta y en segunda vuelta disputó la presidencia con Boric.

El trabajo de la ‘*Comisión de Expertos*’ ya está influido por Kats. El Consejo Constitucional, estará influido por Kats, quien vinculará la recepción de los resultados por parte de la ciudadanía, con sus aspiraciones de lograr la Presidencia de la República en las próximas elecciones presidenciales. El Partido Republicano difícilmente podrá oponerse a una Nueva Constitución. Sin embargo, los cambios serán menores permaneciendo en lo fundamental, la Constitución de Pinochet. El Partido Republicano y los otros partidos de derecha propondrán algunos cambios menores y otros cambios importantes que podrían anular con interpretaciones o legislaciones posteriores (Gatopardismo).

Para concluir

Las ‘Siete Modernizaciones’, bases del Neoliberalismo y de la Constitución de Pinochet de 1980, fueron implementadas y profundizadas con nuevas privatizaciones y desnacionalizaciones del cobre, agua, concesiones de infraestructura etc. por los gobiernos de la Concertación: Democracia Cristiana DC., Partido Socialista PS y Partido por la Democracia, PPD –creado por Ricardo Lagos.

Durante la dictadura estos partidos fueron críticos del neoliberalismo que fue impuesto por las armas. Según Fontaine Talavera este es el pecado original del neoliberalismo en Chile que será redimido cuando las fuerzas políticas opositoras lo acepten y lo administren

En los primeros años de la Concertación, junto con la continuación del elevado crecimiento, desmovilizaron los movimientos sociales a través de los medios de comunicación y del poder de las elites políticas, tanto de los partidos de derecha, como de los de la Concertación. Se valoraron y aceptaron socialmente los principios básicos del neoliberalismo: se valoró la 'libertad de elegir', la propiedad privada, el mercado y la competencia a todo nivel, que se expresó en un cambio en que predomina el individualismo.

Este profundo '*cambio cultural*' se ha ido desarrollando hasta la actualidad, –2023– manifestándose de diferentes formas: en la clase empresarial y en la derecha chilena se ha profundizado el neoliberalismo, en las clases medias los fundamentos del neoliberalismo han permeado crecientemente, y, sin embargo, se comprometen con algunas reivindicaciones sociales. En los sectores populares, los fundamentos del neoliberalismo están presentes, pero en permanente confrontación con los problemas objetivos de existencia, por ejemplo, no tienen la '*libertad de elegir*' el tipo de trabajo, la educación de sus hijos, la solución a problemas de salud, entre otros.

El primer gobierno de Bachelet, 2006-2010, fue el último gobierno de la Concertación. Posibilitó el triunfo de la derecha con el primer gobierno de Piñera, 2010-2014, que facilitó el triunfo del segundo gobierno de Bachelet, 2014-2018, que estuvo apoyado por la Nueva Mayoría compuesto por la Concertación, más el Partido Comunista, gobierno que dio paso al segundo gobierno de Piñera, 2020-2022.

Todos los procesos electorarios anteriores y los recientes, los triunfos de la izquierda y de la derecha, el triunfo del Rechazo y el reciente triunfo del Partido Republicano, pensamos se explican por lo siguiente. Los partidos políticos tradicionales han disminuido fuertemente su militancia. Sin embargo, tanto los partidos de derecha como de izquierda mantienen una adhesión política en

las votaciones en torno a un tercio cada una. Las clases medias con fuerte aceptación de los fundamentos del Neoliberalismo –libertad de elegir, mercado, propiedad privada y competencia–, constituyen el otro tercio que políticamente apoyan aquellas reivindicaciones o preocupaciones más inmediatas. Por ejemplo, apoyaron las reivindicaciones del Estallido Social y, posteriormente, apoyan preocupaciones por la violencia, el narco tráfico, las migraciones, la inseguridad económica y la inseguridad física personal en sus casas, en sus barrios y comunas. Es, en este sentido, que se podría explicar el *‘péndulo eleccionario’* mencionado por el presidente Boric.

El Presidente Boric se enfrenta a una oposición de derecha mayoritaria en el Congreso, oposición que se incrementa por algunos sectores de los partidos de la ex Concertación, y de otros parlamentarios que rechazaron luego de una larga tramitación la Reforma Tributaria, que era fundamental para financiar las demandas sociales de previsión, salud, vivienda, y el terminar con la deuda estudiantil del CAE.

Sin embargo, el gobierno ha logrado que se apruebe la disminución de la Jornada de Trabajo de 45 a 40 horas en forma escalonada en un número reducido de años; también ha logrado aumentar el Salario Mínimo a \$500.000 mensuales –aproximadamente US\$ 625–; ha logrado aprobar el Royalty Minero; ha logrado el copago cero para prestaciones en salud para 680.000 personas; está bajando la Canasta Básica de Alimentos; y hay pago efectivo de Pensión de Alimentos, entre otros logros. Uno de los hechos más recientes y significativos, del gobierno de Boric que ha decidido que el Estado Chileno asuma el control de la explotación y elaboración del litio y la creación de la Empresa Nacional del Litio

Es muy difícil que se puedan cumplir las principales transformaciones comprometidas, la oposición no es solo mayoritaria, además es muy agresiva y con fuertes alianzas con las organizaciones empresariales y con los medios de comunicación: radio, televisión, redes sociales, y muy especialmente con el diario El Mercurio, sus Editoriales, sus páginas y TV online. Por su parte, el gobierno y los

partidos no han llamado a movilizaciones populares que apoyen el Programa de Gobierno.

Es en estas condiciones afirmaciones que tenían cierta certeza en sectores importantes de la sociedad quedan en la incertidumbre. El propio Presidente Boric, que tenía presente el Estallido Social y el fin de la Constitución de Pinochet, afirmó que si Chile fue la cuna del Neoliberalismo, también será su tumba.

Bibliografía

- Caputo, Orlando y Galarce (2023). *Salvador Allende. El Tránsito Pacífico del Capitalismo al Socialismo en Chile. 1970-1973*. Este documento que se publicará en este libro es un resumen de nuestro documento "La Unidad Popular: La Economía en el Gobierno de Allende 1970-1973" que se publicó como capítulo del libro colectivo en inglés y castellano, "An Economic History of Chile", editado por Manuel Llorca-Jaña y Rory Miller.
- De Castro, Sergio, et al. (1992). *El Ladrillo. Bases de Política Económica y el Presidente Pinochet*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos.
- Fernandois, Joaquín. (2007). Modernización, Desarrollo, Dictadura: el papel de Sergio De Castro. *Estudios Públicos*, 108.
- Fontaine Aldunate, Arturo. (1988). *Los Economistas y el Presidente Pinochet*. Santiago de Chile: Editorial Ziz-Zag.
- Fontaine Talavera, Arturo. (1992). El Pecado original de la Transformación Capitalista Chilena. En Barry B. Levine (ed.), *El Desafío Neoliberal. El Fin del Tercer Mundismo en América Latina*. Colombia: Editorial Norma.
- Fuentes, Carola (dir). (2015). *Chicago Boys*.
- Friedman, Milton (1975). *Bases para un Desarrollo Económico. Conferencia del 26 de marzo de 1975*. Santiago de Chile: Fundación de Estudios Económicos y Banco Hipotecario.

- Galarce, Graciela (2010). La Propaganda Engañosa Sobre Chile. Agotamiento Relativo del Capitalismo Neoliberal. En Jairo Estrada Álvarez (coord.), *La Crisis Capitalista Mundial y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- (2021). *Chile: 'Punto Cuarto' de Estados Unidos 1949, Neoliberalismo y los Chicago Boys*. Presentado en Seminario de la REDEM del GT "Economía Mundial y Crisis", de CLACSO. Septiembre 2021. Por publicarse en libro del Seminario. Una versión se publicó en Boletín 12, Centro de Pensamiento Pedro Paz, en noviembre de 2021.
- Gálvez, Recaegro y Kremerman, Marco (2021). *Pensiones bajo el mínimo*. Chile: Fundación Sol.
- Kremerman, Marco y Durán Gonzalo (2017). *Pobreza y la fragilidad del modelo chileno*. Chile: Fundación Sol.
- López, Ramón; Benavides, Figueroa, Eugenio y Gutiérrez C. Pablo (2013). *La parte del León: Nuevas estimaciones de participación de los super ricos en Chile*. Santiago de Chile: Serie de documentos de Trabajo 379, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
- Meller, Patricio (1996). *Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990)*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- Piñera José (1979). *Las Siete Modernizaciones*. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos.
- Truman, Harry (2009 [1949]). Harry Truman, Inaugural Address. <https://www.bartley.com/124/press53.html>.
- Valdés, Juan Gabriel (2020). *Los Economistas de Pinochet y La Escuela de Chicago en Chile*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- Verplaetse, Julián G. (1950). El Punto Cuarto del Presidente Truman. *Cuadernos de estudios africanos*, 9. Dialnet-ElPuntoCuatroRumboASurealizaciónSectorOrienteMedio-2496707.pdf
- Uribe, Armando (2011 [2002]). Carta Abierta a Agustín Edwards. Santiago de Chile: LOM.

Chile: el fracaso de la propuesta constituyente y la derrota del bloque histórico progresista¹

Cristian Jamett Pizarro

Presentación

Nos proponemos aquí llevar a cabo un análisis concreto del Estado y sus crisis en América Latina; específicamente del caso chileno en el último lustro, el cual concluyó con una derrota histórica del movimiento popular en el inédito proceso constituyente en septiembre del 2022. Para comprender aquello, es necesario considerar la serie de herencias y tradiciones político-culturales vigentes del proyecto estatal que se originó en la dictadura, es decir, neoliberal en lo económico, pero conservador en lo político-cultural a nivel de sociedad política, pero también presente en la propia sociedad civil. Pues, si bien, lo sujetos hace su propia historia “no la hacen a su libre arbitrio, bajo

¹ Esta publicación es resultado de una investigación sobre el último ciclo constituyente chileno (2019-2022), en el marco del proyecto titulado PAPIIT IN307719 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM titulado “Las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina, perspectivas teóricas y estudios concretos”, a cargo del Dr. Lucio Oliver Costilla

circunstancias elegidas por ellos mismo, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 1852/2000:2).

La propuesta teórica de Antonio Gramsci nos parece ser la más apropiada para entender esta compleja relación entre lo histórico-estatal, el gran capital, lo político-cultural, la sociedad civil y el movimiento popular. Gramsci propone entender el Estado de forma integral, donde “entran elementos que deben reconducirse a la noción de sociedad civil (en el sentido, podría decirse que Estado = sociedad política + sociedad civil” (C 6 §88, 76). Entonces, por Estado debe entenderse además del aparato gubernamental el aparato “privado” de hegemonía o sociedad civil” (C6 §137, 105).

Una consecuencia de la compleja y estrecha imbricación entre Estado y sociedad civil es que esta última no es únicamente un espacio progresista de mayor libertad para emprender una disputa por la hegemonía civil desde los sectores subalternos, también es un espacio vinculado a la fuerzas conservadoras que intentan restaurar el orden amenazado logrando nuevas y mejores articulaciones entre economía, política, ideología y una sociedad civil subalterna a la dominación estatal. Por ello, resultará políticamente estratégico que la conducción hegemónica, o sea, intelectual y moral de las mayorías nacionales, logre estar “acorazada de coerción” estatal (C 6 §88, 76) y que permita consolidar, reproducir o imponer el consentimiento.

Nuestra hipótesis fundamental es que, a partir de la década del dos mil, comenzó a evidenciarse en Chile una crisis orgánica del Estado heredado de la dictadura, la cual se expresó política y culturalmente, en otro aspectos, en la pérdida de unificación y liderazgo del bloque-histórico partidario vinculado a las clases dominantes conformado en los inicios de la transición a la democracia, y que se expresó en el pacto estatal entre las fuerzas políticas asociadas al régimen autoritario y las de oposición.

Uno de los hitos relevantes en el desarrollo de la crisis fue la irrupción que impactó en la capacidad hegemónica de este bloque fue el movimiento secundario del 2006 y su demanda de terminar con las leyes de amarre de la dictadura en materia educacional y el movimiento universitario del 2011 en torno a la demanda de gratuidad como derecho universal garantizado para toda población, la cual tuvo un impacto aún mayor, concitando un muy amplio apoyo de la sociedad civil. Contexto, donde los estudiantes universitarios asumieron provisoriamente un nuevo liderazgo mesocrático (Canales, 2022), con la capacidad de interpretar el sentir común de malestar de las clases populares y medias y de una nueva clase popular-intermediaria en formación (Martuccelli, 2021), para derivar en el inicio de un embrionario e incipiente proceso de articulación un nuevo bloque histórico partidario progresista en Chile, donde se va produciendo una nueva relación entre dirigentes y dirigidos, intelectualidad orgánica y mayorías nacionales en tanto “sentido pasión coherente”, pues el “elemento popular siente, pero siempre comprende o sabe; el elemento intelectual `sabe´, pero no siempre comprende o `siente´ (Gramsci, C 11, § 67 y 164).

El triunfo del rechazo con un 61,86% a la Nueva Propuesta Constitucional (NPC) en el plebiscito de salida del proceso constituyente de septiembre del 2022, como punto de cierre de este proceso que se iniciara el 2011, y más allá de la significa manipulación política y mediática de los sectores de centro y de la derecha chilena, demostró también los límites estructurales, estratégicos y hegemónicos de este nuevo bloque histórico-partidario en formación, en términos de no dar cuenta de las herencias estatales para emprender un nuevo proyecto constitucional, a partir de mantener y profundizar una relación fluida y permanente con el sentir común de las grandes mayorías no militantes o adherentes a alguna causa específicas de un partido, o movimientos sociales emergentes presentes en la convención constitucional.

Crisis Orgánica del Estado Neoliberal y el desafío para la consolidación de nuevo bloque histórico progresista.

El proyecto histórico estatal de las clases dominantes en Chile, a partir del proceso de restauración capitalista iniciado en 1973, derivó en un programa de transformaciones en torno un ideario ultra-liberal en lo económico, pero con fuertes herencias conservadoras en lo valórico y cultural, elitista en lo político, estamentalista en lo social y étnico, patriarcal en las relaciones de género, así como centralista en términos políticos-administrativos sobre un territorio unitario delimitado (Jamett, 2018).

Además, este proyecto estatal consagró un modelo de crecimiento económico de carácter rentista-exportador de recursos agrícolas, mineros y marinos, como consolidación de la determinación externa de una economía dependiente a los centros globales, apostando para ello a la “reprimarización, desindustrialización y tercerización de la economía, con foco en la promoción activa de las exportaciones, la actividad financiera y los servicios” (Solimano cit. por Ruiz, 2015, p. 17). Donde los sectores dominantes nacionales y transnacionales capturaron la mayoría del excedente producido.

Uno de los factores estructurales que daban sustento al consentimiento de los sectores subalterno a este modelo, se encontraba en la promesa de acceder a la modernización capitalista-neoliberal mediante la movilidad social de los sectores medios y populares, fundamentalmente de los sectores juveniles a partir del acceso a la educación superior, muchos de los cuales primera generación en ingresar a la universidad (Martuccelli, 2021; Canales, 2022; Ruiz y Bocardo, 2013; Ruiz 2021). Donde sus modos “de distinción social se vinculan a las credenciales educacionales que detentan, a sus ingresos y a niveles de consumo elevados, así como a unas inéditas posiciones de estatus y confort que contrastan con las historias de vida de sus padres” (Ruiz y Boccardo, cit. por Ruiz, 2022, p. 19).

El choque directo entre esta promesa de bienestar y las características del modelo económico rentista-exportador, —que no

necesita incorporar a la totalidad de la masa laboral y al crecimiento exponencial de la masa profesional especializada—. Así como el carácter estamentalista e impermeable de los lugares en que se forma la élite económica, social y cultural, junto al sobreendeudamiento de los sectores populares y medios para acceder a estos bienes públicos privatizados, terminaron por producir una crisis de expectativas socioeconómicas y culturales no satisfechas, a pesar del esfuerzo personal depositado, transitando de la esperanza neoliberal a la experiencia de “vida dura” compartida entre las mayorías nacionales (Martuccelli, 2021).

El “mal-estar” entre la posición que se ocupa en la estructura social y las expectativas socioculturales, que durante un largo periodo se fue viviendo pasivamente de forma personal o familiar, dio paso a una sensación de “frustración colectiva” del sentir común de las grandes mayorías nacionales en una condición disponibilidad para la acción colectiva, como expresión de una “crisis del sujeto y del cotidiano popular formado bajo el régimen neoliberal” (Canales, 2022, p. 149), y que se traduciría en un:

conjunto plural de cuestionamientos a medida que creció la toma de conciencia de que el modelo no daba (y para muchos, no podía dar) lo que había prometido [...] el gran boom de bienestar vivido desigualmente por los chilenos durante lustros empezó dar signos de fatiga. Se fue haciendo más evidente para grupos crecientes de la población que el acceso a la educación no era una garantía de un acceso a empleos bien remunerados. La exigüidad de las pensiones otorgadas por las AFP [...] amargó a muchos e hizo pensar a varios otros que el sistema estaba viciado en su base (Martuccelli, 2021, p. 14).

En este sentido, dicho periodo se caracterizaría por una implosión material y cultural del propio modelo, donde el bloque dominante transitoriamente “ha perdido el consenso, o sea, si no es ya “dirigente” (Gramsci, C 11, §34, 37), expresándose en la conformación una

nueva subjetivación política de sectores medios precarizados y populares, y que, progresivamente derivó en una auto-conciencia que: “no era yo, el individuo, era la posición de clase socio-económica; no eran los méritos y las fallas del héroe del relato los que organizaban el cuento, sino como en las antiguas leyendas sociales, el poder socio-económico, <<las lucas>> y su regla diferenciadora de siempre” (Canales, 2022, p. 161).

Neoliberalismo que, además, transformó la estructura social a partir de la “creciente similitud de experiencias” en torno a dos grandes clases sociales o fundamentales, donde:

la parte <<baja>> (en realidad intermedia) de la estructura social (el desdibujamiento de las fronteras entre clases medios tradicionales y los viejos sectores populares) contrasta fuertemente con lo que se produce en la clase <<alta>>, en donde los sectores acomodados acrecientan las diferencias a nivel de sus experiencias de vida, ingresos económicos, protecciones estatutarias y seguridad con respecto a lo que denominó las clases medias tradicionales (Martucelli, 2021, p.16).

Sectores populares y medios empobrecidos que dieron forma a clases populares-intermediarias, así como en otros países de América Latina bajo el dominio neoliberalismo y la hegemonía rentista-extractivista, en los cuales, si bien pueden caracterizarse por una disminución de la exclusión, no necesariamente significaría “un avance en términos concretos de igualdad, en tanto las bases estructurales de las iniquidades persistentes se mantuvieron en gran medida inalteradas” (Benza y Kressler, 2021, p. 9)

En sentido, las clases populares-intermediarias agrupan a un nuevo segmento social, aunque sin abandonar necesariamente la auto-identificación como clase media (Mayol, Azocar y Azocar, 2013), se caracterizan por ser:

altamente heterogéneo en su composición, constituido por trabajadores formales, independiente o informales; técnicos, empleados u obreros, dotado de horizontes y experiencias posicionales cada vez más similares. Un grupo marcado también por un importante clivaje etario (los jóvenes tienen masivamente más años de estudios que los mayores) y una significativa y plural feminización (a nivel de los valores, participación en el empleo, las demandas sociales) (Martuccelli, 2021, p. 19).

Esta precarización de las clases medias y el estancamiento de los sectores populares que, en el caso chileno, permitió a una serie de movimientos juveniles vinculados a las clases medias estudiantiles, la posibilidad de transformarse a partir del 2011 en una nueva síntesis connotada de la sociedad civil, capaz de interpretar esta frustración colectiva de promesas de movilidad social no cumplidas por la clase dominante en la dimensión educacional, a partir de demandas como el “el fin a la Loce” de la dictadura, el “fin lucro en la educación” con recursos del Estado y, sobre todo, la “gratuidad universitaria universal” que incluyera a los estudiantes de las universidades privadas de masas, las cuales concentran el 80% de la matrícula en educación superior (Jamett, 2018).

El tránsito político-cultural de los movimientos sociales estudiantiles, desde un momento económico-corporativo característico de la década del noventa de más crédito universitario a uno ético-político como derecho a tener derechos, fue acompañado de forma paralela por un nuevo proceso político-cultural similar en una serie de sectores y movimientos sociales con un importante potencia histórico-crítica y elaborados sistemas ideológicos vinculados al feminismo, las disidencias sexuales, ambientales y pueblos originarios, entre otros. Disputando con éxito el monopolio de los contenidos gerencistas, clientelares y verticalistas de la sociedad civil neoliberal/neoconservadora de la década de noventa y comienzos del dos mil (Nogueira, 2004).

Reconfiguración de la sociedad civil que ubicará a los movimientos sociales como nuevos actores centrales de la disputa política-cultural, en tanto nuevos “termómetros de la sociedad visibilizando los principales conflictos, las inquietudes y los límites tanto de las formas de dominación como de diversos pactos culturales y sociopolíticos”, y que “disputan los sentidos cognitivos y políticos a través de batallas materiales y simbólicas en la que generan mitos, inventan símbolos, crean discursos e identidades, forjan concepciones de mundo y movilizan recursos y energía social” (Bringel, 2020, p. 210).

Cuyas demandas sociales, desde el 2011 en adelante, terminaran por transformar el sistema político de la transición a la democracia con la conformación de la alianza denominada “Nueva Mayoría”, reuniendo por primer vez en la historia política nacional a la Democracia Cristiana y al Partido Comunista en torno a un programa de corte progresista, como intento fallido de procesar institucionalmente las nuevas demandas de la sociedad civil y recuperar así su rol dirigente, producto de la crisis programática interna de la alianza y el tránsito autónomo de la lucha social a la fundación de nuevos partidos como es el caso de Revolución Democrática, Convergencia social, Comunes, Libertario, entre otros, dando forma a un Frente Amplio con representación parlamentaria propia.

Este proceso de emergencia partidaria de ciertos sectores desde la sociedad civil, expresó una articulación de sentido entre esta nueva intelectualidad orgánica vinculada a la dirigencias políticas y sociales progresistas y ciertos sectores medios, populares e intermediarios de la sociedad, en torno a demandas socioeconómicas y liberales en lo valórico que no podían ser satisfechas por el viejo pacto de la transición a la democracia, gestando de forma todavía embrionaria un nuevo bloque histórico-partidario progresista en Chile como se demostrara en la serie de conquistas sociales, culturales y políticas-electorales durante el ciclo 2011-2020, y que tuvo su mayor expresión en el inicio de un proceso constituyente, donde el 78,28% de la población optó por una nueva constitución y un 79% que fuera de íntegramente ciudadana sin participación del parlamento, para que,

finalmente en las elecciones de los convencionales de mayo del 2021, de los 155 escaños disponibles, quedara compuesta por 37 representantes de la derecha (Vamos Chile), 28 de la lista apruebo dignidad (pacto Frente Amplio y Partido comunista), 26 de la lista del pueblo (vinculado a figuras del estallido social del 2019), 25 de la lista del apruebo (ex Nueva Mayoría), 11 de la lista Independientes por una nueva constitución (vinculado a profesionales de clases medias progresistas), 11 independientes (dirigentes locales) y 17 representantes de los distintos pueblos originarios. Donde el 64% del total correspondió a progresistas independientes a alguna militancia partidaria que apostaban por un cambio sistémico (CIPER, 2021).

Composición sociopolítica de la convención que permitió a una serie de sectores sociales y políticos vinculados a movimientos sociales, grupos de presión, ONGs, partidos de izquierda y progresistas, entre otros, desplegar sus agendas y programas particulares (Baradit, 2022), fundamentalmente desde una perspectiva cosmopolita negativa, es decir, una serie de agendas y trayectorias insuficientemente articuladas la dimensión nacional-popular (Durante, 2022) para, en cambio, a partir de una serie de experiencias internacionales exitosas intentar resolver los problemas nacionales, como sucediera con el caso de la plurinacionalidad en la nueva propuesta constitucional, entre otras expresiones.

Todas sensibilidades que se articularon en torno a una cultura política que Hobsawm (1996) caracteriza como política de identidad personal o colectiva, las cuales, quedaron insuficientemente articuladas a vistas de la mayorías nacionales con las demandas socioeconómicas y redistributivas del excedente estatal, el cual en última instancia fue uno de los ejes centrales de la crisis orgánica del Estado neoliberal durante el último ciclo sociopolítico, como lo establece el Centro Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) respecto a que durante periodo 2009-2018 se produjeron 15.455 acciones de protesta en torno a “cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica”.

En este sentido, Canales (2022) señala con claridad que “los avances constituyentes son extraordinarios, pero no son las prioridades de octubre. No logro entender por qué los derechos económicos y sociales se dejan para el final del proceso”. Para posteriormente concluir que: “El tema no es que se hayan pasado tres pueblos, el tema es que se equivocaron de pueblo, se fueron para otro lado. Desarrollaron a plenitud la agenda de propuestas ideológicas. Por eso que el rechazo también vence ahí, porque el rechazo es ideológicamente vacío, mudo. Y el pueblo es ideológicamente difuso y contradictorio e ideológicamente, como toda formación socio cultural, incoherente, ambivalente”.

Este divorcio entre los representantes progresistas en la convención y las mayorías nacionales, puede explicarse por el hecho de que uno de los factores explicativos de la serie de estallidos sociales durante el ciclo 2011-2019, fueron descritos como una serie “despertares definitivos” de la sociedad contra el neoliberalismo. Limitando con ello el momento catártico definido por Gramsci, al reducirlo al tránsito histórico de los sectores más organizados de la sociedad y no al salto colectivo de las grandes mayorías nacionales desde la necesidad a la libertad, de objetivo a lo subjetivo, de lo particular a lo universal, como paso de “lo económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político, o sea la elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres” (C 10 § 6 y 142).

La opción hegemónica y orgánica de este nuevo bloque histórico, por y desde los movimientos sociales, como representantes genuinos y exclusivos del malestar de las grandes mayorías nacionales, cuyas disímiles demandas podían ser articuladas desde una lógica neopopulista (Laclau, 2009), significó una apuesta por comprender a la sociedad civil y el sentir común de las grandes mayorías nacionales bajo un prisma progresista y emancipado de la herencias conservadoras, tradicionalista y neoliberales, debilitando la necesidad de una permanente disputa político-pedagógica en y por la sociedad civil frente la serie bastiones neoliberales y conservadores, todavía vigentes como es el caso de los duopolios comunicacionales, iglesias

conservadoras, universidades tradicionales y privadas, fundaciones y centros de pensamientos vinculados a partidos de derecha y gremios empresariales, entre otras expresiones, así como el peso institucional de la vieja sociedad política como fuera el caso del senado de la república, quienes se articularon en torno a una matriz de opinión desfavorable a la propuesta constitucional.

En este sentido, con el triunfo del rechazo al plebiscito de salida a la nueva propuesta constitucional, evidenció que la “articulación de sentido” desarrollada durante el último ciclo 2011-2022 no fue acompañada de una propuesta de “cultura superior” más allá de articulación neopopulista de demandas sociales, en tanto “vasto movimiento cultural que abrace al hombre total” (Gramsci, C4, §3, y135) que pudiera inspirar un cambio en la culturas políticas y económicas de los sectores no organizados, que vaya desde una orientación aspiracionista a otra de índole más cooperativa.

Además, el rechazo a la propuesta constitucional puso también en evidencia la persistencia de fuertes sentimientos nacionales, que parecían haber quedado en un segundo plano. En efecto, la idea de un estado plurinacional, contenida en el borrador constitucional, suscitó amplio rechazo en una población mayoritariamente de origen mestiza (Salazar y Pinto, 2014) e incluso en varias regiones con alta presencia originaria, las que a pesar de haber sido víctimas del colonialismo interno (González Casanova, 2017), no necesariamente están dispuestas a sacrificar su identidad nacional unitaria. Y, por último, la vigencia de una importante tradición autoritaria como cultura política, que les impidió a las mayorías valorar positivamente una nueva propuesta constitucional por el sólo hecho de haber sido elaborada por primera vez en la historia de forma democrática, paritaria, independiente a los partidos y plurinacional.

La derrota del movimiento popular y del proceso de coagulación de un nuevo bloque histórico partidario progresista en Chile se termina de consolidar con el nuevo pacto oligárquico denominado “Acuerdo por Chile” de diciembre del 2022, el cual fuera firmado por la totalidad de los partidos con representación parlamentaria en el

marco de una izquierda moderada y una derecha radicalizada como expresión de la nueva polarización política en Sudamérica (Dvoskin, 2022), y que constituye “un intento de reafirmación de la democracia parlamentaria y partidaria” como forma de contender la autodeterminación democrática de las grandes mayorías, y por ello, en este nuevo ciclo “asistimos a la reestructuración oligárquica del sistema político, cuyos pilares son los partidos políticos y el parlamento, en forma muy similar a lo ocurrido bajo los gobiernos de la concertación” (Jamett y Vergara, 2023).

Conclusión

El rechazo mayoritario a la Nueva Propuesta Constitucional, no significó solamente una derrota para los sectores y movimientos representados en la convención y los electores que la aprobaron, sino del proceso histórico de conformación previo de un incipiente bloque en su tarea histórica de transformación estatal; demostrando con ello sus limitaciones políticas, orgánicas y estratégicas, y que se expresara en que finalmente la cultura-política de las grandes mayorías nacionales no acompañó la propuesta político-cultural progresista de la nueva constitución.

En otras palabras, faltó una articulación intelectual y moral entre este nuevo progresismo, las herencias de estatales, y con la frustración colectiva como connotación del sentir común popular que se expresara con fuerza durante la coyuntura del 2019, desde donde se produjera un permanente aprendizaje y desarrollo político-cultural mutuo con miras a la superación del sentido común heredado. El progresismo, como perspectiva moral-intelectual, demostró ser portadora de un importante elitismo intelectual y arribismo socio-cultural, respecto a las concepciones, tradiciones, anhelos, mitos y gustos de las mayorías ciudadanas, en especial de los sectores populares. Limitando una relación dialéctica a los partidos emergentes

y los sectores progresistas de la sociedad civil, como es el caso de movimientos sociales y la serie de ONGs que se consolidaron durante el ciclo 2011-2022, cuyas demandas sociales, agendas y sistemas ideológicos específicos podían ser articulados transitoriamente desde una estrategia neopopulista, por ello, una vez representadas en la convención, cada sector termina por desplegar una política de la identidad particular en desmedro de una propuesta universal-popular unificadora.

Los sectores conservadores fueron más exitosos a la hora disputar el sentir común de los sectores sociales urbanos y rurales que no necesariamente se encontraban vinculadas a alguna organización progresista de la sociedad civil y política, a partir de la apelación a la herencia estatal-unitaria del siglo XIX y de la nación como comunidad imaginada; el miedo a perder la pequeña propiedad privada alcanza y la promoción de la cultura emprendedora de los sectores medios, intermediarios y populares, la cual se consolidada como estrategia de supervivencia después de la crisis económica de la pandemia del 2020-2022.

El reposicionamiento de la alianza neoliberal-conservadora y de las clases dominantes reconfiguró el sistema político, termina con el momento constituyente popular para instalar nuevamente a los partidos y al parlamento como las tradicionales mediaciones estatales a partir del nuevo pacto oligárquico que da inicio a un nuevo proceso constitucional limitado, con bordes económicos y políticos predefinidos y supervisado por una comisión de expertos designados por la clase política.

Este acuerdo por arriba, si bien logrará un margen de gobernabilidad para el actual gobierno progresista, se encuentra distante de resolver la profunda crisis entre política y sociedad, o sea orgánica del Estado integral, si consideramos que los partidos y el poder legislativo son dos de las instancias con menor credibilidad entre la población, por lo que se mantendrán las condiciones para reeditar una crisis orgánica en un mediano plazo si no logra el consenso de las mayorías nacionales.

Nuevo ciclo histórico que obliga una profunda reforma del sentido común del progresismo y la izquierda chilena con el objeto de darle continuidad al proceso de formación de su bloque histórico-partidario previo, y proyectar nuevamente sus fuerzas en un sentido de acumulación social y política con perspectiva histórica a partir de un nuevo proyecto nacional-popular universalizante, capaz de articular las diversas demandas de las identidades personales y colectivas con las demandas materiales y culturales de las clases populares e intermediarias, y donde los instrumentos partidarios y movimientos sociales no sustituyan la voluntad y concepciones de las grandes mayorías nacionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, Benedict (2007). *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Baradit, J. (2022). *La constituyente, Historia secreta de Chile*. Santiago de Chile: Sudamericana.
- Benza, Gabriela y Kessler, Gabriel (2021). *La ¿nueva? estructura social de América Latina*. Argentina: Siglo XXI.
- Bringel, Beno (2020) Movimientos sociales y realidad latinoamericana: una lectura histórico-teórica. En Estaban Torres (ed.) *Hacia la renovación de la teoría social latinoamericana*. Buenos Aires: CLACSO.
- Canales, Manuel (2022). *La pregunta por octubre, fundación, apogeo y crisis del Chile neoliberal*. Santiago de Chile: LOM.
- Durante, Lena (2022). Cosmopolismo. En Guido Liguori, Massimo Modonesi y Pasquale Voza (eds.), *Diccionario Gramsciano*. Italia: UNICAPress y Ricerca.
- González Casanova, Pablo. (2017). *Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina*. España: Akal e Inter Pares.
- Gramsci, Antonio (1999). *Los cuadernos de la cárcel*, Tomo 5. Puebla: Ediciones Era.
- (2001). *Los cuadernos de la cárcel*, Tomo 4. Puebla: Ediciones Era.
- Hobsbawm, Eric (1996). La izquierda y la política de la identidad. *New Left Review*. <<https://newleftreview.es/issues/0/articles/eric-hobsbawm-la-izquierda-y-la-politica-de-la-identidad.pdf>>
- Jamett, Cristian (2018). *Alcances y límites histórico-críticos del movimiento estudiantil chileno durante la coyuntura del 2011: El caso de la confederación de estudiantes de Chile (CONFECH) en un contexto neoconservador* [Tesis de Doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/alcances-y-limites-historico-criticos-del-movimiento-estudiantil-chileno-durante-la-coyuntura-del-2011-el-caso-de-la-c-74947?c=oxkP07&d=true&q=*&i=2&v=1&t=search_0&as=0

- Laclau, Ernesto (2009). *La razón populista*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Martuccelli, Danilo (2021). *El estallido social en clave latinoamericana*. Santiago de Chile: LOM.
- Massardo, Jaime (2012). *Gramsci en Chile*. Santiago de Chile: LOM.
- Mayol, Alberto; Azócar, Carla y Azócar, Carlos (2013). *El Chile profundo, modelos culturales de la desigualdad y sus resistencias*. Santiago de Chile: Liberalia.
- Ruiz, Carlos (2015). *De nuevo la sociedad*. Santiago de Chile: LOM.
- Ruiz, Carlos (2020). *Octubre chileno, la irrupción de un nuevo pueblo*. Santiago de Chile: Taurus.
- Salazar, Gabriel y Pinto, Julio (2014). *Historia contemporánea de Chile*, Tomo I. Santiago de Chile: LOM.

Columnas de opinión y entrevistas en sitios electrónicos

- Marín, Palo (22 de mayo de 2022). Los avances constituyentes son extraordinarios pero no son la prioridades de octubre. Entrevista a Manuel Canales. *El espectador*. <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/manuel-canales-sociologo-los-avances-constituyentes-son-extraordinarios-pero-no-son-las-prioridades-de-octubre/PSBID74SVFCPVHJU7XEMHDCKDI/>
- Romo, Samuel (13 de septiembre de 2022). No se pasaron tres pueblos sino que se equivocaron de pueblo”, Entrevista a Manuel Canales. *El desconcierto*. <<https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/09/13/manuel-canales-por-convencion-no-se-pasaron-tres-pueblos-sino-se-equivocaron-de-pueblo.html>

Dvoskin, Nicolás (6 de noviembre de 2022). La nueva polarización sudamericana: derechas extremas vs. Izquierdas moderadas. *El Destape*. <https://www.eldestapeweb.com/opinion/latinoamerica/la-nueva-polarizacion-sudamericana-derechas-extremas-vs-izquierdas-moderadas-2022116052>

Joingant, Alfredo y Baussare, Mauro (29 de octubre de 2019). Las raíces de la conflictividad y la radicalización de la protesta en Chile. *Ciperchile*. <https://www.ciperchile.cl/2019/10/29/las-raices-de-la-conflictividad-y-radicalizacion-de-la-protesta-en-chile-lo-que-sabemos-y-lo-que-no/>

Jamett, Cristian y Vergara, Jorge Iván (23 de febrero de 2023). El nuevo pacto oligárquico y partidario. *El mostrador*. <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2023/02/23/el-nuevo-pacto-oligarquico-y-partidario/>

Massai, Nicolás y Miranda, Benjamín (17 de mayo de 2021). La mitad de la convención: 77 constituyente electos provienen de listas que impulsan cambios radicales al sistema. *Ciperchile*. <https://www.ciperchile.cl/2021/05/17/la-mitad-de-la-convencion-77-constituyentes-electos-proviene-de-listas-que-impulsan-cambios-radicales-al-sistema/>

TERCERA PARTE:

ELITES INTELECTUALES,
DEPENDENCIA Y LÍMITES DEL
PROGRESISMO EN EL CONO SUR

Argentina en la encrucijada de las políticas neoliberales (1976-2023)

Gabriela Roffinelli

El neoliberalismo es una teoría de una realidad no existente, muy útil porque siendo una teoría de la no realidad permite legitimar cualquier elección pragmática de la gestión del capitalismo realmente existente. En ese sentido y en el «aire del tiempo», digo que el economista puro es al sistema y al poder capitalista, lo que es el brujo para el rey. ¿Cuál era su papel? El brujo tenía que adivinar lo que el rey quería hacer, después tenía que hacer cosas raras para decirle al rey lo que tenía que hacer, en realidad, lo que quería hacer, para dar así a la acción del rey legitimidad a los ojos del pueblo. En realidad, no es el brujo quien dicta al rey, sino el rey quien dicta al brujo, y el brujo legítima. El economista hace la misma cosa: es eficaz para el sistema si adivina qué es lo que el sistema necesita y lo legitima. Usa por otra parte, métodos similares por ejemplo el lenguaje incomprensible, etc.

Samir Amin

El ensayo neoliberal en América del Sur

Hacia fines de la década de 1960, se desató una gran crisis del sistema capitalista mundial. Las clases dominantes debieron enfrentar profundos problemas para contener el ascenso de la conflictividad social, la caída de la

rentabilidad y las altas tasas de inflación a nivel global¹. Desde 1968, se desató una crisis política que implicó una fuerte erosión de legitimidad del orden social capitalista. A partir de 1971, emergió la crisis de rentabilidad que, desde 1973, se agudizó con la suba de los precios del petróleo.

Ante la crisis, el capital financiero, la facción dominante del capital global², inició una fuerte contraofensiva por restablecer la tasa de beneficio y disciplinar a las clases asalariadas. De tal suerte que, a partir de los años ochenta, entre los distintos gobiernos de gran parte del mundo se impuso la agenda de reformas en materia de política monetaria, cambiaria, comercial,

¹ A inicios de la década de 1970, cayeron las tasas de beneficio, de inversión y de crecimiento a nivel global porque el capital sobreacumulado no lograba valorizarse efectivamente en la producción. Esto interrumpió o ralentizó el proceso de acumulación con el consiguiente cierre de actividades, de empresas, de destrucción de puestos de trabajo y de reducción del salario real a nivel global. Como explica Marx "Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios de producción-medios de trabajo y medios de subsistencia- que puedan actuar como capital, es decir que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación dado; pues la disminución de ese grado de explotación por debajo de un punto dado provoca perturbaciones y paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de capital" (Marx, 1991, p. 328). Sin embargo, por su profundidad y extensión en el tiempo, no se trata de una crisis cíclica más, sino de una crisis estructural del sistema capitalista mundial. En la actualidad, "el sistema está amenazado por una crisis profunda que tiene sus manifestaciones permanentes de estagnación relativa, de desempleo creciente, de pauperización, etc." (Amin, 2005, p. 7).

² El capital financiero constituye la fracción dominante del capital global y alude a las enormes masas de capital que, resultado de la concentración y centralización, obedecen a un mismo control ejercido a través de las finanzas. "El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no sólo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguros, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en los transportes, etc. Su característica principal es su financiarización. Con eso conviene comprender que el centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de beneficios ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras. Es una estrategia perseguida deliberadamente no por los bancos, sino por los grupos "financiarizados". Más aún, estos oligopolios no producen beneficios, sencillamente se apoderan de una renta de monopolio mediante inversiones financieras" (Amin, 2008, p. 7).

fiscal y laboral que imponía el capital financiero y justificaban sus propagandistas neoliberales³.

Previamente, esta agenda de reformas orientadas a sortear las dificultades de valorización de la economía capitalista mundial se ensayó en América Latina. Desde los años setenta, estas políticas económicas neoliberales formaron parte de la batería de condicionamientos que la estructura institucional de Bretton Woods (FMI, BM, OMC) impuso a los Estados latinoamericanos con el fin de acceder a las inversiones y al financiamiento externo. Es decir, el capital financiero global, a través de los organismos multilaterales de crédito, apuntó a determinar en los países dependientes el marco institucional y normativo (leyes laborales, impositivas, comerciales, financieras, privatizaciones de empresas públicas, etc.) que garantizara “su libre” acceso a los mercados locales. En palabras de Ruy Mauro Marini se trató de reorganizar una nueva división del trabajo global:

Hoy, como ayer, Estados Unidos está interesado en restablecer las bases de una división internacional del trabajo que permita la circulación plena de mercancías y capitales. La presión que ejerce sobre los países de América Latina va, pues, en el sentido de fomentar sus exportaciones, lo que implica en mayor o menor grado una reconversión productiva que no sólo respete el principio de la especialización según las ventajas comparativas, sino que abra mayor espacio al libre juego del capital, reduciendo la capacidad intervencionista del Estado. En la perspectiva de ese proyecto neoliberal, comienza a diseñarse el futuro que el capitalismo internacional reserva a la región: una América Latina

³ En 1947, en la localidad suiza de Mont Pelerin, un grupo de economistas, escritores y académicos, como Friedman, Hayek, Von Mises, Popper, Lippman, Salvador de Madariaga y muchos otros conformaron una asociación - “una suerte de franco-masonería neoliberal” - que buscó ejercer influencia en el ámbito político, económico y social mundial. Llevaron adelante una defensa a ultranza de un capitalismo libre de regulaciones frente a las ideas hegemónicas de la época, como el keynesianismo y el “ascenso del socialismo” (Anderson, 1997, p. 15).

integrada aún más estrechamente a la economía mundial, mediante su transformación en economía exportadora de nuevo tipo, es decir, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, refuncionalice su industria para volverla competitiva en el mercado exterior (Marini, 1985, pp. 4-5).

Es decir, el capital transnacional impuso en la región latinoamericana el despliegue de las reformas neoliberales con el propósito de readecuar el patrón de reproducción capitalista dependiente (reorientarlo en función de las exigencias del mercado mundial) e incrementar la explotación de la clase trabajadora en esos países; para ello necesitaron disolver las conquistas arrancadas durante décadas por la lucha de las y los trabajadores, como el acceso gratuito o subsidiado a los servicios sociales de salud, educación, vivienda, transporte, telecomunicaciones, etc. De este modo, la región contribuyó con el flujo de recursos a la superación de la crisis en los países centrales.

Las dictaduras cívico-militares de Chile (1973-1991), de Uruguay (1973-1985) y de Argentina (1976-1983) fueron las primeras que aplicaron estas políticas económicas que reestructuraron de raíz el proceso de acumulación capitalista periférico de la etapa anterior (1930-1973/6), centrado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y, de esta forma, profundizaron el carácter dependiente y subordinado de esas economías a los requerimientos de la acumulación capitalista global. Asimismo, la alianza social que representaban las dictaduras cívicas militares perseguía el objetivo político estratégico de asestar, con la liquidación de la ISI, un ataque letal contra el ascenso de las luchas revolucionarias en esos países.

En la década de 1980, entonces, las políticas liberalizadoras comenzaron a extenderse en los países capitalistas centrales, particularmente a partir de los gobiernos de Margaret Thatcher (1979-1990) en Gran Bretaña y de Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos. Aunque en cada país —central o periférico— el alcance de las

transformaciones económicas, sociales y políticas dependieron, en su intensidad y amplitud, de las relaciones de fuerza imperantes.

Posteriormente, en 2008 el estallido de la burbuja financiera de las hipotecas dejó de manifiesto que la crisis capitalista seguía irresuelta, no había sido superada, sino postergada en el tiempo. Las políticas neoliberales fueron instrumentos para gestionar la crisis estructural a través de encontrar salidas en los mercados financieros y/o especulativos para el exceso del capital flotante con el fin de evitar su desvalorización, pero sin lograr resolverla (Amin, 1999).

El derrotero del neoliberalismo en Argentina. Dictadura cívico militar argentina (1976-1983): reconfiguración del patrón de acumulación capitalista

Hacia fines de la década de 1960, en Argentina se presentó una situación de crisis orgánica. Las distintas fracciones de la clase dominante, por un lado, la burguesía agroexportadora y, por el otro, la burguesía industrial asociada al capital transnacional, enfrentadas entre sí, no lograban convertirse en hegemónicas y, por lo tanto, implementar u otorgarle al patrón de reproducción la dirección que beneficiaría sus propios intereses⁴. A la disputa entre las diferentes

⁴ El sociólogo Juan Carlos Portantiero caracterizó el escenario argentino entre 1955-1973 con la figura del empate hegemónico. En el sentido que las diversas fracciones de la clase dominante (agrarias o industriales) se impugnan entre sí y no llegan a dirigir políticamente al conjunto social por un largo período de tiempo. “fuerzas alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios (...) faltó una ecuación política capaz de articular a la Sociedad con el Estado, de establecer mecanismos claros de exclusión y de recompensa, de fundar, en fin, una legitimidad reproductora del sistema, basada en la fuerza y también en el consenso” (Portantiero, 1977, pp. 531-532). Este conflicto interburgués se agudizaba con las recurrentes crisis de la balanza de pagos que se producía porque el crecimiento de la producción industrial demandaba más divisas, para importar insumos, que las que proveían las exportaciones de productos primarios. La superación de la crisis de balanza de pagos consistía en ralentizar la produc-

fracciones de la clase dominante, por volcar la situación a su favor, se sumó la activa participación de la clase trabajadora, de estudiantes, de sectores medios y populares con sus constantes demandas autónomas, ya sea de mejoras económicas, como de participación en el juego político⁵.

*En pocos años se radicalizó la conflictividad social en el país. Tal como lo expresan las grandes movilizaciones de masas y puebladas en diversas ciudades, conocidas como “Azos”. Por ejemplo, Correntinazo (1969), Rosariazo (1969 y 1972), Cordobazo (1969 y 1971), Choconazo (1969 y 1970), Chipoletazo (1970), Tucumanazo (1970 y 1972), Catamarcazo (1970), Casildazo (1971), Menozazo (1972), Malarguiñazo (1972), Roca-
zo (1972), Trelewazo (1972), Devotazo (1973), San Franciscazo (1973), Carmelazo (1973), Villazo (1974) y varias otras que dieron lugar al surgimiento de una fuerza social revolucionaria que comenzaba a plantearse la disputa hegemónica en Argentina⁶. De esta forma, se puso en jaque el intento, de los sectores dominantes, de ordenar el desarrollo del proceso económico y político en su conjunto.*

En concreto, a partir de 1969 se abrió una situación de crisis orgánica en el país, ya que la clase dominante, atravesada por la lucha interburguesa, fue perdiendo consenso social ante el ascenso de las masas obreras y estudiantiles. “La combinación de lucha armada, lucha obrera

ción industrial y devaluar; así se descargan los costos de la crisis sobre los sectores asalariados.

⁵ Una crisis orgánica, en términos gramscianos, es una crisis de hegemonía o crisis de autoridad. “Si la clase dominante ha perdido el consenso, o sea, si no es ya «dirigente», sino únicamente «dominante», detentadora de la pura fuerza coercitiva, esto significa precisamente que las grandes masas se han apartado de las ideologías tradicionales, no creen ya en lo que antes creían, etcétera. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados” (Gramsci, 1930 [1975], p. 37).

⁶ Sobre los Azos recomendamos (Balvé, y otros, 1973). En este contexto, de grandes movilizaciones de masas, se politiza masivamente la juventud y la clase trabajadora. Dando lugar al surgimiento del sindicalismo clasista y combativo (nuevas corrientes del movimiento obrero que buscaron diferenciarse del sindicalismo peronista), de ligas agrarias conformadas por campesinos y pequeños productores rurales, de grupos cristianos identificados con la Teología de la Liberación, de movimientos estudiantiles y de las organizaciones armadas, entre otros.

y masas en las calles con ánimo insurreccional constituía una verdadera amenaza para el orden social dominante” (Izaguirre, 2009, p. 83). Por consiguiente, hacia 1973, las fuerzas sociales dominantes desataron la *coerción contra la fuerza social revolucionaria en auge*⁷.

Hacia 1976, *derrotada la escalada revolucionaria*, la gran burguesía agropecuaria y la gran burguesía industrial con el capital extranjero (grupos económicos locales y extranjeros) lograron sintetizar sus proyectos históricos en un drástico programa de cambio económico estructural y, en consecuencia, conformar un nuevo bloque de poder⁸.

El 24 de marzo de 1976, el nuevo bloque de poder de la mano de las Fuerzas Armadas se hizo del control del Estado e iniciaron, a través de la violencia genocida (30.000 detenidos-desaparecidos, 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, 400 niños robados y miles de exiliados), un proceso de reestructuración del patrón de reproducción capitalista del país en sintonía con las demandas del capital financiero global.

⁷ En 1973 y 1976, las organizaciones paramilitares dejaron un saldo de alrededor de 700 asesinatos y provocaron el exilio de cientos de personas. La más conocida de estas bandas terroristas fue la autodenominada Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización de ultraderecha conducida por el ex policía y Ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien fuera mano derecha del presidente Juan Domingo Perón y de la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Estas organizaciones terroristas estaban integradas por: “*varios cuadros dirigentes de las fracciones más regresivas de las fuerzas armadas y policiales, que actuaron en el Cordobazo, junto con dirigentes sindicales y políticos de derecha(s)*” (Duhalde, 1999, p. 233). A su vez, las organizaciones paramilitares tenían fuertes vínculos con la contrainsurgencia internacional, especialmente con la estadounidense (la CIA), la francesa (*Organisation Armée Secrète* OAS) y la italiana (la Logia P2) (Bonavena, 2021). Posteriormente, en 1975, el Poder Ejecutivo autorizó al Ejército a realizar “*todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar o aniquilar el accionar de elementos subversivos*” (decretos N°261, 2270/71/72). En consecuencia, en Argentina, mucho antes del Golpe de Estado de marzo de 1976, comenzó la desaparición forzada de personas, particularmente en las provincias de Tucumán, Santa Fe (Villa Constitución y Rosario) y Córdoba (Artese y Roffinelli, 2007).

⁸ Un bloque de poder supone una alianza de clases objetivamente estructurada alrededor de sus intereses comunes que se vuelve dominante. No obstante, en todo bloque de poder siempre una fracción de clase ejerce su hegemonía sobre sus aliados.

Las políticas económicas implementadas a *sangre y fuego* por la dictadura militar determinaron el tránsito de una sociedad articulada en torno al crecimiento industrial a otra basada en un ajuste estructural regresivo con una clara hegemonía financiera (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 19).

Al igual que la dictadura chilena, la argentina buscó reestructurar de raíz las condiciones de existencia social, para impedir que otro lanzamiento revolucionario pudiera ocurrir al menos en muchas décadas en el país (Nievas, 2009). No por casualidad, la Junta Militar que presidía el dictador Videla autodenominó su programa como *Proceso de Reorganización Nacional*. (Bayer, Borón y Gambina, 2010).

El ministro de economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz⁹ basó su plan económico, denominado “Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina”, en los principios básicos de “liberalización de la economía y modernización del sistema productivo”, cuya aplicación se realizaría en forma conjunta con la eliminación de la intervención “excesiva e irracional” del Estado en la economía. En 1981, Martínez de Hoz, en su discurso de despedida, señaló que su gestión sentó las bases para un redimensionamiento del Estado y de sus funciones, a través de cinco cursos de acción: 1) la reducción del déficit, 2) la reducción y racionalización del gasto público, 3) del programa de privatizaciones de las empresas estatales, 4) del reordenamiento y reprogramación de la inversión pública y 5) de la reforma del sistema impositivo.

⁹ En sus memorias Martínez de Hoz (1991) se definió como “gradualista” y señaló que el Estado no debía ser “*un simple espectador de la acción económica (laissez faire, etc.) sino (...) es función del Estado reservarse la orientación global de la economía, garantizando la competencia y arbitrando en situaciones de intereses contradictorios que violan los principios del interés nacional*” (p. 26). En líneas generales, más allá de la necesaria cuota de pragmatismo, su gestión abrevó en las ideas monetaristas de la Escuela de Economía de Chicago. Incluso algunos de los miembros del equipo económico habían estudiado en Chicago, como el secretario de Hacienda, Roberto Alemann y el secretario de Política Económica, Guillermo Walter Klein. Además, Martínez de Hoz contó con el asesoramiento en materia de planificación y ejecución de políticas de economistas chilenos de la Escuela de Chicago.

El programa económico se concentró en: 1) liberalizar el comercio exterior, los flujos financieros y de capital; 2) reducir los mecanismos proteccionistas que, en el período anterior, favorecían la industrialización por sustitución de importaciones¹⁰; 3) reducir el gasto público en materia social (salud, educación, vivienda, etc.), mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad; 4) reducir el poder adquisitivo de los salarios; y 5) contraer un fuerte endeudamiento externo¹¹.

En concreto, el plan económico apuntaba a redefinir el rol del Estado en la captación y orientación de los recursos y en restringir el poder de una clase obrera muy organizada y movilizada en términos políticos.

La liberalización generalizada de los mercados —muy particularmente el financiero— y la apertura económica al exterior constituyen, en dicho marco, los elementos centrales de tal política que, en síntesis, procuraba modificar radicalmente la estructura económica del país, su base social de sustentación y su inserción en la división internacional del trabajo (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986).

Estas reformas en su conjunto aceleraron un proceso de concentración y centralización de capitales, que llevó a la consiguiente destrucción de los capitales menos competitivos. Proceso que se materializó en quiebras y cierres de pequeñas y medianas empresas y en el crecimiento del desempleo. De modo que, el proceso de desindustrialización no fue masivo, sino selectivo. Los grupos económicos más concentrados contaron con estímulos y protección a

¹⁰ Esto no implicó que los grandes grupos económicos – base de sustentación de la dictadura – dejarán de contar con protección y “estímulos” a la producción por parte del Estado.

¹¹ En los primeros meses el FMI hizo un giro por el equivalente a US\$ 100 millones de la época que elevó las reservas del Banco Central de US\$ 23 millones a US\$ 150 millones.

sus producciones, al mismo tiempo, que resultaron beneficiados del retiro del Estado de actividades productivas, como por ejemplo la siderúrgica y la petrolera. Entonces, se mantuvo la producción industrial, pero revirtiéndose el dinamismo de la producción de bienes de consumo masivo de la ISI en favor de aquellos ligados a la demanda de los sectores sociales de más altos ingresos y, fundamentalmente, del mercado externo.

El Estado cumplió la finalidad de posibilitar una reasignación de recursos hacia empresas vinculadas o controladas por la gran burguesía industrial y el capital extranjero a través de medidas tales como: la reforma financiera, las altas tasas de interés, la subvaluación del dólar, la reducción de la protección arancelaria a los sectores industriales menos competitivos y, finalmente, la liberación comercial. El sistema financiero pasó a ser, junto al Estado, el principal reasignador de los recursos internos y externos dando lugar, mediante estos últimos a la conformación de una deuda externa sin precedentes (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). Entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina se multiplicó por seis: pasó de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, sumando los atrasos de intereses y la deuda militar (Brenta, 2019).

Los grupos económicos se endeudaron en el mercado internacional a bajas tasas de interés, esa masa de capital que ingresó al país no fue volcada a la producción, sino que fue directamente al sistema financiero local que otorgaba altísimas tasas de interés. Cuando en marzo del 80 se desata la crisis financiera internacional estos mismos grupos transfieren sus capitales al exterior, pero no para pagar la deuda que habían contraído, sino para salvarse de una futura devaluación y la deuda comienzan a transferirla al Estado. “De esta forma el endeudamiento masivo del Estado que comienza en 1980 está en función del endeudamiento privado anterior” (Basualdo, 1987, p. 73).

Asimismo, la dictadura cívico militar argentina se valió de toda una estructura “legal” en pos de garantizar la desregulación de los mercados y reorganizar la sociedad argentina. Se conformó un poder legislativo de facto, la Comisión de Asesoramiento Legislativo

(CAL) que se dedicó a sancionar unas 2000 leyes entre 1976 y 1983. De las cuales, 417 continúan vigentes, como la Ley de Entidades Financieras, la Ley de Inversiones Extranjeras (que equipara las empresas extranjeras con las locales sin obligación de reinvertir en el país), el código Aduanero y las leyes que establecen el financiamiento de la Iglesia Católica, entre muchas otras.

La creación de un órgano de consulta jurídica es una muestra clarísima de que la dictadura argentina del '76 se proponía modificar o refundar las relaciones sociales. No hubo otra dictadura que tuviera un órgano de gobierno formado especialmente para hacer leyes (Canelo, P. citada en SinFin, s.f.).

El nuevo bloque de poder (la gran burguesía agropecuaria, la gran burguesía industrial y el capital extranjero) que emerge con la dictadura tenía intereses comunes en la coyuntura: a) “reordenar” la economía desmantelando la ISI y b) el disciplinamiento de la clase obrera. Pero mantenía intereses contradictorios a largo plazo, ya que mientras la gran burguesía agroexportadora pugnaba por la plena liberalización de los mercados y la eliminación de todo tipo de transferencia de recursos del agro a la industria, la gran burguesía industrial transnacionalizada buscaba mantener cierta protección y transferencia de recursos para su producción (Sanz Cerbino y Sartelli, 2018).

Por lo tanto, el equilibrio de fuerzas en el bloque de poder explica las supuestas inconsistencias que atravesaron al programa económico liberalizador, como mantener altos gastos estatales y mecanismos proteccionistas. Es decir, el programa económico se ajustó a los requerimientos. En palabras del exministro de economía:

Incluso algunos liberales dogmáticos nos enrostraron habernos apartado en algunos casos de lo que ellos consideraban de cumplimiento ineludible si se creía en el principio básico de la libertad. Al respecto, desde el primer discurso del 2 de abril de 1976 anunciando el nuevo Programa Económico, manifesté claramente que una reforma

estructural profunda como la que nos proponíamos efectuar en una economía como la argentina, distorsionada por tantos años de estatismo, economía cerrada e inflación, requería una gran dosis de pragmatismo. No podíamos pretender cambiar todo de la noche a la mañana sin tener en cuenta la tremenda resistencia inercial que encontraríamos en la organización misma del Estado, de las corporaciones sectoriales, de los intereses adquiridos y de las mismas mentalidades. En el ejercicio del gobierno, la mayor parte de las veces se hace lo posible, aunque no sea exactamente lo deseable. Sería muy fácil si todo consistiera en aplicar simplemente los principios de un catecismo [énfasis agregado] (Martínez de Hoz, 1991, p. 230).

En este sentido, el pragmatismo del equipo económico de la dictadura fue mucho más consecuente con los postulados del padre del liberalismo clásico, Adam Smith, que de muchos de sus discípulos neoliberales de la Escuela de Chicago. En particular, Smith se opuso al proteccionismo, pero no fue partidario del libre mercado a ultranza. Por ejemplo, apoyó las Leyes de Navegación inglesas que exigían que las mercancías se transportaran en barcos británicos, incluso si existía una competencia que ofrecía precios más baratos (Roberts, 2023).

Más allá de los debates acerca de cuánto se apegó el programa económico de Martínez de Hoz a los postulados neoliberales, sin lugar a dudas, la última dictadura cívico militar, genocidio mediante, puso en marcha una profunda reestructuración económica y social en Argentina. Se transformó el patrón de reproducción capitalista en función de los requerimientos del capital financiero mundial y sus socios locales y, por consiguiente, se reestructuró de raíz las condiciones de existencia social. Estructuraron una sociedad mucho más desigual, en la que se incrementó el desempleo, el subempleo, la informalidad laboral, los niveles de pobreza e indigencia. Sin que los gobiernos constitucionales posteriores hayan revertido los condicionamientos estructurales de estos flagelos sociales.

Los gobiernos de la posdictadura (1983-2001): continuidades y profundización.

Las transformaciones estructurales de la economía argentina terminaron de consolidarse con los sucesivos gobiernos constitucionales. El gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989) constituyó un intermedio en el que se ensaya un intento fugaz de regreso (particularmente en sus primeros años) a ciertas políticas intervencionistas y redistributivas. El gobierno peronista de Carlos Saúl Menem (1989-1999) termina de concretar la obra reestructuradora iniciada por la última dictadura cívico militar. De tal forma que Martínez de Hoz remarcó la sintonía entre su programa económico y el programa de Menem y su ministro de economía, Domingo Cavallo¹²:

Initiamos el proceso[...] de orientación moderna de una economía productiva. Después de 1989 [alude al proceso hiperinflacionario¹³], la gente pedía esta reorientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia con el ministro Cavallo [...] Dieron la orientación económica en las grandes líneas, en las grandes bases que eran prácticamente las mismas que las nuestras (reportaje a Martínez de Hoz en Pigna, 2003, minuto 12:45).

¹² En 1982, Cavallo se desempeñó como presidente del Banco Central. En esa etapa se diseñó la estatización de la deuda privada que habían tomado las grandes corporaciones. El 13 de julio de 2000, producto de una investigación judicial encabezada por Alejandro Olmos, el Juez Ballesteros determinó la ilegitimidad y el fraude cometido con la estatización de la deuda privada, sin embargo, no se emitió ninguna condena y se dispuso enviar copia de la sentencia al Poder Legislativo para que se encargue del tema... sin que hasta la actualidad se haya tomado una sola medida al respecto.

¹³ Perry Anderson sostiene que existe un equivalente general al “trauma de la dictadura” como mecanismo para inducir “democráticamente” y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas a la coerción, en la forma de obligar a las capas populares a aceptar violentas medidas de ajuste.

Por tanto, recién en la década de 1990, a través de una serie de mecanismos que lograron doblegar las resistencias populares, como la hiperinflación y el desempleo se terminó de concretar el proceso iniciado por la dictadura, sobre todo, en materia de privatizaciones. El gobierno menemista impuso el decálogo de medidas neoliberales que proponían el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): rearticulación del Estado, desregulación de los mercados (comercial, financiero y laboral) y, fundamentalmente, las privatizaciones de las empresas públicas, lo que permitió una transferencia de rentas extraordinarias al capital privado, sin importar el carácter estratégico que alguno de estos sectores podría revestir para el país.

En 1998, Menem reconocía en la asamblea conjunta del BM y el FMI en Washington que:

Argentina tuvo en este siglo una prosperidad que parecía infinita, pero cayó en décadas de inflación y caos político, llegando casi a la desintegración social. En la década del noventa *transformamos una economía devastada por la hiperinflación*, la especulación y la corrupción estructural. *Las claves que permitieron concretar este verdadero milagro económico fueron:* a) voluntad política para afrontar las transformaciones, b) consenso público para concretar en democracia cambios que normalmente demandan más de una generación, y c) *coordinación con las instituciones internacionales que nos brindaron apoyo técnico y financiero. En este sentido hemos trabajado estrechamente con el fondo monetario internacional, el banco mundial y el BID para asegurar la estabilidad macroeconómica, profundizar las reformas estructurales y adoptar políticas para aliviar la situación económica de los más humildes* [énfasis agregado] (Menem, 1998).

En este breve párrafo, Menem subraya que: 1) logró consenso con su gobierno con base a la promesa de superar la hiperinflación; 2) esto

le permitió llevar adelante las medidas económicas de ajuste (contrarreformas laboral y previsional, privatizaciones, desregulaciones, etc.) que imponían las instituciones al servicio del capital financiero global: el FMI y el BM y 3) tuvo el acompañamiento de las políticas sociales *focalizadas* del BID para contener el malestar social. Que el estallido social de 2001 reveló como insuficientes.

Asimismo, Cavallo logró controlar la inflación con la puesta en marcha del régimen de convertibilidad cambiaria (paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar), pero a costa de profundizar los lastres sociales que dejó la dictadura. Se disparó la desigualdad social, la informalidad laboral, el subempleo, el desempleo y se alcanzaron índices históricos de pobreza e indigencia en el país. En la

tabla No

TABLA N° 1		
Años	1974	1999
Pobreza	8%	53%
Desempleo	2,7%	25%
Diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre	12 veces	22 veces
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC).		

Ante la sociedad se presentó la convertibilidad como la solución definitiva al problema de la devaluación e inflación que afectaron al país durante la década del ochenta. Mientras que el tipo de cambio fijo —garantizado por ley— prácticamente eliminó el riesgo de devaluación de la moneda, el ingreso de productos importados (que favorecía la disminución generalizada de aranceles y la sobrevaluación de la moneda doméstica) permitió contener la inflación (Gambina, Borzel, García y Crivelli, 2005).

El esquema del tipo de cambio fijo (representaba un seguro de cambio gratuito para los inversores externos) se sostuvo con el financiamiento que llegó vía las ventas de las empresas públicas (las joyas de la abuela), la apertura irrestricta de los flujos financieros

internacionales, la apertura comercial y, en definitiva, la desregulación completa de la actividad económica.

Las políticas de apertura externa irrestricta golpearon fuertemente lo que todavía sobrevivía del tejido industrial menos dinámico, fundamentalmente, volcado a la producción para el mercado interno. Las importaciones masivas inundaron los mercados locales y las pequeñas y medianas empresas de baja composición orgánica se vieron afectadas por la competencia. La desregulación comercial significó que las industrias locales no resistieran frente a la puja competitiva de los capitales extranjeros, por lo tanto, muchas empresas cerraron sus puertas. De este entramado de pequeñas y medianas empresas en crisis surgió el proceso de ocupación y recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

A su vez, la desregulación de los flujos financieros condujo a la extranjerización de la banca y reorientó la inversión de capitales desde las áreas productivas, cada vez menos lucrativas, hacia el área financiera. Es decir, se aceleró la destrucción del entramado productivo (desindustrialización) en manos de los capitales menos competitivos con la consecuente destrucción de puestos de trabajo.

La presencia de las empresas extranjeras y de sus socios locales los grandes grupos económicos quedó concentrada en los sectores más lucrativos de la economía argentina dominando, en consecuencia, el proceso de acumulación de capitales en el país¹⁴. Tal grado de desnacionalización de los resortes de la economía argentina “inquietó” hasta el exsecretario de Hacienda de la última dictadura cívico-militar, Juan Alemann:

El problema es ante todo político. *Crea la sensación de ser colonia. Las empresas extranjeras están menos comprometidas con el destino del país que las nacionales.* Tal vez lo más preocupante sea que,

¹⁴ Por ejemplo: finanzas, servicios públicos de gas, telefonía, electricidad, etc. —con tarifas dolarizadas—, los rubros asociados a la explotación de recursos naturales —mineros e hidrocarbúricos—, actividades vinculadas con el procesamiento de recursos agropecuarios y la industria automotriz.

en muchos casos (sobre todo en empresas españolas), los cargos jerárquicos se reserven a personas de la nacionalidad de origen de la empresa, desplazando a los locales [énfasis agregado] (Aleman, 2007).

A la par, durante toda la década, el endeudamiento externo creció exponencialmente. El sistema de paridad cambiario obligaba al Estado a cambiar un dólar por un peso. El conjunto de empresas transnacionales que pasaron a actuar en la economía argentina (vía privatizaciones y desregulación comercial y financiera) no estaban obligadas a reinvertir sus ganancias en el país, por lo tanto, pasaban sus utilidades en pesos a dólares (sin regulación estatal alguna) y las remitían a sus casas matrices, lo que presionaba, cada vez más, las reservas del Banco Central. El déficit público aumentó y como, a su vez, se retraen las exportaciones, la única fuente de financiamiento provino del endeudamiento externo.

Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó por casi 20, pasando de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones de dólares. Durante ese mismo período, Argentina reembolsó cerca de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces de lo que debía en marzo de 1976 (Toussaint, 2017, p. 15).

Desde 1998, la economía argentina ingresa en una gran recesión, con caída de la producción, con caída del consumo, con falta de dinero circulante¹⁵ y con continua fuga de capitales. En este contexto, el equilibrio de fuerzas del bloque de poder (la gran burguesía de agro-negocios, la gran burguesía industrial y el capital transnacional) se comenzó a resquebrajar. Las fracciones del capital extranjero (en

¹⁵ La falta de liquidez producto del régimen monetario dio lugar al surgimiento a una serie de bonos de emergencia o cuasimonedas. También surgieron los Clubes de Trueque donde las personas intercambiaban directamente productos y servicios.

el sector bancario y financiero y en las empresas privatizadas) pretendían continuar con el sistema de convertibilidad o directamente la dolarización de la economía y las fracciones de la gran burguesía vinculada a las exportaciones agrarias e industriales pugnaban por una devaluación que les permitiese mayor competitividad en el mercado mundial.

Finalmente, el 19 y 20 de diciembre de 2001 estalló el descontento popular que provocó la renuncia del presidente Fernando De la Rúa (sucesor de Menem en la presidencia desde 1999 y continuador del régimen de convertibilidad), seguida de cinco presidentes interinos en una semana y la salida de la convertibilidad con una megadevaluación, previa pesificación de la deuda en dólares de los grupos económicos locales. Por lo tanto, el costo de la crisis cayó, una vez más, sobre las espaldas de los sectores asalariados.

Los gobiernos progresistas (2003-2015): ¿cambio o continuidad del rumbo económico?

Después de la rebelión popular de 2001, llegaron los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) con una propuesta de cambio del rumbo económico en el sentido de retornar a cierto proteccionismo de las industrias locales y de fortalecer el mercado interno.

Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia anunció que pretendía reconstruir la gobernabilidad política reconstruyendo un “capitalismo nacional y serio”:

En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de cerrarse al mundo. No es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso

con la Nación. Basta ver cómo los países más desarrollados protegen a sus productores, a sus industrias y a sus trabajadores. Se trata, entonces, de hacer nacer una Argentina con progreso social, donde los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres sobre la base de su esfuerzo, capacidad y trabajo. Para eso es preciso promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá el Estado cobra en eso un papel principal, es que la presencia o la ausencia del Estado constituye toda una actitud política (Kirchner, 2020, [2003] p. 10).

Estaba claro que para ordenar el sistema político se debían incorporar las demandas sociales que se expresaron con fuerza en las luchas callejeras del 2001-2002. En este sentido, las tres gestiones kirchneristas (2003-2015) dieron importantes pasos en pos de democratizar el ámbito social a través de un amplio marco de medidas sociales, como: a) derogar las leyes de impunidad posibilitando la apertura de los juicios contra los genocidas de la última dictadura militar; b) fomentar emprendimientos culturales: cine, teatro, música, etc.; c) crear universidades públicas en zonas del conurbano bonaerense (los alrededores de la ciudad de Buenos Aires); d) regresar al sistema previsional de reparto y posibilitar el acceso a la jubilación a personas que no cumplían con los años de aportes; e) promulgar la ley de medios de comunicación que posibilitaba la participación de medios comunitarios y cooperativos (aunque nunca llegó a implementarse); f) promulgar la ley de matrimonio igualitario y, fundamentalmente y g) Mejorar la redistribución del ingreso, entre otras.

Entre el 2003-2007, la suba de los precios internacionales de las exportaciones agropecuarias, el tipo de cambio alto, la baja de las tasas de interés y la suspensión de los pagos de la deuda¹⁶ posibilitaron

¹⁶ Entre diciembre de 2001 y marzo de 2005, se suspendió el pago de los títulos de la deuda argentina por un monto de 80.000 millones de dólares a los acreedores pri-

bajar la inflación, lograr un superávit fiscal primario, aumentar el empleo (partiendo de una gran depreciación de los salarios en 2001) y expandir del consumo interno (Katz, 2015)

La gestión kirchnerista favoreció el desarrollo de las actividades industriales con la transferencia de recursos provenientes de las exportaciones de bienes primarios. Pero esta apuesta por la “reindustrialización” no significó modificaciones de peso en el patrón de reproducción capitalista, que continuó liderado por las producciones competitivas en el mercado exterior (siderurgia, hidrocarburos, alimentos, agronegocios, automotriz, etc.) en manos de los grandes grupos económicos locales y extranjeros. “En el ámbito fabril la única “novedad” fue la expansión de las ensambladoras de bienes electrónicos de consumo en Tierra del Fuego” (Schorr, 2017, p. 158).

Pero, a partir de 2008, este proceso encontró serios límites con el fracaso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su proyecto de modificar las alícuotas impositivas a los derechos de exportación sobre cereales y oleaginosas, a través de un sistema móvil que se ajustaría en relación a las variaciones de los precios internacionales de estos productos: soja, girasol, trigo y maíz. En el momento que la desaceleración de las economías centrales del sistema mundial llevó a la baja de los precios de los *commodities*.

De modo que entre 2008-2011 afloraron tensiones económicas, aunque manejables en el marco del patrón de acumulación, pero ya

vados y de 6.500 millones de dólares al Club de París. Sin embargo, no se suspendió el pago de la deuda contraída ni con el FMI, ni con el Banco Mundial, ni con otros organismos financieros multilaterales. Esa suspensión de pagos dio margen al gobierno para realizar cierta distribución del ingreso en favor de los más vulnerables. “De 2003 a 2009, Argentina registró unas tasas de crecimiento anuales de entre el 7 % y el 9 %. Algunos economistas afirman que el crecimiento argentino solo se explica por el aumento en el precio de las materias primas que ésta exporta, está claro que, si Argentina hubiera continuado con los pagos, las ganancias del Estado gracias a las exportaciones (es decir, a los impuestos retenidos sobre los beneficios de los exportadores privados) se habrían destinado al reembolso de la deuda. Las autoridades no hubieran podido hacer los gastos públicos dedicados a la ayuda a los desempleados, al aumento de las jubilaciones y pensiones, y a generalizar el derecho a recibirlos, al estímulo a la actividad económica en otros ámbitos fuera del sector exportador (Toussaint, 2017, p. 17).

a partir de 2012 estas alteraciones se consolidaron como límites concretos; que se manifestaron en la pérdida de competitividad externa, en el déficit de la balanza comercial, en la menor distribución de ingresos progresiva, en la disminución de las tasas de crecimiento del PBI, en la crisis energética y en la exacerbación de la fuga de capitales (Katz, 2015).

Por otro lado, la persistencia del patrón de acumulación que se forjó con la dictadura y la presencia, cada vez mayor, del capital extranjero transformó en vanas las expresiones de construcción de un “capitalismo nacional y serio”. Por el contrario, persiste la extranjerización de la economía; no se derogó la Ley de inversiones extranjeras que otorga libertad de remitir beneficios al exterior, se reconoció la injerencia de tribunales externos en litigios entre el Estado con empresas transnacionales, se mantuvieron las privatizaciones de las empresas públicas (salvo pocas excepciones, como Aerolíneas Argentinas o AySA); se continuó pagando una deuda externa ilegítima (Toussaint, 2017), se mantuvo una matriz impositiva regresiva y la mercantilización de lo público.

Reflexiones finales

Desde 2015, las fracciones del bloque dominante se lanzaron a reconstruir la gobernabilidad, pero sin las concesiones sociales que se vieron forzados a tolerar durante los gobiernos Kirchneristas por los efectos de las movilizaciones sociales durante la crisis del 2001. Y volvieron a encontrar en las clásicas recetas neoliberales (políticas de apertura irrestricta, ajuste fiscal, endeudamiento externo, contrarreformas laborales, previsionales, etc.) el camino para el manejo de la crisis. De la mano del FMI se insiste en profundizar la lógica liberalizadora, neoliberal que se ensayó a sangre y fuego en la década de los setenta en América Latina y el caribe.

En 2019 el retorno del peronismo al gobierno no produjo cambios significativos en el rumbo económico. Por el contrario, se renunció a investigar el origen de la deuda millonaria y excepcional contraída con el FMI¹⁷ y, de esta forma, se aceptan sus condicionalidades. En un país con más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza y marcado por una creciente desigualdad social¹⁸, la preocupación de la fuerza gobernante consiste en cumplir con los condicionamientos del FMI y en pagar una deuda externa a todas luces odiosa.

Después de 50 años de ofensiva del capital sobre el trabajo y los pueblos, sigue pendiente la conformación de un bloque social que con su lucha trabe, dificulte, e impida las transformaciones sociales regresivas en curso. El auténtico desafío consiste en converger en las luchas de trabajadores y pueblos para abrir caminos de transición hacia horizontes democráticos, antiimperialistas, anti patriarcales, anti imperialistas, socialistas y, en definitiva, plenamente humanos.

¹⁷ La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe donde expuso los múltiples incumplimientos que cometió el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que endeudó al país por casi 57.000 millones de dólares. Incluso, funcionarios del FMI reconocieron que el préstamo estuvo en función de la campaña electoral del empresario Macri. Pese a lo cual, el gobierno de Alberto Fernández reconoció la deuda y pasó a negociar con el organismo financiero internacional.

¹⁸ El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,446 para el primer trimestre de 2023. En el mismo trimestre de 2022 el valor fue de 0,430, lo que muestra un aumento de la desigualdad en la comparación interanual.

BIBLIOGRAFÍA

- Alemann, Juan (5 de junio de 2007). La extranjerización de la economía. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-extranjerizacion-de-la-economia-nid914571/>
- Amin, Samir (1974). *La acumulación a escala mundial*. México: Siglo XXI.
- (1999). *El capitalismo en la era de la globalización*. España: Paidós.
- (septiembre - octubre de 2008). ¿Debate financiero, crisis sistémica? Respuestas ilusorias y respuestas necesarias. *Pasos* 139, 7-9.
- Anderson, Perry (1997). Neoliberalismo: un balance provisorio. En Emir Sader y Pablo Gentili (comps.), *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (pp. 13-28). Buenos Aires: UBA-Oficina de publicaciones del CBC.
- Artese, Matías y Roffinelli, Gabriela (2007). *Responsabilidad civil y genocidio. Acciones y declaraciones políticas durante el Operativo Independencia*. Buenos Aires: Tientos.
- Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010). *Hecho en Argentina. Industria y economía 1976-2007*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.
- Azpiazu, Daniel., Basualdo, E. M. y Khavisse, Miguel (1986). *El nuevo poder económico*. Buenos Aires: Hyspamerica.
- Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel (1986). ¿Capitanes de la industria o generales de la economía? *Economía informa* 160-161, 64-80.
- Balvé, Beba; Murmis, Miguel; Marín, Juan C.; Aufgang, Lidia; Bar, Tomás J.; Balvé, Beatriz y Jacoby, Roberto (1973). *Lucha de calles. Lucha de clases. Elementos para su análisis*. (Córdoba 1971-1969). Córdoba: La Rosa Blindada.
- Basualdo, Eduardo (1987). *Deuda externa y poder económico en la Argentina*. Buenos Aires: Nueva América.
- (1997). *Notas sobre la evolución de los grupos económicos en la Argentina*. CTA.

- Bayer, Osvaldo, Borón, Atilio A. y Gambina, Julio C. (2010). *El terrorismo de Estado en la Argentina*. Buenos Aires: Espacio Memoria.
- Bonavena, Pablo Augusto (agosto de 2021). Sobre la construcción de las memorias del exterminio: algunas notas para desentrañar los vínculos entre la Operación Gladio y la contrainsurgencia peronista. *Conti-Derechos Humanos*. <https://bdigital.uncu.edu.ar/17308>
- Brenta, Noemí (2019). *Historia de la deuda externa argentina*. De Martínez de Hoz a Macri. Argentina: Capital Intelectual.
- Duhalde, Eduardo Luis (1999). *El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica*. Argentina: Eudeba.
- Gambina, Julio; Borzel, Mariano; García, Alfredo T. y Crivelli, Agustín (2005). *Liberalización de la economía argentina: ¿ruptura o continuidad?* En J. Estay, *La economía mundial y América Latina. Tendencias, problemas y desafíos*. Argentina: CLACSO.
- Gandarilla Salgado, J. G.; Moreno, K. y Modonesi, M. (26 de marzo de 2005). Crítica del capitalismo mundial y construcción de alternativas. Entrevista a Samir Amin. *Centro de Estudios Miguel Enríquez*. https://www.archivochile.com/Imperialismo/otros_doc/USotrosdoc0006.pdf
- Gramsci, Antonio (1930 [1975]). Pasado y Presente - Cuaderno 3. En A. Gramsci, *Cuadernos de la Cárcel*. Tomo II (pp. 37-38). México: ERA.
- Izaguirre, Inés, et al. (2009). El mapa social del genocidio. En Inés Izaguirre, *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983* (73-116). Buenos Aires: Eudeba.
- Katz, Claudio (2015). ¿Qué es el neo-desarrollismo?: *Una visión crítica*. *Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos*, 224-249.
- Kirchner, Nestor (2020 [2003]). Discursos Néstor Kirchner 2003-2010. Buenos Aires: Instituto Patria.
- Luxemburg, Rosa (1988 [1925]). *Introducción a la economía política* (Vol. 35). México: Cuadernos de Pasado y Presente y Siglo XXI.
- Marini, Ruy Mauro (1985). La lucha por la democracia en América Latina. *Cuadernos Políticos* 44, 3-11.

- Martínez de Hoz, José Alfredo (1991). *Quince años después*. Buenos Aires: Emecé.
- Marx, Karl (1991 [1894]). *El Capital. El proceso global de la producción capitalista. Libro III*. México: Siglo XXI.
- Menem, Carlos Saul (1998). Discurso ante las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. *Fondo Monetario Internacional*. <https://www.imf.org/external/am/1998/speeches/PR05S.pdf>
- Nievas, Flabian (2009). Del "Devotazo" a Ezeiza. Guerra de posiciones en junio de 1973. En Inés Izaguirre, *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983* (pp. 119-141). Buenos Aires: Eudeba.
- Pigna, Felipe (dir.) (2003). *Historia Argentina 1989-2001 "El final de los Principios"* [película].
- Portantiero, Juan Carlos (1977). Economía y política en la crisis argentina 1958-1973. *Revista Mexicana de sociología*, 39, 531-565.
- Roberts, Michael (29 de junio de 2023). Adam Smith: ¿libremercadista o filósofo moral? *Sin permiso. República y socialismo, también para el siglo XXI*. <https://thenextrecession.wordpress.com/2023/06/29/adam-smith-free-marketeer-or-moral-philosopher/>
- Sanz Cerbino, Gonzalo y Sartelli, Eduardo (2018). Martínez de Hoz: ¿neoliberal o desarrollista? La clase dominante argentina frente al programa económico implementado durante la última dictadura argentina. 1976-1981. *Revista de economía del Caribe*, 22, 67-98.
- Schorr, Martín (2017). El poder económico de la Argentina bajo los gobiernos kirchneristas. Un análisis a partir del panel de grandes empresas. En Martín Schorr, *Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista ensayos de economía política* (117 -162). Buenos Aires: Batalla de ideas.
- Sinfin. (s.f.) Las leyes de la dictadura. Obtenido de Una deuda de la democracia: la vigencia de leyes de facto. https://www.lasleyesdeladictadura.com.ar/index.php?a=ReadArticle&article_id=4
- Toussaint, Éric (17 de mayo de 2017). Genealogía de las luchas contra las deudas ilegítimas. (B. Lemoine, Entrevistador)

Contradicciones destructivo-constructivas en torno a los determinantes históricos de la formación social paraguaya

Luis Rojas Villagra¹

La actualidad

El 15 de agosto del 2023, Santiago Peña asumió la presidencia de la república del Paraguay, quien reúne en su persona tres características centrales para explicar la complejidad del país:

1. Llegó a la presidencia en representación de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Colorado, agrupación conservadora y oligárquica que gobernó el país en la mayor parte del siglo XX y casi todo el siglo XXI. Curiosamente, Peña estuvo afiliado primero al otro partido históricamente conservador, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), durante 20 años. En el

¹ Economista por la Universidad Nacional de Asunción. Investigador del Centro de Estudios Heñói. Docente en la Universidad Nacional de Asunción. Miembro del Grupo de Trabajo de CLACSO Crisis y Economía Mundial, y del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. lurovilla@gmail.com

2016, siendo ministro de Hacienda del gobierno colorado de Horacio Cartes, se vio obligado a afiliarse a la ANR, lo que demuestra las cercanías ideológicas entre ambos partidos, la funcionalidad del bipartidismo al modelo económico instaurado en el país, y el pragmatismo oportunista extendido en la práctica política.

2. Es un economista neoclásico, neoliberal, con estudios de grado en la Universidad Católica de Asunción y de posgrado en la Universidad de Columbia de Nueva York, EEUU; fue funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), además del Banco Central y el Ministerio de Hacienda de Paraguay. Sus expresiones programáticas giran en torno a la estabilidad macroeconómica, mantener un Estado eficiente y pequeño, la captación de inversiones extranjeras y la seguridad jurídica para las mismas.
3. Proviene de una familia de la pequeña burguesía del país, un sector demográficamente poco numeroso, de altos ingresos, que goza de múltiples privilegios, en un país extremadamente desigual. Estudió en colegios exclusivos, como el San Andrés y el Pan American International School. Su padre, José María Peña Nieto, es un empresario vinculado a empresas como Carlos Casado S.A.² del rubro de agronegocios (empresa considerada como la mayor latifundista de la historia del país), la Casa de Bolsa Puente, que estuvo denunciada por operaciones vinculadas a lavado de dinero durante el gobierno de Cartes. Su abuelo y bisabuelo tuvieron vínculos políticos con los dos partidos conservadores mencionados.

Santiago Peña como presidente, es la expresión del modelo económico y político instaurado en el Paraguay, así como en su momento también lo fueron Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. Son colorados, vinculados al sector privado, parte de la élite económica

² <https://www.carloscasadosa.com/index.php>

dominante, caracterizada como una burguesía fraudulenta por el economista Juan Carlos Herken, y como herederos de Stroessner, por el periodista de investigación Idilio Méndez.

El modelo económico referido es capitalista en su desarrollo histórico, ampliamente liberalizado y desregulado; su base es una estructura primario exportadora, sustentada en la explotación intensiva de la naturaleza para obtener *commodities*, como la soja y la carne, para el mercado internacional; se erige sobre una estructura latifundista de tenencia de la tierra, que convierte al país en el de mayor concentración y desigualdad en esta materia en el continente; por su inserción subordinada y dependiente del mercado mundial, no ha desarrollado un significativo sector industrial, pero si un gran sector caracterizado por la alta informalidad, la precariedad laboral, el cuentapropismo y la inseguridad económica (Rojas, 2015).

La estructura económica se complementa con un Estado funcional, de tipo oligárquico y clientelar. Es oligárquico porque desde hace siglo y medio, desde su conformación en los años de la posguerra de 1870, es controlado por las élites económica y políticamente dominantes, asociadas al capital internacional, para la defensa de la economía agroexportadora y de la base latifundista en la tenencia de las tierras. Pero desde mediados del siglo XX, la confluencia de varias dinámicas, como el crecimiento de la población, de las demandas y conflictos sociales, y de un mayor acceso a financiamiento, el aparato estatal se amplió de modo a lograr estabilidad y legitimidad. Ese crecimiento del sector estatal no se dio en un sentido keynesiano o desarrollista, como para compensar las limitaciones del mercado, sino más bien generó extensas estructuras clientelares y prebendarias, por un lado, e informales e ilegales por el otro, incorporando de manera subordinada a un significativo sector de la población a ciertos beneficios del modelo, a través de contratos con el Estado, acuerdos comerciales, empleos en la función pública, cargos técnicos y políticos, adjudicación de obras, entre otros mecanismos de “enganche”.

En ese proceso, el Estado permitió y facilitó el crecimiento de un sector ilegal de la economía, en base a actividades como el contrabando de mercancías, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de bienes suntuosos, vehículos, armas, rollos, negocios con divisas extranjeras, la apropiación ilegal de tierras y especulación inmobiliaria, etc., además de permitir la extensión de una corrupción generalizada en todo el aparato estatal, utilizado como botín por la clase dominante y los colaboradores del régimen. Este Estado stronista (oligárquico, clientelar y delictivo, además de represivo) dio estabilidad social y política a la excluyente matriz económica agroexportadora, generando una numerosa clientela política y económica (políticos, militares, funcionarios y empresarios vinculados al Partido Colorado) coparticipe en la gestión y en parte de los resultados del modelo.

Recapitulando, la economía neoliberal y subordinada vigente en el Paraguay actual, tiene profundas raíces históricas, con un desarrollo económico, político y cultural funcional a la producción y reproducción de capitales nacionales y extranjeros, para lo cual elevan como gestores y gobernantes a cuadros representativos de dicho sector, la pequeña burguesía paraguaya, en gran medida terrateniente, fraudulenta, conservadora, heredera del genocidio de la Triple Alianza y de la dictadura militar de Stroessner y el Partido Colorado. Este hilo conductor histórico no se ha cortado, sino que se ha profundizado y ha hecho metástasis, descomponiendo social y culturalmente gran parte de las estructuras de la sociedad paraguaya, con un pensamiento predominantemente individualista, dependiente, de obediencia y sumisa resignación.

El origen, en el contexto de la expansión imperialista del capital

La presente caracterización histórica se basa en un diálogo con los autores incluidos en la bibliografía. En el proceso histórico del Paraguay, la guerra contra la Triple Alianza desarrollada entre 1864 y

1870, constituye una bisagra fundamental, entre un antes y un después como nación, como Estado. Un antes independiente, soberano, con un proyecto de desarrollo nacional, frente al después de despojo, dependencia y subordinación al capitalismo mundial. El Paraguay independiente de 1811 hasta el genocidio de la guerra, desarrolló una economía fuertemente estatal, donde la propiedad del principal factor productivo del país, las tierras, eran en su mayor parte públicas, con las que se formaron empresas agropecuarias dirigidas por el Estado, además de facilitar el acceso a lotes a la población campesina, con lo cual se logró una base productiva diversificada, con fuerte orientación hacia el mercado interno, y un muy limitado comercio exterior. El Estado fue incorporando nuevas tecnologías y procesos industriales, como el ferrocarril, telégrafo, fundiciones de metales, astilleros, talleres, entre otros, que iniciaban y proyectaban un proceso de industrialización autónomo, experiencia inédita en aquel tiempo histórico en la región.

La economía paraguaya entonces era disfuncional al sistema capitalista mundial en expansión, bajo el liderazgo de Inglaterra, pues prácticamente no recibía inversión, créditos ni productos extranjeros, se autoabastecía en los principales sectores económicos. En perspectiva histórica, la violencia y el genocidio a través de la guerra, fue el hecho determinante de la corrección de esa disfuncionalidad del Paraguay, destruyendo el modelo autónomo, e imponiendo un Estado liberal oligárquico y una economía primario exportadora orientada al mercado externo.

Bajo la ocupación de los ejércitos extranjeros vencedores, se instalaron gobiernos subordinados que legitimaron un nuevo andamiaje jurídico-institucional, imponiendo una constitución (1870), código civil (1876) y múltiples leyes para garantizar la propiedad privada, la liberalización de la economía y la subordinación del trabajo. Las leyes de venta de las tierras y los yerbales estatales de 1883 y 1885 fueron determinantes, para la privatización acelerada y la enajenación de la principal riqueza del país, pasando en poco más de dos décadas, unos 26 millones de hectáreas estatales a ser propiedad de

latifundistas privados, mayormente extranjeros. En esas tierras se formaron enormes enclaves de exportación de maderas, yerba, tannino y ganado, se desarrollaron formas de extrema explotación del trabajo rural, y se sentaron las bases del modelo latifundista primario exportador.

Las empresas estatales fueron destruidas (como la fundición de hierro) o privatizadas (como el ferrocarril y las estancias de la patria), se inició el ciclo de endeudamiento estatal con la banca extranjera, y se abandonó el proyecto de avanzar en la industrialización del país. En ese mismo proceso de brutal metamorfosis social, y en consonancia con él, fueron fundados los principales partidos políticos de la posterior vida política en el país, el colorado y el liberal, curiosamente ambos en el mismo año, 1887. Por medio de la guerra y las posteriores transformaciones, la civilización del capital y el espíritu del liberalismo llegaron al Paraguay con su estela de sangre y fuego, erigiendo en nombre del progreso y la libertad una economía latifundista agroexportadora y el Estado oligárquico.

El desarrollo histórico, en el contexto de la guerra fría

En las primeras décadas de implementación de este modelo, la disconformidad y lucha social fueron muy limitadas, aún como herencia del genocidio de la población en la guerra, que había amputado demográficamente a la población. Se dio una etapa de crecimiento en base a la explotación de la naturaleza y la exportación de materias primas, que tuvo viento a favor hasta la década del veinte del siglo XX. En 1929 se desataba la primera gran crisis del capitalismo mundial, que se prolongaría por varios años, generando un contexto mundial adverso al libre comercio sin intervención estatal que se venía implementado. Las teorías críticas emergían en la década del treinta, con propuestas como la del enfoque keynesiano, proyectando una ampliación del Estado y de su intervención en las economías, para contrarrestar las deficiencias y las crisis del capital.

La crisis económica y social empieza a sentirse en el país en la década del treinta, avivada por el crecimiento poblacional y de sus demandas por las precarizadas condiciones de vida en que se encontraban. La guerra por el Chaco contra Bolivia entre 1932 y 1935, canalizó por un tiempo la conflictividad social, pero a la vez encendió el espíritu nacionalista, así como las demandas de los soldados, los excombatientes y sus familias de mayores oportunidades e igualdad social. El contexto derivó en la revolución febrerista en 1936, que catapultó a la presidencia de la república al Cnel. Rafael Franco, imbuido de reivindicaciones nacionalistas y sociales. En su efímero periodo en el gobierno, derogó la constitución liberal de 1870, impulsó la reforma agraria a favor de campesinos y una legislación laboral con medidas favorables a la clase trabajadora, como las ocho horas laborales y el derecho a la sindicalización, pero fue depuesto por un golpe militar de sectores conservadores en 1937, que devolvió al poder al partido liberal, restableció la constitución de la posguerra y frenó las reformas sociales.

Hacia 1940 se incrementaba las demandas y la organización de los sectores campesinos y sindicales. Sin embargo, en esas décadas de hegemonía liberal, en Paraguay no se constituyó una burguesía nacional con capacidad de dirección del país (Schvartzman, 1987), principalmente por la presencia predominante del capital extranjero en los circuitos productivos y comerciales, y por la baja productividad y acumulación de las principales actividades económicas, basadas en la explotación primaria extensiva. La ausencia de un empresariado nacional con capacidad de incidencia, por un lado, restó condiciones a un posible proceso de industrialización, y por el otro, permitió que sea el Estado autoritario, desde 1940 en manos de los militares, el actor principal en la conducción del proceso social y político en el país.

Desde la década del cuarenta, en el marco del espíritu keynesiano de mayor intervención estatal que se expandía en el mundo, también en Paraguay se inició un proceso de ampliación del Estado y cierto dirigismo económico en algunos sectores. Según Campos (2010), el

Estado empezó a regular el sistema financiero, en 1941 intervino el mercado de tipos de cambio y conformó el Banco del Paraguay en 1944. El año anterior se creó el Instituto de Previsión Social (IPS), además se nacionalizaron algunas empresas de servicios básicos; en 1943 se creó la Compañía Paraguaya de la Carne (COPACAR), para controlar el faenamiento y la comercialización de carne; y se crearon varias empresas públicas, como la Flota Mercante del Estado, Líneas Aéreas de Transporte Nacional, la Administración Nacional de Electricidad y una empresa de Telecomunicaciones.

En el contexto de la segunda guerra mundial y de una elevada inflación, fue creada la Administración Nacional de Subsistencia, para gestionar una política de control de precios de productos básicos, aumentar la disponibilidad de productos y reducir los negocios especulativos en esos mercados. Fueron medidas para favorecer las condiciones de vida de la población, pero que generaron fuertes tensiones y conflictos con grupos económicos, como el de los ganaderos y los importadores. El escenario mundial en la posguerra y el inicio de la guerra fría, constituía un contexto global de incertidumbre y alta complejidad. En 1947 los conflictos sociales y políticos derivaron en una cruenta guerra civil, que dejó miles de muertos y exiliados, y consolidó la hegemonía del partido colorado en alianza con los militares, lo que se proyectaría por varias décadas. A mediados del siglo XX, la inestabilidad general derribó a varios y efímeros presidentes vía golpes de Estado, hasta la llegada del general Alfredo Stroessner al gobierno en 1954, inaugurando la dictadura militar más larga de la historia del país, que duraría hasta 1989.

En la disputa geopolítica internacional, la dictadura en Paraguay se alineó con la lucha anticomunista, recibiendo el apoyo político y económico tanto de EEUU como de Brasil. Con Stroessner, el país fue adoptando una política *sui generis*, neoclásica en su política económica, pero manteniendo un aparato estatal ampliado en una lógica prebendaria, no desarrollista, para el fortalecimiento y la conservación del poder político. En 1955 se disolvió la Compañía Paraguaya de la Carne para favorecer a ganaderos y frigoríficos, reorientándose

la producción hacia el mercado externo; ese mismo año, sancionaron la Ley 246 de Incorporación de Capitales, favoreciendo al capital privado, buscando incrementar la inversión extranjera. En 1957 se firmó uno de los primeros acuerdos *Stand By* con el novel FMI, que contempló un plan de estabilización económica y un crédito de 5,5 millones de dólares. Los ajustes incluyeron mayores facilidades para el comercio internacional y las inversiones, devaluación de la moneda nacional, y un financiamiento creciente a través de créditos externos.

Estas medidas de tipo monetarista, provocaron el deterioro del poder adquisitivo, incrementando la crispación social, estimulando movilizaciones de protesta lideradas por sectores sindicales en 1958 y estudiantiles en 1959. Esas protestas, que tuvieron una importante adhesión popular, fueron gravemente reprimidas, sus dirigentes apresados o exiliados, y sus organizaciones intervenidas; al mismo tiempo, los partidos de izquierda y otros de oposición, fueron duramente perseguidos y proscritos, dejando un tendal de asesinados, desaparecidos, torturados y exiliados, durante las tres décadas y media que duró el régimen stronista.

En ese contexto, la clase obrera, el campesinado y otros sectores sociales, ya no pudieron organizarse y ser un contrapeso al poder dictatorial, que consolidó un sistema autoritario discrecional, en base a la alianza del partido colorado, las FFAA, el gobierno, con el apoyo externo norteamericano y brasileño, y un esquema de represión generalizado. El financiamiento de EEUU desde el inicio del régimen fue clave para su fortalecimiento, más aún desde la conformación de la Alianza para el Progreso en 1961, programa continental norteamericano para asegurar su influencia en los países latinoamericanos, a través de programas de cooperación, asistencia y cuantiosos créditos. El apoyo norteamericano alcanzó unos 172 millones de dólares entre 1953 y 1974, en diferentes conceptos (Fogel, 1982).

Durante el stronismo se mantuvo y profundizó el patrón primario exportador de la economía. No obstante, la base productiva y de tenencia de la tierra transitó del modelo de latifundios forestales

hacia estancias y fincas empresariales, resultado de la revolución verde y la modernización agraria en auge en esos años. Los enormes latifundios de la posguerra se fueron parcelando, reconvirtiéndose en grandes explotaciones ganaderas o mecanizadas, y en parte colonizadas por el Estado para formar colonias rurales, en lo que se conoció como la “marcha hacia el Este”, para estrechar vínculos con el Brasil, en un marco de extendida corrupción, el cual generó una nueva base de apoyo terrateniente al régimen, quienes fueron beneficiarios de lo que se denominó posteriormente como *tierras malhabidas*, 7,8 millones de hectáreas otorgadas por la dictadura de forma ilegal a militares, empresarios y políticos leales al régimen.

La ampliación de la frontera agrícola para aumentar producción de soja, trigo, algodón, ganado, fueron fuertemente impulsados desde el gobierno con generoso financiamiento proveniente de deuda pública y cooperación externa, de modo a apalancar la productividad agraria vía mecanización, y fortalecer el flujo de bienes de agroexportación y generación de divisas para las necesidades del país, además de responder a los intereses de este sector clave de la economía. Concomitantemente a este proceso, en la década del sesenta y setenta, se dio una gran inmigración de colonos brasileños tipo *farmer*, que dieron un gran impulso al modelo en las zonas fronterizas con el Brasil, así como la instalación de varias empresas extranjeras, principalmente en el procesamiento de materias primas agrícolas y ganaderas, el sector comercial y financiero.

Durante el stronismo se fortaleció el Estado clientelar y oligárquico, complemento necesario para la estabilidad de la economía primario exportadora excluyente sin mayor industrialización. Se extendió el aparato estatal de modo a lograr incorporar a una porción significativa de la población como aliados subordinados del régimen, en carácter de gestores políticos, funcionariado público y empresariado dependiente de los fondos estatales. El manejo patrimonialista y discrecional de los bienes y recursos públicos por parte de la dictadura, permitió consolidar esa base social de sustentación, que vio su reproducción y sus beneficios atados a la vigencia del régimen,

comandado por el partido colorado y los militares, compleja alianza de intereses que permitió la larga duración de la dictadura, además del soporte internacional.

Para el funcionamiento del Estado clientelar se necesitaron de recursos, sin embargo, el patrón liberal primario exportador exigía bajos impuestos, de hecho, la presión tributaria del país no superaba el 9% (Arditi, 1992). Por tanto, se recurrió a otras fuentes de financiamiento, no tributarias, como los cuantiosos créditos externos, la cooperación no reembolsable, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el de mercado (Borda, 1994), los royalties generados por las grandes obras hidroeléctricas, los ingresos por ciertos vínculos geopolíticos como el establecido con Taiwán. Al mismo tiempo, se facilitaron circuitos ilegales de generación de rentas, en estrecha alianza público-privada, en torno a actividades como el contrabando y la triangulación comercial, el narcotráfico, lavado de dinero, especulación con divisas y tierras públicas, tráfico de rollos, autos y bienes suntuosos, sobrefacturación en obras, entre otras, que agregaron una dimensión mafiosa o criminal al Estado clientelar oligárquico.

El periodo stronista significó un ajuste al modelo agroexportador, como una avanzada en clave neoliberal y neocolonial en la región, con un aparato estatal ampliado para la estabilización del sistema y la generación de beneficios para ciertos sectores. El proceso permitió el surgimiento de una burguesía fraudulenta en el país (Herken, 1975), que hizo su acumulación de capital en el marco de los privilegios generados por el régimen dictatorial, a partir de la corrupción, tierras malhabidas, contratos con el Estado, y el sinnúmero de actividades ilegales toleradas. Esta nueva élite económica, los herederos de Stroessner como los denomina Méndez Grimaldi (2007), serán los actores principales del periodo posdictatorial, a partir de la caída del dictador en febrero de 1989.

Los ajustes recientes, en el contexto del neoliberalismo hegemónico

La desintegración de la Unión Soviética en 1991 simbolizó la victoria del capitalismo neoliberal como sistema hegemónico a escala planetaria. En América Latina significó una década de profundas reformas neoliberales para ajustar las economías, según los cánones indiscutibles del Consenso de Washington. Los cambios fueron drásticos, con profundos impactos sociales en varios países, como Argentina, Bolivia, México, Venezuela, entre otros. En Paraguay, en neoliberalismo ya estaba instalado desde décadas atrás, podría considerarse el Acuerdo Stand By con el FMI en 1957 como indicativo del reajuste en esta dirección; una economía extremadamente abierta al comercio y la inversión extranjera, baja presión tributaria, mercados financieros y laborales con poca regulación real, sindicatos y organizaciones campesinas debilitados, y una fuerte protección a la propiedad privada, principalmente de la tierra, eran rasgos plenamente consolidados. En cierta manera, el sector estatal era el que no estaba totalmente alineado a las directrices neoliberales, por ejemplo, en el mantenimiento de empresas estatales en sectores como la electricidad, agua y telecomunicaciones.

Los gobiernos que se sucedieron desde la década de los noventa, fueron dándole vueltas de tuerca al modelo, profundizando algunos de sus rasgos. El Gral. Andrés Rodríguez, quien fuera cercano colaborador del dictador y por años vinculado al crecimiento del narcotráfico en el país, gobernó entre 1989 y 1993. Durante su periodo se liberalizaron los tipos de cambio y las tasas de interés; se impulsó aún más el comercio exterior, llegando la suma de importaciones y exportaciones a más del 90% del PIB; se implementó una reforma tributaria regresiva con la Ley 125/91; se perfeccionaron las condiciones favorables para las inversiones privadas, con la Ley 60/90 de Incentivos a las inversiones, la Ley 117/91 de Inversiones, así como la Ley 126/91 de Privatizaciones; con ésta última, se logró avanzar en la privatización de algunas empresas estatales, como Líneas Aéreas

Paraguayas (LAP), Aceros del Paraguay y la Flota Mercante del Estado (FLOMERES), aunque no pudieron enajenar otras de mayor importancia, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En 1991 se conformó el MERCOSUR, el cual fortaleció la integración comercial en la región. En 1995 Paraguay tuvo que elevar sus aranceles externos, para nivelarse con el Arancel Externo común del bloque, demostrando su prematura liberalización. El siguiente presidente fue un empresario, también heredero del stronismo, que se había enriquecido en la construcción de la mega obra de la represa de Itaipú en los años setenta. Gobernó entre 1993 y 1998, con una clara línea de libre mercado, se desreguló aún más el sistema financiero, lo que derivó en dos graves crisis financieras, en 1995 y 1998, con quiebra de muchas entidades y pérdida del patrimonio de miles de ahorristas; la intervención del Estado se dio principalmente para auxiliar a los bancos y financieras con pérdidas. Se entregó en concesión a una empresa cercana al presidente la ruta Caaguazú – Ciudad del Este, además de avanzar en las tercerizaciones de servicios estatales. En 1996 se aprobó la adhesión del país al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones de Vegetales (UPOV), que permitió avanzar en la emisión de patentes privadas sobre las semillas. Para atraer inversiones extranjeras, en 1998 se sancionó la ley de Maquila, con amplios beneficios para el capital invertido en esta modalidad dirigida a la exportación de manufacturas.

En los gobiernos colorados de Luis González Machi (1999 – 2003) y de Nicanor Duarte Frutos (2003 – 2008), no hubo cambios de relevancia, dando continuidad a los planes de estabilización de la mano del FMI y sus créditos. Un segundo intento de privatizar las principales empresas estatales se dio en el 2000, con la sanción de la Ley 1615/00 de Reorganización y Transformación de entidades públicas, bajo la cual se convirtieron a las empresas estatales en sociedades anónimas para su venta al capital privado, situación que finalmente no se concretó, tanto por las grandes manifestaciones campesinas y sindicales en contra, como por la resistencia de parte del funcionariado de las mismas, vinculados al modelo clientelar. En el 2004 se concretó

otra reforma tributaria, bajo la Ley 2421/04 de Adecuación Fiscal, que profundizó el esquema regresivo de recaudación, ampliando el alcance del IVA y la reducción del impuesto a la renta de las empresas. Ese mismo año, el gobierno aprobó la liberación comercial de la primera variedad de semilla transgénica en el país, la soja *Roundup Ready* de Monsanto, aunque para entonces ya existían casi dos millones de hectáreas sembradas, que fueron incrementándose año tras año, como principal rubro de la agricultura mecanizada.

La oleada progresista en la región, liderada por Hugo Chávez desde Venezuela, llegó tardíamente al Paraguay con la elección del ex obispo Fernando Lugo en el 2008, en un contexto local de crisis social y hartazgo hacia los largos años de mala gestión del partido colorado. Aunque Lugo tenía un perfil progresista, para lograr la victoria electoral tuvo que conformar una amplia alianza que incluyó a sectores conservadores, como el propio partido Liberal, lo cual de entrada minó sus posibilidades como proceso de transformación. Se logró incrementar la inversión social en algunos sectores, como el de la salud pública y la asistencia a población en situación de pobreza; se intentó regular la gestión de transgénicos y agrotóxicos, así como iniciar un proceso de redistribución de tierras, lo cual generó una creciente y virulenta reacción de empresarios, terratenientes y gremios del agronegocio, que finalmente derivaron en la destitución de Lugo, vía juicio político *express*, en junio de 2012, utilizando el Congreso como argumento principal la conocida como *Masacre de Curuguaty*, enfrentamiento donde murieron campesinos y policías en torno a un conflicto por una tierra apropiada ilegalmente por otro heredero del stronismo, el empresario colorado Blas N. Riquelme. La efímera experiencia progresista de menos de cuatro años terminó abruptamente, sin haber afectado el modelo neoliberal agroexportador, ni el Estado clientelar colorado.

Por poco más de un año asumió la presidencia el vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, en cuya brevísima gestión se enterraron los escasos avances progresistas, se aceleró el endeudamiento estatal por primera vez a través de bonos soberanos, se

liberaron comercialmente distintas semillas transgénicas, y se destacaron casos de corrupción en torno a tierras públicas y obras. En el 2013 el Partido Colorado retomó el gobierno, con la elección de Horacio Cartes, poderoso empresario también vinculado con el stromismo, a través del sonado caso de evasión de divisas que involucró al Banco Central en la década del ochenta. Cartes gobernó hasta el 2018, con una gestión brutalmente neoliberal y mafiosa: durante este periodo la deuda pública creció exponencialmente, los impuestos y la inversión social se mantuvieron bajos; se aprobó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), entre militares y policías, que derivó en prácticas represivas hacia comunidades rurales; actividades ilícitas crecieron significativamente, como el narcotráfico, donde Paraguay pasó a ser privilegiado corredor del tráfico de cocaína hacia Europa; la narcopolítica, es decir, la vinculación de políticos y autoridades con ese sector se volvió un tema cotidiano en las noticias.

Este gobierno dio un nuevo impulso a los privilegios para las inversiones privadas: logró la aprobación de la Ley 5102/13, de Alianza Público Privada, con el objetivo de entregar empresas e infraestructuras estatales al sector privado, incluyendo en la misma la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), para las posibles demandas que requieran impulsar los inversionistas en contra del Estado paraguayo. Además, se sancionó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que restringe el aumento del gasto y los salarios públicos. Este paquete de reformas se completó en 2015 con la Ley de Seguridad a las Inversiones, que garantiza a los capitales privados que los impuestos no se incrementarán por periodos que van de diez a veinte años (Rojas, 2015).

De forma transversal, el extractivismo rural, la especulación inmobiliaria y las estructuras clientelares se fortalecieron durante este gobierno, al igual que con el siguiente, el de Mario Abdo Benítez, también colorado, hijo del secretario privado del dictador Stroessner, quién ejerció la presidencia entre el 2018 y 2023. Prolongó la misma tendencia en política fiscal y monetaria; la deuda pública pasó de 7.500 millones de dólares al inicio, a más de 15.500 millones

al cierre de su periodo; se realizó una reforma fiscal, sin ningún cambio de fondo, manteniendo los privilegios al sector empresarial; el gasto social se mantuvo bajo, a excepción de la inversión en salud durante la pandemia, financiada con nuevas deudas. Siguió el apoyo al sector primario exportador: se aprobaron mega proyectos de inversión para procesar materias primas provenientes de monocultivos, se mantuvo la legislación ambiental permisiva, se modificó el código penal para aumentar los años de cárcel para quienes ocuparen tierras consideradas privadas, entre otras medidas en la misma dirección. Abdo se despidió el 15 de agosto de 2023, habiendo cumplido la tarea de prolongar y fortalecer el modelo económico y político instituido.

Reflexiones finales

La economía capitalista neoliberal plenamente instalada en el país, es funcional a los procesos de acumulación de capitales a escala mundial, regional y nacional. No obstante, el modelo en Paraguay tiene ciertas características particulares, resultado del proceso geopolítico e histórico concreto en que fue forjado, y condicionamientos propios, como el tipo de recursos naturales existentes. De ese conjunto de determinaciones se desprende, entre otros resultados, que se mantenga la hegemonía durante siete décadas del mismo partido político conservador, situación única en el continente, desde la caída del PRI en México, en gran medida por medio del control del aparato estatal y las redes clientelares.

Así también, a pesar de ser un modelo claramente neoliberal, varias empresas estatales no han sido privatizadas, manteniéndose como servicios públicos, más allá de sus grandes deficiencias, cuestión también vinculada a la lógica del Estado clientelar. Otro resultado particular es la bajísima presión tributaria que mantiene el país, menor a la mitad del promedio de los demás países del MERCOSUR, así como una pobre asistencia social. Sin embargo, existe

una proporción significativa de funcionarios estatales, financiada en parte con recursos tributarios pero otra gran parte con otras fuentes, como los royalties de las binacionales, donaciones como las de Taiwán, el endeudamiento, tasas y aranceles por diversos servicios, entre otros.

Desde 1870 en adelante, la liberalización económica fue la norma general predominante, con la propiedad privada concentrada de las tierras como base. La presencia de capitales y empresas extranjeras fue determinante desde entonces, fundamentalmente en torno al modelo primario exportador. Esta fuerte presencia externa inhibió por muchas décadas la formación de una burguesía nacional con capacidad de acumulación, más bien se conformó una oligarquía local, dependiente de la renta de la tierra y los privilegios logrados a partir de sus vínculos con el Estado. A partir de las transformaciones sucedidas desde mediados del siglo XX, y el crecimiento del Estado clientelar mafioso, se fue constituyendo una burguesía nacional fraudulenta, “empresarios”, a partir del manejo discrecional de los recursos públicos y el desarrollo de múltiples actividades ilegales, protegidas por un régimen político y judicial a medida. Este sector y la oligarquía terrateniente, estrechamente vinculados, son los herederos históricos del modelo implementado, devenidos en clase hegemónica y gobernante hasta la actualidad. Casi todos los ex presidentes recientes son a la vez “empresarios”, políticos y terratenientes, como Rodríguez, Wasmosy, González Machi, Cartes y Abdo.

Otro rasgo particular del Paraguay, el no haber entrado en el proceso de sustitución de importaciones y, por tanto, la no industrialización, ha resultado en una clase obrera estrecha, pero agobiada tanto por la cruel persecución sufrida, así como por los mecanismos de cooptación eficientemente implementados por los gobiernos colorados. El sector campesino ha sido históricamente el más numeroso en términos demográficos, y ha sido el que más ha confrontado con los terratenientes y la expansión territorial del sector agroexportador, luchas en desigualdad de condiciones, que les ha reportado innumerables víctimas, pero que también les ha permitido conquistar

territorios y sobrevivir como clase social. Las barriadas populares periurbanas, de gran expansión en las últimas décadas, alberga a miles de familias empobrecidas, vinculadas a actividades económicas informales o inestables, o explotadas como fuerza de trabajo de baja remuneración; es un sector numeroso, con proyección social y política, pero aún con una limitada conciencia social y organización. Otro sector importante de la población, de ingresos medios e incluso bajos, está inserto en las estructuras clientelares de los partidos políticos conservadores, siendo funcionales a la reproducción del sistema.

A 50 años del sacrificio de Allende y miles de chilenos y chilenas, así como de millones de latinoamericanos en los años siguientes, la superación del capitalismo existente en cada país, en esta etapa con rasgos violentamente neoliberales, solo será posible como sublevación frente al orden establecido, como rebeldía y conquista, como lucha popular organizada, trabajando la conciencia del presente y de otro futuro posible. Como anunciaban Marx y Engels ya en el *Manifiesto*, hay un mundo que ganar.

BIBLIOGRAFÍA

- Abente Brun, Diego (2012). Estatalidad y calidad de la democracia en Paraguay. *América Latina Hoy*, 60, 43-66.
- Arditi, Benjamín (1992). *Adiós a Stroessner. La reconstrucción de la política en el Paraguay*. Asunción: CDE, RP Ediciones.
- Borda, Dionisio (1994). *Auge y Crisis de un modelo económico: el caso paraguayo*. Asunción: UCA, Biblioteca de Estudios Paraguayos.
- Campos, Luis (2010). *Apuntes de historia económica del Paraguay*. Asunción: Intercontinental Editora.
- Fogel, Ramón (1986). *Movimientos Campesinos en el Paraguay*. Asunción: CPES.
- Herken, Juan Carlos (1975). Desarrollo capitalista, expansión brasileña y condiciones del proceso político en Paraguay. *Revista Nueva Sociedad* 17.
- Kleinpenning, Jan (2014). *Paraguay Rural 1870 – 1963*. Tiempo de Historia.
- Marx, Karl y Engels, Friedrich (1848). *El manifiesto comunista*. Londres.
- Méndez, Idilio (2007). *Los herederos de Stroessner*. Asunción: Arandura Editorial.
- Pastore, Carlos (2008). *La lucha por la tierra en el Paraguay*. Asunción: Intercontinental Editora.
- Rojas Villagra, Luis (Coord.). (2015). *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas*. Buenos Aires: CLACSO.
- (2014). *La metamorfosis del Paraguay*. Asunción: BASE Investigaciones Sociales.
- (2014). *La economía durante el Stronismo*. Asunción: El Lector.
- SEPPY (2022). *Política económica de la desigualdad. IV Año de Gobierno de Mario Abdo Benítez. Un análisis crítico: Asunción*. IV-Informe-SEPPY-Version-FINAL.pdf

Schvartzman, Mauricio (2011). *Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya*. Asunción: CIDSEP, Secretaría Nacional de Cultura.

White, Richard Alan (1984). *La primera revolución radical de América*. Asunción: Ediciones La República.

Brasil: sinuosidades del neoliberalismo verde y amarillo

Hernán Ramírez¹

La ideología conforma la manera como la burguesía legitima su dominio dentro del capitalismo, ya no por el primado de la fuerza sino por la acción de las ideas, que generan el consenso sobre el cual se instala la hegemonía. De esto se desprende que no hay ideología que planea en el aire, suelta, sino que es una construcción social que se corresponde al desarrollo de determinada etapa de nuestro modo de producción. Así, más que un simple cuerpo teórico, es un instrumento que la clase dominante emplea para ejercer su poder y permitir su reproducción sistémica.

De esta forma, un estudio de la ideología basado sólo en las ideas que presenta siempre será parcial y realizarlo de una forma completa tendrá que llevar en cuenta las estructuras sobre las cuales opera y los grupos que las emplean como parte de su repertorio para dominar. Por ello, no tendremos desarrollos generales similares en todos los casos, sino que el mismo seguirá las sinuosidades que las

¹ Profesor de la Unisinos / CNPq

topografías locales le confiera, pues, al enraizarse, de ellas se nutren, lo que les transmite peculiaridades que no son meras deformaciones del modelo, sino la forma como el mismo se va consolidando y construyendo, no como un ideal, más bien, como parte de esa misma realidad.

Si tomamos el proceso general del desarrollo del neoliberalismo en sus locales centrales de producción podremos constatarlo claramente. No existe un neoliberalismo puro, cristalino, sino neoliberalesmos en plural, que se formaron de acuerdo a lugares y épocas específicas, que les proporcionaron sus sesgos, que, lejos de debilitarlo, les confirieron la plasticidad necesaria para adaptarse a esas mismas circunstancias y así tornarse hegemónico.

Como la literatura que aborda el proceso de constitución del neoliberalismo es mucha, y ya conocida en sus trazos generales, no habré de detenerme en ella, remitiéndonos a trabajos anteriores en el que hemos expuesto consideraciones que toman cuenta no solo del estado del arte sino de la forma como lo concebimos. El objetivo estará centrado en comprender su devenir en el caso brasileño, que tiene particularidades interesantes, muchas de ellas aún poco exploradas y otras que, según nuestro juicio, han provocado algunas confusiones al hacer una lectura del proceso en una regresión histórica, cuando se tenía un modelo cristalizado que se buscaba encontrar en nuestro pasado tal cual.

Esto conformaba una suerte de ilusión biográfica aplicada a los procesos sociales que ha depurado esa reconstrucción histórica de varios de sus afluentes y variantes que construyeron el espectro neoliberal, las que poco a poco hoy se recuperan, mostrándonos como fue mucho más polimorfo y con aportes que fluyeron de distintos puntos cardinales, aun cuando el faro de Mont Pèlerin se haya constituido en su estrella guía, la que muchas veces ha encandilado nuestras visiones como analistas, apagando esas zonas grises.

Toda luz tiene sus refracciones de acuerdo a los ambientes que atraviesa y el halcón peregrino siempre llega al mismo lugar, pero haciendo distintos recorridos, lo que queda claro en el caso brasileño.

Diferente de otros caros regionales, que suelen tomarse para efectos de comparación, el enraizamiento del neoliberalismo verde y amarillo tuvo más rupturas y una filiación menos clara respecto de los modelos más conocidos. Por ello, este recorrido panorámico, pero incisivo, gira en torno de sus dos grandes momentos, en medio de los cuales se abrió una importante laguna. De todos modos, no por esta ruptura las dos etapas dejaron de registrar muchas y singulares continuidades, que nos hablan bastante de sus estructuras y de los agentes e instituciones que los abrazaron. Los que deben ser comprendidos en conjunto, so pena de perderse en el enmarañado montado por nuestro objeto para enraizarse y fructificar, muchas veces mimetizándose al medio.

Primera ola

Fundado en 1961, el Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPÊS)² puede ser considerado como la primera entidad brasileña a circular ideas neoliberales de forma abierta y sistemática. No obstante, somos partidarios de ver esas cristalizaciones institucionales como un punto de llegada más que de partida. Para erguir las, necesariamente, debe haber existido un ambiente preparatorio previo sobre el cual se construyeran sus cimientos y desde allí levantaron sus estructuras.

De hecho, el IPÊS actuó en sintonía con el Instituto Brasileño de Acción Democrática (IBAD) en una especie de “modus vivendi” que las fuentes³ y la triangulación de miembros dejan más que claro. Creado dos años antes, en 1959, este último desempeñó una acción más política, aunque también condujo importantes estudios, que aquel heredara después que su congénere fuera ilegalizado por el Parlamento en 1963, bajo alegación de usar recursos extranjeros. Y,

² Hemos tratado sobre este Instituto en distintos trabajos, ver especialmente Ramírez (2009).

³ Arquivo Nacional. (20/3/1962). IPÊS. De Garrido Torres para o General Herrera, Rio de Janeiro.

como sería imposible pintar ese horizonte sobre el cual el neoliberalismo emerge en Brasil, habré de detenerme solo en dos de sus figuras claves, que nos proporcionan algunos datos importantes.

Paulo Ayres Filho fue uno de ellos. Empresario del ramo farmacéutico y banquero, tomó la iniciativa para traer, en 1954, a Ludwig Erhard, ministro de Economía de Alemania Occidental. Lo que nos ofrece diversos elementos a considerar, el primero de ellos es sin duda la fuerza que tiene este grupo de germanófilos que arranca de tiempos atrás, así como la admiración que su Milagro Económico despertaba en algunos países y, por fin, sobre el papel desempeñado por Alemania durante la Guerra Fría, en particular como primera barrera contra el comunismo con un modelo de desarrollo que representaba una alternativa al modelo de capitalismo más duro, pues pensaba las formas en el que este tránsito se daba desde naciones con mercados imperfectos y con sindicatos más fuertes. Categoría en la cual Brasil se encuadraba. Así, esta vertiente admitía una presencia estatal más fuerte, lo que también agradaba a la derecha más tradicional, incluidos los militares, y que va a permitir una amalgama entre tales núcleos, la que tuvo inicialmente más naturaleza política de lo que económica.

Otra de estas figuras fue Enno Hobbing. Aunque no llegó a ser miembro formal del IPÊS, tal vez para esconder rastros, desempeño un papel mucho más activo de lo que las fuentes indican, pudiendo ser la mente por tras de esas creaciones (Moreira, 2019), pues no era un empresario a la deriva, sino pieza clave en diversos frentes, con poderosas vinculaciones políticas y empresariales.

Hobbing inició su carrera protegiendo la huida de los científicos alemanes hacia los Estados Unidos y, ya en su tierra natal, se convirtió en instrumento de David Rockefeller, demiurgo de la reorganización mundial a través, entre otras instituciones, de la Trilateral Commission. El que estuvo presente, ciertamente no de modo casual, en varios países que vivieron golpes de Estado, desde Guatemala a Chile (Hoeveler, 2020), descansando hoy mercedamente en Arlington,

panteón reservado a glorias nacionales. Trayectoria que expone una serie de indicios que merecen ser destacados.

Documentos del IPÊS muestran que una institución vinculada a Rockefeller como el Council for Latin America (CLA) invitó en 1962 y 1963 a dos empresarios de cada país de la región a una reunión en Nassau. A lo que el IPÊS respondió positivamente, enviando una comitiva que posteriormente rumbeó a los Estados Unidos, donde se reunió con empresarios y políticos locales⁴.

Por ello, sospechamos aún más que la iniciativa de su creación haya tenido influjo externo, pues, por esa época, experiencias similares pululan, como es el caso de México, que vio nacer su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) en 1958, casualmente la traducción exacta de IPÊS. Y la circulación con el caso mexicano no para por allí, porque también sabemos que divulgaron un libro de Luis Montes de Oca, conspicuo representante de la Escuela austríaca en tierras aztecas, y registramos un artículo idéntico publicado en las revistas *Espejo*, del Instituto mexicano, y *Democracia e Empresa* (Moraes, 2012), perteneciente al Instituto brasileño, practica que era incentivada por el CLA, que recomendaba mantenerla en sigilo⁵.

Esto se corresponde con el periodo de mayor producción eidética del IPÊS, comprendido entre 1962 y 1963, en el cual construyeron un amplísimo programa, que no fue consolidado como en el caso chileno en un texto único, al estilo de *El Ladrillo*, y estuvo desperdido en una decena de proyectos, que abarcaron distintos tipos de reformas, las que ciertamente incluían lo económico, pero que también se dedicaron a lo social y político, adentrando el universo de lo ideológico⁶. El neoliberalismo y después las dictaduras son proyectos refundacionales, completos, que buscaban adaptar la economía ante las nuevas exigencias que demandaban las transformaciones de los capitalistas avanzados, así como rearticular su sistema político e

⁴ Arquivo Nacional. (12/2/62). IPÊS. Atas do IPÊS/Rio.

⁵ CLA. (Julio de 1965). Intercambio 1(4). Y Council for Latin América Report (Octubre de 1965).

⁶ Realizamos una comparación entre esos dos corpus eidéticos en Ramírez (2012).

ideológico para frenar y revertir el proceso de radicalización en curso (Ramírez, 2015).

De todos modos, si bien es claro que el IPÊS tuvo influencias neoliberales, hay una cierta confusión acerca de sus influjos, menos evidentes que en las experiencias vecinas, por lo cual muchas veces se las han confundido. Problema heurístico que también se trasladó a la tipificación de la dictadura, muchas veces rotulada como nacional desarrollista autoritaria. Concepto problemático porque el IPÊS fue creado y la dictadura se instaló precisamente para combatir los grupos y las políticas desarrollistas. A lo que podemos responder que no se puede asociar automáticamente con el Desarrollismo todas las ideas que busquen el desarrollo, pues muchas teorías lo persiguen, así como a instrumentos que usan, por ejemplo, la planificación, que también están presentes en muchas otras corrientes, sin caer necesariamente en la de tipo soviético.

Por ello, basados en trabajos de Caroline Klein (2020) y en evidencias empíricas de diversos contactos con Alemania, hemos sostenido la hipótesis de que las políticas del IPÊS y muchas de las implementadas durante la dictadura tuvieron inspiraciones en esos orígenes, en especial aquellas que se pueden asociar al Ordoliberalismo y a la Economía Social de Mercado (Ramírez, 2021). Sobre todo, por la idea de construir un nuevo orden capitalista, de carácter intermediario, y la fuerte relación con tradiciones autoritarias y de la Doctrina Social de la Iglesia⁷.

Básicamente ello se centraba en la búsqueda enfrentar el contexto de radicalización en curso, como misión contrarrevolucionaria preventiva, y en adecuar el capitalismo local al nuevo modo de acumulación en ciernes. Pues juzgaban el modelo substitutivo como causa de sus males presentes, que llevaban a procesos inflacionarios y de descontrol público, lo que impactaba en la competitividad local, así como por presentar distintos dispositivos estructurales que

⁷ Sobre las relaciones de la Iglesia con el IPÊS, ver Ramírez (2019), y con el neoliberalismo de modo general, Ramírez (2022).

llevaban a una supuesta parálisis productiva, en particular aquellos que protegían la mano de obra. De todos modos, tenían también una preocupación para tornar el nuevo sistema más agradable a los sectores del trabajo, en particular creando mecanismos que los aproximaran a sus conquistas y así conseguir su adhesión o consentimiento pasivo.

Ello queda muy claro en el espíritu del propio IPÊS, que muchos de sus cuadros llevaron a la administración autoritaria, por el cual se buscaron instalar transformaciones profundas, duraderas, dentro de la economía como lo social y político. Cuyo broche de oro sería transformar la Constitución, lo que se consiguió en 1967, pues sobre ella se asientan todas las bases legales de nuestras sociedades, así que alterarlas y cristalizarlas en un dispositivo perene revestía de crucial importancia, pues su acción era de muy largo plazo. Instrumento legal que habría sido pergeñado por Francisco Falcon, jurista que también prestó servicios para formular la Carta Magna varguista, de fuerte inspiración fascista, y que tuvo fuertes vínculos con el IPÊS, revelando así ese nexo entre las derechas de viejo y nuevo cuño, que atraviesan y se reconvierten en ese proceso.

Aunque las intenciones eran hegemónicas y se realizaron diversas tentativas para obtener adhesiones y consentimientos, el contexto de radicalización se fue profundizando, lo que llevó a una mayor necesidad de disciplinamiento, especialmente en el medio sindical y estudiantil, a lo que se respondió con mayores restricciones, como la que se promulga con tal Constitución, que elimina el derecho de huelga.

De todos modos, el intento duraría muy poco, pues sólo dos años después era sacrificada ante el recrudecimiento de la coyuntura. No obstante, ello nos muestra un norte, que el caso de Chile supo aprovechar mejor, pues fue con su Constitución de 1980 que el neoliberalismo se entroniza a las anchas por primera vez, dispositivo que se ha demostrado difícil de extirpar, aún con el paso de los años y las intensas disputas que ha levantado. Y, si bien, podemos reconocer un fracaso parcial, hay que reconocer que muchas de las reformas

implementadas no fueron revertidas, especialmente las que impactaron el medio laboral y que tienen consecuencias hasta la época actual, como las que se refieren a la eliminación de la garantía de estabilidad por tiempo de servicio, que podemos usar para ilustrar esas permanencias y también cuestionarnos sobre otros asuntos.

La estabilidad era ciertamente el principal estorbo para proceder a una reformatación radical en el mundo del trabajo y eliminarla para el sector privado fue clave, medida que fue acompañada por la implantación de una especie de seguro de desempleo, que denominaron Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), pensado inicialmente por el IBAD, transferido al IPÊS y aprobado por la dictadura en 1966⁸. Este fondo se parece en mucho y anticipa en décadas la iniciativa que Chile implementó con sus Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFPs), con lo cual habría que reevaluar su carácter pionero, que le correspondería al Brasil pero que se diluyó por causa del declive que aquejó a tales posiciones, en especial tras la debacle de 1973 y la asociación con un régimen autoritario, mácula que en Brasil causó menos estragos.

Interregno

Encontrar el exacto punto de ruptura de esa primera ola parece una tarea imposible. El IPÊS tuvo algunos problemas congénitos al nacer, siendo que uno de los decisivos estuvo marcado por la fuerte división entre paulistas y cariocas, lo que llevaría a la escisión apenas consumado el golpe de Estado en 1964. A partir de allí se inicia un lento proceso de decadencia que es un tanto paradójico, pues coincide con su llegada al poder, aunque puede tener algunas posibles hipótesis explicativas.

⁸ Abordamos tal hipótesis en mayor profundidad en un capítulo de próxima publicación (Ramírez, en prensa/b).

Más que el contexto externo, las causas internas decidieron el destino del IPÊS. Su estrategia siempre fue más de acción política de lo que de construcción eidética propia, la que tercerizaba en otras instituciones o personalidades. De tal modo, no montó un equipo permanente ni realizó inversiones sobre los mismos, a excepción de los pagos por los trabajos que realizara de modo ad hoc, y sus principales cuadros pasaron en su gran mayoría a cumplir funciones de gobierno, lo que los alejó del cotidiano del Instituto.

Cuando el problema fue percibido, especialmente en la coyuntura entre 1966 y 1967, adoptaron una estrategia de convertirlo en una especie de centro de posgrado, pero sus cursos no maduraron con la velocidad deseada y no se pudo evitar la crisis, que se profundizó por una decisión equivocada, ya que contrajeron una abultada deuda inmobiliaria, que a la postre se reveló fatal. Para 1971 todas sus filiales ya habían cerrado las puertas, incluso la carioca lo hizo por desmovilización, pues no alcanzaron quorum suficiente para darle sepultura definitiva.

Así, tras ello, se abre un interregno, en el que hubo alguna que otra iniciativa aislada, pero que no mudaron el cuadro de aislamiento de las posiciones neoliberales, el que pudo haber coincidido también con la propia crisis del modelo adoptado, cuando tras la Crisis del Petróleo el propio Milagre Econômico se hunda y la dictadura comience su larga transición.

De todas esas iniciativas de corte más individual de lo que institucional, las tres visitas que Friedrich Hayek realizara entre 1977 y 1981 hablan por sí solas. Debido a la iniciativa de Henry Maksoud, empresario del ramo hotelero y editor de la revista *Visão*, órgano que difundía ideología de modo difuso por la región, despertaron mucho menos interés que su paso por países vecinos, sin que fuera recibido por altas autoridades, demostrando así las preferencias de esta y también las del empresariado, que refluían hacia posiciones proteccionistas, como nos indica el Manifiesto dos Oito de 1978 (Bianchi, 2001 y Ramírez, 2013).

Segunda ola

Aún en dictadura y tal vez para anticiparse a las disputas ideológicas que la democracia recién recuperada provocaría, presenciaremos el segundo enraizamiento neoliberal, esta vez más una implantación, pues será el empresario Donald Steward Jr. quien crea el primer Instituto Liberal (IL) en 1983 (Gros, 2003), para lo cual pidió consejos a Sir Anthonny Fischer. Éste fue artífice del Institute of Economic Affairs, del Reino Unido, y de la Atlas Economic Research Foundation, conocida actualmente como Atlas Network. También fue miembro de la Sociedad Mont Pèlerin y, por ende, un devoto de la Escuela Austríaca, aunque con su arribo a los Estados Unidos incorporara miembros de Chicago. Por lo cual no resulta un dato aleatorio que Steward invitara Og Leme, doctorado en tal Universidad, para ser su director de estudios y, de esta forma, incorpora más de un haz del espectro neoliberal a su Institución.

Su primera sede estuvo anclada en Río de Janeiro, a la que le sigue en São Paulo en 1986 otra, con lo cual se mantiene la lógica observada en el IPÊS y tan solo se invierte su secuencia. De este último año data también la creación del Instituto en Rio Grande do Sul, que muda ligeramente de nombre para Instituto Liberdade, en otra tendencia observada durante la primera ola, a lo que suma también anclar su sede en la Pontificia Universidad Católica local, (PUC/RS), lo que muestra como la relación con la Iglesia es otra constante.

En esta etapa se produce una explosión de grupos que promueven el neoliberalismo, siendo la mayoría de ellos de corte más propagandístico de lo que centros de pensamiento articuladores de políticas públicas, los que han quedado restringidos a nichos más específicos. Algo que el argentino Alejandro Chafuen, presidente de la Atlas Network, observara en tono jocosos. Una suerte de auto generación weberiana de la máquina burocrática neoliberal, que hace pulular facsímiles de franquicias de venta de productos ideológicos y que funcionan como poleas para conseguir cargos promovidas por esos

nuevos Intellectuals Entrepreneurs (Chafuen, 2004), que los han transformados en sus formas honestas de ganar la vida.

La figura más hábil en ese papel de mediador tal vez sea la de João Doria, creador del grupo de Líderes Empresariales (LIDE), el que transformó su emprendimiento privado en un espacio de encuentros fluidos entre empresarios, políticos y figuras de los medios y del ambiente judicial, los que serán importantes a la hora de legitimar el Estado de excepción que posibilitó el retorno de posiciones neoliberales al poder. Como ilustra su propio caso, meteóricamente consagrado intendente y después gobernador de São Paulo.

Función semejante, pero con menos repercusión, le cupo al Instituto Millenium (Imil), otro de los advocacy think tanks brasileiro (Pastchiki, 2017). A pesar de estar formalmente radicado en Rio de Janeiro, fue fundado en 2005 por el profesor de filosofía gaúcho Denis Rosenfield junto a Patrícia Carlos de Andrade, denominado Instituto de Estudos da Realidade Nacional (IERN) hasta 2006. Vale señalar que sus dos fundadores están estrechamente vinculados al grupo Globo y su repetidora gaúcha, la RBS. Siendo que Patrícia Carlos de Andrade también se graduó en la PUC/Rio, por lo cual su tándem intelectual está en peso dentro del Instituto y remarca la vinculación con la Iglesia.

Fue en dicha universidad donde se formó el equipo que daría vida al Plano Real y que después montó su refugio tecnocrático en separado, al que llamaron Instituto de Estudos de Política Econômica / Casa das Garças (IEPE/CdG). Creado en Rio de Janeiro en 2013 sumó otros tecnócratas de gran influencia en el medio empresarial, con los cuales han articulado relaciones que los han convertido también en accionistas de entidades bancarias y fondos de inversiones, revelando un poco la promiscuidad entre lo público y lo privado, en un mecanismo hoy ampliamente conocido como de la puerta giratoria.

Con un sesgo mucho más específico, el Instituto Ludwig von Mises Brasil (IMB) es otro de los aparatos ideológicos de la burguesía que nos revela importantes indicios. Fundado en 2007 por Hélio Coutinho Beltrão, hijo de un ministro de la dictadura, que estuvo al

frente de tres ministerios en sus administraciones más autoritarias, el último de los cuales, y valga como paradoja, de la Desburocratización. Esa vinculación con un pasado tan oscuro se expresa también en ser socio de la empresa Ultra, grupo que tuvo Henning Albert Boilesen como director, muerto en una emboscada por su participación directa en las torturas practicadas por la Operação Bandeirante (OBAN), con lo cual se demuestra más una vez la relación umbilical del neoliberalismo, pasado y presente, con el autoritarismo.

Los hechos que se inician en 2013 y llevan al impeachment de Dilma Rousseff en 2016 profundizaron aún más el activismo político de los grupos neoliberales, que crecieron exponencialmente al calor de esa ola. De todos estos grupos, elegimos el Movimiento Brasil Livre (MBL) para ejemplificar este grupo, pues fue el que ganó mayor protagonismo y consiguió cristalizarse. Fue creado en 2014 por jóvenes, algunos de ellos financiados por el Liberty Fund, que se enrolaban ya en posiciones neoliberales, el que alcanzó un gran protagonismo en el ambiente virtual, especialmente las redes sociales, muchas veces asumiendo un estilo patrón en otros exitosos jóvenes neoliberales latinoamericanos, lo que le permitió pasar al medio político ocupando bancas en el Parlamento. Tuvo un espacio mayor al inicio y un reflujo reciente, lo que podría movernos a cuestionar su verdadero potencial.

También mirando el frente político se ubica la siguiente emergencia. Aunque estaba siendo urdido desde 2011, adeptos del neoliberalismo aprovecharon también los influjos de esa revuelta “primaveril” y consiguieron el registro formal de un partido en 2015, el único que lo abraza abiertamente y que “originalmente” bautizaron de Novo, el que supuestamente venía a transformar de raíz otra vez la política brasileira, denominación que nos habla de la naturaleza refundacional que estos grupos siempre se han auto adjudicado. Si bien no tuvieron éxito nacional en las dos elecciones presidenciales que disputaron, han obtenido algunos triunfos locales, lo que nos le ha sido suficiente para superar la cláusula de barrera, permaneciendo como un partido pequeño.

Y, si bien se propalan como flamante novedad, muchos de sus comportamientos remiten al pasado, radicando el más importante de todos ellos en el hecho de haberse convertido en línea auxiliar de gobiernos y líderes neoautoritarios. En esa función, sentaron base los presidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro, lo cual llevó al Partido a vivir una crisis interna, con su fundador siendo expulsado y la estructura tomada por asalto, entronizando sin medias tintas posiciones más extremas, con lo cual se comprueba una vez más el carácter de Estado de excepción como forma jurídica del neoliberalismo. Esto provocó anteponer la libertad total al capital, que llaman de Mercado, por sobre la preservación de la propia democracia, la que debe rendirse ante aquel. Tesis que parte del propio Friedrich Hayek en su condena a los regímenes que califica de iliberales, que justifican por ello ser derrocados⁹.

De todos modos, este aparente fracaso en alcanzar el poder de forma directa no debe ser visto como algo completo, sino que sus ideas pueden difuminarse de otros modos, por medios más indirectos, como se comprueba con la instalación de algunos nuevos términos con los cuales se han resignificado categorías sociales, como son las de colaborador y emprendedor. El primero corresponde a una construcción más alemana y su diseminación de dio por medio de la teoría gerencial, así que no me detendré en él, pero sí sobre en el segundo, ya que su instalación fue operada por actores locales.

Aún poseemos poco conocimiento sobre la forma en que el término emprendedor se propaló dentro de las sociedades. Los que pintamos canas podemos constatar que unas décadas atrás solo era conocido en círculos restringidos y hoy se transformó en moneda corriente. De todos modos, algunas pistas ya poseemos, para lo cual hay que remontarse un poco en el tiempo y desplazarse hacia los Estados Unidos por vuelta de 1919, cuando se funda la *Boys and Girl Bureau of the Eastern States League*, institución que hoy se conoce

⁹ Abordamos en profundidad, especialmente en su relación con el régimen chileno, en Ramírez (2022).

como Junior Achievement (JA)¹⁰, nombre que adoptó en 1926, y que actúa en más de 100 países, incluido Brasil, con acciones que impactan 10 millones de jóvenes anualmente pregonando básicamente el emprendedorismo.

Aunque no se arbolan expresamente como neoliberales, en la práctica, producen la subjetivación de uno de sus emblemas, pues ese concepto con origen en Francia se imbrica de forma particular con el capitalismo a través de Joseph Schumpeter, quien lo coloca en un sitio preponderante, pues lo convierte en el agente por antonomasia de la innovación y disposición por asumir los riesgos. Por ello, la trayectoria de tal organización nos ofrece importantes pistas para comenzar a destrinchar tal enigma.

Su nacimiento un año después de la Revolución Rusa no puede haber sido una simple coincidencia, sino la respuesta norteamericana a un problema que comenzaba a ser acuciante, como el de la inserción de las jóvenes generaciones rurales en las grandes urbes para las cuales migraban, donde se convertían en pasto fácil del canto de sirena de la izquierda, motivo por el cual inocularles antídotos preventivos era vital. Para ello, el empresariado en alianza con el segmento político y religioso se unen con el objetivo de constituir una organización que los eduque para afrontar tales desafíos. Recordemos en un cierto paralelismo que el IPÊS entabló fuertes relaciones con la Associação Cristão de Moços (ACM) y los boys scouts locales, que también inspiró la organización en los Estados Unidos, a los que destinó recursos con finalidad similar.

La relación directa con el neoliberalismo ocurriría mucho tiempo después. De todos modos, el caldo de cultivo del cual emerge es similar en ambos procesos. El anticomunismo y la necesidad de ponerle barreras lleva a los sectores de la élite a unirse para enfrentarlo ideológicamente. Un poco más a frente cronológicamente, surge otro punto de convergencia surge, cuando el New Deal de una respuesta

¹⁰ Sobre el mismo hay solo historias institucionales y tratamos del mismo en un artículo de próxima publicación (Ramírez, en prensa/a)

semejante, pero desde una versión capitalista con más acción estatal, a lo cual la entidad se opondrá vehementemente. Así, no resultará una novedad que en el contexto de la Guerra Fría la unión acontezca, cuando em 1962 comienzan a circular en su interior ideas provistas por la Fundation for Economic Education (FEE). Recordemos que la entidad fue fundada por Leonard Read un año antes que la Sociedad Mont Pèlerin, y Friedrich Hayek confesó haberla tomado como modelo, la que está inscrita en la línea austríaca y congregó algunas de sus figuras medulares dentro de los Estados Unidos.

De esta época también radica su expansión internacional, que lo haría recalar por Brasil en 1986, con Jorge Gerdau Johannpeter como presidente, año y figura que también remiten al inicio del segundo enraizamiento neoliberal correspondiente a la época de redemocratización. Nótese que este tipo de organización parece tener un fin muy específico, no obstante, con un impacto tremendo, pues actúa difuminando el neoliberalismo en una instancia básica, dentro de un público amplio, como el de escuelas de nivel medio. Este catecismo inicial sirve de antídoto al pensamiento crítico y permite que sobre estos cimientos se yergan otros muros ideológicos más altos. Es una pequeña gota que repetida millones de veces termina por componer un gran océano, aún poco mensurado.

Así se comprende que para 2008 se modifique la ley de la micro-empresa creada en los estertores de la dictadura en 1984 por Hélio Beltrão, padre del fundador del IMB, como mencionado, y se la pase a denominar del micro-emprendedor individual, marcando así el debut del concepto en el orden legal. Vale señalar que ello ocurría bajo un gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT), por lo cual la ideología neoliberal al subjetivarse pasa a permear distintos clivajes del espectro político, convertida en un orden natural.

Esta acción ganó mayor escala recientemente, cuando en 2017 se promulgue la Nueva Enseñanza Media, donde sus preceptos se incorporan al currículum en diversas disciplinas, propiciando así un mayor alcance, a la vez que se reduce la carga horaria de aquellas

disciplinas que tradicionalmente se han mostrado como más propicias para erigir algún contrapunto.

La introducción de metodologías gerenciales y currículos de base neoliberal en las escuelas es algo que se viene incentivando desde hace tiempo, especialmente insuflado por los órganos internacionales de fomento, que condicionan sus auxilios a esas métricas y parámetros. Proceso que también cuenta con importantes aliados locales, muchas veces actuando en aparente independencia ideológica, tras la fachada de institutos de investigación, o *think tanks*, pero que en realidad podríamos encuadrar como aparatos privados de hegemonía, pues la asociación con intereses materiales resulta clara.

Creado en 2006, el movimiento Todos pela Educação (TPE) está patrocinado por lo más granado de los intereses burgueses, contando con Jorge Gerdau Johannpeter en su presidencia, en otra acción de nuestro conocido demiurgo de instituciones neoliberales, y sus pilares muestran claramente tales intenciones, la producción de conocimiento, el monitoreo público, pautar la educación en la sociedad y movilizar actores clave. Algo que han conseguido con creces, produciendo efectos que por ser difusos no son bien mensurados, pero que podemos percibir en comparaciones de largo plazo, que muestran ese cambio radical. Esa era una táctica recomendada por Dario Almeida Magalhães, del IPÊS, para quien era preciso “fazer a ação extremista, mas com uma porção de biombos”¹¹.

De cabo a rabo, de la base al techo de nuestra organización social, podemos realizar constataciones dentro del ambiente escolar que nos lo apuntan, especialmente en su función como formadora de individuos ajustados a una realidad social, sea en carácter de miembros de una comunidad, que posee principios y valores, como mano de obra adecuada para un sistema que requiere determinados conocimientos y habilidades.

Así estas organizaciones de forma directa o indirecta, a través de los medios masivos de comunicación, fueron las responsables por

¹¹ Arquivo Nacional. IPÊS. (19/6/1962). Atas do Comitê Executivo do IPÊS/Rio.

subjetivar el neoliberalismo, el que penetró hasta en el cotidiano de las personas, mudando sus comportamientos, valores y lógicas. Así se liberó el *homo æconomicus* de las amarras que lo prendían a lo social y, especialmente, al Estado como su organizador. Instala de esta forma una ética en la cual nuestro intrépido emprendedor emerge como arquetipo. Y, no por casualidad, el neoliberalismo se asocia con soluciones autoritarias.

Ética del trabajo y fundamento de la propiedad que están muy próximos a aquellos que el modo bandeirante construyó en Brasil desde la época colonial y que aún persisten, los que actuaron como refuerzo de esta alianza. Reminiscencia que tan solo se aparta del entramado que dio origen en la dictadura por una legitimación religiosa un poco diferente, pues la Doctrina Social de la Iglesia fue sustituida por la Teología de la Prosperidad, pero que continúa asentada sobre bases más o menos similares.

Conclusiones

El enraizamiento del neoliberalismo en tierras brasileñas tuvo, tal vez como todo proceso, elementos que muestran haber seguido a pie juntillas su marco general, pues no es algo totalmente endógeno, pero también ciertas particularidades que le confirieron un tono algo diferente, el que no debe ser visto como algo anecdótico, sino una característica que le brindó una gran capacidad mimética, vital para adecuarse a topografías diversas. Así como en la orla de Copacabana la sinuosidad pavimenta sus vías, el neoliberalismo verde y amarillo tuvo una historia un poco más movida que en regiones vecinas, donde hubo continuidades temporales mayores.

Dentro de ellas, el problema de la ruptura surge como un elemento importante a la hora de comparar ese proceso con el de otros casos regionales. No obstante, esos quiebres pueden verse diversos elementos en común entre las dos épocas en que el neoliberalismo fue enraizados institucionalmente. La principal de ellas es que tiende a

seguir las características de su desarrollo corporativo y político, con fuerte clivaje regional y una menor propensión a la creación eidética propia de lo que en países con procesos similares, que en el caso del IPÊS fue tercerizada hacia otras instituciones, reservándose más un papel de organizador de tal proceso.

Igualmente, entre las dos épocas resalta el hecho de que como proyecto político buscó construir un dominio hegemónico, lo que consiguió en algunos periodos, pero que propendió para salidas autoritarias o neo autoritarias con la intención de frenar el avance de posiciones rivales, revelando así su naturaleza eminentemente contrarrevolucionaria, que lo lleva a entablar alianzas con fuerzas conservadoras y de derecha, muchas veces de larga tradición. Entre las cuales, la imbricación con la Iglesia católica, que le transferirá diversos elementos de su Doctrina Social, lo que también ocurriera en los procesos general y regional.

También esa asociación está marcada por la necesidad de acercarse al poder de forma más directa, pues, aunque sus ideas puedan gozar de popularidad, solo en momentos muy puntuales han conseguido transferirle votos, por lo cual colonizan estructuras y cooptan o chantajejan los candidatos que pueden ayudarlos a alcanzar ese objetivo. Simbiosis presente en muchos de los casos regionales por los cuales una de las partes garante el acceso vía política y la otra la complacencia del “Mercado”, ente imaginario que corporifica los intereses burgueses más concentrados.

De todos modos, observamos que el neoliberalismo ha conseguido sus objetivos de subjetivarse en millones de individuos que han introyectado sus conceptos sin casi percibirlo. De esta forma, su lógica se arrastra por todo el tejido social, aunque la palabra continúe maldita para muchos, que los asocian con los males que aquejan nuestras estructuras económicas, sin que por ello consigan oponerle resistencia, pues hay que reconocer que los grupos que lo promueven han asumido la iniciativa desde hace tiempo.

Su gran mérito no se ha centrado tanto en la fuerza y coherencia de su cuerpo eidético, sino en la poderosa red que montaron

alrededor del mundo y de la cual Brasil participa e inserta, que le permitió propalarlo a los cuatro vientos y muchas veces aplicarlo por la vía autoritaria si fuese preciso, ya que sus aparatos ideológicos no se restringieron a reclutar intelectuales sino también a solidificar relaciones con el mundo de los intereses materiales y de sus superestructuras políticas.

No obstante, observamos como nota final que la colaboración brasileña con el cuerpo eidético general del neoliberalismo ha sido modesta, lo que nos habla de su principal problema congénito, que no solo puede deberse a la constitución de las fuerzas que lo integran sino a las que constituyen su cultura letrada y política como un todo, que permiten que la élite continúe dominando sin realizar un esfuerzo mayor en perfeccionar sus métodos hegemónicos.

BIBLIOGRAFÍA

- Bianchi, Álvaro (2001). Crise e representação empresarial: o surgimento do pensamento nacional das bases empresariais. *Revista de Sociologia e Política*, 16, 123-142.
- Chafuén, Alex (2004). From Intellectual Entrepreneur to Institute Leader. *Atlas Year in Review*, otoño, 18-19.
- Gros, Denise Barbosa (2003). *Institutos Liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova República*. Brasil: FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA Siegfried Emanuel Heuser.
- Hoeveler, Rejane (2020). *(Neo)liberalismo, democracia e "diplomacia empresarial" interamericana: a história do Council of the Americas (1965-2018)* [Tesis de Doctorado]. UFF.
- Klein, Caroline Rippe de Mello (2020). *A Influência do Ordoliberalismo e da Economia Social de Mercado no Brasil. Uma perspectiva através dos acordos de cooperação entre Brasil e Alemanha e das Fundações Konrad Adenauer e Friedrich von Naumann* [Tesis de Doctorado]. UNISINOS.
- de Moraes, Thiago Aguiar (2002). *Entreguemos a empresa ao povo antes que o comunista a entregue ao Estado": os discursos da fração "vanguardista" da classe empresarial gaúcha na revista "Democracia e Empresa" do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais do RS (1962-1971)* [Tesina de Maestría]. PUC/RS.
- Moreira, Fernanda Teixeira (2019). *O Partido do Empresariado. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais de São Paulo, a construção de consenso e o anticomunismo (1961-1964)* [Tesis de Doctorado]. FGV.
- Patschiki, Lucas (2017). *A classe dominante brasileira em organização: o Imil como aparelho privado de hegemonia (2005-2013)* [Tesis de Doctorado]. UFG.
- Ramírez, Hernán (2009). Empresários e política no Brasil: O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES), 1961-1971. *Diálogos*, 13(1), 209-240.
- _____ (2013). Comportamiento empresarial y neoliberalismo en Brasil: análisis en tres actos. *História e Economia*, 11(1), 91-115.

- _____. (2012). Confluências e matizes nos programas econômicos das ditaduras brasileira e chilena. *Confluenze*, 4(2), 63-81.
- _____. (2015). Reflexiones acerca de las Dictaduras del Cono Sur como proyectos refundacionales. *Antíteses*, 8(15 Esp.), 132-159.
- _____. (2019). Dinero y sotanas: una perspectiva de la imbricación de la Iglesia católica en el proceso político brasileño (1961-1970) a través de las fuentes del Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPÊS). *Estudios*, 42(2), 51-70.
- _____. (2021). The influence of German thought on the economic policies of the Brazilian dictatorship: a research hypothesis. *Academia Letters*, 469.
- _____. (2022). A simbiose neoliberal-autoritária: uma perspectiva de longo prazo a partir de casos do Cone Sul da América Latina. En J. H. Rogge, M. Harres, V. de O. Masseroni, P. R. S. Moreira y D. Schell (eds.), *História, democracia e desigualdades na América Latina* (pp. 117-129). Brasil: Edunisinos y Oikos.
- _____. (en prensa/a). Creando al Emprendedor: Junior Achievement (JA) y subjetivación del Neoliberalismo.
- _____. (en prensa/b). Padrões e Mundos do Trabalho: do controle fordista à subjetivação neoliberal.

Neoliberalismo e Dependência na Particularidade Brasileira

Epitácio Macário¹

Marcelo Dias Carcanholo²

Presentación

Em 2023 são completados 50 anos do Golpe Militar no Chile que derrubou a chamada via chilena ao socialismo, representada pelo governo da Unidade Popular. Independente da avaliação crítica que se faça dessa experiência, a ditadura Pinochet e sua associação com os Chicago Boys deu início, de forma pioneira, à implementação do neoliberalismo. De lá para cá, esse projeto político, social, ideológico e econômico se tornou hegemônico dentro da época histórica que se constrói no mundo a partir dos anos 70 do século passado, o capitalismo contemporâneo.

A associação direta entre o neoliberalismo e o capitalismo na fase que vivemos é tão forte que alguns analistas chegam a denominar

¹ Professor de Economia Política da Universidade Estadual do Ceará – Brasil.

² Professor Titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense – Brasil.

esse capitalismo (contemporâneo) de era neoliberal. Sem desprezar outros componentes específicos dessa contemporaneidade (processo de reestruturação produtiva, políticas econômicas conservadoras do lado da oferta, redução do tempo de rotação do capital, lógica de valorização fictícia do capital em todos os setores, financeirização, etc.), o neoliberalismo, se bem entendido, pode ser uma espécie de síntese desta época histórica.

Tanta é essa importância que o termo é amplamente utilizado por distintas reflexões do nosso tempo. Seja para afirmar a validade dessa categoria, ou até mesmo para negá-la. Quem a nega, geralmente, não necessariamente desconsidera a efetiva implementação das reformas pró-mercado como característica específica do capitalismo que se constrói após a crise dos anos 60/70 do século passado. A negação da validade da categoria estaria muito mais à não consideração de algum aspecto de novidade. O que teria, afinal, de novo e específico no neoliberalismo se comparado com o chamado liberalismo clássico dos séculos XVIII e XIX? Se não são idênticos, seria possível que a “novidade” fosse tão minúscula que tornaria desnecessária qualquer nova categoria, ou termo.

Sem entrar propriamente nesse debate, consideramos que o simples fato de nos encontramos em um novo contexto histórico, o capitalismo da virada do século XX para o século XXI, já define contornos específicos o suficiente para não sustentarmos que apenas vivemos outra época liberal, *tout court*.

A categoria neoliberalismo é válida, portanto. Mas até a ampla utilização que se faz do termo, para afirmá-lo ou negá-lo, não costuma ter o rigor necessário na sua caracterização. Na maior parte das vezes confunde-se a estratégia neoliberal de desenvolvimento, nível de abstração onde a ideologia (prática e política) se apresenta, com as políticas econômicas ortodoxas, típicas de processos de ajuste austero e controle da inflação com instrumentos clássicos de política monetária e fiscal. Isso é um equívoco. Seja para defender essa estratégia – o que certamente não é nosso caso – seja para contrapor-se a ela, torna-se necessário bem entendê-la, e com rigor.

Além disso, nossa contraposição se dá a partir de um espaço de valorização do capital específico, uma economia dependente, com a particularidade da sociedade brasileira, em uma conjuntura específica da dependência (capitalismo) contemporânea (contemporâneo). O objetivo deste trabalho é dar conta, ainda que de forma preliminar, dessas distintas determinações.

Por último, ainda de forma introdutória, deve-se deixar claro, desde já, que a contraposição (política e ideológica) que se apresenta não se restringe ao caráter neoliberal do capitalismo dependente que vivemos. A defesa aqui, por contraposição, não é por um capitalismo dependente com outra faceta histórica, anti-neoliberal, pós-neoliberal, desenvolvimentista, progressista, com “rosto mais humano”.

A referência teórica da qual partimos, a teoria marxista da dependência, constata que o caráter dependente de nossos capitalismos redobra as legalidades capitalistas e, portanto, aprofunda suas consequências. Não se trata de nos restringir a aliviar os efeitos sociais da maior exploração do trabalho no capitalismo dependente, ou de reduzir a necessidade deste último elevar aquela para compensar os efeitos dos mecanismos de transferência de valor. Não basta reduzir o grau de dependência de nossas sociedades, frente às determinações da lógica mundial de acumulação (imperialista) de capital. Tampouco se trata de lutar por uma independência integral, e não apenas formal, frente a essas determinações. O fato de que a lei do valor (capital) opera, dialeticamente, no plano do mercado (capitalismo) mundial, faz com que a luta contra a dependência seja, necessariamente, uma luta anti-capitalista.

Questionamos a política econômica convencional ortodoxa porque queremos também questionar os marcos estruturais (neoliberais) onde ela se conforma e, por sua vez, porque queremos questionar a subordinação (formal e real) de nossas sociedades às economias imperialistas, e somos anti-imperialistas porque somos anti-capitalistas. O resto nos aparece como falsas alternativas.

Sabendo o que defendemos, passemos a entender, com o máximo de rigor possível, contra o que nos posicionamos e em que momento histórico e espaço específico estamos.

Neoliberalismo e Dependência: uma precisão conceitual em sua relação

Antes de entender a particularidade da economia e sociedade brasileiras é preciso partir do fato de que elas foram construídas dentro de uma inserção subordinada na divisão internacional do trabalho promovida pelo capitalismo mundial. Se a economia mundial capitalista pode ser entendida por ser uma unidade composta, dialeticamente, por economias imperialistas e dependentes, a sociedade brasileira, para além de suas particularidades, constitui uma economia dependente. Ou seja, não é a dependência o que a particulariza (frente a outras economias dependentes), mas certamente essa dependência frente à lógica de acumulação mundial de capital é que permitiu a conformação histórica dessa particularidade.

De forma sintética e relativamente esquemática, uma economia dependente assim se constitui em função de algumas características próprias. Como as economias dependentes tendem a produzir, em média, com capitais com menor produtividade, se comparados à média de seus concorrentes mundiais na produção de uma determinada mercadoria, e/ou especializarem-se em setores específicos que, se comparados à produtividade média da economia mundial, estão abaixo das condições médias de produtividade, uma massa de (mais) valor produzida nas economias dependentes termina por ser apropriada (e fazendo parte da dinâmica de acumulação) por capitais que, tendencialmente, produzem a partir das economias imperialistas³. Além disso, economias dependentes são, majoritariamente,

3 Os chamados mecanismos de transferência de valor, dentro da teoria marxista da

importadoras líquidas de capital (seja de curto prazo ou na forma de investimento direto estrangeiro). Essa tendência ao crescimento dos chamados passivos externos (dívida mais estoque de capital estrangeiro) implica em remessa futura de pagamentos de juros, dividendos, lucros, etc. Os dois processos implicam, portanto, em parte de (mais) valor produzida na economia capitalista dependente mas que não fará parte da dinâmica interna de acumulação de capital. Ao contrário, essa transferência de valores fará parte da acumulação de capital em economias imperialistas.

Os distintos mecanismos de transferência de valor constituem o que se pode chamar de determinantes estruturais da dependência, a marca particular da dependência, que as diferencia das economias capitalistas imperialistas, além das determinações gerais de que as economias dependentes são capitalistas e, portanto, sujeitas às determinações das legalidades capitalistas. Isso não significa que o processo de acumulação de capital esteja obstaculizado nas economias dependentes, crítica muito comum que se faz à teoria marxista da dependência. O que ocorre é que o capitalismo dependente apresenta, como consequência, a necessidade de elevar a taxa de mais-valor (exploração) para além das determinações mais gerais de todo e qualquer capitalismo, a fim de elevar a massa de mais-valor produzida internamente e, mesmo com parte dela sendo apropriada nas economias imperialistas, ainda restar magnitude suficiente para gerar um processo de desenvolvimento capitalista (dependente!). A categoria superexploração da força de trabalho procura apreender essa legalidade particular da dependência⁴. Note-se que não se sustenta que a especificidade da condição dependente seja a tendência à elevação da taxa de exploração, isto é uma legalidade de todo e qualquer capitalismo, em qualquer época histórica. O que é específico da condição dependente é que, além dessas determinações mais gerais de todo e

dependência, são melhor explicados em Carcanholo (2017).

⁴ Grande parte dos debates e imprecisões dessa categoria também pode ser vista em Carcanholo (2017).

qualquer capitalismo, as economias dependentes ainda necessitam compensar os mecanismos de transferência de valor para gerar um processo de desenvolvimento capitalista específico, dependente.

A superexploração implica, como desdobramento, o aprofundamento das tendências, também características de todo e qualquer capitalismo, dependente ou não, a maior concentração de renda e riqueza e todas as conseqüências sociais que isso provoca. Destaque-se também que não se trata de que as mazelas sociais sejam exclusividade das economias dependentes. Isso são implicações necessárias da lei geral da acumulação capitalista, em economias imperialistas e dependentes. O que ocorre é que, a necessidade “redobrada” de elevar a taxa de exploração nas economias dependentes, para compensar os determinantes estruturais de transferência de valor, reforça essa tendência capitalista das mazelas sociais. É como se a lei geral da acumulação capitalista, nas economias dependentes, fosse reforçada, apresentasse determinações concretas próprias que a acentuam.

Essa dialética do desenvolvimento capitalista dependente é o que confere especificidade ao capitalismo nas regiões dependentes, em função da inserção subordinada dessas economias na divisão internacional do trabalho nesta época histórica e social específica, o capitalismo. Mas como este apresenta distintas historicidades, a dependência (e o imperialismo) também possui uma historicidade. O chamado imperialismo clássico (e seu par dialético, a dependência clássica) do início do século passado não é igual, em suas formas históricas específicas, ao imperialismo (e a dependência) do segundo pós-guerra, também no século passado. Evidentemente em todas essas épocas históricas tratou-se de capitalismo mundial, uma unidade dialética composta por dois pares contrários, imperialismo e dependência. Mas com formas históricas específicas.

Se vivenciamos o que se pode chamar de capitalismo contemporâneo, e em especial, a crise estrutural desse capitalismo⁵, estamos

⁵ Entendemos por crise estrutural do capitalismo momentos de profunda crise da acumulação de capital que colocam em xeque as formas históricas em que as leis gerais

em uma época histórica específica do imperialismo e a dependência contemporâneos. A caracterização rigorosa das marcas históricas específicas desse momento escapa aos limites deste trabalho, mas certamente um dos componentes deste capitalismo contemporâneo é o neoliberalismo.

Ao contrário do que se costuma pensar, o neoliberalismo não é sinônimo de políticas econômicas (monetária, fiscal e cambial) de cunho ortodoxo, isto é, próprias do chamado modelo macroeconômico clássico. O neoliberalismo não se apresenta no nível de abstração das políticas econômicas. Ele é uma proposta mais ampla de reformulação dos marcos estruturais, onde distintas políticas econômicas, dependendo da conjuntura, podem (e devem) atuar. O neoliberalismo é uma estratégia de desenvolvimento capitalista, que se assenta sobre dois componentes. Em primeiro lugar, e como condição necessária, defende-se a obtenção da estabilização macroeconômica, especificamente da inflação e das contas públicas. O argumento é que a estabilização macroeconômica é condição para que os distintos agentes econômicos possam formular expectativas e tomar decisões de longo prazo (basicamente de investimentos) em um ambiente o menos volátil possível. Se esta estabilização macroeconômica será obtida com políticas mais heterodoxas –com controle direto ou indireto de alguma variável-chave da economia–, como as políticas de âncora cambial que marcaram a América Latina nos anos 90 do século passado, ou de caráter mais ortodoxo –deixando o livre funcionamento dos mercados determinarem preços e quantidades de equilíbrio, sem intervenção direta do Estado–, como as atuais políticas de austeridade e regime de metas inflacionárias, isso é, para os neoliberais, irrelevante. O que definirá o tipo específico de

de funcionamento dessa acumulação se processaram até aquele momento. Isso não significa, necessariamente, que a partir dali novas formas históricas sejam construídas, iniciando uma nova etapa na historicidade no capitalismo, nem tampouco que se trate de uma crise terminal (derrocada) do capitalismo, delimitando a historicidade do capitalismo. Certamente se trata de um entendimento distinto do costumeiro, como, por exemplo, em Mészáros (2011).

política econômica requerida, se ortodoxa ou não, é a conjuntura específica que se viva no momento específico. O importante para a estratégia neoliberal de desenvolvimento é obter a pré-condição, a estabilização macroeconômica.

Mas esse primeiro componente é uma condição necessária, mas não suficiente para a retomada dos investimentos e do crescimento da economia, com maior produtividade e, portanto, segundo as teorias neoclássicas convencionais, com distribuição de renda. Este é o papel do segundo componente. Para que isso seja obtido requer um marco estrutural de maior concorrência e competitividade, o que exige, portanto, uma maior mercantilização das relações sociais, da vida. O segundo componente da estratégia neoliberal de desenvolvimento é o que, em última instância, o define, as chamadas reformas estruturais de privatização, desregulamentação, liberalização e abertura dos distintos mercados.

O capitalismo contemporâneo e a dependência que a ele se associa têm o neoliberalismo –assim caracterizado de forma rigorosa– como sua marca específica nesta historicidade do capitalismo. As reformas neoliberais implicam em um aprofundamento dos mecanismos de transferência de valor, levando, portanto, à elevação do grau de dependência, reforçando ainda mais a necessidade do capitalismo dependente explorar a força de trabalho e as conseqüências sociais que se desdobram dessa necessidade.

Esta época histórica que vivemos apresenta, por sua vez, distintas conjunturas, algo como uma historicidade dentro da historicidade. Em outras palavras, a conjuntura específica dos anos 70 do século passado (reflexos da crise estrutural do capitalismo na virada dos anos 60, construção do capitalismo contemporâneo, relativa abundância de crédito nos mercados internacionais, etc.) foi distinta da vivenciada na década seguinte (crise das dívidas, restrições externas às economias dependentes, ajustes estruturais em acordos com FMI e Banco Mundial, processos inflacionários, etc.) que, por sua vez, se modifica nos anos 90 do século passado (Consenso de Washington, retomada dos mercados internacionais de crédito, forte entrada de

capitais externos, políticas de estabilização com âncora cambial, etc.).

Em suma, a referência teórica da teoria marxista da dependência, a partir da identificação dos mecanismos de transferência de valor e sua compensação pela superexploração da força de trabalho deve ser necessariamente entendida a partir do momento histórico específico por que passa o capitalismo, o imperialismo e a dependência, e na específica conjuntura (cenário externo como componente principal, embora não o único, dessa conjuntura) que se vive.

Mesmo assim, em um mesmo momento histórico, em uma mesma conjuntura, distintos espaços de valorização (economias) apresentam particularidades, umas frente às outras. Como a dependência (e o imperialismo) não se define rigidamente de forma binária, esta economia é, aquela não, mas, ao contrário, se trata de uma questão de grau⁶, a particularidade de cada economia, nesse momento histórico, em alguma conjuntura específica, também deve ser analisada.

Traços da particularidade brasileira: dependência e autocracia burguesa

Para dar conta da particularidade brasileira, a chave teórica formulada por Francisco de Oliveira, em sua crítica ao dualismo entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, fornece caminho importante. O estudo do neoliberalismo brasileiro se beneficia das formulações desse autor, para quem a oposição entre arcaico e moderno, no caso brasileiro, é uma operação meramente formal, pois “de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da

⁶ A título de ilustração, o neoliberalismo não produz a condição dependente. Esta última é característica estrutural de nossas economias em função de suas inserções subordinadas na divisão internacional do trabalho. O que o neoliberalismo faz, por aprofundar os mecanismos de transferência de valor, é elevar o grau da dependência, nesta época histórica específica do capitalismo, sua contemporaneidade.

existência do ‘atrasado’, se se quer manter a terminologia” (Oliveira, 2003, p. 22).

Florestan Fernandes (2005) também ajuda, quando trata das particularidades da revolução burguesa no Brasil. Merecem destaque dois aspectos de sua interpretação: na particularidade da dependência brasileira, o capital se desenvolve realizando as funções econômicas do moderno capitalismo, mas obliterando a materialização das funções políticas, sociais e culturais que foram móveis das revoluções burguesas nas formações clássicas. Nas condições históricas herdadas do patrimonialismo e no seio da dependência, a classe dominante interna articula uma visão burguesa de mundo e uma pragmática correspondente na esfera da ação política que alijam as forças sociais discordantes, mormente as forças do trabalho. Resta, pois, como traços característicos do capitalismo dependente brasileira a exclusão das massas populares dos progressos econômicos, socioculturais e da participação política efetiva – duas pernas da natureza autocrática da burguesia brasileira. A implicação política dessa condição da burguesia brasileira é que o:

idealismo burguês precisa ser posto de lado, com seus compromissos mais ou menos fortes com qualquer reformismo autêntico, com qualquer liberalismo radical, com qualquer nacionalismo democrático-burguês mais ou menos congruente. A dominação burguesa revela-se à história, então, sob seus traços irredutíveis e essenciais, que explicam as ‘virtudes’ e os ‘defeitos’ e as ‘realizações históricas’ da burguesia. A sua inflexibilidade e a sua decisão para empregar a violência institucionalizada na defesa de interesses materiais privados, de fins políticos particularistas; e sua coragem de identificar-se com formas autocráticas de autodefesa e de autoprivilegiamento. O ‘nacionalismo’ burguês enceta assim um último giro, fundindo a república parlamentar com o fascismo (Fernandes, 2005, p. 345).

O capitalismo dependente brasileiro, portanto, traduziu uma situação de poder da nova classe industrial e urbana em conciliação com a velha classe de fazendeiros que reserva para esses estratos dominantes o exercício da política e alija a classe trabalhadora e, no seu interior, amplos segmentos de despossuídos e do lumpemproletariado. Criaram-se, pois, as condições para que as frações de classe burguesas não estabeleçam qualquer “articulação flexível com as pressões dentro da ordem das classes operárias e das classes destituídas” e, ainda menos, com “as pressões contra a ordem dessas mesmas classes”. Assim, “A dominação burguesa e o poder burguês ficam, em consequência, estreitamente confinados aos interesses e aos meios de ação das classes burguesas” (Fernandes, 2005, p. 384).

Eis por que, quando o conflito de classe arranha a estrutura de poder ou quando agentes de base social popular assumem ou ameaçam assumir o governo – mesmo que no interesse da expansão do capital acompanhada de programas e políticas de mitigação da questão social, como foi o caso dos governos progressistas do PT – a burguesia ora se antecipa ora reage de pronto com as armas da força para sufocar os dissidentes, instaurando ditaduras como a do Estado Novo (1937 a 1945) e a Militar (1964 a 1984) ou, ainda, operando nova modalidade de golpe como o que destituiu Dilma Rousseff, em 2016, ou a ascensão do governo (neo)fascista de Bolsonaro em 2018 (Siqueira & Carcanholo, 2020).

A história do país é, pois, marcada por um movimento pendular entre períodos de abertura e fechamento do regime político em função da reprodução ampliada do capital nas condições da dependência. E tudo se dá mesmo que os governos progressistas não tenham procurado alterar as bases materiais e de poder que vertebram o capitalismo dependente brasileiro em sua fase neoliberal. Em resumo, nem mesmo períodos de pretensa conciliação de classes, como nos governos do PT neste século, são tolerados pela burguesia brasileira, a não ser por breves momentos conjunturais e, mesmo assim, apenas se forem funcionais para aquela conjunta da acumulação capitalista dependente. Via de regra, basta vivenciar os efeitos das

recorrentes crises do capitalismo mundial para que esses breves períodos de tolerados passem a ser rapidamente (e às vezes pelos mesmos componentes do bloco no poder) execrados.

Esse traço da evolução da política e do Estado brasileiro repousa sobre estruturas e dinamismos do capitalismo dependente e de sua burguesia que tem de se afirmar como classe dominante, respondendo, simultaneamente, a duas ordens de antagonismo: o primeiro diz respeito às forças do trabalho, que são os “inimigos principais”, e o segundo refere-se ao “aliado principal” que são as burguesias dos países imperialistas que solapam parte do valor produzido em escala nacional. O neoliberalismo, como estratégia ampla de desenvolvimento econômico, político e social do capitalismo contemporâneo rearticulou traços nodais da particularidade brasileira nas respostas a essas duas ordens de antagonismos. Em outras palavras, a natureza autocrática da burguesia brasileira e a dependência constituem elementos essenciais para capturar a forma particular de ser do neoliberalismo brasileiro.

Ao primeiro antagonismo mencionado, a burguesia sempre respondeu por meio do exercício da força/coerção, na medida em que a função de hegemonia se mostra absolutamente incapaz de diluir e/ou administrar os conflitos originados nas contradições explosivas da acumulação de capital, nas condições da dependência. Por isto, a contenção do conflito social que se expressa de forma organizada ou espontânea, de forma progressista ou regressiva é encarada como questão de polícia e os resultados negativos dessa estratégia vão se acumulando e produzindo barbárie em escala social. Daí que o recurso ao uso da força, tanto pelas classes dominantes quanto pelo Estado, é sempre uma alternativa a postos, pois, mesmo quando as lutas populares reivindicam apenas o essencial para a existência, se chocam diretamente com o padrão de reprodução do capitalismo dependente brasileiro. A autocracia burguesa vê-se questionada e até ameaçada diante das pressões por reformas básicas, que miram o desenvolvimento autônomo da nação e a garantia de direitos sociais

e trabalhistas, como foi o caso das chamadas reformas de base e culminou no golpe militar de 1964.

Na verdade, não é preciso nem maiores aprofundamentos em reformas estruturais mais inclusivas. Como os governos do PT neste século demonstraram, mesmo intentos mais tíbios de mera conciliação de classe, quando raramente os condicionantes conjunturais da dependência permitem, são tolerados por muito tempo. O golpe de 2016 e seu desdobramento no governo (neo)fascista de Bolsonaro fazem parte da regra; não são exceções. O reformismo quase sem reformas⁷ dos governos do PT tornou-se um embrulho nada palatável para a burguesia, mesmo para aqueles setores dominantes que apostaram na vertente do “neoliberalismo desenvolvimentista” como chamado pelos professores Alfredo Saad Filho e Lécio Moraes (2018). Pois, logo que dobraram os sinos do capital transnacional, alertando para a necessidade de implementação de um ajuste extremamente regressivo para fazer frente aos efeitos da crise desencadeada em 2007/2008 – cujas consequências foram retardadas no país ainda sob a gestão do presidente Lula da Silva, mas que cobraram seu preço a partir de 2011– o pacto político que soergueu e garantiu governabilidade aos governos petistas foi rompido pela direita. A crise estrutural do capitalismo contemporâneo exigiu o ajuste regressivo e autoritário que, ressalte-se, foi iniciado ainda antes do golpe de 2016, em plenos governos do PT: aprofundar os mecanismos de superexploração da força de trabalho, espoliar parcela dos fundos destinados à reprodução da classe trabalhadora, promover nova rodada de privatizações e desnacionalização, expandir as fronteiras agrícolas e minerais sobre territórios quilombolas e indígenas, expandir a mercantilização dos serviços públicos, diminuir a capacidade de gasto primário do Estado, liberando os gastos financeiros (com a dívida pública). A aposta redobrada no neoliberalismo (ultraneoliberalismo para alguns) foi (e continua sendo) a tentativa do capital – lá e cá – para sair de sua crise estrutural.

⁷ Ver Filgueiras e Gonçalves (2007) e Paulani (2008).

O que estamos argumentando é que uma faceta da particularidade do capitalismo e da burguesia brasileira é, assim, reposta nas condições da crise atual: a intolerância para com forças políticas dissidentes, mesmo quando estas não estão interessadas em romper com o neoliberalismo.

Adaptação do padrão de reprodução dependente como resposta às transformações do capitalismo mundial: a crise estrutural do capitalismo contemporâneo

Ao segundo antagonismo, que trata dos esforços por afirmação da burguesia brasileira em face das burguesias internacionais –seu aliado principal–, as respostas articuladas pela classe burguesa local foram sempre na direção da readequação dos seus papéis como classe dominante para dentro e subordinada aos imperativos do capitalismo mundial, que é o centro dinâmico de onde devem fortes determinações sobre o sistema produtivo interno. Quando no presente estudo asseguramos que há, hoje, uma evidente continuidade de traços característicos da formação do capitalismo industrial no Brasil, jamais queremos tratar os fenômenos econômicos e sócio-políticos como algo hipostasiado, cristalizado e estagnado. Pelo contrário, a burguesia brasileira se firmou em sua natureza duplicada –de dominante (e sempre autoritária no exercício do poder político) para dentro e de sócia subordinada de suas congêneres de países imperialistas– na medida em que foi capaz de reestruturar o padrão de reprodução de capital e as formas de controle sempre que a assim chamada, por Florestan Fernandes (2005), dupla articulação (com os obstáculos internos e a dependência externa) exigiu. Como efeito, as transformações sempre se fizeram quando da necessidade posta pela dinâmica internacional, preservando, porém, o essencial da dita relação duplicada. Mudanças formais para manter o essencial das características do capitalismo dependente brasileiro, um *gato-pardismo* particular.

Sob nosso ponto de vista, estes antagonismos se reposicionaram, se refizeram em novas bases com o fim da ditadura militar e a ascensão da Nova República (1985) em cujo lastro, e segundo o protagonismo dos governos civis, se implementou o projeto neoliberal no Brasil, até de forma tardia, se comparado com outras experiências do cone sul americano. A dependência foi reatualizada e processou-se sob a forma de ingentes esforços de reestruturação produtiva, de flexibilização, de privatização, de desnacionalização do sistema produtivo e de abertura para o grande capital transnacional. A redemocratização do país encerrava, assim, um aparente paradoxo: teria criado as condições para a ruptura com a continuidade da dependência e, inobstante, fez foi abrir “a via para o estabelecimento de um total controle do Estado brasileiro e de uma total dominação da economia brasileira pelo capital financeiro internacional” (SAES, 2001, p. 104), mantendo intocado esse compromisso histórico incorporado na conduta da classe dominante, precisamente porque ele expressa as condições materiais de sua existência – a forma de ser e ir sendo do capitalismo dependente brasileiro. O neoliberalismo brasileiro não apenas reposicionou as relações de dependência, mas até as aprofundou por se tratar da estratégia abrangente que dá solda política e legitimação ideológica e cultural ao novo padrão de reprodução de capital, o padrão exportador de especialização produtiva (Osorio, 2004). O processo de reprimarização das exportações que se inicia nos anos 90 do século passado se aprofunda neste século XXI, mesmo sob governos do PT. Isto ajuda a entender como este novo padrão de reprodução pode ser utilizado como a marca histórica da dependência no capitalismo contemporâneo (neoliberal). Afinal, o neoliberalismo tem como consequência essa reprimarização da estrutura produtiva e da pauta exportadora.

No caso particular brasileiro, o neoliberalismo começou a ser implementado na virada da década de 80 para a de 90, no século passado. A estabilização macroeconômica só foi obtida com o sucesso do controle inflacionário a partir de meados da década de 90, com o Plano Real. Mesmo assim, o defendido controle das contas públicas

nunca foi realmente obtido. Embora o superávit primário tenha caracterizado todo o período, o déficit operacional (que inclui as despesas financeiras com a dívida pública, descontada a inflação) cresceu constantemente, a exceção de 1994. O neoliberalismo brasileiro aprofundou a fragilidade financeira das contas externas e elevou a vulnerabilidade externa da economia, traduzida em elevação crônica dos déficits de balança comercial e de transações correntes. As pífias taxas médias de crescimento (inferiores ao período da chamada década perdida nos anos 80) e a forte concentração de renda e riqueza também caracterizaram o período. A coroação do intento foi uma brutal crise cambial em janeiro de 1999, que implicou uma desvalorização cambial de 64,08% apenas naquele mês e uma redução de US\$ 11 bilhões nas reservas do país, quantia considerável para os padrões daquela época.

Baixo crescimento, piora no perfil distributivo, aprofundamento da desestruturação do mercado de trabalho, e uma trajetória que finda em forte crise cambial e de balanço de pagamentos, o que leva o país a, novamente, recorrer aos mecanismos de ajuda internacional, explicitando o caráter dependente da economia brasileira, são elementos que ajudam a entender a eleição, em 2002, de Lula. As consequências econômicas e sociais do desastre neoliberal explicam aquela eleição, assim como a nova eleição em 2022 também é explicada pela reação social aos efeitos do governo (neo)fascista anterior⁸.

O que faz o novo governo? Rompe com a estratégia neoliberal de desenvolvimento? Não. Ao contrário, ela é aprofundada. Ao menos se modificou a política econômica? Tampouco. Foram mantidas a política monetária de regime de metas inflacionárias e a política cambial de “intervenção suja”, com o Banco Central intervindo topicamente no mercado de câmbio para administrar as flutuações da taxa de câmbio, conforme já se vinha operando no pós-crise cambial de

⁸ Não é impróprio, portanto, perguntar-se quanto das eleições presidenciais no Brasil em 2022 representaram uma vitória de Lula (e do PT) e quanto foram consequência de uma derrota do projeto personificado em Bolsonaro, o que certamente não constituem um mesmo fenômeno.

1999. A política fiscal, por sua vez, continuou tendo como marco a obtenção de mega superávits primários, característica mesmo de antes da crise cambial. Se os governos do PT mantiveram o neoliberalismo e as políticas econômicas a ele associadas do período anterior, por que a economia brasileira apresentou melhor desempenho no início do século XXI?

Como já demonstrado em Carcanholo (2018), os governos progressistas do PT, explicitamente construídos para uma conciliação de classes, só foram possíveis por conta de um cenário externo extremamente favorável, onde a economia mundial, e em especial algumas economias que demandavam fortemente as *commodities* exportadas pelas economias dependentes (reprimarização de exportações) permitiram um forte crescimento das exportações. Além disso, o mercado de crédito internacional estava em alta, o que garantia forte afluxo de capitais externos, em um ambiente de baixas taxas internacionais de juros. Isto permitiu a constituição de grandes reservas cambiais, baixas taxas domésticas de juros, crescimento econômico com forte arrecadação estatal (possibilitando a implementação de políticas sociais importantes), sem pressões inflacionárias. O cenário externo conjuntural favorável aliviou os condicionantes estruturais da dependência.

Mesmo durante essa conjuntura favorável, a particularidade brasileira no terreno econômico é de destacar. Em primeiro lugar, o processo de reprimarização das exportações, assim como no restante da região, só se aprofundou. É que a forte demanda no mercado internacional, com reflexos na elevação da quantidade exportada e dos preços desses produtos, mascarou os problemas estruturais. Em segundo lugar, as taxas de crescimento da economia brasileira no período foram inferiores não só à média da economia mundial, mas também frente à média da América Latina e Caribe. A economia brasileira no período só cresceu mais do que o Haiti. Por último, as políticas sócias implementadas não foram estruturantes, mas, de acordo com a cartilha do Banco Mundial, focalizadas e meramente compensatórias, o que, diga-se de passagem, também foi aplicado em

países que, naquele momento, eram insuspeitos de qualquer tipo de progressismo e/ou conciliação de classe, como o caso colombiano.

A crise estrutural do capitalismo contemporâneo, que estoura em 2007, reverteu esse cenário externo. A partir daquele momento os determinantes estruturais da dependência foram agravados pela conjuntura externa adversa. Mesmo assim, os efeitos da crise estrutural do capitalismo contemporâneo não se fizeram presentes imediatamente, o que dá, ao caso brasileiro, mais particularidades ainda.

Como tentativa de responder aos efeitos da crise mundial, o governo brasileiro implementou uma política econômica anti-cíclica composta por uma desoneração tributária de alguns setores específicos (oferta), com a ideia de garantir produção e emprego, aliada à elevação de crédito justamente para financiar o consumo (demanda) para aqueles setores incentivados. Essa política, rapidamente, mostrou seus limites, quando o crescimento acelerado do déficit público, agravando o já elevado estoque da dívida pública, se combinou com um superendividamento dos consumidores, que elevaram a parcela de seus rendimentos utilizada para simplesmente pagar dívidas anteriores. Já na campanha eleitoral de 2014 se sabia que, ganhasse quem ganhasse, o ajuste com austeridade e a ampliação das reformas estruturais neoliberais seria aprofundado. O início do segundo mandato de Dilma Rousseff, em 2015, foi prova disso, com o anúncio de um plano de austeridade em distintas etapas, que lembrou, não por casualidade, os programas de ajuste da *troika* para enfrentar a crise na zona do Euro.

Se o governo do PT já iria implementar o ajuste de austeridade profunda junto com nova onda de reformas neoliberais, por que o golpe no ano seguinte? Nossa hipótese é a de que, por um lado, a nova rodada de privatizações implicaria uma brutal apropriação (privada) de espaços de valorização que, por razões “não-republicanas”, para usar um eufemismo, faz de quem ocupa o bloco no poder um marco diferencial para direcionar a que grupos esses espaços serão direcionados. Por outro lado, de forma mais estrutural, em função da crise

do capitalismo, e da forma como ele vem tentando sair dela, não existe mais qualquer espaço para políticas de conciliação de classe. Se o progressismo foi possível no início do século, em função de conjunturas específicas, estas últimas não existem mais. O golpe no Brasil em 2016 foi uma forma de extirpar qualquer arrobo progressista que, por ventura, governos do PT pudessem manifestar. Perceba-se que a característica particular da dependência brasileira, o caráter autocrático de sua burguesia, nos ajuda muito a entender esse processo. Os dois governos seguintes, Temer e Bolsonaro são desdobramentos necessários disso (Siqueira y Carcanholo, 2020).

O que esperar do que já vem sendo chamado de governo Lula III? Um novo governo progressista (neoprogressismo), replicando o que já se chama de segunda onda de governos progressistas (Boric no Chile, Petro na Colômbia, Fernández na Argentina)? Se o que aqui argumentamos a partir das condicionantes estruturais da dependência, agravadas em épocas neoliberais, na conjuntura específica que vivemos, em uma sociedade com o particular caráter autocrático de sua burguesia, por mais que o atual governo busque algum tipo de conciliação de classe, até essa migalha para a classe trabalhadora e seu povo parece ser bastante improvável. Quando não se pode conciliar classes sociais, alguma(s) termina(m) por se beneficiar, em detrimento da(s) outra(s). Onde será que se localizará o governo Lula III?

BIBLIOGRAFIA

- Carcanholo, Marcelo Dias (2018). A crise da do capitalismo dependente brasileiro. En Eptácio Macário, Edilaynne Dias, Richelly Barbosa de Mediros y Tainara Alexandre (org.). *Dimensões da crise brasileira – dependência, trabalho e fundo público* (pp. 23-55). Brasil: Universidade Estadual do Ceará y Projecto Editorial Praxis.
- (2017). *Dependencia, super-explotación del trabajo y crisis: una interpretación desde Marx*. Madrid: Ediciones Maia.
- Fernandes, Florestan (2005). *A revolução burguesa no Brasil – ensaio de interpretação sociológica*. Brasil: Globo.
- Filgueiras, Luiz y Gonçalves, Reinaldo (2007). *A Economia Política do governo Lula*. Brasil: Contraponto.
- Mészáros, István (2011). *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. Boitempo.
- de Oliveira, Francisco (2003). *Crítica à razão dualista – o ornitorrinco*. Brasil: Boitempo.
- Paulani, L. (2008). *Brasil delivery*. Boitempo.
- Osorio, Jaime (2004). *Crítica de la economía vulgar – reproducción del capital y dependência*. Universidad autónoma de Zacatecas.
- Saad Filho, Alfredo y Moraes, Lecio (2018). *Brasil – neoliberalismo versus democracia*. Brasil: Boitempo.
- Saes, Decio (2001). *A república do capital: capitalismo e processo político no Brasil*. Brasil: Boitempo.
- Siqueira, Luana de Souza e Carcanholo y Marcelo Dias (2020). Governo Bolsonaro e os Impactos do Neoconservadorismo no Brasil. *Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos*, 6, 169-196.

CUARTA PARTE:

VIOLENCIA Y NEOLIBERALISMO EN LA
REGIÓN ANDINA

Auge y crisis de la doctrina neoliberal en Bolivia

Rebeca Peralta Mariñelarena

Robert Adrian Quintero Leguizamon

Reordenamiento neoliberal del Estado boliviano: dos décadas de subordinación e instrumentalización

Con la presidencia de Víctor Paz Estenssoro en 1985 inicia en propiedad la reorganización neoliberal del Estado boliviano. Sin duda es una ironía histórica que quien fuera uno de los más destacados dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) acabase por sepultar los fundamentos del Estado forjado por la revolución nacional de 1952.

La Nueva Política Económica (NPE) fue la forma como denominó dicho gobierno al proyecto de reestructuración económica y política puesta en marcha con el Decreto Supremo (D.S) 21060. Víctor Paz y su ministro de hacienda Gonzalo Sánchez de Lozada, a diferencia de otros gobiernos en la historia de Bolivia, antes que formular un detallado plan de desarrollo utilizaron la fuerza del derecho para implementar su perspectiva de Estado y sociedad. Las coaliciones hechas

con otras fuerzas políticas les aseguraron una mayoría en el congreso, que junto al apoyo de sectores medios de la sociedad (agotados por la álgida movilización sindical y obrera), el espaldarazo de los empresarios, y el respaldo de agencias multilateral y los EE. UU les ofreció el escenario propicio para adelantar su agenda de contrarformas sociales, y reorganización de las funciones del Estado¹.

No obstante, el D.S 21060 no fue tan solo un decreto dirigido a detener la hiperinflación, su intención se inscribió en un propósito más amplio que tuvo por fin cimentar nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. Incluso la reforma política implementada en ese mismo gobierno, cuyo eje central consistió en reorganizar el sistema de partidos procurando reducir la fragmentación y multiplicidad de organizaciones políticas, apuntó al objetivo de reconfigurar el orden político al trastocar las mediaciones que en el lapso de 1952 a 1985 sirvieron de vehículo a la participación de los sectores obreros bolivianos (Kohl y Farthing, 2007, p. 139)².

Si bien el mecanismo privilegiado para adelantar el programa de ajuste estructural fue, como se ha dicho, un decreto superior en uso de las facultades legislativas extraordinarias concedidas a Víctor Paz, la adecuación del proyecto no descansó de forma exclusiva en un pacífico acuerdo normativo entre las élites políticas y económicas. En efecto, en uso de los poderes discrecionales conferidos al presidente se estableció un régimen de excepcionalidad constitucional a través del cual se limitó y afectó los derechos civiles y políticos de sectores

¹ Una mirada más específica sobre las políticas económicas de este periodo se puede encontrar en: Sheriff (1992) y Muñoz-Reyes (2009).

² Al respecto Benjamin Kohl y Linda Farthing, en su libro *El bumerán boliviano: Hegemonía neoliberal y resistencia social* nos aclaran que: “En 1986 se introdujo una nueva Ley Electoral para hacer más eficiente el proceso político y disminuir la fragmentación política reduciendo el número de partidos minoritarios. Los legisladores arguyeron que esto mejoraría el funcionamiento democrático, aunque, de hecho, benefició directamente a la coalición gobernante puesto que significaba que la política fue canalizada a través de los tres principales partidos políticos: ADN, MNR, MIR. El intento de consolidar una hegemonía a través del control de la política demuestra que, a pesar de la retórica neoliberal, el nuevo sistema fue parte de un proyecto político: lo que Conaghan y Malloy denominan “un acto de construcción política” (1994, p. 168).

en disenso con el gobierno. La construcción hegemónica implicó, en consecuencia, la combinación del uso de la fuerza para aquellos que insistieron en resistir la recomposición del Estado, y la persistencia de prácticas prebendales a través del aparato burocrático para quienes decidieron cooperar con la NPE.

Que el D.S 21060 fue un proyecto político tanto económico queda claro si nos atenemos a lo que Sánchez de Lozada (en adelante Goni) expresó sobre tal en 1986: “Antes que un programa estrictamente económico, la Nueva Política Económica es un plan político”, sostuvo Goni cuando era ministro de Finanzas en 1985.

De hecho, Juan Antonio Morales, quien sería presidente del Banco Central de Bolivia a lo largo de la fase neoliberal del Estado, señaló en torno al proyecto de “estabilización” ortodoxo puesto en marcha con el 21060 que:

La NPE no es solamente un programa de estabilización ni de reformas estructurales; también es, y acaso principalmente, un programa político. Quienes concibieron la NPE no han dejado de insistir en la reforma del Estado y de la sociedad que ésta implica. Independientemente de la opinión de sus autores y ejecutores, puede decirse que la NPE ha transformado profundamente a la sociedad boliviana (1992, p.135).

Morales sostuvo que aun cuando no existía cohesión entre las élites sobre el proyecto de estabilización, en lo esencial compartían que dicho programa podría conducir a incrementar la capacidad de conducción del Estado, puesto que: “con un Estado achicado se reduciría el juego de influencias de los grupos de presión, que veían en el gobierno la mejor manera de obtener una parte más grande en la distribución del ingreso nacional” (1992, p.139). La concepción minimalista del Estado tan en boga durante los 80s y 90s sirvió pues como fundamento para que la tecnocracia en el poder justificara la necesidad de las medidas.

En este marco de políticas, se decidió reducir el déficit fiscal a través del despido masivo de más de 23000 empleados vinculados al sector minero de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). La empresa fue descentralizada pasando a depender de corporaciones regionales, lo cual constituyó una privatización de facto. De hecho, este método fue replicado con otras empresas del Estado. La manio-
bra de asedio al movimiento obrero tuvo como complemento el confinamiento de 143 líderes al Amazonas boliviano, con lo que se asestó un contundente golpe a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). En tales condiciones las demás medidas incluidas en el D.S 21060 tuvieron el camino allanado para su implementación. No cabe duda que la reducción de salarios, eliminación de subsidios, suspensión del control de precios a productos y bienes básicos, al igual que una política cambiaría flexible, contribuyeron a cumplir con el cometido de reducir la hiperinflación, aunque a un coste social altísimo.

Ahora bien, no se trató de forma irrestricta de una retirada del Estado boliviano en favor del mercado, puesto que incluso la men-
guada función de aseguramiento de las condiciones extra económicas del capital siguió siendo desempeñada en gran volumen por este, aunque también por el auspicio de nuevos intermediarios tales como agencias de cooperación y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Por su parte, y no menos fundamental, los organismos multilaterales que accedieron a conceder préstamos y renegociar la deuda pública del país, definieron como gestor válido para el desarrollo de proyectos de reducción de la pobreza a las ONGs; mientras que algo similar ocurrió con las agencias de ayuda y cooperación internacional quienes se enfocaron en brindar apoyo técnico en distintas áreas antes cubiertas por el Estado. Ello, desde luego, implicó una redefinición de las instituciones que ejercían funciones de reproducción de la fuerza de trabajo, ya fuesen estas instituciones de protección social, educación, etc. En síntesis, el rol del Estado, cuyo carácter había sido el de un Estado en situación de instrumentalización de los intereses

de la oligarquía y burguesía exportadora y comercial, se profundizó tras la recomposición de las mediaciones sociales, y la desestructuración del entramado burocrático construido para canalizar la participación social surgida tras la revolución nacional de 1952.

De tal forma, la reorganización del aparato burocrático provocó el cierre de un conjunto amplio de empresas del Estado que a juicio de los tecnócratas eran altamente improductivas, generaban pérdidas o cargaban en exceso el gasto público. Además, una consecuencia de esta reorganización fue el establecimiento de una política de flexibilización de las relaciones obrero-patronales, en las que se priorizó la tasa de acumulación del empleador al tiempo que se eliminaban derechos laborales como la garantía mínima de tiempo de vinculación al trabajo.

El modelo económico, sin embargo, siguió dependiendo del sector primario y la exportación de bienes básicos, mismos que fueron apalancados con el uso de los recursos obtenidos por los préstamos otorgados por el FMI y el BM. El beneficiario de esta política fue el gran sector empresarial agrupado en la CEPB. No obstante, y contrario a lo que pensaron sus precursores, las políticas de la NPE no lograron estimular el crecimiento económico, ahondando sí la relación de dependencia con las instituciones multilaterales, las agencias de cooperación y el gobierno de los EE.UU.

La apuesta de la NPE continuó así la tendencia histórica del bloque dominante en Bolivia a edificar un proyecto excluyente y elitista de nación. El proyecto neoliberal impulsado por las fuerzas agrupadas en el “pacto por la democracia” consistió en “modernizar” el aparato estatal, para así lograr una inserción al mercado mundial aprovechando las ventajas comparativas de la economía boliviana, esto es: mano de obra barata, grandes cantidades de recursos forestales, minerales y energéticos, al igual que tierras abundantes para desarrollar proyectos de agro-exportación. Bajo la premisa de que aquellos que lograsen hacer parte de los intercambios globales reinvertirían sus utilidades en el país (otorgando dinamismo a la economía e integrando amplios sectores sociales, regionales y económicos

ajenos al orden global) la NPE concibió la *abigarrada* sociedad boliviana como un obstáculo a saldar por la vía de la modernización neoliberal. Los grupos sociales y comunidades al margen de este proyecto de acumulación, por demás, adquirieron cada vez más capacidad organizativa desde finales del setenta a través de múltiples movimientos sociales (como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), juntas vecinales, el movimiento katarista, y, en general, distintas formas de organización subalternas) que robustecieron la dinámica participativa en Bolivia tras la fase dictatorial.

Sin duda la NPE funcionó como un estricto programa de ordenamiento neoliberal del Estado. El impacto, y el grado de influencia que supuso en materia de reorganización de las relaciones sociedad – Estado a lo largo de toda la década de 1990 son innegables³. Del mismo modo, la reingeniería calibrada del Estado boliviano alteró las correlaciones de fuerza al interior del Estado, sustituyendo viejas lealtades políticas, eliminando focos de incidencia y participación de los movimientos obreros en las instituciones estatales, y reordenando la estructura distributiva y redistributiva de los recursos al cargar con mayores tributos a las mayorías⁴.

3 Hasta qué punto la aguda crisis económica, y el objetivo desesperado del control de la hiperinflación permitieron lo que René Zavaleta denominó un estado de disponibilidad, es decir, un momento social de maleabilidad general frente a una proposición, es una hipótesis que tendría que indagarse con mayor detalle.

⁴ De acuerdo a lo observado por En Kohl, B. y Farthing, la reingeniería del Estado boliviano continuó signada por el clientelismo: “la dependencia de los pactos entre los partidos por asegurar el control político quería decir que el clientelismo siguió siendo el talón de Aquiles del sistema, a pesar del propósito explícito de los arquitectos neoliberales. El gobierno de Paz Estenssoro creó tres nuevos ministerios y 16 viceministerios, generando un total de 20.000 nuevos empleos en el sector público” (pp.138). Por su parte, la reconstrucción de las mediciones no fue óbice para sostener tácticas políticas de apoyo preferencial a sectores de la sociedad boliviana: “siguiendo una tradición de gobierno largamente establecida que consistía en dividir a los sectores populares llegando a tratos separados con campesinos indígenas y habitantes urbanos más occidentalizados, Paz Estenssoro decidió que el nuevo impuesto a la propiedad introducido por la NPE no se aplicaría en el campo. Esto disminuyó el impacto más negativo de la NPE sobre las áreas rurales, que todavía no se recuperaban de las

Ahora bien, si en 1985 con el gobierno de Paz se sentaron las bases para transitar del desarrollismo al estado “guardián” de la iniciativa privada, es en definitiva con el gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) con el que se consolidaron las políticas de ajuste estructural y de reorganización del Estado. A través de un congreso de mayorías oficialistas se aprobaron reformas constitucionales y un abanico de leyes con las cuales se cimentó la privatización de sectores del Estado y reorientó el sistema político vigente. Son justo las reformas introducidas alrededor de las relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil (y por ende las modificaciones al acceso y ejercicio del poder político), las que otorgan especificidad a este periodo de gobierno. En efecto, durante el mandato de Goni se formalizaron las reformas de segunda generación del proyecto neoliberal, caracterizadas por elevar a rango de derecho las políticas implementadas desde distintas instancias de la administración para materializar el ajuste estructural del Estado. Con ello se pretendió blindar jurídicamente las políticas de liberalización y, de forma concomitante, hacerlas políticas de Estado más que de gobierno.

En torno a dos pilares (capitalización y descentralización “participativa”) continuó la institucionalización de la reforma neoliberal en Bolivia. La primera sirvió como un esquema de privatización de las empresas más grandes del estado y la apertura al capital transnacional para su adquisición y operación (salvo COMIBOL que en la práctica ya había sido desmantelada); la segunda, fue concebida como un modo de resolver los problemas de legitimidad del Estado boliviano a través de la Ley de Participación Popular (LPP) (Arze, 1993).

En efecto, Goni logró expedir la ley de capitalización en 1994, en un clima de discusiones álgido por lo que significaba la venta del principal patrimonio económico del país, cuyo aporte al fisco representaba

devastadoras inundaciones y sequías de 1982-1983, y pudo silenciar la protesta inicial del movimiento campesino. Sin embargo, las importaciones de alimentos baratos que la NPE permitió inundaran al campo impusieron pronto un tremendo precio, acelerando la migración rural- Urbana (e internacional) y alimentando la resistencia indígena al neoliberalismo” (p. 141).

al 12,5% del PIB y el 60% de las recaudaciones estatales. “El Cambio para todos” (nombre que recibió su plan de gobierno) contemplaba que el millonario arribo de capitales extranjeros jalonaría el crecimiento de la economía y por ende del bienestar de los bolivianos.⁵ Sin embargo, lejos de suceder el idílico escenario de capitales pugnando por hacerse a las acciones de las empresas bolivianas, solo se recibió un puñado de peticiones de compra que abarataron el monto total de adquisición de las empresas públicas. A la postre, no solo los capitales extranjeros encontraron enormes facilidades para evadir el pago de impuestos, repatriar utilidades, y en algunos casos dilatar la inversión en las empresas (por ejemplo, con las empresas LAB y ENFE), más aún, los ingresos fiscales del Estado boliviano se deterioraron en el transcurso de los años que siguieron a la política, lo que produjo una mayor dependencia de los recursos de la cooperación internacional y de los préstamos leoninos con el FMI.

Al tránsito de 12 años de políticas monetaristas y de liberalización de los mercados (1985-1997) la situación socioeconómica de Bolivia no dejó de deteriorarse. La afluencia de inversión extranjera directa, la estabilización como condición *sine qua non* de la organización económica del Estado, el estímulo a las exportaciones en tanto núcleo del proyecto de acumulación, en suma, la doctrina económica inspirada en las agencias multilaterales, y admitidas con beneplácito por el bloque dominante, mostraron signos de agotamiento al iniciar el nuevo siglo. Si bien las políticas de austeridad, control fiscal, reducción del gasto público, reorganización de la política tributaria, modificación de la política cambiaria y monetaria, en fin, el arsenal de instrumentos macro y micro económicos dispuestos para reducir la hiperinflación de la década del 80 consiguieron su propósito, nada

⁵ Ya en su momento se supo que la venta de las empresas en realidad era un negocio deseado por un sector de las élites tecnocráticas y el gobierno de los Estados Unidos. Lo cual explica la actitud prolija del BM en el acompañamiento a la implementación de la ley, pero por sobre todo las irregulares condiciones que sellaron la venta de las redes de transporte de YPFB a Enron-Shell.

de ello logró evitar la debacle social de un Estado reformado para acentuar su condición instrumental.

En tales circunstancias, el control y mando sobre el sistema político cada vez más se tornó de difícil manejo. La crisis precipitada por un proyecto político y económico incapaz de incluir a las mayorías sociales, mostró la negligencia de las instituciones para tramitar conflictos históricos agudizados por la elevada inconformidad de organizaciones campesinas, indígenas, vecinales, y obreras. Los intentos por readecuar el funcionamiento político del Estado y la administración pública, de cara a ampliar y canalizar la participación social en el marco del principio de gobernanza, no lograron el propósito esencial de legitimación de las instituciones políticas. Antes bien, la corrupción (ligada a la malversación de recursos públicos, las concesiones hechas a capitales foráneos y el fenómeno del narcotráfico) expandida por distintos aparatos del estado, socavaron aún más la débil legitimidad del Estado surgido de los estertores de la dictadura.

Al culminar los gobiernos de Sánchez de Lozada, Hugo Banzer (1997-2001) y Jorge Quiroga (2001-2022), la economía nacional arrojó cifras preocupantes (Pereira, Loayza, & Santa Cruz, 1999). Se produjo un estancamiento del PIB al pasar del 5% en 1997 al 2,5% en 2002, con una caída pronunciada en 1999 cuando tan solo llegó a un 0,4%. En concomitancia el PIB per cápita también se deterioró al pasar del 2,9% en 1997 al 0,6% en el 2002. Tal indicador resulta desastroso si se toma en cuenta el hecho de que la tasa de crecimiento demográfico 1992-2001 fue 2,75% (Bolivia pasó de tener más de 5,5 millones de habitantes en 1980 a 8,5 millones al iniciar el siglo XXI). La tasa de desempleo casi se duplicó llegando al 8,7% en el 2002 después de reportar un 4,4% en 1997. El saldo en cuenta corriente continuó la senda negativa sostenida durante toda la década del noventa (-7,8% como porcentaje del PIB en 1999), cerrando al final de la administración Banzer en -4,5%. La inversión extranjera directa se contrajo, pasando de \$728.1 millones en 1997 a \$674.1 en 2002, rubro que cayó aún más en el siguiente lustro. Mientras tanto, en consecuencia, la deuda externa como porcentaje del PIB pasó del 57,2% al 88,2%, una

escalada de terribles proporciones para la alicaída economía boliviana. Por supuesto, el elevado déficit fiscal junto con las escasas fuentes de ingreso, permitió que durante los gobiernos de la NPE los EE. UU. (principal acreedor financiero) y las agencias multilaterales condicionarán su ayuda financiera a la implementación de políticas de ajuste estructural.

Por otra parte, la deuda externa privada disminuyó en el periodo descrito, a razón de la crisis económica pero también por el financiamiento hecho directamente desde las casas matrices a las empresas multinacionales, este fue el caso de las empresas que operaban en el sector de agro negocios. Asimismo, casi todos los sectores económicos tuvieron un comportamiento errático, salvo el sector de hidrocarburos que en el periodo 1997-2001 registró un crecimiento del 9.6% de la mano de las inversiones en el departamento de Tarija. El sector agroexportador creció apenas el 1,51%, cifra tan reducida como la del sector industrial que tuvo un leve incremento del 2.06%, mientras que el minero retrocedió al -1.92%. Por su parte, las diferencias espaciales (y, por ende, desigualdades) del patrón de acumulación aumentaron entre los departamentos de oriente y occidente, y a nivel rural y urbano (Arze, 2002)⁶.

⁶ Como lo explica Eduardo Arze (2002, pp. 532-533) "las disparidades regionales iban creciendo significativamente a lo largo del periodo 1952-2000, no sólo entre el campo y la ciudad, sino entre el sector campesino del área de cultivo tradicional y el de la empresa agrícola capitalista del oriente de Bolivia". Según el mismo autor, el índice de crecimiento (medido en hectáreas) de la superficie agrícola en el Altiplano y los Valles pasó de 100 en 1950 a 130 en 1997, mientras que en la región agroexportadora del oriente pasó de 100 en 1950 a 2.478 en 1997. Así mismo "la situación del 37.7% de la población nacional radicada en el área rural, y particularmente aquella del área del cultivo tradicional del Altiplano y los Valles seguía constituyendo hacia el año 2002 el sector de mayor concentración de la pobreza e indigencia del país" (pp.534). Por supuesto, la dinámica espacial de acumulación de capital en Bolivia impactó la composición de los sectores productivos, y a su vez, las organizaciones sociales. Pablo Villegas (2010, pp. 159-160) sostiene que la política de colonización y de expansión del mercado de tierras afectó de forma distinta a los indígenas de tierras bajas y altas, lo que ocasionó tensiones entre las distintas organizaciones indígenas. Por ejemplo, hasta el 2005, mientras que sólo el 0.47% de las demandas de tierra hechas por los indígenas de tierras altas fueron admitidas y tituladas, 18.16% de las demandas de tierra hechas por los indígenas de tierra baja fueron aprobadas. El autor concluye su

Por otra parte, y siguiendo la tendencia de la década, la inflación cayó del 4,4% en 1999 al 0,9% en el 2002. Desde luego en materia social la realidad no fue distinta, la tasa de pobreza disminuyó levemente del 52.3% en 1997 al 48% en 2002, y la indigencia pasó del 22.6% al 18.8% en el mismo periodo. No obstante, el coeficiente de Gini para el mismo periodo permaneció casi inalterado en 0,590; mientras que las relaciones entre deciles (cuyo dato nos muestra las brechas de desigualdad en términos de distribución del ingreso) indican que para el 2002:

el 10% más pobre recibía tan sólo 0.17% de todos los ingresos, mientras que el 10% más rico se quedó con 45,9%, es decir casi 270 veces más (Nina y Nina, 2003). Dicho de otra manera, si se juntara a 100 personas para que se distribuyan 100 bolivianos entre ellas, los 10 más ricos se quedarían con casi la mitad del dinero, mientras que los 10 más pobres tendrían que repartirse 17 centavos (Cáritas Bolivia, 2004)⁷.

Tan devastador escenario económico sólo podía presagiar lo que el ciclo de luchas sociales del 2002 al 2005 terminaría por agudizar: la crisis del Estado neoliberal fundado sobre las bases de la NPE. La disputa política encabezada por la alianza indígena-campesino-obrera, sellada en el denominado “Pacto de Unidad”, reconfiguró las relaciones de poder sobre las cuales se erigió el proyecto de dominación neoliberal. Del poder constituyente alcanzado por estas fuerzas derivó el ascenso el MAS-IPSP a posiciones de gobierno y junto a este la reconstrucción hegemónica del Estado boliviano.

análisis preguntándose a quiénes le fueron escrituradas los 26 millones de hectáreas de los 31 millones que fueron adjudicadas hasta el 2005 en el marco de la Ley INRA (a los indígenas se les escrituró 5 millones de hectáreas).

⁷ Sobre las políticas sociales introducidas en Bolivia a lo largo de este periodo ver: Fernanda Wanderley (2009).

Quiebre del proyecto neoliberal y ascenso de un proyecto alternativo

Tras la victoria electoral de Evo Morales el año 2005, Bolivia inició una serie de transformaciones en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, con el derrotero de superar y contraponer alternativas al proyecto neoliberal analizado en el apartado anterior. Morales llegó a la presidencia de su país con el compromiso de cumplir con la Agenda de Octubre ⁸, y con las agendas diversas de los movimientos sindicales, campesinos y populares de los que emergió.

El periodo de transformación que surge con el proceso social de cambio liderado por el MAS-IPSP, es heredero del ciclo de luchas contra el neoliberalismo del periodo comprendido entre 2000-2005, solo para referirnos a la historia corta. Las transformaciones por las que atravesó Bolivia alcanzaron su nivel de profundidad gracias al rediseño de la totalidad política impuesto desde la Asamblea Constituyente (2006-2009).

Aquí examinaremos qué tipo de políticas públicas fueron implementadas para conseguir una reducción tan significativa de: la pobreza —extrema y moderada—, la desnutrición, el hambre, el abandono escolar, la mortalidad materno-infantil y el analfabetismo. Pero no desde la perspectiva de políticas asistenciales o programas aislados, sino en la comprensión de que todo lo anterior significó una democratización de la economía y del poder.

Las transformaciones experimentadas en el país andino-amazónico no hubieran sido posibles sin la recuperación del Estado para redireccionar los excedentes. En ese sentido nos preguntamos ¿qué tipo de transformaciones son necesarias en un Estado devastado por décadas por las oligarquías políticas y económicas para reconstruirlo y que pueda asumir un papel activo en la economía y la producción

⁸ La Agenda de octubre fue el programa enarbolado por los movimientos sociales de la ciudad de El Alto el año 2003, centrado en la defensa de los recursos naturales. Se fundamenta en dos demandas: nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente.

misma? ¿Cómo se captan y redireccionan recursos públicos para beneficiar a las mayorías empobrecidas de manera sostenida, cuando eso implica pasar por encima de poderes fácticos tanto a escala local como regional?

Así, el Estado Plurinacional (EP) con el gobierno de Evo Morales incursionó en la sociedad y en el mercado en razón de un programa y de un proyecto de sujeto político que no sólo es distinto, sino opuesto al de la élite económica y política de la antigua República de Bolivia. En una primera instancia, avanzó reactivamente a lo instituido –en reacción al programa neoliberal, capitalista y colonial–, pero también instaló nuevas formas de lo político y modificó relaciones económicas y sociales que impactaron positivamente la vida de las mayorías.

Políticas democratizadoras

El gobierno de Morales avanzó en la implementación de políticas enfocadas en la disminución de la pobreza y de las desigualdades, esto no tendría nada de novedoso con otras experiencias “desarrollistas”, salvo porque el hito sobre el que se asienta toda esta política social es un amplio proceso de nacionalización de los recursos naturales estratégicos.

La primera y probablemente la más importante de estas experiencias nacionalizadoras arrancó el año 2006 con la recuperación de los hidrocarburos en manos de empresas transnacionales. Con la captación del excedente fue posible implementar el programa económico y social del nuevo gobierno, que se blindó en la nueva Constitución. Esta medida marcó la hoja de ruta de una gestión basada en la recuperación soberana de los recursos estratégicos de la nación.

Rupturas económicas

A partir del año 2009 el sistema económico boliviano se definió como social, comunitario y productivo⁹. Se trata de un modelo plural que articula “las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia” (CPE, 2009, art. 306). Y reconoce las siguientes formas económicas: privada, estatal, cooperativa y comunitaria.

Aquí podemos advertir algunos elementos que contravienen la doctrina neoliberal, empezando porque se plantea el rol activo del Estado en el mercado y en la economía. A partir del 2006 el Estado recuperó tanto su capacidad productiva como su capacidad regulatoria, incluso con los límites que le impone el sistema capitalista internacional.

La recuperación de los recursos estratégicos por parte del Estado y a la implementación de una amplia política de redistribución de la riqueza, que se expresa en: transferencias de la renta, bonos sociales, incremento del gasto público, incremento al salario mínimo, inversión en proyectos de industrialización estatal (litio, hierro). Esto dio como resultado el crecimiento económico al que hicimos referencia anteriormente, la caída de la extrema pobreza y la reducción de las desigualdades. Esto es, no solo hubo crecimiento, sino distribución.

Programa de nacionalizaciones

Como vimos anteriormente, el modelo neoliberal entró de lleno a Bolivia en 1985 con una agresiva política de privatización de las empresas públicas que incluyó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales

⁹ Para un análisis acucioso sobre el modelo económico boliviano véase *Un modelo económico justo y exitoso. La economía boliviana, 2006-2019* (2020), de quien fue ministro de economía de Evo Morales y hoy es presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles y Empresa Metalúrgica Vinto. La privatización neoliberal consistió en la venta a privados del 50 % de las acciones de las empresas, mientras que el dinero obtenido por el Estado debía invertirse directamente en la “nueva” empresa, por donde se lo vea es transferencia de recursos públicos a manos privadas.

El programa de nacionalización de Evo Morales incluyó los hidrocarburos, que estaban en manos de empresas extranjeras como Standard Oil, Gulf Oil, Repsol, ENRON, Shell, British Gas, Petrobras y Ashmore. Le siguió el agua, en manos de la empresa multinacional Suez. En minería, se revirtieron los derechos de las empresas Glencore, South American Silver y Jindal Steel. En telecomunicaciones ocurrió lo mismo con la empresa Telecom y, en lo que toca a la energía eléctrica, fueron nacionalizadas las empresas GDF Suez, Rurelec PLC y The Bolivian Generating Group.

De todas esas nacionalizaciones y reversiones la que reportó mayores beneficios fue la de los hidrocarburos, que captó el 82 % del valor de la producción para el Estado, dejando el 18 % para las compañías privadas. Esta nueva relación Estado-empresa significó un aumento importante de ingresos: en solo un año, 2014, la renta petrolera fue de 5,489 millones de dólares, y superó lo acumulado en 21 años de gobiernos neoliberales¹⁰. Los recursos obtenidos por la nacionalización se destinan a las universidades, a las gobernaciones, a los municipios y al Fondo de Desarrollo Indígena.

A partir de la recuperación de los hidrocarburos, el gobierno nacional dispuso una política denominada “Gas primero para los bolivianos”, con el objetivo de incrementar el consumo interno de gas natural a partir de la instalación de líneas de distribución subvencionadas por el Estado. Desde el año 2006 se invirtieron 823.66 millones de dólares en redes de gas a domicilio; si tomamos como referencia solo dos años, en el año 2005 –previo a la nacionalización– tenemos

¹⁰ Informe de Gestión, 2016, Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

que la inversión fue de 3,95 millones de dólares, mientras que en 2016 alcanzó los 102.51 millones de dólares (YPFB, 2017).

Respecto a las personas beneficiarias de esta política, según cifras de la empresa estatal, hasta el 2005 el servicio llegaba solo al 2,9 % de la población, en tanto que en 2016 llegó al 36 %. Algo similar sucedió con el agua, tras la nacionalización de la empresa Suez el año 2007, la cobertura de conexiones de agua potable se incrementó en más de 13 puntos porcentuales entre los años 2005 y 2017.

El sector energético siguió un camino similar, el año 2005 solamente el 33 % de la población rural tenía acceso a la energía eléctrica, con la recuperación de la generación por parte del Estado, se llegó al 73 % de esta población en el año 2016¹¹.

La reactivación de las empresas públicas por el Estado respondió al objetivo de llegar a lugares donde no llegaron los privados durante el neoliberalismo, y no pretendió competir con éstos, sino que se trata, en términos de Álvaro García Linera, de lo siguiente:

Si en los servicios básicos, llámese agua, electricidad o telefonía, el Estado interviene regulando los precios, subvencionando los precios y limitando las ganancias, la lógica de la ganancia comienza a ser combatida por la lógica del valor de uso enfrentado al valor de cambio, es decir estamos construyendo en ese pequeño detalle desde el Estado las raíces de una nueva organización económica de la sociedad (García, 2012).

La recuperación de la lógica del valor de uso (Echeverría, 1995), o de desmercantilización (Santos, 2010 y Harvey, 2017), es sin duda la ruptura más importante en términos de política económica llevada a cabo en Bolivia, ya que se propician espacios en los que la lógica de reproducción del capital es interpelada por otra en la que prevalece

¹¹ Informe de Gestión, 2016, Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

el valor de uso por encima del valor de cambio, aquí se encuentran, en latencia, elementos para un cambio de paradigmas.

Así, cuando hablamos del rol activo del Estado en la economía y el mercado, nos estamos refiriendo, en esencia, a los siguientes cuatro aspectos: 1) Incremento sostenido de la inversión pública; 2) Aumento salarial; 3) Reactivación de la demanda interna; 4) Conducción de la economía y la producción.

Pero, la implementación de la política económico-social no se llevó a cabo de manera aislada, hubo también una necesaria democratización del Estado y de la política. Esta democratización se dio en varios niveles y abarcó a los cuatro órganos del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Aquí apuntamos sólo algunos aspectos.

Desplazamiento de las élites tradicionales del Estado

Los grupos de poder político y económico que ocuparon el Estado desde la fundación de la república junto con las élites formadas durante el período neoliberal, fueron desplazados por el sujeto indígena que irrumpió el año 2005. Ese desplazamiento estuvo articulado con el rediseño de otra institucionalidad, lo que se expresó en la creación de instituciones capaces de atender las demandas y propuestas de los sectores populares e indígenas. Se trató de dotar al EP de una estructura acorde con los desafíos que planteó la nueva Constitución.

En este periodo observamos una incorporación masiva de indígenas, campesinas y campesinos y líderes sociales en la estructura estatal. Lo que García Linera calificó como una “invasión social sobre el Estado” (García, 2012). Esto contrasta con el gobierno anterior, conformado en su mayoría por consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina y del Banco Mundial, así como por miembros de la Confederación CEPB.

Desde nuestra perspectiva, el incremento de miembros de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales en el Estado es

relevante, en tanto significa la participación directa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos¹² en el ejercicio de poder político. Lo anterior representa una novedosa experiencia a nivel latinoamericano y, sobre todo, implica la democratización del Estado.

Este proceso democratizador también pudo observarse en el poder legislativo que hasta el año 2002 careció de representación indígena significativa y que, a partir del año 2006, experimentó un vuelco en su composición, lo que derivó en cambios cualitativos en el tipo de leyes aprobadas. Lo anterior representó una democratización profunda de sus estructuras.

Evidentemente, por sí mismas y de manera aislada, las personas en cargos ejecutivos no generan un cambio en la institucionalidad; sin embargo, un equipo ministerial o un poder legislativo compuesto bajo principios de plurinacionalidad y equidad de género, como el que se conformó en Bolivia a partir del año 2006, sí puede encauzar los recursos económicos y humanos del Estado hacia políticas enfocadas en la reducción de las desigualdades –de clase, género y raza–, y puede potenciar la ampliación de los derechos de las mayorías.

Esa democratización tuvo su correlato en el componente de género. Bolivia es uno de los países con la proporción más alta de mujeres parlamentarias en América Latina y, con el 53,2 % en junio de 2016, uno de los dos únicos del mundo que ha superado la meta del 50 % (OEA, 2016). En el ejecutivo se alcanzó la paridad de género en los gabinetes ministeriales de los años 2010 y 2011 y se incrementó su participación en comparación con todos los gobiernos previos.

Lo anterior transformó la esfera política, pero también generó cambios en la base material de la vida de las mujeres bolivianas. Por citar solo un ejemplo, la concesión de títulos de propiedad de tierras tuvo el siguiente comportamiento: en el año 1995 solo el 9,8 % de los propietarios de tierras eran mujeres, para el año 2016 la cifra se elevó al 46 %. Las mujeres, sobre todo las del área rural, lograron ser

¹² Como categoría política de autoidentificación plasmada en la nueva CPE.

propietarias de sus tierras, lo que les garantizó una cierta autonomía económica.

Consideraciones finales

La implementación de la doctrina neoliberal en Bolivia (1984-2005) reconfiguró a profundidad del Estado a través de sendas reformas políticas y jurídicas que ocasionaron un desmantelamiento de las instituciones públicas del Estado y el fortalecimiento del sector privado en áreas estratégicas de la economía. Las reformas acometidas modificaron el modelo de desarrollo e incidieron en el patrón de acumulación; esto profundizó la situación instrumental del Estado y en concomitancia la imposición de los intereses corporativos y empresariales del bloque en el poder. Como consecuencia de ello, se incrementó la dependencia del Estado boliviano frente a la orientación e injerencia de organismos multilaterales y empresas transnacionales. Además del ajuste estructural del Estado se procuró modificar el sistema político para, así, robustecer las estructuras de dominación a través de un reordenamiento posgubernamental y posburocrático.

Sin embargo, ni el rediseño de los mecanismos de participación y el sistema de partidos lograron estabilizar el orden social y político, por el contrario, estas reformas ahondaron la crisis económica de vastos sectores sociales cuya capacidad organizativa y de confrontación resultó decisiva para impugnar y disputar el proyecto neoliberal hegemónico.

Como colofón de las luchas indígenas, campesinas y obreras surgidas en el periodo 2002-2005 surge victorioso el proyecto político del MAS-IPSP. A partir del arribo de Evo Morales, y con el fundamental apoyo de organizaciones y movimientos sociales, se impulsó una agenda destinada a transformar la orientación neoliberal del Estado. Esta nueva agenda de políticas se tradujo en el incremento de la capacidad de retención de las rentas derivadas del sector de

hidrocarburos y minería, y a través de ello, de la expansión de la política social y la redistribución de la riqueza.

En tal sentido, la política social lograda con el nuevo modelo económico fue tan amplia que se calcula que hasta el año 2015 se benefició a 4.8 millones de personas con alguno de los bonos otorgados por el Estado. Es decir, el 45 % de la población boliviana ha sido alcanzada por estos beneficios (Ugarte et al., 2017).

Estas medidas afectaron positivamente a los sectores más pobres del país. Bolivia logró reducir la brecha de desigualdad de manera importante: si en el año 2005 el 10 % más rico tenía un ingreso 127 veces mayor que el 10 % más pobre de la población, para el 2016 esta brecha se redujo a 37 veces (Informe de Gestión, 2016 y Ugarte et al., 2017).

Más aún, la redistribución de la renta en el periodo 2006-2016 se expresó también en el incremento de las inversiones públicas, la construcción de obras de infraestructura que beneficiaron de manera directa a la población, además del incremento salarial. Todos estos aspectos dinamizaron el mercado interno y no solo generaron crecimiento económico, sino que promovieron mayor equidad

Ahora bien, los límites de las políticas públicas llevadas a cabo en Bolivia en el periodo 2006-2016 radican en que estas no han tenido la capacidad ni la fuerza para superar la subjetividad neoliberal. Es decir, sin duda, en diez años de gobierno del presidente Evo Morales se atacó la desigualdad y la pobreza generadas por el neoliberalismo, incluso ensayando políticas de desmercantilización, pero estas no lograron quebrar el discurso capitalista centrado en la satisfacción individual mediante el consumo de mercancías. No hay que olvidar que el neoliberalismo es más que un programa económico y político: para su realización y sostenimiento requiere deslizarse a través de los dispositivos productores de subjetividad (Aleman, 2016), y esos dispositivos no han sido disputados del todo aún, la racionalidad neoliberal continúa en pie.

BIBLIOGRAFÍA

- Alemán, Jorge (2016). *Horizontes neoliberales en la subjetividad*. Buenos Aires: Grama.
- Arce, Luis (2020). *Un modelo económico justo y exitoso: La economía boliviana, 2006-2019*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Arze, C. (1993). *Políticas de estabilización y reformas del estado en el programa de ajuste boliviano* (Vol. 4). La Paz: CEDLA.
- Arze, Luis (2002). *Bolivia, el programa del MNR y la revolución nacional*. La Paz: Plural.
- De Sousa Santos, Boaventura (2010). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.
- Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Bolivia (2004). Ricos y pobres. La brecha se ensancha. *Análisis Económico*, 2 (19 de agosto). La Paz: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. http://www.udape.gob.bo/portales_html/analisiseconomico/analisis/vol19/art05.pdf
- García, Álvaro (2012). *Estado, revolución y construcción de hegemonía*. Caracas: Correo del Orinoco.
- Harvey, David (2017). La ciudad, flujos de capital y organización de base. Una conversación con David Harvey. *Tinku*. <https://tinku.org/global/la-ciudad-flujos-de-capital-y-organizacion-de-base-una-conversacion-con-david-harvey/>
- Kohl, Benjamin y Farthing, Linda (2007). *El bumerán boliviano. Hegemonía neoliberal y resistencia social*. La Paz: Plural.
- Morales, Juan Antonio (1992). Cambios y consejos neoliberales en Bolivia. *Nueva Sociedad*, 121, 134–143.

- Muñoz-Reyes, Claudia (2009). *Políticas e instituciones para el desarrollo económico territorial: el caso de Bolivia*. ILPES. CEPAL. <http://www.cepal.org/es/publicaciones/7253-politicas-instituciones-desarrollo-economico-territorial-caso-bolivia>
- Pereira, Rodney, Loayza, Mónica, y Santa Cruz, José (1999). Bolivia. En Enrique Ganuza, Arturo León y Pablo Sauma, *Gasto público en servicios sociales básicos en América Latina y el Caribe: análisis desde la perspectiva de la Iniciativa 20/20* (pp. 113–165). Santiago de Chile: CEPAL-PNUD-UNICEF.
- Sheriff B., Héctor (1992) *Política económica, crecimiento y bienestar: Bolivia (1950-1990)*. UN. CEPAL. Oficina Montivideo. <http://repositorio.cepal.org/handle/11362/28237>
- Ugarte, Darwin, Cruz, Rosangela y Colque, Elio (2017). *Balance del Pensamiento Económico Latinoamericano*. La Paz: Banco Central de Bolivia.
- Villegas, Pablo (2010). La respuesta de los movimientos sociales frente al neoliberalismo y al poder de las multinacionales. En Erika González y Marco Gandarillas (coords.), *Las multinacionales en Bolivia. De la des-nacionalización al proceso de cambio (149-172)*. Barcelona: Icaria.
- Wanderley, Fernanda (2009). *Crecimiento, empleo y bienestar social: ¿por qué Bolivia es tan desigual?* La Paz: CIDES-UMSA.

Documentos institucionales

- Asamblea Legislativa Plurinacional (2009). Constitución Política del Estado Plurinacional. Gaceta Oficial de Bolivia.
- Presidencia del Estado, Informe de Gestión (2016). (La Paz, S/F).
- Organización de Estados Americanos (OEA) (2016). La democracia paritaria en América Latina: Los casos de México y Nicaragua / Comisión Interamericana de Mujeres.
- YPFB. (2017). Yacimientos. N°11, YPFB. https://hidrocarburoslatinoamerica.files.wordpress.com/2018/05/web_revista_yacimientos

Perú, 30 años del *pishtaqo* neoliberal

Aníbal García Fernández¹

Introducción

La instauración del neoliberalismo en América Latina, se suele situar a partir del golpe de Estado en Chile en 1973, país que tuvo tres años de experiencia socialista por la vía democrática con el triunfo de Salvador Allende, la Unidad Popular y de los millones de chilenos y chilenas que dieron su vida por un proyecto de tal magnitud.

El golpe de Estado contra Pedro Castillo en Perú, 49 años después del golpe en Chile pone de manifiesto, la vía del golpismo para cortar procesos democrático-populares de cambio en la región² y continuar

¹ Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos, Maestro y Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y Economía Mundial” y “Violencias en Centroamérica”.

² Como de hecho sucedió también en Honduras (2009), Bolivia (2019), y los golpes parlamentarios en Paraguay (2012) y Brasil (2016)

con la implementación de políticas neoliberales, de acumulación de capital, en contra del trabajo y a favor del libre mercado.

Para abordar el caso peruano en la instauración del neoliberalismo, es pertinente hacer un ejercicio de síntesis y una propuesta de periodización que permita ubicar cómo se llegó a reestructurar todo un país, su sociedad, el Estado y las relaciones sociales de producción en su conjunto. Como señala Le Goff (2016), periodizar no es acto neutro, tampoco es un hecho cronológico “sino que expresa también la idea de transición, de viraje e incluso de contradicción con respecto a la sociedad y a los valores del periodo precedente” (p. 12).

El artículo explora los antecedentes de la instauración del neoliberalismo en Perú desde las décadas previas a la llegada de Alberto Fujimori en 1990 que, tras su triunfo, cambió la estructura económica y social instaurada desde la década de 1930, modificó el Estado con una nueva Constitución por la vía de un golpe, la recomposición de las alianzas de clase dentro del país con amplia base social que, ante un contexto de fuerte crisis económica, social y política, gran parte de la población vio en Fujimori la salida a sus problemas. Tras los dos mandatos de Fujimori (1990-2000), el país enfrentó una fuerte inestabilidad política, con un modelo económico que, como en otros casos de la región, intentó aumentar las ganancias a costa de mantener a una amplia mayoría en condiciones de explotación, con una economía basada en la industria extractiva, de servicios, sin encaadenamiento productivo y subordinada al exterior.

El artículo está dividido en cuatro partes. En primer lugar, algunos aspectos previos a la instauración del neoliberalismo que den cuenta del contexto en el que emerge Alberto Fujimori. Una segunda parte en donde se analizan los principales aspectos de la década de los noventa y, posteriormente, el análisis de Perú en el siglo XXI. Se hace un análisis cualitativo nutrido con datos cuantitativos que permitan una comprensión de las principales variables socioeconómicas del país andino, sus transformaciones y continuidades.

Del gobierno revolucionario militar a la crisis política-económica (1968-1990)

Un día después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en la Ciudad de México, el 3 de octubre de 1968, el Gral. Juan Velasco Alvarado depuso al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry del partido Acción Popular en Perú (McClintock y Lowenthal, 1983). El análisis de los militares que tomaron el aparato de Estado en aquél entonces (varios de ellos salidos del Centro de Altos Estudios Militares, CAEM), identificaron los principales problemas nacionales y propusieron el Plan Inca con el cual, se efectuaría la industrialización de Perú. Dicho plan constó de 31 puntos en los que se pretendió reformar la sociedad, la economía y el Estado (Plan Inca, 1968).

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas planteó reformas como la agraria, educativa, industrial, propuso la preponderancia del Estado en sectores clave como el petróleo, electricidad, transportes, la pesca; transformaciones en el poder judicial, legislativo y un rol relevante de las FF.AA. en el desarrollo nacional. El gobierno de Velasco planteó en términos generales cambios en el poder oligárquico peruano desplazándola en favor del Estado. Hacia 1975 el Estado representaba 31% de las empresas nacionales, 75% de las exportaciones, 36% del crédito bancario, 50% de la inversión fija y el 33% del empleo formal (Parodi, 2007, p. 103).

En 1975 mediante un golpe de Estado, el Gral. Morales Bermúdez depuso a Velasco Alvarado, aduciendo dificultades económicas y la incapacidad de este último para gobernar, debido a problemas de salud. No sería la última vez que la incapacidad sea razón para deponer presidentes en Perú. Con Morales Bermúdez al mando, a tono con la crisis del patrón de reproducción de capital comandado por el Estado, Perú enfrentó problemas económicos y sociales; los salarios cayeron, las protestas sociales incrementaron teniendo su máximo punto en 1977 y se enfrentaron a un gobierno que reprimió, al vaivén del contexto dictatorial latinoamericano enmarcado en las dictaduras de Seguridad Nacional (Tapia, 1980) comenzadas en Brasil en 1964 y

seguidas en Chile (1973), Uruguay y Argentina (1976) que, junto con Paraguay formaron parte de la Operación Cóndor (McSherry, 2009).

En 1980 el gobierno de Morales Bermúdez se retira y llama a elecciones en las que, de nuevo, Belaúnde Terry fue elegido presidente para el periodo 1980-1985. En ese mismo año surge Sendero Luminoso (SL), una guerrilla que comenzó sus acciones en el departamento de Ayacucho y que logró un crecimiento importante en la sierra peruana (Degregori, 2010). Aprovechó el contexto de crisis de la década de los ochenta y la falta de oportunidades para los jóvenes (Chávez de Paz, 1989) llevando una guerra etnocampesina como la denominó tempranamente Melgar Bao (1988).

Además de atender el problema de SL, a Belaúnde le tocó la crisis de la deuda, los desastres naturales de “El Niño” y el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país. Este contexto de crisis económica, política y social, derivó en la pérdida de un sector popular que lo apoyó en un inicio y que, en las elecciones municipales de 1983, se volcó hacia la candidatura de Alfonso Barrantes de Izquierda Unida. Así, hacia las elecciones de 1985, su partido no logró retener la presidencia.

En este contexto, el APRA logró ganar la presidencia con la candidatura de Alan García para el periodo 1985-1990. En el marco de la “década perdida”, García aplicó una política heterodoxa, incluso en contra de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), lo que le costó a Perú su salida de la “comunidad internacional”.

A pesar del intento de fortalecer el mercado interno y de políticas redistributivas, el modelo económico cayó en crisis al final de su mandato con una hiperinflación que llegó hasta el 6000%, caída del PIB, la producción y de la recaudación fiscal, así como el aumento del desempleo.

Como a Belaúnde, a García le correspondió el crecimiento de SL de la sierra a la capital, y las políticas de contrainsurgencia, incluidas las acciones paramilitares que dificultaban el control interno del país. La crisis económica y las protestas sociales de la década de

los ochenta por parte de sectores populares y de sindicatos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SU-TEP) y la Confederación General de los Trabajadores el Perú (CGTP), dieron paso a protestas de clases medias, intelectuales liberales y empresarios.

Es hacia finales de los ochenta que estos últimos sectores sociales replantearon la noción de democracia y libertad; el desarrollo del mercado frente al Estado y su política redistributiva –y clientelar–, así como el predominio de la sociedad civil, la transparencia y una administración pública responsable ante más de una década de crisis.

En síntesis, estos sectores replantearon el orden político-social y económico establecido desde la década de los 30 del siglo XX. Entre sus principales ideólogos destacan Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa, quien fuera candidato presidencial en 1990 frente a un ingeniero que no tenía partido ni experiencia previa en la política nacional, Alberto Fujimori.

“El pishtaqo neoliberal”: los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000)

En la mitología andina, el mito del pishtaqo ha permitido a las comunidades andinas explicar su historia en distintos momentos. Este mito identifica al “explotador” como una especie de “vampiro andino” que extrae la grasa del cuerpo humano. El uso que el pishtaqo daba a la grasa humana era distinta en el tiempo. Si en la colonia y la conformación de la república era usada para la fabricación de velas por parte de la iglesia, hacia finales del siglo XIX y principios del XX sirvió para aceitar locomotoras y, hacia finales del siglo XX,

la grasa era usada por EE.UU. para lubricación de maquinaria (Manrique, 1990)³.

La elección de 1990 en la que Alberto Fujimori es elegido presidente, se explica principalmente por el contexto de crisis previo. Para Julio Cotler (1993)

La incapacidad de los partidos y los gobiernos para satisfacer simultáneamente las segmentadas demandas sociales y los compromisos internacionales agudiz[aron] el conflicto social, desorganizando el entramado y los referentes institucionales. De ahí que los efectos sociales de la “década perdida” fueran motivo para que se cuestionara a los partidos políticos, a los gobiernos y, en algunos casos, al Estado (p. 5).

Surgió así una opción “por fuera de la política tradicional” encarnada en Alberto Fujimori, quien planteó en campaña medidas heterodoxas, concertación política y no contaba con el apoyo de los viejos partidos políticos. En oposición a Vargas Llosa, Fujimori fue identificado más cercano a los estándares populares, llegando a conocerse comúnmente como “el chinito”. Un mes de campaña le bastó a Fujimori para crear un amplio respaldo popular heterogéneo -con el lema “un presidente como tú”- que iba desde sectores religiosos, bases del APRA, de la izquierda y, una masa rural amplia marcada por diez años de lucha a SL, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), al narcotráfico, con crisis económica y sin presencia real del Estado. Por lo tanto, el contexto convulso de crisis económica, social y política, de guerra interna derivaron en la opción de Fujimori como candidato que vendría a solucionar los problemas más profundos del Perú.

³ Mitos como este quedaron plasmados en los retablos de Nicario Jiménez y dan cuenta de la explotación a la que es sometida la población y la identificación del explotador, http://folkvine.umbc.edu/jimenez/present/pishtaco_ok.html.

Sin un partido fuerte detrás, Fujimori supo crear alianzas diversas con los partidos políticos y en particular con las FFAA, que delinearon un plan para acabar con las guerrillas (Plan Político-Militar conocido como “Plan Verde”), al tiempo que apelaba a la lucha contra la corrupción como forma de aglutinar al pueblo (Madueño, 2004 y CVR, 2003a). Dicho plan según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pretendió establecer un gobierno militar que gobernara mientras se mantenía la fachada civil, en el cual

los ministros obedecen a un gabinete secreto, el Consejo Estratégico del Estado, el cual ejecuta sus decisiones mediante la Secretaría Ejecutiva Nacional. Ésta es el núcleo operativo principal, es el vaso comunicante y el motor de los nuevos destinos de la Patria, es el ESTADO MAYOR, el celoso guardián de la aplicación de acciones destinadas a resolver los problemas estratégicos del Estado (CVR, 2003b, p. 330).

En la delimitación de escenarios posibles en las elecciones de 1990, el surgimiento de Alberto Fujimori y su apoyo social (63% de votos en segunda vuelta) llevó al sector golpista de las FFAA a cambiar los planes y posponerlos. Sin embargo, dicho plan fue retomado por el que fuera la mano derecha de Fujimori, Vladimiro Montesinos, quien además de filtrar información a EE.UU. en años anteriores, se hizo cargo del aparato burocrático-militar, de inteligencia y espionaje.

En temas económicos, la reinserción de Perú en la “comunidad internacional” vino de la mano del ajuste económico en clave ortodoxa con respaldo del FMI y BM, así como de EE.UU. La decisión tuvo consecuencias en el apoyo social mostrado en un inicio a Fujimori, sin embargo, junto con los medios de comunicación, supo instalar la idea de que no había alternativa para acabar con la corrupción y la ineficiencia heredada de gobiernos anteriores.

Sin embargo, a pesar del apoyo popular, la guerra interna contra SL seguía siendo uno de los principales problemas. Las FFAA continuaban tomando mayores atribuciones en torno a la seguridad

interior. Los decretos que planteó Fujimori en los dos primeros años de su gobierno fueron parados constantemente por el Congreso en el que el partido de Fujimori, Cambio 90, solo obtuvo el 23% y 18% de los escaños en las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Los problemas entre ambos poderes crecieron hasta el punto de ruptura institucional. Así, el 5 de abril de 1992, Fujimori, junto con las FFAA dieron el denominado “autogolpe de Estado”.

Tras el golpe se suspendió la Constitución y el Congreso, se formó un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”⁴. La medida si bien contó con respaldo popular (70% de la población), no fue general, hubo sindicatos que se opusieron, medios de comunicación e incluso políticos y algunos partidos políticos que también hicieron frente a Fujimori. Tampoco contó con el aval político de las instituciones financieras internacionales que, contradictoriamente, apoyaban el ajuste estructural. Había que guardar las formas de la democracia por lo que condicionaron parte del financiamiento al respeto de garantías sociales y sobre todo a las formas democráticas electorales. Ante esta situación, Fujimori hizo llamado a elecciones para un “Congreso Democrático Constituyente” que daría paso a la Constitución de 1993, la cual sigue vigente treinta años después. Un año antes, en 1992, capturaron a la cúpula de SL, dando un mayor impulso político a Fujimori frente a la población. Pero también, quedaban en entredicho los decretos que daban atribuciones a las FFAA. en amplios territorios, sobre todo en la sierra y parte de la selva peruana.

Fue bajo esta condición de vulnerabilidad económica y política que se interiorizaron intereses extranjeros y dio forma al Estado actual en Perú, al modelo económico y moldeó a la sociedad bajo lo que comúnmente se denomina neoliberalismo. O sea, un modelo económico basado en aumentar la ganancia a costa de mantener a la población en condiciones de miseria, aumento de la dependencia

⁴ Los militares argentinos que instauraron una dictadura en 1976 le llamaron Proceso de Reorganización Nacional

estructural en la que las ramas más dinámicas de la economía fueron extranjerizadas, con un Estado mínimo en lo económico pero que es sometido a rajatabla al dictado del capital, con reformas constantes -apoyadas por instituciones como el FMI, BM y el BID- que permiten perpetuar el modelo económico.

En lo político construyeron una democracia restringida acorde a la institucionalización de la contrarrevolución en la región (Marini, 1976). Dicho proceso implicó la instalación de un Estado de contrainsurgencia en condiciones en las que “hay una hipertrofia del poder ejecutivo” por dos sectores que son dominantes de la estructura estatal, su funcionamiento y administración: las fuerzas armadas que tienen una gestión militar del aparato de Estado y el capital monopólico que se instala dentro del aparato del Estado por la vía de la tecnoburocracia (Fernández Jilberto, 1984, p. 39).

Es tras el autogolpe que comienza un largo proceso hasta nuestros días, de lo que se denomina como *antipolítica*. Romano y Díaz Parra (2018) mencionan que la antipolítica son “políticas dirigidas a reprimir lo político” (p. 39) y tiene dos fases, una antipolítica dura (eliminación física del enemigo) por medio de la militarización y una antipolítica blanda (eliminación de la amenaza a los intereses del bloque en el poder por la vía técnica). En el caso peruano, la antipolítica dura se instaló en la década de los ochenta y noventa, décadas que oficialmente considera la CVR como la época de la violencia del conflicto armado interno. La antipolítica blanda comenzó también en la década de los noventa y continúa hasta 2023, como se verá más adelante.

En el contexto previo al golpe y después de este, comenzó el retiro del Estado en lo social, y el shock económico dio paso a la solución técnica de la política ortodoxa, las privatizaciones. Entre marzo de 1991 y diciembre de 1992, 923 decretos ley por parte del Ejecutivo, comenzaron el largo y continuo proceso de privatización desmontando lo que se construyó en el periodo anterior. Como se observa en el Cuadro 1, el gobierno de Fujimori privatizó la electricidad, las telecomunicaciones, las minas de propiedad del Estado, la industria

petrolera, los transportes, sectores por demás estratégicos para cualquier Estado. A la par, se concentraron las funciones y presupuesto en el recién creado “Ministerio de presidencia”, que contó hacia 1993 con el 25% del presupuesto nacional y desde ahí, se “combatía la pobreza”.

CUADRO 1. PRIVATIZACIONES POR SECTORES ENTRE 1991-2000	
SECTOR	MILLONES DE USD
Total	7,989.9
Electricidad	1,938.4
Telecomunicaciones	2,739.7
Minería	1,021.8
Hidrocarburos	912.9
Industria	597.8
Financiero	421.6
Pesquería	156.1
Transporte	62.4
Turismo	40.7
Agricultura	37.8
Comunicación	16.0
Comercio	14.7
Químicos	9.5
Otros	20.6
Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada.	

La gestión estatal de la pobreza fue operada por Fujimori con fines electorales, así se fue incrementando el gasto en asistencia social del 2% al 6% del PIB en 1995. La inversión pública incrementó sobre todo en distritos rurales pobres, pasando del 3% en 1992-1993 al 24% en 1994, un año antes de las elecciones que le permitirían la reelección a Fujimori y su gabinete tecnócrata de empresarios miembros de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas

(CONFIEP) como Jorge Carnet, quien fue Ministro de Finanzas y Economía.

Según datos de la CEPAL (2023), la población peruana que vivía con menos de 2.15 dólares por día era 3.5% en 1985 (19.5 millones), hacia 1994 aumentó a 17.5% y, cuando salió Fujimori, eran alrededor del 19.2% de la población, poco más de 26 millones. Al aumento de la pobreza se sumó la privatización del sector salud que en 1997 permitió, mediante la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud, la tercerización de la salud con la presencia cada vez mayor de empresas que lucraron con uno de los sectores que antes eran exclusividad del Estado (Egwin, 2000). Un proceso similar sucedió con la educación. Además de militarizar las universidades como fueron lo casos de la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Pedagógica Nacional-La Cantuta –en donde las fuerzas armadas asesinaron a nueve estudiantes y un profesor–, y la Universidad Nacional Agraria La Molina, la carencia de recursos fue la constante. En todo el periodo de Fujimori el gasto del gobierno central pasó de 2.3 millones de soles en 1994 a 4.6 millones, mientras el sector privado pasó de 4.7 a 9.1 millones de soles, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEC, 2023).

En el periodo de Fujimori, debido a las políticas de estabilización macroeconómica, se logró bajar la deuda externa, la cual pasó del 78% del PIB en 1990 al 54% en el 2000, aún por arriba del promedio regional (34%) y por debajo de otros países como Bolivia (80%) o Ecuador (72%) (CEPAL, 2023^a). Una situación similar se observó con la deuda pública del gobierno central que pasó del 78.8% del PIB en 1991 al 38.1% en el 2000 (CEPAL, 2023^b). En el periodo de Fujimori, la tasa de crecimiento del PIB fue del 4% mientras que el PIB per cápita fue del orden del 2% (INEC, 2023a).

El “suicidio de la economía peruana” se consumó al dejarle al mercado el ordenamiento del país. Sin política industrial y con empresas estatales privatizadas, con una burguesía dominada desde el exterior y sin posibilidades reales de ser dominante al interior, crearon presiones internas expresadas en una balanza comercial deficitaria en

un contexto de máxima apertura comercial. Como suele ser en una economía subdesarrollada, las medidas tomadas por Fujimori en la década de los noventa reprodujeron las condiciones de dependencia, la heterogeneidad estructural y conformaron un patrón en el que las ramas más dinámicas fueron extranjerizadas (minería, hidrocarburos, manufactura), casualmente las que también otorgan mayor grado de soberanía; el sector agrícola fue cada vez menos productivo y predominantemente exportador; aumentó el sector de los servicios y la manufactura, que si bien conservaron cierto nivel nacional, fueron las *joint venture* la vía mediante la cual, se logró abastecer cierta parte del mercado nacional.

Postfujimorismo. Continuidad neoliberal con crisis estatal

Tras la renuncia de Fujimori desde Japón vía fax, el país se sumió en una crisis política resuelta a medias, con la llegada de Valentin Paniagua como presidente interino y después, con el triunfo de Alejandro Toledo a la presidencia. Fue bajo el mandato de Paniagua que se conformó la CVR que estableció un análisis de las décadas 1980-2000 en la que concluye que alrededor de 69,280 personas fueron víctimas de lo que denominó como Conflicto Armado Interno. Una de las conclusiones más debatidas del Informe Final de la CVR es que responsabilizó a SL como principal perpetrador de crímenes y violaciones a derechos humanos. En tanto, las FFAA habían cumplido con su labor de “enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia” (CVR, 2003d, p. 321).

Desde la teoría económica ortodoxa, se menciona que Perú es muestra de un modelo exitoso en la región pues es de los pocos países que mantuvo una tasa de crecimiento relativamente estable entre 1990-2021 y porque fue uno de los promotores de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en 2001. La tasa de crecimiento de

Perú en ese periodo es del 4% superior al 2% regional. Su tasa de crecimiento más alta fue en la primera década del siglo XXI (6%), según datos de la CEPAL. En cambio, el PIB per capita muestra una tasa de crecimiento del 3% entre 1990-2021 y en la última década 2010-2021, bajó al 2%. (CEPAL, 2023c).

Al observar la tasa de crecimiento del PIB de Perú por presidencia, hay una caída después de que salió Fujimori. El periodo de 2001 a 2021 está atravesado por la crisis del 2001, la crisis internacional del 2008 y su continuidad con la pandemia como se muestra en el Cuadro 2. El mandato que muestra un mayor crecimiento es el de Alan García.

CUADRO 2. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR MANDATO PRESIDENCIAL (2001-2020)	
PRESIDENTE	T.C. PIB
Alejandro Toledo (2001-2006)	6%
Alan García (2006-2011)	7%
Ollanta Humala (2011-2016)	4%
Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2018)	3%
Martín Vizcarra (2018-2021)	1%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática	

El crecimiento económico peruano, no refleja tampoco una mejora en la distribución del ingreso. Según datos de la CEPAL, la distribución del ingreso por deciles indica que el decil más bajo concentra apenas el 1.2% del PIB con respecto del total en 2003, hacia 2021 es de 1.8%. En cambio, para el decil más alto, la concentración pasó del 42.5% al 31.9% del ingreso total en Perú en el mismo periodo (CEPAL, 2023d).

En términos geográficos, el neoliberalismo en Perú, como en otros países de Nuestra América, incrementa la concentración de las actividades económicas en ciertos departamentos del país. En 2007 los principales departamentos que más aportaron al PIB son Lima

(43%), Arequipa, Ancash y La Libertad con 5% cada uno. Para 2021 la proporción de estos cuatro departamentos se mantuvo igual. En cambio, Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, San Martín, Tarma y Ucayali contribuyeron apenas con el 17% del PIB en 2021. Esta heterogeneidad geográfica va a tono con condiciones de pobreza, exclusión y falta de presencia del Estado en algunos territorios como la parte selvática del Perú, frontera con Colombia y Brasil, en donde hay una fuerte presencia del narcotráfico y remanentes de la guerrilla de SL. Según el Censo de pobreza monetaria de 2018 (INEI, 2018), los veinte distritos más pobres se encontraron en los departamentos de Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, los tres departamentos en donde SL comenzó sus actividades en 1980 y que, desde entonces, eran de los más pobres.

En la estructura económica peruana, el sector extractivo y la industria manufacturera representan el 41.2% del PIB a inicio del siglo XXI; hacia 2021 con datos parciales, siguen representando el 37.2% con tasas de crecimiento entre 2000-2021 del 3% y el 4% respectivamente. Sin embargo, derivado de la constitución de 1993 y de las reformas al sector minero, éste es uno de los que menos regalías deja al Estado y a la población en donde se localizan las mineras. En conjunto la minería y la extracción, comercialización y venta de hidrocarburos -actividades estratégicas dejadas a privados- promedian en lo que va del siglo XXI el 2.7% en ingresos públicos como proporción del PIB. Si bien aumentaron los ingresos públicos del Estado provenientes de estas actividades en el periodo 2003-2014, cuando internacionalmente los precios aumentaron, sólo en los años 2006-2007 rebasaron el 4%.

La actividad minera y extractiva a su vez, deja tras de sí una estela de conflictos socioterritoriales y contaminación. Dichos conflictos tienen como sujeto principal a campesinos y comunidades que han formado una gran diversidad de movimientos sociales. Anahí Durand (2014) distingue dos tipos de movimientos sociales: 1) en los que la problemática responde a cuestiones sectoriales y económicas

rurales y urbano (universitarios, docentes, campesinos, médicos, etc.); 2) contra el carácter extractivo de la economía, bajo la lógica de defensa del territorio y las comunidades, operando en áreas rurales.

Dentro del primer grupo están el Sindicato de Trabajadores de la Educación o la Federación Médica, trabajadores de los denominados “services” o empresas de tercerización de servicios, estudiantes universitarios en defensa de la educación pública. Se encuentran cercanos a los partidos políticos de la década de los ochenta que confluyeron en Izquierda Unida pero que se vieron envueltos en la vorágine de la violencia de las últimas dos décadas del siglo XX y al desprestigio del que fueron sujetos por parte del Estado, medios de comunicación y empresarios que constituyeron lo que en Perú se conoce como “terruqueo”⁵.

En el segundo grupo están organizaciones como la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDSEP), movilizadas entre 2008 y 2009 en contra de inversiones mineras y de hidrocarburos en la Amazonía peruana. En la sierra peruana, las organizaciones son varias en contra de proyectos mineros, destaca la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) que no logra posicionarse como referente de lucha.

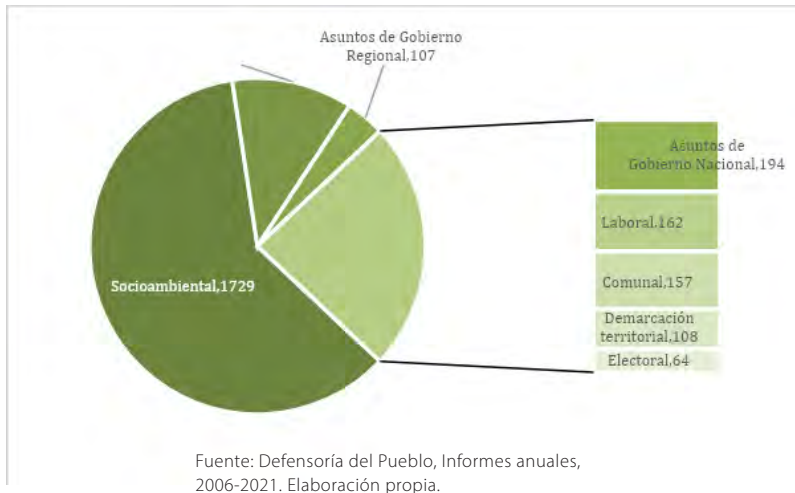
Otra organización relevante en este segundo grupo son las Rondas Campesinas, nacidas en la década de los sesenta en Cajamarca y, tras el conflicto armado, se extendieron a varios departamentos serranos. Si bien sus demandas eran en contra del robo de ganado y por tierras, son una organización que ha logrado trascender al conflicto, la reestructuración económica de los noventa y la profundización del patrón primario-exportador (Degregori, 1996 y Korsbaek, 2010).

Con datos disponibles desde 2006 la conflictividad social incrementó y, desde 2013, los conflictos socioambientales son los más relevantes, según datos de los informes anuales de la Defensoría del

5 Terruco se le denominó comunmente a los miembros de Sendero Luminoso y después devino en un adjetivo despectivo para todo aquél que protesta o reivindica causas sociales.

Pueblo. Como se muestra en la Gráfica 1, alrededor del 66% de los conflictos son relacionados con conflictos socioambientales. En el otro extremo, de los 2,589, únicamente 162 conflictos fueron laborales y 64 conflictos fueron de índole electoral, en un país en el que existe una alta inestabilidad política-electoral.

Gráfica 1. Conflictos sociales (2006-2021)



Los vínculos existentes entre los movimientos sociales amazónicos y serranos con los partidos políticos es muy volátil y va al vaivén de los ciclos electorales. Sin embargo, muestran en general, una inclinación hacia partidos de izquierda, como sucedió ante la candidatura de Ollanta Humala en 2011 (con el partido Gana Perú) y mantenida desde 2006. Anahí Durand (2014) concluye, al revisar algunos departamentos donde hubo movilización que “el triunfo de Gana Perú es claro”. Sin embargo, sucedieron tres aspectos que son claves para la segunda década del siglo XXI: los movimientos sociales no habían incorporado a dirigentes dentro de partidos en elecciones presidenciales y, por otro lado, el viraje que hizo Humala al ganar y por tanto la gran desilusión de amplios sectores sociales. Por último, mostró el predominio de la clase económica (y la tecnocracia) que, en el Estado,

logró mantener el rumbo del país, sin la necesidad de tener un candidato afín en un inicio.

Mientras en la sierra y en la selva los movimientos sociales estaban en contra de proyectos mineros, el Estado peruano realizó un control férreo hacia la clase trabajadora. Podemos mencionar la contención salarial y las reformas laborales, que garantizan la precariedad laboral, la explotación y también la construcción de la *pax neoliberal* que garantiza menos huelgas de trabajadores. Según datos del Ministerio de Trabajo, 1994 fue el año que más huelgas procedentes se registraron, con 45, el siguiente año con más huelgas fue hasta 2013 y con la participación de más de cinco mil trabajadores. Este sistema se sostiene con la improcedencia de huelgas -forma histórica de lucha de los trabajadores-, que crecieron en el periodo 1994-2021 (datos disponibles) y también, con la mayor participación de trabajadores. Entre 2019 y 2021 el número de trabajadores en huelga improcedente se duplicó, pasó de 109 mil trabajadores a 204 mil y con menos números de huelgas (MTPE, 2023).

Crisis del Estado y “permanente (in)capacidad moral”

En cuestión de política electoral en el periodo postfujimori, muestra una reiteración de candidatos, como son los casos de Alan García, Ollanta Humana y Keiko Fujimori (Cuadro 3). La elección más disputada en todo el periodo fue la de 2016, en ese año, el partido de la hija de Alberto, Fuerza Popular, logró 73 escaños de 130 en el Congreso que, junto con otros partidos comenzaron a hacer un uso cada vez más repetitivo de la vacancia, figura contemplada en la Constitución de 1993 y usada para deponer presidentes que no se someten a la continuidad neoliberal o son incómodos.

En 2016 en el Congreso, seis partidos fueron votados y tres de ellos concentraron el 84% de las bancas y uno de ellos obtuvo el 56%. En 2020 fueron nueve partidos y los tres principales apenas lograron el 47% de las bancas y el principal apenas logró el 19% (Adrianzen,

2020), lo que evidencia la crisis del sistema de partidos y la volatilidad del voto.

Cuadro 3. Votos por candidato electoral			
PRESIDENTE	% VOTOS	CANDIDATO CONTRARIO	% VOTOS
Alejandro Toledo (2001-2006)	53.08%	Alan García	47.24%
Alan García (2006-2011)	52.60%	Ollanta Humala	47.40%
Ollanta Humala (2011-2016)	51.20%	Keiko Fujimori	48.70%
Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2018)	50.12%	Keiko Fujimori	49.88%
Martín Vizcarra (2018-2021)	asumió tras destitución		
Pedro Castillo (2021-2022)	50.12%	Keiko Fujimori	49.87%
Dina Boluarte (2022)	asumió tras destitución		
Fuente: INDEC. Elaboración propia			

La historia política peruana del siglo XXI tiene un componente de desestabilización permanente en el que el Poder Ejecutivo es señalado y juzgado por corrupción, y por un Congreso que apela al artículo 113 de la Constitución de 1993 en la que se estipula la vacancia. Dicho artículo permite al Congreso iniciar el juicio político para destituir al presidente. Si es admitida la moción en el Congreso, se requiere de 52 congresistas (40%) para que se vote su procedencia. En la votación se necesitan dos terceras partes del congreso (87 votos) para “vacar” al presidente.

Después de que Fujimori renunció, Valentin Paniagua es el único que no fue juzgado por actos de corrupción. Los demás presidentes, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y Merino fueron juzgados por actos de corrupción –no todos probados–. Los presidentes removidos por el congreso bajo la vacancia fueron Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino y Pedro Castillo.

En los 23 años del siglo XXI la figura de la vacancia ha sido usada diez veces por el Congreso y la legislatura del periodo 2016-2021 es la que más veces la invocó. Se pueden distinguir entonces dos grandes periodos vistos desde el punto de vista de la vacancia a presidentes y su popularidad, de Paniagua a Alan García y de Ollanta a Pedro Castillo.

A todo esto, las izquierdas en Perú no han podido restablecerse de la debacle de los ochenta. Como señala Lynch (2020), hubo una triple crisis en aquella década: el fracaso del primer Gobierno aprista de Alan García, al que le toca la mitad de la “década perdida”; la lucha contra SL por la vía de la contrainsurgencia con apoyo de las Fuerzas Armadas, policiales y paramilitares; y la división de Izquierda Unida que logró la alcaldía de Lima en 1983. Su división interna y su incapacidad para formular una alternativa en esta década fueron elementos que terminaron por fragmentar a este partido político. Así, llegan a la década de los noventa en una posición de desventaja en el que el golpe, la Constitución y el ajuste económico les impiden nuclearse, sin lograr una identificación con los movimientos sociales que también estuvieron inmersos en su propia lógica como se abordó.

La crisis del Estado peruano tuvo un nuevo punto de inflexión con el golpe de Estado de diciembre de 2022 contra Pedro Castillo, maestro rural, miembro de las rondas campesinas y sindicalista elegido por ocho millones de votos (García Fernández, 2021). El apoyo amplio del pueblo peruano a Castillo se explica, en gran medida, por la posibilidad de cambio respecto a dos aspectos puntuales: la creación de una Constituyente y el cambio real de la directriz del Estado en lo económico.

Desde el triunfo de Pedro Castillo, el Congreso bloqueó su gobierno sistemáticamente: siete ministros destituidos y más de 70 que pasaron en los 18 meses que duró su gobierno; tres pedidos de vacancia hasta el golpe de Estado (García Fernández, 2023). La manufacturación de consenso (Chomsky y Herman, 2000) a la que fue sometido Castillo es tan sólo uno de los casos que dan cuenta de las estrategias políticas actuales (guerra híbrida) en contra de gobiernos

nacional-populares (Korybko, 2018). Por ejemplo, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2022 los principales titulares de El Comercio y La República en donde figuraba Castillo muestran un índice de negatividad del 79% y el 78% respectivamente (Robles y Ester, 2022).

El 7 de diciembre cuando se iba a votar la moción de vacancia en el Congreso, Pedro Castillo pronunció un discurso en el que decidió disolver el Congreso e imponer un toque de queda y convocar a elecciones para conformar un nuevo Congreso con facultades constituyentes. La razón era que el Congreso había roto el equilibrio de poderes. Sin embargo, ninguna de las medidas se llevó a cabo pues el Congreso, en lugar de votar la vacancia por corrupción votó una moción de vacancia con base en las declaraciones que había dado ese mismo 7 de diciembre.

Tras el discurso, Castillo fue detenido y encarcelado por actos de rebelión y por “quebrantar el orden constitucional” (CELAG, 2022). Días después las principales movilizaciones en Perú se dieron ahí donde había ganado Castillo, sobre todo departamentos serranos del centro-sur del país y con mayor relevancia en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Puno. Hasta febrero de 2023 se contabilizaban más de 60 muertos, cientos de heridos y detenidos tras el golpe.

Como en el caso del golpe de Estado en Bolivia (Lajtmán, et al., 2021), son los intereses estratégicos de las empresas y gobiernos los que también inciden en la política de los países de América Latina. Si en el caso de Chile en 1973 fue el cobre, en Brasil en 2016 el pre-sal, en los casos de Bolivia y Perú, son los minerales estratégicos y en concreto el litio, cobre, uranio, zinc entre otros, los que permiten explicar, en cierta medida, el golpe de estado. Perú tiene entre otros minerales oro, plata, zinc, molibdeno y cobre los cuales son extraídos por consorcios mineros como Cerro Verde, Southern Cooper, Antamina y Buenaventura. En cobre, Perú es segundo productor en molibdeno. Perú junto con China, Chile y EE.UU. concentran el 71% de las reservas mundiales (García Fernández, 2023: 14). Los principales destinos de exportaciones de oro son Canadá (27.9%), India (24.1%),

Suiza (22.7%), Emiratos Arabes (12.8%), EE.UU. (10%); de Cobre son China (71.5%), Japón (9.3%), Corea del Sur (6.1%), Brasil (2.1%); de zinc son China (26.7%), Corea del Sur (13.6%), Brasil (12.2%), España (8.3%) y Japón (6.6%) (MEM, 2021).

Las implicaciones geopolíticas de la llegada de un gobierno nacional-popular en Perú quedaron claras cuando Evan Ellis –militar estadounidense asociado al Departamento de Defensa y al U.S. Army War College Strategic Studies Institute– escribió en 2016:

Dentro de la región, el rumbo que Perú siga en estos asuntos políticos y económicos podría llevar al surgimiento de un líder socialista populista allí, similar a lo ocurrido en Venezuela en 1998, con consecuencias significativas para los vecinos de Perú y la estabilidad de la región (Ellis, 2016, p. 191).

Se confirmaron dichas implicaciones cuando la ex embajadora Lisa Kenna mencionó en noviembre de 2022 para el diario *La República* que “es obvio para los inversionistas que Perú tiene tantos recursos que son fundamentales para nuestras prioridades, por ejemplo, los minerales”. Respecto a los proyectos de gas natural peruanos mencionó que eran “para apoyar a Europa y Asia” (García Fernández, 2023, p. 30).

El cuadro se complejiza cuando consideramos que Perú conforma una militarización *low profile* de EE.UU. (Lajtman, 2022). Lo anterior se ilustra con los 1.842 millones de dólares en asistencia militar y de seguridad otorgados por EE.UU. entre 2000-2019; los 15,506 entrenamientos militares y 7,706 entrenamientos registrados en las academias policiales estadounidenses; el uso de 18 bases Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y 12 bases policiales y militares en prácticamente todo el territorio peruano.

Reflexión Final

Tras más de treinta años de neoliberalismo en Perú se configura como un país en el que su características principales son la inestabilidad política, encaminada cada vez más a una crisis orgánica del Estado y con una alta conflictividad social, un modelo económico sustentado en la minería y actividades extractivas y, por lo tanto, altamente contaminante, sin valor agregado ni encadenamiento productivo al interior (más cercana a un enclave), y sobre todo, con tasas de crecimiento económico que no se reflejan en la sociedad, sino todo lo contrario.

El aumento de variables como pobreza, trabajo informal, una mayor explotación laboral, permiten establecer que el Perú, es un caso más en el que la ideología de mercado vuelve a mostrar sus limitaciones teóricas para resolver problemas sociales sino, todo lo contrario, exacerba dos contradicciones fundamentales: capital-trabajo y capital-naturaleza.

El periodo del gobierno de Fujimori estableció las bases del modelo peruano concatenadas en la Constitución que emanó de un golpe de Estado y que, ante la llegada de un gobierno como el de Pedro Castillo, solo con otro golpe, la clase política y los grupos económicos nacionales vinculados a la CONFIEP y apoyados por EEUU, lograron detener el proceso de cambio que pretendió un Perú de “todas las sangres” (Arguedas *dixit*).

BIBLIOGRAFÍA

- Adrianzén, Carlos Alberto (febrero 2020). “¿Quién ganó y quién perdió en las últimas elecciones peruanas? NUSO. <https://nuso.org/articulo/elecciones-Peru-Vizcarra-Fujimori/>
- Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- CELAG (13 de diciembre 2022). Claves para entender el conflicto político en Perú. <https://www.celag.org/claves-para-entender-el-conflicto-politico-en-peru/>
- CEPAL (2023). Distribución del ingreso de las personas por deciles de ingreso, según área geográfica. <http://www.cepal.org>
- _____ (2023a). Deuda externa total como porcentaje del producto interno bruto. <http://www.cepal.org>
- _____ (2023b). Saldo de la deuda pública en porcentajes del PIB. <http://www.cepal.org>
- _____ (2023c). Producto interno bruto (PIB) total anual por habitante a precios constantes en dólares. <http://www.cepal.org>
- _____ (2023d). Distribución del ingreso de las personas por deciles de ingreso, según área geográfica. <http://www.cepal.org>
- Chávez de Paz, Denis. (1989). *Juventud y Terrorismo. Características sociales de los condenados por terrorismo y otros delitos*. Lima: IEP.
- Chomsky, Noam y Herman, Edward. (2000). *Los guardianes de la libertad*. Barcelona: Crítica.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003a). 2.3. La década de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori. En CVR, *Informe Final, Tomo III, Cap. 2, Los actores políticos e institucionales* (pp. 59-159).
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003b). 1.3. Las Fuerzas Armadas. En CVR, *Informe Final, Tomo II, cap. 1, Los actores armados*.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) (2003c). Conclusiones generales. En CVR, *Informe Final*. <https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/CONCLUSIONES%20GENERALES.pdf>

Cotler, Julio (1993). Descomposición política y autoritarismo en el Perú. Documento de Trabajo 51, Instituto de Estudios Peruanos, Serie Sociología y Política 7.

Defensoría del Pueblo, *Informes anuales*, 2006-2021.

Degregori, Carlos Iván (2010). *Qué Difícil es ser dios. El partido comunista del Perú-Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú 1980-1999*. Lima: IEP.

Degregori, Carlos Iván (2010). *El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979 del movimiento por la gratuidad de la enseñanza al inicio de la lucha armada*. Lima: IEP.

Degregori, Carlos Iván, et al. (1996). *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*. IEP.

Durand Guevara, Anahí (2014). *Movimientos sociales y política en el Perú de hoy. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 58, 59-84.

Egwin, Christina (2000). Democracia diferida: un análisis del proceso de reformas en el sector salud. En Felipe Portocarrero, *Políticas sociales en el Perú: nuevos aportes*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.

Ellis, Evan (2016). The Evolving Transnational Crime-Terrorism Nexus in Peru and its Strategic Relevance for the U.S. and the Regio. *PRISM*, 5(4), 189-205.

Fernández Jilberto, Alex (1984). América Latina: reestructuración del capitalismo periférico y militarización del subdesarrollo. En Sofía Méndez, *La crisis internacional y la América Latina*, Fondo de Cultura Económica.

García Fernández, Aníbal (2021). Pedro Castillo, no lo veían porque no lo querían ver. *Nuestra América XXI*, 57 (julio), 9-10. <https://www.clacso.org/boletin-57-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/>

——— (2023). Golpe, crisis y minerales estratégicos en Perú. *Boletín Nuestra América XXI*, 76 (febrero), 11-16. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2023/03/V1_Nuestra-America-XXI_N76.pdf

- _____ (2023a). Golpe y redoble por Perú. *Boletín Nuestra América XXI*, 75 (enero), 26-32.
- INEC (2023). Gasto del gobierno central destinado al sector educación, 1994-2021. INEI. <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/>
- _____ (2023a). Perú: producto bruto interno total y por habitante, 1950-2021. INEI. <https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2018). *Mapa de pobreza Provincial y Distrital*.
- Korsbaek, Leif (2010). Los tipos de rondas campesinas en el Perú: tema con variaciones. *Pacarina del Sur*, 5 (octubre-diciembre).
- Korybko, Andrew (2018). *Guerra híbridas. De las revoluciones de colores a los golpes*. São Paulo: Popular.
- Lajtman, Tamara (2022). La militarización low profile de Estados Unidos en el Perú: “narcoterrorismo” y desastres naturales. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 17 (1), 47-70.
- Lajtman, Tamara, Silvina Romano, Mónica Bruckman y Oscar Ugarteche (comps.) (2021), *Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado*. Buenos Aires, México: CLACSO y UNAM-IIEc.
- Le Goff, Jaques (2016). *¿Realmente es necesario cortar la historia en rebanadas?* México: Fondo de Cultura Económica.
- Lynch, Nicolás (2020). La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020). *CIDOB*, 126, 117-138.
- Madueño Paulette, Ruth. (2004). *Perú: fragilidad institucional del Estado 1930-2002*. México: UAM.
- Manrique Nelson (1990). Violencia e imaginario social en el Perú contemporáneo. En Carlos Iván Degregori, Marfil Francke y José López Ricci, *Tiempos de ira y amor. Nuevos actores para viejos problemas*. Lima: DESCO.

- Marini, Ruy Mauro (16 de diciembre de 1976). ¿Hacia una “democracia viable” en América Latina? *El Sol de México*. <https://marini-escritos.unam.mx/?p=578>
- McClintock Cynthia, Abraham F. Lowenthal (comp.) (1983). *El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980*. Lima: IEP.
- McSherry, J. Patrice (2009). *Los estados depredadores: la operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*. Santiago de Chile: LOM.
- Melgar Bao, Ricardo (1988). Una guerra etnocapesina en el Perú: Sendero Luminoso. En Francisco A. Gomezjara, *Perú: una Luz en el sendero*. México: Fontamara.
- Ministerio de Energías y Minas (MEM) (2021). Balance del sector minero al primer semestre de 2021. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2068281/BEM%2006-2021.pdf.pdf>
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) (2023). Huelgas, trabajadores comprendidos y horas-hombre perdidas en el sector privado, por calificación de la huelga, 1994-2021”. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/slarb-cuad-1_4.xls
- Parodi Trece, Carlos (2007). *Perú 1960-2000: políticas económicas y sociales en entornos cambiantes*. Lima: Universidad del Pacífico.
- Plan Inca. (1968). <https://sites.google.com/site/velasco3101968/autores>
- Robles, Victor y Barbara Ester (3 de diciembre de 2022) Pedro Castillo en los medios. CELAG. <https://www.celag.org/pedro-castillo-en-los-medios/>
- Romano, Silvina y Díaz, Iban (2018). *Antipolítica. Neoliberalismo realismo de izquierda y autonomismo en América latina*. Buenos Aires: Editorial Luxemburg.
- Tapia Valdés, Jorge (1980). *El terrorismo de Estado. La doctrina de seguridad nacional en el Cono Sur*. México: Nueva Editorial Nueva Imagen.

Cincuenta años de soledad. Capitalismo tardío y Neoliberalismo (en armas) en Colombia

José Francisco Puello-Socarrás¹

Carolina Jiménez Martín²

Preliminares

El neoliberalismo definido genéricamente como el proyecto sociopolítico transnacional de clase en el Capitalismo tardío ha sido construido *in vivo* a través de sucesivas generaciones de programas de políticas públicas (económicas y sociales) y oleadas de reformulaciones organizacionales (post-burocráticas) al nivel estatal y societal durante el último cuarto del siglo XX y lo corrido del siglo XXI.

En este marco, el caso colombiano por contraste y por comparación con las tendencias regionales exhibe trayectorias

¹ Profesor de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Investigador del grupo Organizaciones, Gestión y Políticas públicas (REDES-OGP). Integrante del GT de CLACSO Crisis y economía mundial (josepuel@esap.edu.co).

² Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del grupo THESEUS de la misma institución. Integrante del GT de CLACSO Crisis y economía mundial (carolinajimenezm@gmail.com).

específicas, pero sobre todo muestra una impronta singular (ver Puello-Socarrás, 2013a; Puello-Socarras, 2013b, 2015b).

Entre las décadas de 1960 y 1970, en el Capitalismo histórico se produjeron cambios de considerable magnitud e implicaciones globales en diferentes dimensiones.

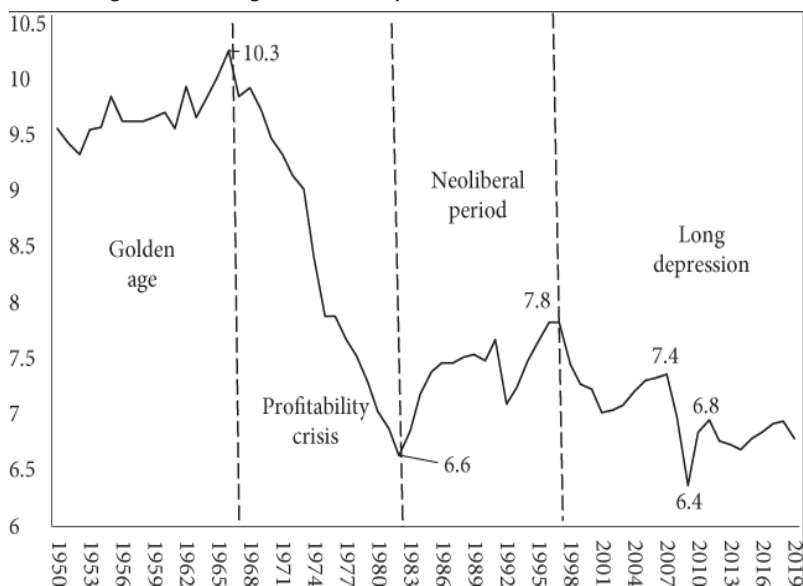
Si bien las dinámicas capitalistas no se transformaron manteniendo sus lógicas históricas estructurantes, los cambios sí reflejaron tránsitos sustanciales que exacerbaban la intensidad y extensión de las contradicciones referidas a los procesos: i) económicos de explotación; ii) políticos de dominación; iii) socioculturales en cuanto a las opresiones (discriminaciones en los clivajes de género, étnicos, étnicos, etc.); y iv) ideológicos de alienación. Todos ellos hoy pueden fácilmente validarse en su conjunto y resultan progresivamente verificados cualitativa y cuantitativamente³.

Al nivel mundial, la consolidación de la integración capitalista (de carácter imperialista *trans*-nacional) a partir de la década de 1970 fue antecedida por el agotamiento del *patrón* de acumulación en ese momento vigente. Ante la fulminante caída global de la tasa de ganancia, el sistema capitalista reacciona a través de reconfiguraciones internas con el propósito de superar esta nueva crisis y con la expectativa de relanzar una vez más la valorización del capital (ver figura 1).

El viraje que atestigua esta época de cambios y que va a implicar un cambio de época para la economía política mundial tuvo efectos fundamentales dentro de la periferia latinoamericana. En específico, la morfología emergente fue sintetizada –entre otros– por Ruy

³ Registros de todo tipo y provenientes desde diversas fuentes y lugares de enunciación que actualizan y caracterizan la evolución del capitalismo neoliberal durante el siglo XXI, al momento son indiscutibles. Incluso cuando se aproxima exclusivamente evidencia empírica de orden estadístico. Los Informes OXFAM son un ejemplo paradigmático que estarían por fuera de toda sospecha de mantener o reproducir sesgos suspicaces o sustentos críticos (de fondo), pues se trata de una publicación que se difunde cada año en el Foro Económico Mundial (FEM) más conocido como Foro Davos, una plataforma transnacional hegemónica (Friesen, 2020).

Figura 1. Tasa de ganancia del Capitalismo central (G20) (1950-2019)



Fuente: Carchedi & Roberts (2023, p. 131).

Mauro Marini alrededor de una categoría hoy plenamente vigente y que refiere a los Regímenes Tecnocrático Militares (RTM):

[...] La reorganización de los sistemas de producción latinoamericanos, en los marcos de la integración imperialista y ante el recrudecimiento de las luchas de clase en la región, llevó a la implementación de regímenes militares de corte esencialmente tecnocrático. La tarea de tales regímenes es doble: por un lado, promover los ajustes estructurales necesarios para poner en marcha un nuevo orden económico requerido por la integración imperialista; por otro lado, reprimir las aspiraciones de progreso material y los movimientos de reformulación política originados por la acción de las masas. (Marini, 1969, p. 65)

En esta reformulación de la dominación política (aún más) autoritaria de los regímenes estatales, la exacerbación de la violencia institucional (abierta) cumplió un rol determinante en la transición económico-política hacia (y durante) la fase neoliberal⁴.

Se iniciaría entonces un periodo novedoso, aunque no del todo inédito donde las necesidades de la integración mundial (transnacionalización), sus expresiones regionales y aún locales no sólo coinciden, sino que también convergen con un lapso en el cual las dinámicas, los antagonismos y en particular las contradicciones de la sociedad capitalista históricamente considerada se exasperan extralimitándose. Así, la profundización de los grados de (sobre)explotación económica del trabajo humano y de la naturaleza; y, en simultáneo, los procesos concomitantes que la acompañan: la extensión e intensificación de las opresiones culturales (discriminaciones funcionales en género, étnicas, etarias, etc.) y la profundización de los niveles en la alienación ideológica han revelado registros nunca vistos⁵.

Entonces no resulta ser una casualidad, sino que por el contrario se trata de una causalidad (en el sentido robusto de la palabra) que la crisis capitalista a lo largo del último cuarto del siglo XX y parte del nuevo milenio tenga como “respuesta” sistémica y retrocausal al neoliberalismo, una contrarrevolución construida paulatinamente a través de contrarreformas parte de la contraofensiva del Capital⁶.

⁴ A partir de los conceptos de Workfare state (Jessop, 2018) y Prisonfare state (Wacquant, 2009) hemos sintetizado una caracterización sobre el Estado neoliberal como un Estado Punitivo y Emprendedor de Trabajo (EPET) para destacar los ejes claves de este régimen estatal. (Puello-Socarras, 2022 y 2021)

⁵ Dos datos del último Informe Oxfam (2023, p. 7) son ilustrativos: “[...] Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante [...] La fortuna de los millonarios aumentó en 2700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de al menos 1700 millones de trabajadoras y trabajadores, más que la población de India, crecen por debajo de lo que sube la inflación”.

⁶ Utilizamos el término *retrocausal* en el sentido de Marx (Libro I, Tomo III, C. XXIII, 1976, p. 97): “*Los efectos se convierten a su vez en causas*”, pues el neoliberalismo es simul-

En los umbrales del siglo XXI, los “productos” consolidados en las medidas públicas, los resultados en términos sociales, aunque especialmente las implicaciones de esta nueva forma y formulación de la economía política contemporánea vienen siendo condensados alrededor de una Crisis capitalista definida como civilizacional y progresivamente crónica (Puello-Socarrás, 2021).

En el doble giro neoliberal hacia el autoritarismo en lo político y la sobreexplotación en lo socioeconómico en América Latina y el Caribe, el trasfondo de los Regímenes Tecnocrático Militares antes reseñados debe contemplar, sin embargo, dos situaciones históricas concretas que son claves para analizar el caso colombiano.

En primer lugar, la emergencia de gobiernos autoritarios típicos alrededor de las dictaduras cívico-militares-eclesiales. Los casos de los golpes de Estado perpetrados en los países del Cono Sur del subcontinente principalmente aquellos articulados al marco del Plan Cóndor y paradigmáticamente aquel contra Salvador Allende en el año 1973 son antecedentes reveladores sobre los rasgos de esta coyuntura.

En segundo lugar, la presencia de variantes igualmente autoritarias bajo el formato de anocracias, es decir, regímenes sociopolíticos que exhibían un tipo de autocracia abigarrada (sin la necesidad de ser activadas por interrupciones institucionales vía *coup d'état*), pues sin ser formalmente dictaduras tampoco eran democracias incluso en un sentido limitado (Jiménez Martín et.al., 2018, y Puello-Socarrás y Puello-Socarrás, 2016).

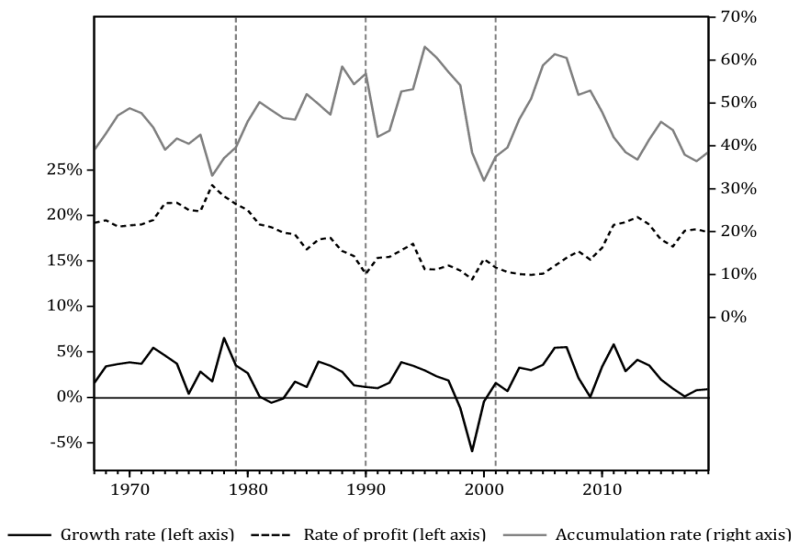
El caso colombiano resulta ser un tipo paradigmático dentro de las *anocracias*, pues incorpora una modalidad sociopolítica y económica donde las dialécticas del conflicto social y las violencias armadas, especialmente aquellas estatales de carácter militar y paramilitar son factores determinantes para la construcción del capitalismo criollo en su fase neoliberal (Puello-Socarrás, 2013a, 2013b). Esta

táneamente una respuesta (contraofensiva) a la crisis capitalista y la (nueva) causa para la profundización crónica de su crisis.

singularidad subyacente en ambas trayectorias ha provocado una vía específica que podría ser conceptualizada como *neoliberalismo en armas* (Vega Cantor, 2010).

Lo anterior, desde luego, no pretende suspender la relación estructural entre Capitalismo y Violencia ya expuesta por Marx en *La llamada acumulación originaria*. Mucho menos intenta eximir el contenido consustancial de la coerción –paulatinamente desenfrenada– en la relación Capital-Trabajo que inaugura un nuevo ciclo con la ofensiva neoliberal tal y como ha sido registrada por la historia reciente durante las dictaduras de última generación.

Figura 2. Tasa de ganancia del Capitalismo periférico en Colombia



Source: Author's estimations on the basis of annual data obtained from Colombian official statistics (DANE 2020).

Fuente: Duque (2021, p. 12).

Nuestra (hipó)tesis expone el caso colombiano acudiendo a una caracterización sintética de sus trayectorias e hitos económico-políticos. Pero, además, atiende a la noción de *neoliberalismo en armas* como una manera de destacar –por contraste con la evolución de

otros casos latinoamericanos— la impronta (para)militarista de este régimen económico político.

Preliminar y esquemáticamente, identificamos y describimos los factores funcionales claves funcionales a las dinámicas de la violencia sabiendo que, parafraseando a Marx (1976, p. 199), *toda* la “evolución” del Capital como modo de (re)producción social “se ha escrito en los anales de la historia con letras de sangre y fuego”.

Así, organizamos esta reflexión en torno a cinco apartados. Los *Preliminares* sitúan los elementos generales de la crisis capitalista mundial y los condicionamientos de las violencias en la (re)producción del capitalismo en Nuestra América. Las *Trayectorias institucionales en la configuración del estado neoliberal* expone tres momentos institucionales (alistamiento, transición y profundización) dentro de la ingeniería estatal del neoliberalismo en Colombia. Un tercer apartado: *Neoliberalismo en armas. Convergencias y desenlaces* explica la convergencia entre las expresiones neoliberales del régimen “legal” y la profundización de los principales rasgos “ilegales-para-militares” durante el último período. A continuación, *Radiografías: (sobre) Explotación y (ultra) precarización del mundo del trabajo bajo el nuevo patrón dependiente* ejemplifica selectivamente los impactos socioeconómicos derivados de la consolidación del Estado oligárquico-neoliberal para la clase trabajadora. Finalmente, *Desafíos y nuevos horizontes políticos* propone el posible significado del Acuerdo Final de Paz y el triunfo del gobierno de Gustavo Petro para abrir un escenario de reformas y transiciones en Colombia.

Trayectorias institucionales en la configuración del Estado neoliberal

Una aproximación a la trayectoria histórica del desarrollo del neoliberalismo en Colombia permite identificar etapas de contrarreformas institucionales estrechamente vinculadas con el manejo de la política económica que figuran como puntos de inflexión para analizar este proceso, a saber:

1. El alistamiento institucional establecido en las contrarreformas constitucionales de alcances económico, político y organizacional durante el periodo 1966-1974.
2. La transición sorteada entre las décadas de 1970 y 1980 donde se definen medidas para impulsar las libertades del Capital, especialmente con la liberación del sistema financiero y el mercado de bienes y que son el antecedente próximo de la constitucionalización del modelo neoliberal con la promulgación de la Constitución Política de 1991.
3. La profundización del neoliberalismo colombiano en su fase propiamente transnacional desde mediados de la década de 1990 y que trasciende en el nuevo milenio, tiempo que actualizaría no sólo la construcción de una economía de mercado, sino la constitución de una Sociedad de mercado post-constitucional⁷.

La vía neoliberal hacia la modernización capitalista en Colombia (1966-1974)

Si bien diversas interpretaciones históricas y teóricas tienden a ubicar el inicio del proyecto neoliberal en el marco de la crisis capitalista mundial de la década de los 70, una perspectiva desde la geopolítica y la geoeconomía mundial situaría el inicio de este proceso en

⁷ Estas etapas guardan algunas coincidencias con las propuestas por Jairo Estrada para analizar la configuración histórica de la elite intelectual de la producción política en Colombia, estas son: i. Constitución y apuntalamiento (1966-1984) período en el que se presentan manifestaciones iniciales de crisis del régimen de acumulación basado en el mercado interno; ii. Estabilización y consolidación (1985-1990) período de agudización de la crisis, crisis financiera internacional y la imposición transnacional de medidas de estabilización macroeconómica; iii. Expansión y profundización (1990-2...) período de diseño e implantación de las llamadas reformas estructurales (Estrada, 2005:267-268).

un primer alistamiento en el tiempo inmediato de postguerras con la reconfiguración del orden político internacional que se deriva de ella y que posiciona a los EE.UU. como la nueva hegemonía mundial⁸.

Si se tiene en cuenta que el subsuelo económico y político en el alistamiento hacia el neoliberalismo en Colombia es un tipo autoritario en la forma anocrática especialmente desde finales de la década de 1950 es posible invocar la conexión entre dos momentos históricos de la *modernización* que resultan ser determinantes dentro de las trayectorias de este caso a través de hitos.

Un primer hito lo constituyen las contrarreformas constitucionales, económicas y especialmente político-administrativas iniciadas por el gobierno de A. Lleras Camargo (1966-1970).

Este ciclo de “reformas” generalmente han sido interpretadas con simpleza como una tentativa del establecimiento partidista y de la clase dirigente para estabilizar el régimen social en lo político y darle así un nuevo impulso a la economía bajo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, estas versiones omiten que, por ejemplo, la reforma constitucional pretendida como exclusivamente “administrativa” significó una reorganización estatal de fondo (aunque bajo una impronta propia) (Estrada, 2005 y 2006). Lejos de desentonar con las transformaciones globales que antes fueron comentadas provocarían un golpe de timón que incluso hoy es valorado como un “legado” perdurable en el tiempo y un

⁸ “Numerosos analistas consideran que la cumbre de Bretton Woods marca el inicio de la era global, pues existen múltiples elementos o microtendencias que así lo sugieren, como el auge de los bancos transnacionales y la creación de varios sistemas multilaterales para las operaciones económicas, entre ellos el FMI y el Banco Mundial, que aún hoy desempeñan un papel central en la economía global. Asimismo, ciertas exigencias fundamentales de los Estados Unidos en la configuración del sistema de Bretton Woods pueden equipararse con las políticas neoliberales de las décadas de 1980 y 1990 (...). Sin embargo, la implementación de esas condiciones y, sobre todo, el proyecto más amplio en el que se inscriben difieren bastante del FMI actual” (Sassen, 2010:221).

punto de referencia desencadenante dentro de la economía política colombiana (Perry, 2019, pp. 26-56)⁹.

Por ello, antes que consolidar el denominado modelo desarrollista de la ISI, las contrarreformas institucionales de esta época inspiraron paulatina, pero progresivamente una transición *ex profeso* para activar su desvanecimiento.

El giro neoliberal en la idea de Desarrollo (Puello-Socarrás, 2015) convocó entonces nuevos *referenciales* en políticas posicionando la estabilización (macro)económica y el sesgo pro-exportador orientado *por y hacia* el mercado (internacional); así como el impulso al mercado financiero de capitales, la descentralización fiscal y una nueva preferencia por la liberación comercial, entre otros¹⁰.

Otro de los factores cruciales para enrumbar el sendero neoliberal ideológicamente hablando fue reforzado a partir de la revitalización organizacional de las burocracias de corte tecnocrático “normalizadoras” de la economía al nivel público estatal, entre otros, con la creación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y desde el sector privado con la emergencia del influyente *think tank* neoliberal: la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) en 1970 (Ávila, 2012).

⁹ “La reforma constitucional propuesta da efectividad al sistema de planeación y consagra el principio esencial de que no puede decretarse ningún gasto que no tenga respaldo en un recurso para satisfacerlo. Se ha reformado casi totalmente el capítulo de la Constitución relacionado con la Hacienda pública, para hacer verdaderamente del presupuesto el eje central de la política del gobierno, calidad de la que hoy carece (...) se trata de adaptar los organismos públicos a una concepción del Estado moderno, para un país en vía de desarrollo que necesita aplicar sus recursos con óptima utilidad social y económica... Ese desarrollo demanda planeación seria, y la planeación no puede organizarse y funcionar sin una revisión de las competencias recíprocas del Ejecutivo y el Congreso [...]. la política económico-social que el país necesita exige tres condiciones: unidad, persistencia, celeridad. No es posible sino bajo una dirección no sujeta al forcejeo de aspiraciones personalistas extrañas a la esencia de los programas del gobierno” (Lleras Restrepo, 1969, en Pérez, 1988).

¹⁰ Es el caso del Grupo Andino, luego la Comunidad Andina la cual estuvo inspirada en la idea de Libre Comercio entre naciones andinas.

Debe señalarse que el arribo de la tecnocracia neoliberal estuvo acompañado orgánicamente por un apoyo técnico singular desde las instituciones internacionales, especialmente estadounidenses¹¹.

Esta convergencia fue clave para la posterior consolidación del equivalente a los *Chicago Boys* de la experiencia neoliberal chilena: los Boy Scouts del neoliberalismo criollo y su influencia en las definiciones especialmente en el campo de la política económica desde finales de la década de 1970 y a lo largo de 1980 especialmente (Estrada, 1984)¹².

Durante este proceso político y constitucional se marca un punto de inflexión en la etapa de alistamiento y acople de las nacientes transformaciones del capitalismo mundial. En Colombia, desencadenaría la modernización estratégica del Estado para la “estabilización de la estructura corporativa (Andi, Fenalco, Sociedad Colombiana de Agricultores, Asociación de banqueros y aseguradores, etc) [...] y la liberalización de la política económica frente a los consorcios norteamericanos” (García, 1971, p. 298) quienes había aumentado

¹¹ Principalmente, la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID, hoy extinta) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Debe subrayarse que “(...) la ideología neoliberal alcanzó su mayor raigambre durante los años setenta, cuando estudiantes colombianos de las Universidades de Chicago, MIT, Rice, Stanford y California encontraron acogida en la fundación privada Fedesarrollo, la Universidad de los Andes, la Asociación Bancaria, el Banco de la República [...]. Muchos de los cuales de estos cuadros ingresaron a las administraciones de López Michelsen y Turbay Ayala y en los gremios interesados para orientar el nuevo curso de la política económica” (Kalmánovitz citado por Estrada, 2005, p. 270).

¹² La expresión *Boys Scouts* es traída a partir de una autopercepción de Guillermo Perry (2019, p. 53) sobre los equipos de la época. Aquí la evocamos para señalar la conformación de una élite intelectual neoliberal criolla análoga al proceso chileno de los *Chicago Boys*. Esta tecnocracia tuvo dos expresiones neoliberales: un ala ortodoxa proclive a la desregulación y un ala heterodoxa de preferencia reguladora (no confundir con intervención estatal) que siendo complementarias diferían en la manera y los ritmos de la construcción neoliberal. En la práctica posconstitucional, la continuidad entre los neoliberales ortodoxos y heterodoxos se valida con los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y sus políticas de choque y el de Ernesto Samper (1994-1998) y las políticas de estabilización (macroeconómicas y macrosociales). En esta última administración, G. Perry fungió como ministro de Hacienda.

notoriamente su participación en la economía nacional entre 1945 y 1967¹³.

En estos desarrollos el sistema de hegemonía compartida entre “los patriciados, las oligarquías y las clientelas de los dos partidos”, lo que André Gunder Frank (1973) denominaría por la misma época *lumpen-oligarquías* latinoamericanas, por una parte, pretendieron neutralizar las contradicciones al interior del bloque en el poder y, por la otra, intentaron “contener” las salidas revolucionarias en ese momento en ebullición.

De ahí que, la caracterización de la trayectoria histórica del neoliberalismo en Colombia requiera involucrar tanto los cambios en los ejes dinamizadores del patrón de reproducción del capital como los movimientos de cierre y apertura del régimen sociopolítico.

La Transición: libertad para el Capital, liberación de mercado de capitales y el enroque del régimen mafioso (1974-1986)

La crisis de los 70 y las medidas que se determinaron para su gestión tuvieron un impacto significativo en el derrotero de las economías domésticas. La adopción de un sistema de tasas de cambio flexibles, la configuración del dólar como moneda universal, el incremento de los precios del petróleo, la estanflación, el aumento del desempleo, el posterior incremento de las tasas de interés, los cambios de política macroeconómica de los EEUU en 1979, entre otros asuntos, van a incidir en las decisiones de política económica adoptadas por los

¹³ “Ni siquiera la burguesía industrial -reclutada en los estratos más privilegiados y audaces de las clases dominantes- puede definirse como una élite económica de empresarios, sino como un estamento de grandes rentistas y propietarios de acciones industriales. Esta caracterización explica su radical incapacidad para conducir el proceso de industrialización en sus fases superior y su servil inclinación a asociarse a la inversión extranjera y aceptar los patrones coloniales de dependencia.” (García, 1971, p. 230)

gobiernos colombianos de período. Al respecto, Berry y Thoumi han señalado,

El periodo 1970-1984 trajo grandes transformaciones para la economía colombiana. A nivel agregado, la economía creció a un ritmo más bien rápido hasta 1980, cuando el país comenzó a resentir la recesión mundial. El proceso de urbanización continuó a paso firme aunque moderado [...] Simultáneamente se incrementó la participación del sector moderno de servicios en el Producto Interno Bruto, a expensas de la agricultura, en particular. La economía subterránea se consolidó muy rápidamente, mientras que la producción de drogas ilegales se convirtió en una actividad muy importante en el país. El sector externo jugó un papel clave en el desarrollo colombiano [...] (Berry y Thoumi, 1986, pp. 119-120).

Entre otros, deben destacarse dos elementos. Por un lado, la liberación de mercado de capitales a través de los cuales se amplió el campo de acción y de intermediación del sector financiero y que tiene entre sus haberes la adopción del UPAC y la legalización de los intermediarios financieros (Ocampo, et al., 1987); y, por otro lado, la creación de un mercado de crédito extrabancario vía divisas provenientes del negocio del narcotráfico.

El cierre de este período se caracteriza por el acuerdo alcanzado en 1984 entre el gobierno de Belisario Betancur y el Fondo Monetario Internacional y el programa macroeconómico ortodoxo que suponía la reversión definitiva de las medidas “proteccionistas”, la liberalización de los mercados de bienes, disminución de los subsidios a las exportaciones y una vigilancia del Banco Mundial en el diseño de las políticas sectoriales (López, 1995, p. 17).

La década de 1980 marcaría entonces los cimientos para la consolidación de un patrón de reproducción capitalista dependiente primario-exportador y el proceso parcial de desmonte de la (in) capacidad industrial del país; el incremento de la financiarización,

desnacionalización y trasnacionalización de la economía nacional; y al entronque de los recursos provenientes del narcotráfico con campos formales del aparato económico doméstico. El comportamiento del PIB y la deuda externa en este periodo son dos ejes ilustrativos de estas tendencias.

Lo anterior permite explicar también las recomposiciones en el bloque de poder definidas, entre otras cosas, por la configuración de una fracción mafiosa y su permeación en otras fracciones de la clase dominante; así como por importantes procesos de criminalización de la protesta social que tuvieron en figuras como el Estatuto de Seguridad Nacional y la gestación contemporánea del proyecto paramilitar su punto culminante.

Este ciclo se clausura con otro hito en la construcción neoliberal de mediados del gobierno de V. Barco con el *Plan de modernización* y la estructuración de distintos programas de ajuste estructural diseñados *in vitro* durante esta administración con la sugerente vigilancia de los organismos multilaterales, especialmente el FMI y que más adelante serían implementados *in vivo* como parte del nuevo modelo de desarrollo económico que sería plasmado en la llamada Constitución Económica en el año 1991¹⁴.

¹⁴ El diagnóstico pre-constitucional respecto al tipo de consolidación y la tendencia para la economía colombiana entre las décadas de 1960 y 1980 no dejaría dudas sobre el carácter paulatinamente neoliberal (incluso bajo un sesgo monetarista) tal y como en su momento lo propuso Sarmiento Palacios (1990, p. 9): “En los últimos años se advierte un gran esfuerzo para orientar el desarrollo económico dentro de los fundamentos de la teoría neoclásica. Por una parte, se supone que la producción es liderada por el mercado y que el sistema de precios conduce a una mejor asignación de recursos. Por otra parte, se considera que los desbalances del sistema económico puede corregirse mediante políticas generales. Dentro de este contexto, la intervención del Estado en las economías se reduce a los agregados monetarios y al tipo de cambio dentro de prescripciones que supuestamente son aplicables en todas partes”.

La consolidación del patrón de reproducción dependiente, mafioso y exportador: la Carta política del 91

La Constitución de 1991 se constituye en el punto de inflexión que va generar el soporte institucional para la consolidación del neoliberalismo como el proyecto de organización política, económica y cultural de la sociedad colombiana de cara al siglo XXI y al nuevo orden global.

En los asuntos concernientes a la orientación neoliberal de la política económica se destaca la doctrina consagrada en el título XII “Régimen económico y de hacienda pública” referida a libertad y racionalización económica, limitación de la intervención del estado y la anhelada estabilidad macroeconómica (Jiménez, 2008). Al decir de Kalmanovitz (2022), existió un consenso gubernamental de reducir el grado de protección de la economía y prepararla para una economía abierta insertada al nuevo orden global. Esta disposición explicaría luego los procesos ortodoxos neoliberales en el último cuarto del siglo XX fijados en la privatización, desregulación, flexibilización y control de la inflación así como la etapa heterodoxa del neoliberalismo en el nuevo siglo signada por los Tratados de Libre Comercio, la introducción de lógicas de emprendimiento (anti-laborales, anti-sindicales) y marcos de regulación estatal que son caros al neoliberalismo (ver Puello-Socarras, 2015).

Tenemos entonces una serie de desarrollos institucionales que soportarán la consolidación del nuevo patrón de acumulación dependiente exportador¹⁵. Y si bien, la Carta del 1991 no sienta los cimientos para el despliegue de un capitalismo mafioso; la deuda pendiente o las promesas incumplidas, referidas a impulsar un proceso de justicia social, democratización y consolidación de la paz, han

¹⁵ Vale la pena anotar que este modelo “se introdujo a espaldas del país y que, según Rudolf Hommes [Nota: Ministro de Economía de la época], se impuso aprovechando el ‘efecto distracción’ de la Constitución de 1991, permitiéndole al Gobierno de César Gaviria tramitar por el Capitolio ‘las principales reformas legislativas del proceso de apertura [económica]’” (Hommes citado por Fernández, 2009).

alimentado las condiciones para que las fracciones criminales capturen campos importantes de la institucionalidad estatal y de la vida social y la guerra se configure como un dispositivo organizador del proceso económico en su conjunto.

Posterior a la promulgación de la Carta Política del 91 se despliegan una serie de desarrollos normativos que serán los dispositivos jurídicos para la implementación del modelo. De manera especial se destacan los siguientes actos legislativos (AL): eliminación de la expropiación sin indemnización (AL 01 de 1999); sistema general de participaciones (AL 01 de 2001); sostenibilidad financiera del sistema pensional (AL 01 de 2005); la sostenibilidad fiscal (AL 3 de 2011). Estas reformas constitucionales se desarrollan, en algunos casos, posteriormente a la firma de los acuerdos extendidos con el Fondo Monetario Internacional (1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2016, 2018, 2020, 2022).

Las transformaciones operadas configuran un patrón de acumulación en el cual la agricultura y la industria pierden la otrora capacidad dinamizadora de la economía nacional, dando paso al incremento en los sectores minero y energético, soportado en la inversión extranjera, y de servicios, especialmente financieros. Aunado a estos campos, es necesario destacar el peso que cobra la economía del narcotráfico.

De esta manera, la orientación rentista, extractivista y especulativa serán los ejes cruciales del proceso.

Ahora bien, en este proceso se afianzan dos grandes fracciones del bloque en el poder, por una parte, la representante de la fracción terrateniente, con una vocación soportada en la renta de la tierra y la explotación laboral, con una preocupación menor por impulsar desarrollo productivista de su actividad económica; y, por la otra, aquella con orientación más liberal situada en la sinergia entre ciertos renglones industriales, de servicios y con amplia participación en el sector financiero. Las dos, pero especialmente la segunda, con importantes vínculos con el capital trasnacional. En cada una de estas

fracciones se advierte participación de fuerzas vinculadas con el despliegue de las economías criminales.

Las coincidencias y los desacuerdos entre estas dos fracciones del bloque en el poder se pudieron leer con claridad en sus posiciones frente al tratamiento del conflicto y la paz,

Las controversias entre las fuerzas dominantes en torno al tratamiento de la paz no suponían entonces la renuncia a la productividad reportada por la lógica político-militar. Mucho menos una apertura para la transformación del régimen de acumulación vigente. Expresan las diferencias políticas e ideológicas sobre la forma de suspender las contradicciones y, a su vez, estabilizar el sistema hegemónico. Para algunos sectores, la firma del acuerdo de paz y la búsqueda de una solución política al conflicto armado permite construir unas bases más estables para el sostenimiento del proyecto hegemónico neoliberal (...) Para otros sectores, la guerra se constituye en el dispositivo privilegiado para la contención y la desactivación de la insurgencia y resistencia populares y, en consecuencia, la guardiana del orden social vigente. De ahí que su posición ideológica se respalde en la negación de la existencia del conflicto social armado y valorar la resistencia como una amenaza terrorista (Jiménez y Puello-Socarrás, 2020, pp. 40-41).

De esta manera, durante la última década del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI se estabiliza el neoliberalismo en el país, pese a acentos diferenciados que en un momento dado pudieron hacer los gobiernos de turno.

Neoliberalismo en armas. Convergencias y desenlaces

Si se analizan las fases del proyecto paramilitar *vis-a-vis* las oleadas de las reformas neoliberales en Colombia resulta factible exponer una convergencia especial entre las expresiones neoliberales del régimen “legal” y la profundización de los principales rasgos “ilegales” durante el último período en el nuevo milenio.

Esta inferencia tiene una mayor correspondencia cuando se aproximan los desenvolvimientos más sintomáticos de los gobiernos colombianos durante el siglo XXI donde ambos procesos: el neoliberalismo “legal” (constitucionalizado) y paramilitarismo “ilegal” (paulatinamente institucionalizado), si bien mantienen una relación implícita y relativamente figurada, desde este momento entran a confluir virtuosamente.

Así, el proceso económico político *neoliberal-para-militar* en este periodo muestra su máxima expresión en tanto *neoliberalismo en armas*.

A pesar que las manifestaciones de la violencia paramilitar en el régimen neoliberal son variadas, en nuestro concepto y en consonancia con lo que hemos desarrollado hasta aquí, las principales tendencias podrían ser sintetizadas en torno a tres grandes tipos: a) anti-sindicalismo (como forma de reconfigurar la relación capital-trabajo a favor del primero); b) Depredación y desposesión (como forma de valorización del territorio, expropiación vía desplazamiento forzado y concentración violenta de los medios de producción); y c) la avanzada para-institucional (en lo que se denomina la configuración del Estado bajo una lógica mafiosa)¹⁶.

Habría que señalar que los orígenes del paramilitarismo proponen un denominador común a este fenómeno en Colombia, pues sus

¹⁶ La estrategia ha favorecido “la flexibilización y desregulación violenta del mundo del trabajo, del exterminio de dirigentes políticos y sindicales, del desplazamiento forzado de cerca de tres millones de colombianos, que engrosan las filas de la itnformalidad y contribuyen a la depresión de los salarios urbanos” (Estrada, 2008).

inicios en la mitad de la década de los 80s y hasta entrado el siglo XXI son las *alianzas* y *pactos* establecidos entre a) grupos de mafias dedicadas al narcotráfico, b) fracciones regionales y nacionales de la oligarquía colombiana (políticos, empresarios y latifundistas) y c) varios sectores del Estado colombiano, entre ellos, autoridades nacionales y locales y, sobre todo, de la Fuerza pública; a lo anterior es preciso vincular además: d) organismos oficiales de gobiernos extranjeros, en este caso específicamente, de los Estados Unidos como la Central de Inteligencia América (CIA) y la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) (Arenas, 2003). Todos estos actores perduran sistemáticamente como los referentes claves de los variados apoyos políticos, financieros y económicos, sociales y militares que sostienen, coordinan y dinamizan –bajo diferentes grados de consistencia y de autonomía relativa– los ciclos de la violencia paramilitar en Colombia.

Aunque el paramilitarismo colombiano se autoproclamaba como un “movimiento político-militar” y básicamente una “fuerza antisubversiva” también perfilaron una agenda de “demandas” entre las cuales se destacaban: la necesidad de “reforma política y democrática”, un “modelo de desarrollo económico”, “reforma agraria”, “reforma urbana”, “política de energía e hidrocarburos”; “descentralización” y “orden territorial”, entre otras que permiten insinuar algunos de los objetivos que pretendían alcanzar como grupo parainstitucional (AUC). Promovieron entonces un *programa* táctico y estratégico que combinaría aspectos militares y económicos, sociales y políticos con el fin de “avanzar” en sus tentativas (Sarmiento, 2002).

El programa paramilitar de última generación constaría de tres fases:

- Una fase inicial en la cual, mediante la guerra se “liberarían” amplias zonas de la subversión (y de sus bases populares), *imponiendo el proceso de concentración de la tierra*, la modernización vial, de servicios e infraestructura; *el desarrollo del capitalismo*

ganadero y una nueva estructura jerárquica autoritaria en la organización social y política en las regiones.

- La segunda fase tendría como meta “llevar riqueza a la región” y sería articulada a través de la entrega subsidiada de tierras, la “generación de empleo”, la concentración de la población en centros poblados, la construcción de centros de salud y escuelas, energía eléctrica gratuita, construcción de represas para el suministro de agua, adecuación de tierras, la asistencia técnica y el préstamo de dinero para la producción. Se requeriría que estas acciones tuvieran *el conocimiento y la legalización de instituciones del Gobierno*. Los “nuevos pobladores” no serían aquellos desplazados por la violencia sino una *nueva población* (pobres marginados de “otras regiones”) que brindaría el apoyo a los “patrones” ya asentados, estos últimos a cargo de organizar y conformar los “grupos de base” (paramilitares) en función de distintas actividades planificadas, incluso, más allá del componente “militar”. Esta fase se lograría obtener la legitimidad social del proyecto¹⁷.
- Finalmente, una vez consolidado el *modelo de seguridad en las “regiones liberadas”* sin subversivos ni bases comunitarias de apoyo a la guerrilla, la tercera fase proyectaba que los paramilitares dejarían de ser *formalmente* una “rueda suelta para el Estado”. Se completaría así la *institucionalización* del proyecto paramilitar y, desde luego, su legitimación y legalización política en general.

¹⁷ Recientemente, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron \$1.800 millones para la construcción del sistema de electrificación del municipio de Puerto Gaitán (Departamento del Meta, oriente colombiano), con lo cual pretendían según un exjefe paramilitar: “beneficiar a la comunidad” a través de la empresa “Perlas del Manacacías” que fue creada por un acuerdo municipal y con el aval de la Superintendencia de Servicios Públicos (El Tiempo, 28 de febrero de 2007).

Si fuera posible ofrecer una periodización de cada una de estas fases en términos de la historia efectiva del paramilitarismo, tal y como se habrían desarrollado los elementos básicos que fueron previstos por estos grupos, es decir, la trayectoria efectiva detrás del programa antes esbozado y en ese momento en curso, la primera fase abarcaría desde mediados de la década de los 80s y hasta principios de los 90s; la segunda fase se desarrollaría en lo restante de la década del 90s y hasta finales del siglo XX; y la tercera, definitivamente, coincidiría con la primera década de este siglo y en adelante.

En cierto sentido, es fácil percatarse que esta periodización tentativa converge relativamente con la caracterización de las etapas que hemos señalado en torno a la profundización sucesiva del neoliberalismo en Colombia.

A causa del carácter “clandestino” del paramilitarismo en sus primeras etapas, la convergencia entre el proyecto planteado y su trayectoria efectiva podría resultar contingente y, en algún sentido, aventurada. Sin embargo, a medida que evoluciona su “legalización/institucionalización” llama poderosamente la atención que los aspectos básicos “a desarrollar” –según las declaraciones descritas– y en cada una de las fases se “cumplieron”. En especial, en lo que se refiere a la segunda y tercera fases, existen abundantes evidencias que indican una sintonía muy distintiva entre las necesidades del neoliberalismo y las condiciones generadas por el paramilitarismo.

Las principales definiciones “legales” de las reformas políticas y económicas que hacen parte de las agendas gubernamentales en el último período del neoliberalismo durante la primera década de este siglo resultan suspicaces frente al ambiente de la expansión “ilegal” del fenómeno paramilitar y sus alcances.

Estos acontecimientos deben interpretarse menos como iniciativas personales de los grupos singulares al margen de la ley que en términos de la “personificación de categorías económicas como representantes de determinados intereses y relaciones de clase” y su alineamiento con las lógicas de acumulación capitalistas hoy por hoy en transformación (ver Estrada, 2008).

Además de las nuevas condiciones de deslaboralización, flexibilización laboral, empleo atípico y precario, desprotección e inseguridad sociales en el tránsito hacia la destitución del *Derecho del Trabajo* característico del período neoliberal y que, por supuesto, implicaron evidentes retrocesos sociales de incalculable magnitud durante la faceta “legal” de las reformas –vía jurídica e institucional–, la violencia paramilitar parece haber complementado este escenario con la persecución para-institucional del sindicalismo en lo que denominamos un tipo de desindicalización de carácter *indirecto*¹⁸.

El balance en este sentido claramente apunta a la voluntad de desestructuración de las clases trabajadoras –empezando por las sindicalizadas– y la reconfiguración de las relaciones capital-trabajo a favor del Capital y en sintonía con los objetivos neoliberales “legales”, pero también mediante el ejercicio de la violencia “ilegal” no legítima ejercida sistemáticamente por los grupos paramilitares con la connivencia, acción u omisión de sectores del Estado colombiano.

Otro de los síntomas que expresan fielmente la conjunción neoliberal-para-militar en Colombia lo constituye la expropiación violenta de los medios de producción. Aquí la concentración legal e ilegal de las tierras sería el elemento más distintivo.

Desde principios de la década de los 90s, la *cuestión agraria* en Colombia se ha caracterizado, de una parte, por la ampliación y profundización de las lógicas mercantiles globales, principalmente en

¹⁸ La violencia antisindical en Colombia durante las últimas dos décadas muestra cifras alarmantes: más de 9 mil casos de violaciones a la vida, la libertad y la integridad personal de los sindicalistas entre las que se destacan: allanamientos ilegales, amenazas personales, atentados, desapariciones y desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, hostigamientos, homicidios, secuestros y torturas, entre otras. Las tendencias recientes en contra de los sindicalizados en Colombia son producto de las perversas dinámicas del conflicto armado y, más grave aún, de la acción (u omisión) del Estado colombiano. Por ejemplo, entre el año 1999 y 2007 del total de los sindicalistas asesinados en todo el mundo (1409), el 70% *circa* se explicaron por el caso colombiano (977). El 25% del total de las violaciones se atribuyen a paramilitares y al Estado, aunque teniendo en cuenta el porcentaje de los casos desconocidos (no identificados y sin datos), estos dos actores explicarían un porcentaje alto dentro de la totalidad de estas violaciones de lesa humanidad.

su versión de *localización* transnacional, primero, bajo la imposición del modelo de vocación exportadora, reprimarizador y aperturista (indiscriminado) del neoliberalismo de los años 90s pero más recientemente de la mano de los Tratados bilaterales de Libre Comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea en el nuevo siglo.

De otra parte, por el doble influjo que ejercen las mafias del narcotráfico (lavado de activos a través de “inversiones” en ganadería y compra de tierras, sobre todo) y, fundamentalmente, gracias a la progresiva militarización de los territorios, situación en la cual el paramilitarismo es actor desencadenante y clave pues – recordemos – la “cuestión agraria” resultaría parte estratégica de “su” proyecto. Lo anterior sin referirnos en profundidad a la “guerra antidrogas” prevista en los Planes Colombia y los tratados de seguridad y militares firmados últimamente con los Estados Unidos, elementos adicionales que coadyuvan (negativamente) con la complejidad que implica ésta sola problemática.

Una vez más, ambos procesos neo-liberal y para-militar confluyen conjuntamente en sus intereses y resultados. Sin lugar a dudas son los factores explicativos más sobresalientes sobre la tendencia creciente hacia la exacerbación de la monopolización y concentración de la propiedad de la tierra y, en general, de la apropiación del excedente agrícola en Colombia (incluyendo, los medios de producción, redes de comercialización de los insumos, etc.).

Fruto de estas dinámicas hoy el país registra históricamente una de las peores distribuciones en el mundo, signada por una tragedia humanitaria de grandes proporciones¹⁹.

Como ha sido largamente difundido por varios estudios especializados sobre el particular, esta trayectoria se encuentra paralelamente remozada por el desplazamiento forzado de grandes sectores rurales de la población y vinculada al mismo tiempo con la

¹⁹ El índice de Gini de concentración de la tierra en Colombia se elevó del 0,85 en 2003 al 0,87 en 2009 y en el mismo período los datos sobre desplazamiento forzado aumentaron correlativamente.

expoliación de sus propias tierras y propiedades (especialmente, las zonas consideradas estratégicas y de mayor productividad.

Por ello cada vez resulta menos cuestionable que los objetivos centrales de la política de desarrollo estatal en general y gubernamental, en específico en la primera década del siglo, hayan potenciado la naturaleza neoliberal-para-militar del régimen económico-político²⁰.

Tal y como sucede en el caso del vectores antisindical que comprende al *neoliberal-para-militarismo*, la lógica recíproca legal-ilegal –incluso la faceta ilegal que posteriormente se institucionaliza sobre todo a través de intervenciones “selectivas” desde el Estado y, específicamente de los gobiernos, en especial las administraciones de Uribe Vélez–, antes que corregir los *status quo* generados en los procesos de depredación violenta en el caso del patrón de desarrollo agrícola, los favorecen. Aún más, los consolidan vía organizaciones institucionales y políticas públicas.

En síntesis, la lógica de *depredación* y sobre todo de *desposesión* vinculada al modelo de desarrollo neoliberal(para)militar apunta en este vector hacia la reformulación de las relaciones de propiedad a favor del capital y en detrimento de sectores empobrecidos quienes además son sistemáticamente objetos de la violencia (legal e ilegal).

²⁰ “(...) la aplicación sistemática de la violencia como instrumento de la expropiación, practicada por grupos armados al margen de la ley y en ausencia de un estado que garantice el equilibrio y redistribución de los predios. En esta tendencia estarían convergiendo las iniciativas dirigidas hacia la legalización de los bienes usurpados mediante el terror paramilitar, muchas veces acompañada por el del propio estado. Este proceso, registrado y denunciado de manera sistemática, también habría de fortalecerse con los alcances de la política de titulación de tierras derivados de la ley 1152 de 2007 (declarada inconstitucional), en particular los decretos sobre saneamiento de títulos. Como lo enseña la historia agraria, la tierra se controla para controlar a la gente y así lo reitera el desarrollo reciente de la política laboral colombiana. De manera coherente con la sobreoferta de mano de obra resultante del desplazamiento forzado y la usurpación de tierras los estrategias de esta *vía de crecimiento* pusieron en marcha directrices del Banco Mundial en torno a la “flexibilización laboral” para elevar la “competitividad” de la economía colombiana” (Fajardo, 2010, p. 22).

El último vector al que hacemos mención lo constituye la virtual convergencia entre sectores de la clase política colombiana y los del paramilitarismo.

La progresiva institucionalización del proyecto paramilitar en varios sectores del Estado y de su aparato, en las estructuras y organizaciones políticas y en las principales orientaciones de las políticas públicas en los gobiernos nacionales y locales recientes resulta un hecho evidente.

Más allá de esta fase de “institucionalización” estrictamente paramilitar dentro del proyecto mencionado a nivel de la vida política y el indiscutible papel que jugó la coalición política vinculada directamente al paramilitarismo, habría que recalcar al mismo tiempo que esta coalición parlamentaria fue imprescindible, en su calidad de mayoritaria, para la aprobación de las reformas neoliberales de tercera generación promovidas por la administración, entre ellas, la ratificación de los Tratados de Libre Comercio y los mencionados Planes Nacionales de Desarrollo.

En este sentido, nuestra designación de *neoliberal(para)militarismo* tiende a superar la visión de cierta “captura” desde ciertos intereses privados ilegales hacia escenarios públicos institucionales por la de un proyecto económico-social-político de clase que pretende una reconfiguración específica en el marco de las transformaciones capitalistas contemporáneas (no estrictamente en el sentido “económico” sino que incluye diferentes dominios, dimensiones, esferas), y en el cual el Estado como relación social y en tanto aparato estatal sintetiza e instrumentaliza las dinámicas fundamentales del tránsito y posterior consolidación del régimen.

En el caso colombiano, la progresiva incorporación (“naturalización” y legitimación en gran parte implícita) del paramilitarismo encarnaría entonces el correlato sociopolítico específico del neoliberalismo.

Esta forma bastante singular de profundización de la lógica de acumulación capitalista en un contexto específico que, a diferencia del panorama regional donde inicialmente se agenciaron los

procesos a través de dictaduras, aquí reviste una normalización de las formas singulares y localizadas más versátiles del autoritarismo y más sutiles del terrorismo de Estado las cuales, sin embargo, permiten articulaciones globales de mayor alcance y envergadura y se articulan una y otras consistentemente.

Por tal razón, no hay que dejar de subrayar que los rasgos mafiosos sobrevinientes en las estructuras de la economía contemporánea y que se expresan –insistimos– de muchas maneras no son más que parte constitutiva de sus dinámicas esenciales²¹.

La (supuesta) penetración del paramilitarismo en el orden institucional-político en el caso colombiano viene revelando las necesidades sistémicas del orden mismo para ejercer un tipo de violencia no legítima, incluso *privatizada* (de los Grupos Paramilitares), como alternativa de gestión frente a los desafíos que plantean actualmente las contradicciones capitalistas emergentes. En particular frente al control social y territorial y económico, en medio de la profundización del régimen en su etapa neoliberal.

Radiografías. (sobre) Explotación y (ultra) precarización del mundo del trabajo bajo el nuevo patrón dependiente

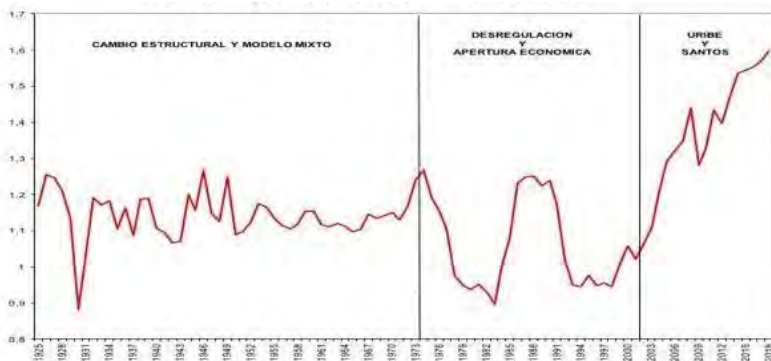
La consolidación de este Estado oligárquico del neoliberalismo en armas descrito respalda las precarias condiciones del mundo del trabajo en los últimos tiempos.

En efecto, la consolidación del nuevo patrón dependiente ha golpeado profundamente las condiciones de reproducción de la existencia de las amplias capas trabajadoras del país. Una valoración del

²¹ “La mafia es siempre una empresa capitalista, con un fuerte factor adicional: la fuerza intimidatoria de la violencia. Pero su esencia es y será la de ser una empresa criminal encaminada a la acumulación de capital.” (Forgione citado por Estrada, 2010, p. 32).

comportamiento de las tasas de explotación y la participación de los salarios en el PIB, entre otros, son indicativas de estas cuestiones.

Figura 3. Tasa de explotación en Colombia (1925-2018)



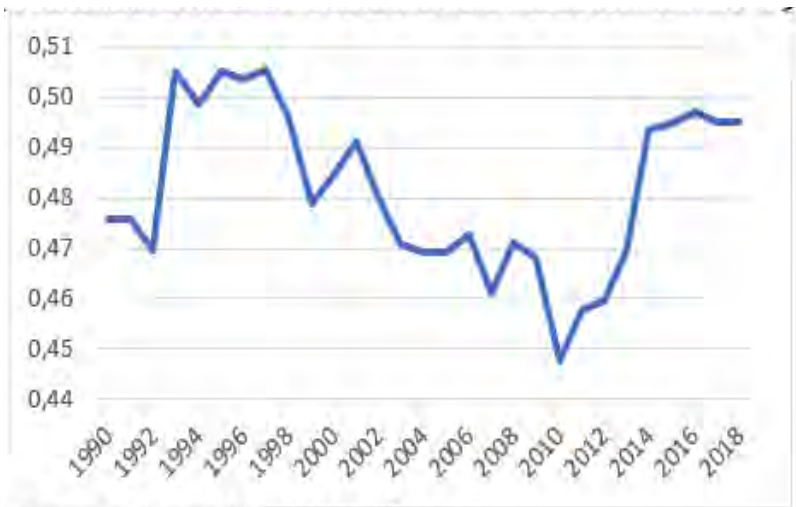
Fuente: Moreno (2019)

Como se puede apreciar la tasa de explotación mantiene un promedio de 115% durante todas las primeras seis décadas del siglo XX. Para la primera fase que hemos denominado de “*Alistamiento (1968-1974)*” se observa un incremento al 130%; sin embargo, éste cae en el contexto de la crisis capitalista mundial.

Durante toda la segunda fase de reformas institucionales que hemos caracterizado como “*Transición (1974-1986)*” asistimos a una caída solo comparable con la crisis del 29. Ahora bien, la forma de resolver dicha crisis se soportó en un nuevo incremento de la tasa de explotación que se mantuvo al alza durante casi una década. Finalmente, es posible afirmar que durante el período de *Consolidación (1991-)* del Estado oligárquico neoliberal hay una tendencia creciente en la tasa de explotación alcanzando índices de casi el 160% para la segunda década del siglo XXI. Pese a las caídas señaladas es necesario resaltar que los porcentajes de explotación siempre han sido superiores al promedio mundial. Si tomamos el momento de mayor caída en la fase de consolidación (1994-1999) la tasa es de casi 100%, para ese período el promedio mundial fue del 65% (Farina, 2014).

De otra su parte, encontramos una tendencia a la caída de la participación de los salarios en el PIB nacional durante dos décadas del período de consolidación. Esta tendencia se revierte parcialmente iniciando la tercera década del siglo XXI no logrando alcanzar tasas de participación de principios de la década de los noventa y sin compensarse con el exponencial crecimiento de la tasa de explotación. Según datos de la CEPAL, Colombia se encuentra entre los países del mundo con menor participación de los salarios en el PIB.

Figura 4. Participación de los salarios en el PIB colombiano 1991-2019



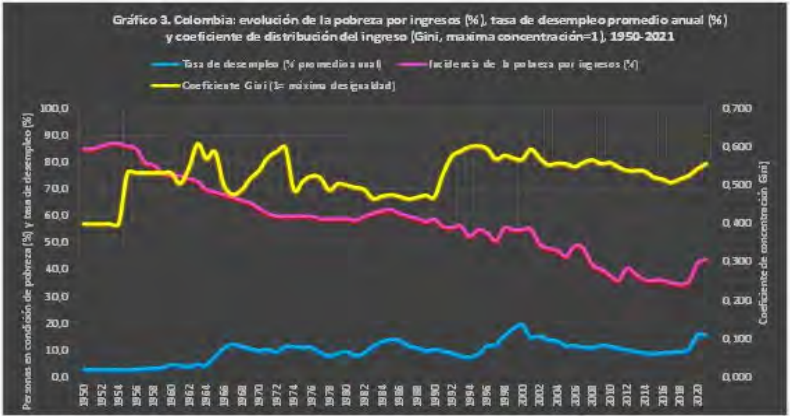
Fuente: Penn World table 10.1 (Cómbita, 2023)

El incremento en la tasa de explotación y la reducción de la participación de los salarios en el PIB, permite entender, entre otros elementos, el alto porcentaje de población en condiciones de pobreza que aún existe en el país, así como el incremento de la desigualdad en Colombia.

Finalmente, y siguiendo a Álvaro Moreno, quisiéramos afirmar que el manejo de la política monetaria, especialmente el control de

la inflación, ha operado como un soporte fundamental al proceso de explotación del mundo del trabajo.

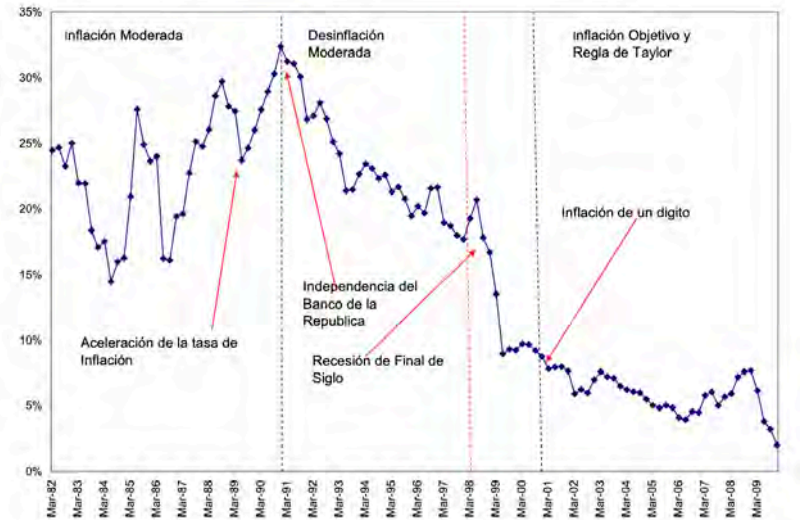
Figura 5. Colombia: evolución de la pobreza por ingresos (%), tasa de desempleo promedio anual (%) y coeficiente de distribución del ingresos (GINI) 1950-2021



Fuente: Cálculos del autor con base en DANE, Pobreza Monetaria en Colombia y Gran Encuesta Integrada de Hogares

Fuente: Sarmiento (2021)

Figura 6. Inflación en Colombia (1980-2009)



Fuente: Moreno (2014)

Moreno justamente subraya cómo el conflicto redistributivo en Colombia se ha “resuelto” sin cortapisas en favor del capital:

[...] Las políticas monetarias no son neutrales ni en el corto y ni en el largo periodo. La inflación es un indicador de la tensión distributiva entre los intereses de las diferentes clases sociales en cualquier economía monetaria de producción. De allí que el arreglo institucional de la política monetaria determina el papel del banco central a favor o en contra de alguno de los agentes en conflicto. En Colombia, las decisiones de la Junta del Banco de la República se han alejado de la regla justa de la tasa de interés, es decir, sus efectos no han sido neutrales, por el contrario, promovieron claramente un patrón regresivo de la distribución del ingreso a favor de los poseedores de riqueza (Moreno, 2014, pp. 31-32).

Medio siglo neoliberal de arreglos institucionales y medidas de política han sido regresivas frente a las condiciones laborales y socioeconómicas de la clase trabajadora; y, a su vez, de modo dramático, ellas han sido soportadas dentro de las lógicas de las violencias armadas donde el proyecto (para)militar cumple una función para resguardar el orden social vigente.

Desafíos y nuevos horizontes políticos

Durante la última década del siglo XXI, se destacan tres acontecimientos del mayor significado para la historia política reciente del país, a saber: *i*) el proceso de paz y la posterior firma (2016) del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre las otrora FARC-EP y el Estado; *ii*) el despliegue de un proceso rebeldía social y popular que tiene su punto de inflexión el 28A de 2021; y, *iii*) el triunfo de la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en julio de 2022. Su importancia radica en la potencialidad que ellos poseen para favorecer el desmonte de los órdenes de la violencia y, a su vez, generar las bases

institucionales en el tránsito hacia escenarios de reformas y reformulaciones democratizantes del régimen político y socioeconómico en Colombia.

En efecto,

[...] la firma del Acuerdo Final se constituye en un punto de inflexión, un acontecimiento histórico-social del cual deberían desprenderse distintos tipos de rupturas sistemáticas, en tanto supone suspender la mediación de las expresiones armadas dentro de la constitución del sistema social en su conjunto, desde el Estado y desde la Sociedad y sus distintos sujetos y actores. Las posibilidades que abre este hito implican, entonces, el desmonte de la función histórica de la violencia armada como mecanismo principal para la producción y reproducción del orden social hoy vigente. El acuerdo de paz tiene la pretensión de organizar la ecuación Estado-sociedad con grados de democratización, es decir: una sociedad con mayor capacidad de incidir en la determinación de la vida pública y comunal en el marco de un Estado político con una capacidad cada vez más acotada para la coacción. El acuerdo expresa también un reconocimiento del Estado colombiano, por una parte, del carácter político del conflicto y, por la otra, del orden social vigente como realidad explicativa del mismo (Jiménez y Puello-Socarrás 2020, pp. 37-38).

Lo anterior suponía que una adecuada implementación de lo acordado podría sentar las bases para la transición hacia una nueva Colombia. No obstante, surtidos 7 años de la firma de lo acordado el balance en términos de cumplimiento es desalentador.

[...] Muchos informes y análisis han puesto de presente que la continuidad y profundización de las violencias en los territorios, así como la crisis humanitaria asociada a estas, se explican, en buena medida, por la precaria implementación del Acuerdo. No se ha avanzado casi nada en las medidas conducentes a la

democratización del acceso a la tierra y la resolución de las desigualdades e injusticias territoriales que se presentan en el mundo rural (Fajardo, 2021); no se ha logrado quebrar el cierre del universo político, como lo evidencia el brutal tratamiento dado a la protesta social (De Zubiría, 2021) [...] Pero otra lectura, en un segundo plano, revela los procesos sociales y políticos que, en gran medida, se han podido desarrollar gracias al cambio de contexto que significó el fin de la guerra entre el Estado y las FARC-EP. Como lo expresamos arriba, la firma del Acuerdo Final marcó un punto de inflexión que ha favorecido el desarrollo de luchas sociales y políticas durante mucho tiempo reprimidas. El ascenso de la movilización social, la ampliación del espectro de sus reivindicaciones, la diversidad de sus actores forma parte de una nueva dinámica de construcción de paz y democracia (Jiménez y Zuluaga, 2021, pp. 12-13).

Y justamente, estos asuntos ayudan a entender, entre otros elementos, el proceso de rebelión social vivido en los años recientes:

La rebelión vivida en Colombia entre los meses de abril y julio del 2021 fue expresiva de la indignación popular en contra las condiciones y los modos de existencia, sobre todo de sobrevivencia, a los que condena el capitalismo neoliberal a la gente común. Ello explica por qué este proceso, a pesar de haber sido azuzado por el anuncio gubernamental de una reforma tributaria antipopular, no condujo a que el hundimiento de dicha iniciativa legislativa desactivara la furia social. Por el contrario, asistimos al despliegue de un flujo de protestas y movilizaciones que subvirtieron, momentáneamente, vectores ordenadores del orden social vigente y configuraron los contornos de una crisis sistémica, sin que esta llegara a su plena maduración (Estrada, Jiménez y Puello-Socarrás, 2023, p. 91).

Esta rebelión definió nuevos contornos para la contienda electoral, marcó varios puntos de la agenda política y, al final, terminó generando condiciones propicias para el triunfo de la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Si bien el gobierno de Gustavo Petro desde la campaña amarró su agenda programática a la necesidad de desarrollar un capitalismo “democrático, productivo y no especulador”, a su vez se constituía en un espacio de posibilidad para materializar las grandes expectativas de las masas populares, especialmente las referidas a resolver la extensa e intensa deuda social.

Pese a la importancia de lo acontecido, nos enfrentamos a una nueva embestida de las fracciones reaccionarias de la clase dominante que se niegan a perder privilegios; las transformaciones que debían operarse en este lustro se han visto bloqueadas y el gobierno progresista ha quedado atrapado en la lógica de la gestión, administración y gobernabilidad dentro de los contornos definidos por un “pacto” neo(liberal)desarrollista.

El desafío que afrontamos es enorme, pues los sectores dominantes han cerrado filas en la defensa del neoliberalismo (en armas) mientras que sectores progresistas (y varios de la izquierda) continúan entrampados en las fórmulas del posibilismo representativo y una suerte de social-neoliberalismo, el falaz Capitalismo con rostro humano.

En este momento histórico, la construcción de un horizonte de visibilidad contra-hegemónico reclama avances destituyentes y reconstituyentes ya abiertos por la rebeldía popular del último lustro.

BIBLIOGRAFÍA

- Arenas, Héctor (2003). Foro Social Mundial. Capítulo Colombia entre guerras. *Nova et vetera, Boletín del Instituto de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública* – Grupo Derechos Humanos, 50.
- Autodefensas Unidas de Colombia (1998). Estatuto de Constitución y Régimen Disciplinario. *Colombia libre*. www.colombialibre.org.
- Ávila, Andrea (2012). *Think tanks y ajuste estructural en Colombia: El caso de Fedesarrollo en el gobierno de Belisario Betancur* [Tesis de Maestría]. Universidad Nacional de Colombia.
- Carchedi, Guglielmo, y Roberts, Michael. (2023). *Capitalism in the 21st Century. Through the Prism of Value*. Pluto.
- Duque, Carlos Alberto (2021). Economic Growth and the Rate of Profit in Colombia 1967-2019: A VAR Time-Series Analysis. *Review of Radical Political Economics* 54(3).
- Estrada, Jairo (1984). Crisis capitalista y Cambio con equidad. *Estudios Marxistas*, 26, 5–29.
- (2005). Élités intelectuales y producción de política económica en Colombia. En Jairo Estrada, *Intelectuales, tecnócratas y reformas neoliberales en América Latina* (259–320). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- (2006). Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia. En Ana Esther Ceceña (coord.) *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado* (247–284). Buenos Aires: CLACSO.
- (2010). *Derechos del Capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia*. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Fajardo, Darío (2010). *Tierra, Justicia y Paz en Colombia*. Colombia: Espacio Crítico.
- Frank, André Gunder (1973). *Lumpenburguesía: Lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamérica*. Buenos Aires: Periferia.

- Friesen, Elizabeth (2020). *The World Economic Forum and Transnational Networking*. UK: Emerald Publishing Limited.
- Jessop, Bob (2018). Neoliberalism and Workfare: Schumpeterian or Ricardian. En Damien Cahill, Melinda Cooper, Martijn Konings y David Primrosa (eds.), *The SAGE Handbook of Neoliberalism* (347–383). Londres: SAGE.
- Jiménez Marín, Carolina y Puello-Socarrás, José Francisco (2018). Paz, participación política y democratización en Colombia. En Alejandro Vargas Velásquez (coord.), *Rutas y retos de la implementación del Acuerdo de paz* (31–64). Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
- Marini, Ray Mauro (1969). *Subdesenvolvimento e revolução*. Brasil: Insular.
- Marx, Karl (1976). *El Capital. Crítica de la economía política*. Madrid: Akal.
- Oxfam International (2023). La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad. <https://oxfamlibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621477/bp-survival-of-the-richest-160123-es.pdf>
- Perry, Guillermo (2019). *Decidí contarlo. Conversaciones sobre cincuenta años de economía y política en Colombia*. Bogotá: Debate.
- Puello-Socarrás, Gregorio Enrique, y Puello-Socarrás, José Francisco (2017). ¿La época de los ‘post’? Conflicto social-armado, acuerdo de paz y anocracia neoliberal en Colombia. En Godofredo Vidal de la Rosa (coord.), *Política Latinoamericana Contemporánea* (pp. 305-346). México: UNAM.
- Puello-Socarrás, José Francisco (2013a). Camino hacia la Podredumbre Neoliberal/para/militarismo en Colombia. Un caso de Anocracia neoliberal. *Cuadernos del GESCAL. Memorias del Grupo de Estudios sobre Colombia y América Latina*, 55–78.
- (2013b). Ocho tesis sobre el neoliberalismo (1973-2013). En Hernán Ramírez (ed.), *O neoliberalismo sul-americano em clave transnacional: enraizamento, apogeu e crise* (pp. 13-57). Brasil: Oikos – UNISINOS.
- (2015a). DESARROLLO. Paleontología (política) de una idea (neoliberal). *Estudios Críticos del Desarrollo*, 8, 47–81.

- (2015b). Neoliberalismo, Anti-neoliberalismo y Nuevo neoliberalismo. Episodios y trayectorias económico-políticas Suramericanas (1973-2015). En Luis Rojas Villagra (coord.), *Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas* (pp. 19–42). Buenos Aires: CLACSO.
- (2021). Novo Neoliberalismo. Arquitetônica estatal no Capitalismo do século XXI. *Revista Eletrônica de Administração (REAd)*, 27(1), 35–65.
- (2022). A Chamada “Acumulação” Empreendedora: O Estado Empreendedor do Novo Neoliberalismo no século XXI. *Revista Educação e Políticas em Debate*, 11(3), 1133–1155.
- Sarmiento Palacios, Eduardo (1990). *Los nuevos desafíos del desarrollo. Fundamentos y Políticas*. Bogotá: Tercer mundo.
- Vega Cantor, Renán y Gutiérrez, José Antonio (2010, septiembre 28). Colombia no es Porto Alegre: Boaventura de Sousa Santos y la socialdemocracia. *Rebelión*. <https://rebelion.org/colombia-no-es-porto-alegre-boaventura-de-sousa-santos-y-la-socialdemocracia/>
- Wacquant, Loïc (2009). *Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona: Gedisa.
- .

A 50 años del neoliberalismo. Caso Venezuela

Pasqualina Curcio Curcio

El neoliberalismo prometió riqueza y ha multiplicado la pobreza, pero además ha convertido a América Latina en la región más inequitativa del mundo en términos de distribución del ingreso.

En ella, el 10% más rico de la población— aquellos a los que satisface el neoliberalismo y les entusiasma el ALCA— recibe casi el 50% del ingreso total, en tanto que el 10% más pobre— los que no aparecen nunca en la crónica social de los medios de información de la oligarquía— recibe apenas el 1,5% del ingreso total.

Este modelo explotador ha convertido a América Latina y el Caribe en una verdadera bomba social presta a estallar si continúa creciendo el antidesarrollo, el desempleo y la pobreza.

Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
1er de marzo de 2004¹

En 1970, un grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Católica de Chile becados para cursar estudios de economía en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman y Arnold Harberger, escribieron lo que luego se le conoció como “El ladrillo”. Se trataba de

¹ Discurso pronunciado en el acto de instalación de la XII Cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G-15 en Caracas el 1ero de marzo de 2004.

un Programa de desarrollo económico basado en el fundamentalismo del mercado, partían del principio neoliberal que los mercados, por si solos, garantizan la eficiencia económica, que la intervención del Estado genera distorsiones. En palabras de uno de los autores del mencionado programa, Sergio Castro, quien fue el ministro de economía y ministro de hacienda del dictador Augusto Pinochet: "Las orientaciones fundamentales del programa alterativo, presentado a don Jorge Alessandri (candidato presidencial en el proceso electoral en el que resultó ganador Salvador Allende) eran la apertura de nuestra economía, la eliminación de prácticas monopólicas, la liberación del sistema de precios, la modificación del sistema tributario por uno más neutral, eficiente y equitativo, la creación y formación de un mercado de capitales, la generación de un nuevo sistema previsional, la normalización de la actividad agrícola nacional, destrozada por la Reforma Agraria, y la protección de los derechos de propiedad" (Centro de Estudios Políticos, 1992).

Con el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, tras un golpe de Estado y la instauración de la dictadura militar de Augusto Pinochet, este grupo de economistas aplicó, junto con su mentor, Milton Friedman, las políticas económicas neoliberales que habían propuesto a Alessandri. A partir de ese momento, Chile se convirtió en el gran laboratorio social para desarrollar el experimento de una economía de libre mercado de Friedman, Harberger y Von Hayek. Experimento que solo podía ser realizado por la fuerza y bajo opresión, al respecto, en 1976 dijo Orlando Letelier, quien fue embajador de Allende en Washington: "El plan económico (neoliberal) tenía que imponerse por la fuerza y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100 mil personas en tres años" (EuropaxCuba, s/f). El experimento se repitió en Argentina tras el golpe de Estado en 1976 y la instauración de la dictadura militar de Videla.

Es así, como desde inicios de la década de los 70 comenzó a instaurarse en América Latina el neoliberalismo que, luego, desde los

90, y de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, también penetró en Europa en lo que llamaron la Revolución Conservadora; incluso, en la Unión Soviética durante el gobierno de Mijail Gorbachov y con mayor intensidad y sin disimulo ninguno en Rusia, a partir de 1991 en el gobierno de Boris Yeltsin.

La década de los 80 del siglo pasado la recordamos en América Latina y el Caribe como la “década pérdida” debido a la recesión económica que comenzaron a registrar varios países, entre ellos Bolivia, cuyo Producto interno bruto (PIB) cayó 26.6%, México -9.2%, Uruguay -7.2%, Brasil -0.4%, Venezuela -24.9%, El Salvador -17.4% y Ecuador -1.1% (Rangel y Reyes, 2012). Este estancamiento se sumó a la cada vez mayor imposibilidad de cumplir con los compromisos de la elevada deuda externa por parte de algunos países, siendo los más endeudados: Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile (Rangel y Reyes, 2012). Entre 1982 y 2000, América Latina devolvió como servicio de la deuda 1.452.000 millones de dólares, es decir más de cuatro veces el stock total de su deuda, que se elevaba a 333.200 millones de dólares en 1982 (Toussaint Eric, 2003). La deuda externa de Venezuela pasó de 1.422 millones de dólares en 1970 a 29.356 millones de dólares en 1980, a 33.171 millones de dólares en 1990 y a 37.261 miles de millones en 1999 (Toussaint, 2003).

En este contexto, los gobiernos de la época terminaron renegociando dichas deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que aprovechó la situación para imponer como condición el recetario neoliberal de Friedman experimentado desde hacía más de una década en Chile. Desde 1980 comenzó a permear con más fuerza el dogma neoliberal en América Latina el cual se resumió y concretó en 1989 en el decálogo del Consenso de Washington propuesto por John Williamson, cuyo objetivo era “identificar aquellas políticas que las principales instituciones de Washington, tales como el Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, consideraban claves para la restauración del crecimiento en América Latina” (Kusinsky y Williamnson en Rangel y Reyes, 2012).

La receta neoliberal

El Consenso de Washington responde a los intereses del capital, busca garantizarle mayor acceso a nuestra región ofreciéndole incentivos para promover sus inversiones, entre ellos y el principal, salarios muy bajos, de allí que parte importante de la receta neoliberal sea la desregulación del mercado laboral y con esta la congelación de los salarios, a lo que debemos sumar la liberación de los precios de todas las mercancías (excepto como ya mencionamos, el precio del trabajo). En la contradicción trabajo-capital, la burguesía obtendrá mayores ganancias en la medida en que el salario nominal, real y relativo sean menores, lo cual se garantiza con la liberación de los precios y la congelación del salario nominal, es decir, con mayor explotación que, como veremos en algunos indicadores económicos y sociales que muestran los resultados del neoliberalismo durante este medio siglo en Venezuela, ha derivado en grandes desigualdades: mayor pobreza de la clase obrera a la par de mayor concentración de riqueza por parte de la burguesía.

Los incentivos a los capitales extranjeros también pasan por garantizarles la inversión en sectores estratégicos que se encuentran en manos del Estado (electricidad, petróleo, agua, minerales, comunicaciones, entre otros) y que son transferidos (privatizados) al capital privado a precios de subasta. Entre otros incentivos se encuentran la eliminación de aranceles a la importación, la liberación del mercado cambiario que, de paso les ha abierto las puertas para la fuga de capitales en nuestros países, capitales en su mayoría provenientes de actividades estratégicas desarrolladas por el Estado, en el caso venezolano, los ingresos por concepto de exportación de petróleo. Bajo el dogma de que el sector público es ineficiente se incluye en la receta neoliberal la reducción al mínimo del Estado, la privatización de sus empresas y la disminución del déficit fiscal.

El Consenso de Washington, inspirado en el programa económico de los Chicago Boys se resume en los siguientes puntos:

1. Disciplina fiscal
2. Focalización del gasto público en subsidios dirigidos a los más pobres
3. Reforma tributaria mediante la ampliación de la base tributaria que incluye la aplicación de un impuesto al valor agregado y reducción de las tasas de impuestos sobre la renta.
4. Liberación de las tasas de interés.
5. Tipos de cambio competitivos.
6. Liberación del comercio internacional, con énfasis en la eliminación de los aranceles.
7. Apertura a la inversión extranjera directa.
8. Privatización de empresas.
9. Desregulación de mercados, fomentando la libre competencia.
10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

Esta fue la receta impuesta a nuestros países por el FMI (organismo dirigido por el departamento del Tesoro de EEUU) como condición para refinanciar la deuda externa. Fue la excusa perfecta para instaurar el neoliberalismo en la región.

Tiempos de neoliberalismo en Venezuela (1980-1998)

Con un discurso populista de parte de un gobierno que, a diferencia de Chile, llegó a la presidencia con el 52,91% de los votos en 1989, Carlos Andrés Pérez anunció, apenas iniciando su mandato el paquete de medidas de ajuste económico, conocido como el Gran Viraje, el cual fue previamente negociado con el FMI con la finalidad de obtener 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes. Cabe mencionar que, cuando Pérez llegó a la presidencia, la deuda externa ascendía a 34.742 millones de dólares equivalentes al 81,4% del PIB (Banco Mundial, varios años) y las reservas internacionales al cierre de 1988 sumaban 8.023 millones de dólares. También resaltamos que, durante el gobierno de Pérez, entre 1989 y 1993 ingresaron por exportaciones

petroleras 57,762 millones de dólares (BCV, varios años) de los cuales fueron asignados al sector privado (y fugadas) 46.071 millones.

Cuando Pérez se separó del gobierno en 1993, no solo dejó una deuda externa más alta (37.540 millones de dólares), sino que las reservas internacionales no superaban los 13.537 millones de dólares a pesar de los ingresos petroleros, de los préstamos de FMI y de las privatizaciones de empresas.

El Paquete económico de Carlos Andrés Pérez seguía al pie de la letra la receta neoliberal. Implicó la desregularización de la economía mediante la liberación de las tasas de interés, de los precios de todas las mercancías excepto 18 rubros de la canasta básica; la liberación y unificación cambiaria; el aumento de las tarifas de los servicios públicos, de la gasolina, del transporte público; eliminación de los aranceles de importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del PIB; congelación de los cargos de la administración pública y la privatización de empresas estratégicas, entre ellas, tres bancos, la telefónica y líneas aéreas (Vinogradoff, 1999).

La respuesta del pueblo venezolano no se hizo esperar, el 27 de febrero de 1989, se levantó en contra de las medidas neoliberales del gobierno de Pérez. Un conjunto de protestas comenzó a desarrollarse en Caracas y en las ciudades cercanas. Protestas que fueron fuertemente reprimidas por el Ejército Nacional por instrucciones de Pérez, y aunque las cifras oficiales reportan 276 fallecidos, se estiman más de 2000 desaparecidos solo entre el 27 y 28 de febrero.

El levantamiento del pueblo venezolano, mejor conocido como el Caracazo se reviste de gran importancia, entre otras cosas, porque fue la primera rebelión civil en la región contra la receta neoliberal que, desde 1970 y con más intensidad desde los 80 se instauró en América Latina. Como era de esperarse, la única manera de sostener dichas políticas era con la represión y el miedo a quienes se opusieran. Se trataba de una dictadura disfrazada de un discurso democrático y populista.

El 4 de febrero de 1992, también contra las políticas neoliberales que derivaron en más pobreza y exclusión, un grupo de militares

comandados por el Teniente Coronel Hugo Chávez se rebelaron en contra del gobierno de Pérez, rebelión militar que, en palabras del propio Chávez lamentaría que por el momento los objetivos planteados no fueran aún logrados. Posteriormente, el 27 de noviembre del mismo año, otro grupo de militares desarrolló una segunda rebelión militar. Cada vez más, Pérez perdía popularidad y legitimidad dados los resultados de las políticas radicales neoliberales.

No obstante, las políticas neoliberales continuaron no solo con el gobierno de Carlos Andrés Pérez quien fue separado del cargo de la presidencia por un juicio de corrupción el 20 de mayo de 1993, sino con el gobierno de Rafael Caldera (1993-1998).

Con un discurso pacificador, incluso en contra de las políticas del FMI, Rafael Caldera logra la presidencia de la República, la cual asumió el 2 de febrero de 1994. Sin embargo, luego de una crisis financiera y en el marco de un acuerdo con el FMI, el 15 de abril de 1996 anunció un plan económico mejor conocido como Agenda Venezuela que, con una narrativa también populista, da continuidad y profundiza las políticas neoliberales iniciadas por Carlos Andrés Pérez.

Sin mayor novedad con respecto a la receta neoliberal, las medidas de la Agenda Venezuela incluyen, la liberación y unificación del tipo de cambio, aumento del precio de la gasolina, de la tasa de impuestos a las ventas al mayor, de las tarifas de los servicios públicos, eliminación de subsidios, creación del impuesto al valor agregado (impuesto regresivo que recae principalmente sobre la clase obrera).

Posteriormente se anunció un acuerdo con el FMI, a través del cual se obtendría un financiamiento de 1.400 millones de dólares condicionado al logro de ciertas metas macroeconómicas: reducción de la inflación mensual a niveles de 1,5% a 2% en el segundo semestre de 1996, y de 1% a 1,5% en 1997. Reducción del déficit fiscal a niveles equivalentes al 1,5% del PIB en 1996 y su total eliminación en 1997. Crecimiento de 4% a partir del cuarto trimestre de 1996. Y, finalmente, lograr un incremento de las reservas internacionales de US\$ 1.500 millones durante ese año (Palma, s/f).

Al llegar al gobierno, Caldera recibió una deuda externa de 36.943 millones de dólares, al finalizar su período presidencial en 1998 esta se ubicó en 49.473 millones de dólares, por su parte, los ingresos por exportación de petróleo sumaron 73.304 millones de dólares durante su quinquenio, de los cuales, 69.001 millones de dólares los asignó al sector privado mientras las reservas internacionales las dejó en 15.379 millones de dólares habiéndolas recibido en 12.491 millones de dólares (BCV, varios años).

Caldera, con el eufemismo de la “apertura petrolera” privatizó PDVSA. También privatizó la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), instalaciones bancarias, la empresa de telefonía. En 1999 privatizó la seguridad social, tanto el sistema de pensiones como el de salud, siguiendo el esquema chileno instaurado por los Chicago Boys, creó las administradoras privadas de fondos de pensiones con capitalizaciones individuales por parte de los trabajadores, así como las administradoras de fondos de salud, esta reforma de la seguridad social preveía la eliminación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No conforme con ello, y siguiendo con las políticas en contra de la clase obrera y en favor del capital, eliminó la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores.

Fue durante el gobierno de Rafael Caldera que se dio comienzo a los Tratados Bilaterales de Doble Tributación, política que favorecía a las empresas extranjeras en la medida en que les exoneraba el pago de impuestos en nuestro país con el argumento de que lo entregarían en sus países de origen. Adicionalmente, estas políticas a favor de los capitales extranjeros permitían la devolución de los impuestos que hubiesen pagado dichas empresas.

De acuerdo con Britto (2019) "En ellos se sustituye el principio nacional de territorialidad de la renta, en virtud del cual los contribuyentes pagan impuestos al Estado en cuyo territorio obtienen sus beneficios, por el de nacionalidad, según el cual las empresas y empresarios de un país que obtengan beneficios en el territorio de otro, pagarán los impuestos sobre tales beneficios en su país de origen. Dichos pactos favorecen obviamente a potencias desarrolladas, que

tienen numerosas empresas en el extranjero, y gracias a ello ahora ingresan en sus Tesoros los impuestos que éstas pagaban antes en el exterior."

La pobreza general por nivel de ingresos que en 1993 ascendía a 41,37, llegó a alcanzar niveles de 61,37% en 1996 (IESA, 1999) como resultado del programa neoliberal promovido por el FMI.

Del neoliberalismo al socialismo (1999-2012)

Con la llegada del Hugo Chávez a Miraflores en 1999 comienzan a revertirse las políticas neoliberales que se instauraron en Venezuela desde la década de los 80. Decía Chávez, "el neoliberalismo es el camino al infierno" (El País, 2002).

En referendo, el pueblo venezolano aprobó en 1999 una nueva Constitución que, aunque se enmarca y reconoce un sistema económico capitalista (no es hasta el 2005 cuando Chávez anunció que la revolución bolivariana era socialista) da al traste con el neoliberalismo de las décadas previas. A continuación, resaltamos algunos ejemplos que muestran claramente cómo el solo hecho de la aprobación de la Constitución en 1999 revirtió las políticas neoliberales (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).

En cuanto a las políticas salariales, quedó establecido en el artículo 91:

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. **El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario**

mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica (el subrayado es nuestro) (CRBV, 1999; art 91).

La aprobación de este artículo revertía una de las principales medidas del neoliberalismo, la congelación del salario. Luego de 1999, éste debía ajustarse en función del aumento de los precios generales de la economía impidiendo la ampliación de la brecha salario-ganancia, especialmente en escenarios de inflación.

Adicionalmente, la Constitución del 99 devuelve a los trabajadores la retroactividad de las prestaciones sociales eliminadas por Caldera en 1998. En el artículo 92 establece: "Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompenen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal" (CRBV, 1999).

Con la Constitución de 1999 se detuvo la privatización de la seguridad social aprobada en 1998. En los artículos 83, 84, 85 y 86 se reconoce el derecho a la seguridad social y a la salud, así como su carácter público. Adicionalmente, el artículo 80 fija el monto mínimo de las pensiones por vejez equivalente al del salario mínimo (CRBV, 1999).

Las privatizaciones de los sectores estratégicos, incluyendo por supuesto el petrolero, no solo se detuvieron, sino que también se revirtieron con la aprobación de la Constitución de 1999. Establece el artículo 302: "el Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico" (CRBV, 1999). Por su parte, el artículo 303 reza: "Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de

la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.” (CRBV, 1999). Se prohíbe por constitución la privatización de las aguas en el artículo 304 (CRBV, 1999).

En cuanto a los incentivos para los capitales extranjeros, parte esencial de la receta neoliberal, la Constitución establece en el Artículo 301: “El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional” (CRBV, 1999).

Continuando con las políticas que buscaban revertir las recetas neoliberales del FMI, en noviembre de 2001, en el marco de una Ley Habilitante, Chávez aprobó 49 decretos, entre ellos la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos mediante la cual aumentó las regalías que debían pagar las transnacionales del 1% al 30% y fijó en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades petroleras mixtas, también aprobó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en la que se permitía la expropiación de latifundios. Estos 49 decretos fueron el detonante del golpe de Estado contra Chávez del 11 de abril de 2002.

Chávez no solo revirtió las privatizaciones que adelantó Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, sino que inició un proceso de estatización de empresas estratégicas entre ellas: la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), el Estado compró por US\$572 millones el 28,5% del paquete accionario de la compañía en manos de la estadounidense Verizon, convirtiéndose en el mayor accionista de la principal empresa de telecomunicaciones del país, adicionalmente y contrario a las políticas neoliberales, anunció una rebaja general de las tarifas telefónicas; la Electricidad de Caracas (EDC), el gobierno compró el 82% de las acciones de la compañía en manos de la estadounidense por US\$739 millones; la Eléctrica Senecca fue comprada por la empresa PDVSA, compró el 88% del paquete

accionario de esta compañía eléctrica local a la empresa estadounidense CMS Energy por US\$106 millones; la Faja Petrolífera del Orinoco, uno de los mayores reservorios de crudo del mundo, se encontraba en manos de 13 empresas extranjeras las cuales aceptaron los términos impuestos por el Estado venezolano y permanecieron como socios minoritarios, a excepción de la ExxonMobil y Conoco-Phillips que se retiraron (BBC, 2009).

Durante el gobierno de Chávez se estatizó la empresa Siderúrgica Ternium Sidor, el 60% de la compañía pertenecía al Consorcio Amazonas, integrado por empresas de Argentina, México, Brasil y Venezuela, se llegó a un acuerdo con la empresa para concluir el traspaso de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que había sido privatizada durante el gobierno de Caldera. También se estatizaron las empresas cementeras transformándolas en sector de producción social, entre ellas, la filial de la mexicana Cemex -la más grande en suelo venezolano con cerca del 50% del mercado-, seguida de la francesa Lafarge y la suiza Holcim y Cementos Andinos, sucursal de la colombiana Argos (BBC, 2009).

En 2009 se inició la estatización de la banca mediante la nacionalización del Banco de Venezuela que se encontraba en manos del grupo español Santander (Nazareth, 2021). Empresas de alimentos también fueron adquiridas por el Estado, entre ellas la filial venezolana de la empresa estadounidense Cargill (BBC, 2009). Igualmente fueron tomados los puertos más importantes del país, el de Maracaibo y el de Puerto Cabello (BBC, 2009).

La adquisición de empresas estratégicas por parte del Estado pudo realizarse entre otros factores debido a la política de control cambiario instaurada por Chávez en enero de 2003. Al contrario de lo que establece la receta neoliberal, Chávez revirtió la liberación del mercado cambiario y estableció un control de la administración de las divisas que ingresan al país que, en promedio, un 95% son por concepto de exportación de petróleo por parte del Estado (BCV, varios años). La medida la tomó con el objetivo de evitar una mayor fuga de capitales que se estaba generando a propósito de la huelga

general convocada por las cúpulas empresariales y de trabajadores y por el sabotaje a la industria petrolera. Las reservas internacionales cuando Chávez llegó a la presidencia ascendían a 14,849 millones de dólares, en 2012 cerraron en 29.890 millones de dólares.

El mencionado sistema cambiario, sin embargo, fue permeado por los capitales extranjeros que, con la connivencia de funcionarios públicos, buscaron a través de mecanismos como por ejemplo la sobrefacturación, de extraer la mayor cantidad de divisas que, como mencionamos son generadas den un 95% por el Estado a través de PDVSA. No obstante, y a pesar de que, durante el gobierno de Chávez, en términos absolutos le fueron asignados 333.201 millones de dólares a la burguesía (BCV, varios años), éstos representaron el 42% de los ingresos petroleros, mientras que entre 1989 y 1998 (los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael caldera) la asignación de divisas del Estado a la burguesía equivalía al 98% de los ingresos petroleros (Curcio, 2019).

En 2002 se puso fin a la especulación bancaria al prohibir el otorgamiento de créditos indexados, especialmente para la adquisición de viviendas, que fueron aprobados en 1996 durante el gobierno neoliberal de Caldera. No solo revirtió este tipo de créditos, sino que también se eliminaron los contratos de refinanciamiento, lo que supuso que la tasa de interés que debía regir el crédito sería la tasa del mes en que fue firmado el contrato y no una tasa variable. En ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Banco Central de Venezuela (BCV) fijar las Tasas de Interés de los créditos otorgados entre 1996 y 2002 (PSUV, 2016).

En 2003, Chávez aprobó el control de precios de 106 presentaciones de alimentos y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar (Gaceta oficial Nro. 37.629, 11-02-2003), lo que ya había anunciado en enero, durante un discurso en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se llevaba a cabo el Foro Social Mundial, allí dijo: “Hemos tomado medidas que no les gustan a los neoliberales, pero como no tenemos compromisos y para defender al pueblo hemos establecido

un control de cambios y ahora le seguirá un control de precios” (Tal Cual, 2020). Contrario a la receta neoliberal, en lugar de congelar los salarios fueron congelados los precios de las mercancías de primera necesidad mientras el salario, por Constitución, se ajustaba en la medida en que aumentaban los precios.

En lugar de reducir al mínimo el Estado, durante el gobierno de Chávez y al contrario al dogma neoliberal, se fortaleció; la inversión y el consumo públicos durante los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera fueron en promedio el 17,6% del PIB mientras que entre 1999 y 2012, este porcentaje subió a 21,5% (Curcio, 2019). Se fortaleció el sistema público de salud, de educación, de transporte, de electricidad, agua, gas doméstico, además de la creación de una red de producción y distribución de alimentos por parte del Estado, así como la construcción y entrega de viviendas, entre otros.

En abril de 2007 Chávez anunció la decisión de retirar a Venezuela del FMI y del Banco Mundial, dijo: “No nos hace falta estar viajando a Washington, ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni nada (...) yo quiero formalizar la salida de Venezuela del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de todo eso” (El País, 2007) y en 2008 responsabilizó al FMI de la crisis financiera mundial, dijo refiriéndose al organismo financiero internacional que “no debería ni hablar y debería suicidarse”. (La Vanguardia, 2008). Para ese momento, Venezuela había saldado toda la deuda con ambos organismos (CADTM, 2008).

El mismo año, el 15 de agosto de 2007, Chávez presentó un proyecto de reforma de la Constitución. El principal objetivo de la reforma era avanzar hacia una nueva etapa de la revolución, la etapa socialista². No obstante, y a pesar de que la propuesta de reforma no fue aprobada en el referéndum celebrado el 2 de diciembre del 2007, Chávez puso en marcha el Plan de Desarrollo Económico y Social de

² Para un análisis detallado de la propuesta de reforma constitucional de 2007, ver Magallanes, R. (2009).

la Nación 2007-2013 (MPPP, 2007) en el cual se definían los objetivos y las acciones para avanzar hacia el Socialismo del siglo XXI bajo las directrices de una nueva ética socialista, la suprema felicidad social, la democracia protagónica y revolucionaria, un modelo productivo socialista (Magallanes, 2009).

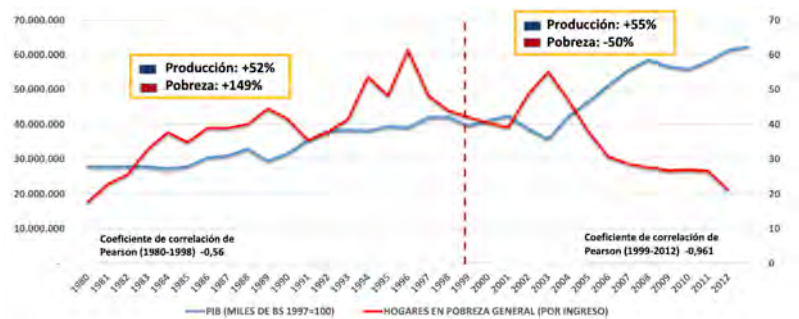
Tiempos Neoliberales vs tiempos de revolución (en cifras)

Hemos seleccionado algunos indicadores que, con una perspectiva histórica, dan muestra de las grandes diferencias entre el modelo neoliberal instaurado durante el período 1980-1998 en Venezuela y el modelo contrario durante la revolución bolivariana. El gráfico 1 contrasta el crecimiento económico (principal objetivo del neoliberalismo) con los niveles de pobreza. Se observa que, si bien durante los tiempos neoliberales (1980-1998) la producción nacional medida por el producto interno bruto creció 52% también aumentó 142% la pobreza general medida por nivel de ingresos. Esta correlación directa entre ambas variables se invierte durante la revolución, entre 1999 y 2012 el PIB aumentó 55%, pero a diferencia del período anterior, la pobreza disminuyó 50%. Acotamos que el comportamiento de ambas variables en 2003 estuvo determinado por la huelga general y el sabotaje a PDVSA por parte de los factores políticos que hacían oposición al gobierno de Chávez lo que implicó un mayor esfuerzo de recuperación económica y social.

El gráfico 1 es una fotografía del fracaso del neoliberalismo en Venezuela: a pesar de un crecimiento económico similar en cuanto magnitudes entre ambos períodos, mientras que en aquel cuyas políticas se basaron en el dogma del fundamentalismo de mercado la pobreza se multiplicó por 2,5 veces, en el período revolucionario se redujo a la mitad, lo que da cuenta de que esa mayor riqueza se distribuyó de manera más desigual entre 1980 y 1998 y menos desigual entre 1999 y 2012.

El gráfico 2 contrasta la tendencia de la producción medida por el PIB en Venezuela entre 1980 y 1998 y la desigualdad medida por el índice GINI para el mismo período. En los tiempos de neoliberalismo la desigualdad aumentó a pesar de que incrementó la producción nacional, por el contrario, entre 1999 y 2012, la desigualdad disminuyó.

Gráfico 1.
Producción y pobreza. República Bolivariana de Venezuela



Fuente:
Pobreza:
Desde 1980 hasta 1997: IESA (1999) en López M. y Lander E. (2001). "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998" en "El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alteranivas" CLACSO. Buenos Aires. DEsde 1998 hasta 2015: Instituto Nacional de Estadística. Varios años
PIB: Banco Central de Venezuela. Cuentas Nacionales. Varios años.

Gráfico 2.
Pobreza y desigualdad. República Bolivariana de Venezuela



Fuente:
Pobreza:
Desde 1980 hasta 1997: IESA (1999) en López M. y Lander E. (2001). "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998" en "El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alteranivas" CLACSO. Buenos Aires. DEsde 1998 hasta 2015: Instituto Nacional de Estadística. Varios años
GINI: Instituto Nacional de Estadísticas. Varios años.

Otro indicador importante es el salario, sobre todo el salario real o poder adquisitivo, especialmente porque, como mencionamos antes, la receta neoliberal radica en liberar los precios de todas las mercancías y congelar los salarios derivando en mayor explotación de la clase obrera y por tanto mayor acumulación y concentración de capital. En el gráfico 3 se observa que durante el período 1980-1998 mientras el PIB aumentó 52% el salario real disminuyó 55%; en cambio, en tiempos de revolución esa tendencia se revierte: el crecimiento de la producción (55%) estuvo acompañado del aumento del salario real (49%).

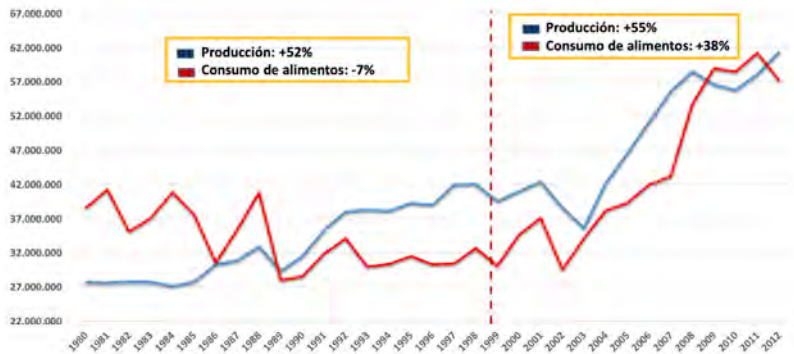
Gráfico 3.
Producción y salarios. República Bolivariana de Venezuela



Fuente: Banco Central de Venezuela: Informes Cuentas Nacionales. Varios años. Instituto Nacional de Estadística.

Hemos seleccionado un par de indicadores sociales para mostrar no solo el fracaso del neoliberalismo sino sus efectos criminales sobre la población. En el gráfico 4 se evidencia que, durante el período neoliberal, el aumento del 52% de la producción nacional estuvo acompañado de una disminución del 7% del consumo de alimentos, llegando a niveles inferiores a 2.200 Kcal por persona al día que, de acuerdo con la FAO es el nivel de hambruna. Por el contrario, entre 1999 y 2012, el aumento del 50% del PIB estuvo acompañado del aumento de 38% del consumo de alimentos alcanzando en promedio, las 3.092 Kcal/persona/día.

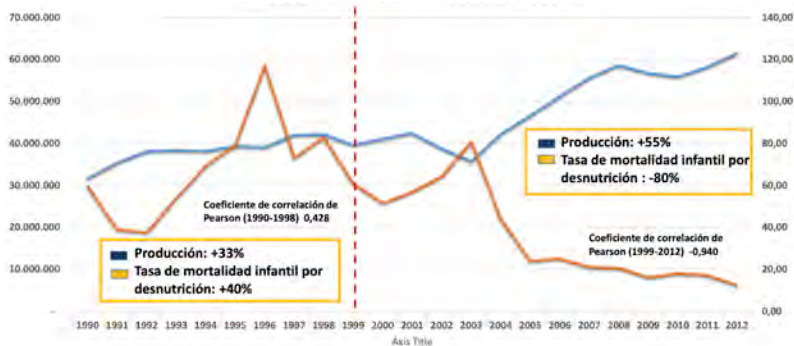
Gráfico 4.
Producción y consumo de alimentos. República Bolivariana de Venezuela



Fuente: Banco Central de Venezuela: Informes Cuentas Nacionales. Varios años. Instituto Nacional de Estadística.

Los niveles de consumo de alimentos se vieron reflejados en las muertes de venezolanos. En el gráfico 5 se compara la tendencia de la producción nacional con las muertes de niños menores de 1 año por deficiencias de nutrición. Se evidencian con este indicador los efectos criminales del neoliberalismo: entre 1990 y 1998, a pesar de que la economía creció 33% también aumentaron 40% las muertes de niños menores de 1 año por desnutrición. A partir de 1999 cuando se revierten las políticas del Consenso de Washington, también se revierten

Gráfico 5.
Producción y mortalidad infantil por deficiencias de nutrición.
República Bolivariana de Venezuela



Fuente: Ministerio del Poder Popular para la salud

las tendencias de estas variables: la economía creció 55% entre 1999 y 2012 y las muertes de niños menores de 1 año disminuyó 80%.

Guerra económica. ¿De vuelta al neoliberalismo? (2013-2023)

Luego del fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013 y de la convocatoria a elecciones en abril del mismo año en las que Nicolás Maduro fue electo presidente de la República con el 50.61% de los votos, el imperialismo estadounidense intensificó la guerra no convencional, difusa y multidimensional contra el pueblo venezolano³. Guerra que inició desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 y que continúa a la fecha.

El ámbito económico ha tenido un peso importante en dicha guerra, entre las armas empleadas se encuentran el bloqueo comercial y financiero, el ataque al bolívar y la hiperinflación inducida⁴ que, sin duda, han tenido un impacto sin precedentes sobre los venezolanos. Para mencionar algunos indicadores: el PIB disminuyó 72% entre 2013 y 2022; los precios han aumentado 5.131.540.335.478% desde enero de 2013 hasta mayo de 2023; la depreciación inducida del bolívar consecuencia del ataque a la moneda ha sido 452.418.096.723.769%; las reservas internacionales pasaron de 21.481 millones de dólares en 2013 a 9.660 millones de dólares en junio de 2023, disminuyendo 55%; las exportaciones de petróleo cayeron 90% entre 2013 y 2021. No

³ Para mayor detalle acerca de la guerra difusa contra Venezuela ver: República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del poder popular para la Defensa. Guerra Difusa. Una guerra multidimensional y multiforme, de carácter no convencional aplicada a la República Bolivariana de Venezuela. 2020. Editorial Hormiguero

⁴ Ver Curcio, Pasqualina (2016). La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela. Curcio, Pasqualina (2019). Hiperinflación. Arma imperial. Curcio Pasqualina (2021). Teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica.

hay duda del impacto criminal de la guerra no convencional que el imperialismo ha declarado a los venezolanos⁵.

En este contexto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro (2013-2023) ha anunciado y ejecutado un conjunto de medidas que, si bien en el discurso tienen como objetivo contrarrestar los efectos de la guerra no convencional, en algunos casos, específicamente en las políticas económicas, guardan estrechas similitudes con el decálogo propuesto por John Williamson en 1989.

Entre dichas medidas resaltamos la aprobación en 2017 por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de la ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva mediante la cual se le otorga un conjunto de incentivos a los capitales extranjeros para que inviertan en nuestro país. En el artículo 22 se establece: “La inversión extranjera podrá gozar de condiciones favorables, beneficios o incentivos generales o específicos de promoción y estímulo según los intereses de desarrollo económico productivo del país diferenciando entre los distintos tipos de inversión” (Gaceta Oficial 41.310, 29/12/2017).

Por su parte, el artículo 23 dice: “Las condiciones favorables a que se refiere el artículo anterior podrán ser las siguientes: 1. Desgravámenes. 2. Amortización acelerada. 3. Compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público. 4. Bonificación en impuestos. 5. Exenciones arancelarias. 6. Exenciones tributarias. 7. Condiciones crediticias especiales. 8. Tarifas especiales en servicios públicos. 9. Acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas por el Estado. 10. Plazo de duración de la estabilidad tributaria. 11. Cualquier otro dispuesto por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial 41.310, 29/12/2017).

En la misma línea, en julio de 2022, fue aprobada la Ley de Zonas Económicas Especiales, mediante la cual se otorga un conjunto de

⁵ Para más detalle sobre el impacto de la guerra no convencional contra Venezuela ver: Revista Mundo Nuevo. Una mirada plural desde Nuestra América. Tercera Etapa, Año I, N° 1. Noviembre, 2022 del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Simón Bolívar. <https://www.iaael.usb.ve/inicio/revista-mundo-nuevo/tercera-etapa-2022/revista-n%C2%BA-1-noviembre-2022>

privilegios a los capitales extranjeros, entre ellos, a partir del artículo 27 se establecen incentivos fiscales, aduaneros, bancarios y financieros, entre otros (Gaceta Oficial 6.710 Extraordinaria, 20 de julio de 2022)⁶.

En agosto de 2018 fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el Decreto Constituyente derogatorio del Régimen Cambiario y sus ilícitos (Gaceta Oficial No. 41.452 de fecha 2 de agosto de 2018) mediante el cual se revierte el control cambiario establecido en 2003 por el presidente Hugo Chávez, en tal sentido se libera y unifica el tipo de cambio.

Al respecto, es necesario resaltar que, a pesar del bloqueo y de la disminución considerable de los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, el BCV ha continuado asignando divisas al sector privado. Lamentablemente no disponemos de estas cifras oficiales desde el año 2015⁷; no obstante, se estima que, el año 2022 la intervención cambiaria del BCV mediante la inyección de divisas ascendió a 5.400 millones de dólares (Bancaynegocios, enero 2023) y desde enero hasta junio de 2023 el BCV intervino con 1.985 millones de dólares (Bancaynegocios, junio 2023). Estas divisas provienen de la exportación de petróleo, la cual ha registrado un leve incremento debido al aumento del precio del petróleo en los mercados mundiales luego de la pandemia del Covid-19 en 2021 y a raíz de la guerra entre Rusia y la OTAN desde 2022, divisas que son apropiadas, como históricamente ha ocurrido, por los grandes capitales.

En octubre de 2019, el Banco Central de Venezuela indexó los créditos comerciales de la banca a lo que denominó la Unidad de Valor de Crédito. En fecha 21 de octubre de 2019, a través de la Gaceta

⁶ Para mayor detalle acerca de la aprobación de las leyes de inversiones extranjeras y de zonas económicas especiales ver conferencia de Britto García Luis la cual ofreció en el Ciclo de Foros sobre la Economía Venezolana el 15 de marzo de 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=WsuCfwBbF54>

⁷ No se dispone de información económica y social desde el año 2015, momento en que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de Venezuela, decidió no publicar los indicadores. La escasa información que se tiene es extraoficial o proveniente de algunos organismos multilaterales.

Oficial No. 41.742, fue publicada la Resolución No. 19-09-01 de fecha 5 de septiembre de 2019, mediante la cual se establece que los créditos comerciales a ser otorgados en moneda nacional por las instituciones bancarias deberán ser expresados únicamente mediante el uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC) (Lega, s.f.).

Desde el año 2018 ha habido una liberación, de hecho, de todos los precios de la economía, incluyendo las tarifas de servicios públicos (principalmente en manos del Estado) y de transporte, cuyos precios, son referenciados en dólares y cuya conversión en bolívars se realiza al tipo de cambio liberado en el mercado. Es necesario resaltar que el presidente Nicolás Maduro en noviembre de 2019 se pronunció en favor de la dolarización de la economía que a la fecha de hoy se mantiene vigente, al respecto dijo: “ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Es una válvula de escape, gracias a Dios existe” (Correo del Orinoco, 2019).

Por su parte, en mayo de 2020, el presidente Maduro no solo anunció un aumento del precio de la gasolina, sino que lo fijó en dólares estadounidenses lo que permitiría su indexación con el tipo de cambio, el precio se fijó en 0,5 us\$/lt. Adicionalmente anunció la autorización de la participación de empresarios privados en el negocio del combustible que, hasta la fecha, se había mantenido exclusivamente en manos del Estado (CNN, 2020).

Mientras todos los precios de las mercancías fueron liberados, el salario real ha disminuido 99% desde el año 2018. En agosto de ese año, el presidente Maduro, en el marco del anuncio del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica del país (MINCI, 2018) decretó un aumento del salario nominal equivalente a 60 veces el salario que estaba vigente (Alba Ciudad 96.3, 2018). Sin embargo, a partir de esa fecha y dado el incremento de los precios de las mercancías, los cuales no han estado acompañados de aumentos salariales en la misma proporción, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución (CRBV, 1999), el salario real se ha pulverizado.

Actualmente, el salario mínimo legal equivale a 4,78 dólares mensuales mientras que la canasta básica para un hogar de 4 personas se estima en 540 dólares mensuales. La situación salarial es extensiva a los más de 5 millones de pensionados.

Los pocos aumentos de los ingresos de los trabajadores en términos nominales se han realizado por la vía de bonos y no a través del salario propiamente dicho, lo que ha incidido en un fuerte deterioro de las prestaciones sociales de los trabajadores que, si bien no han sido eliminadas por ley, tienden, de hecho, a cero debido al bajo salario. La bonificación del ingreso de los trabajadores también ha incidido en el deterioro de otros beneficios cuya base de cálculo es el salario, entre ellos lo correspondiente a vacaciones, utilidades y otras primas (Moleiro, 2023).

El argumento que ha esgrimido el gobierno ante la política de congelación de los salarios es la situación de bloqueo financiero a la que ha estado sometido el pueblo venezolano que ha implicado la disminución de los ingresos al país. No obstante, y a pesar de que hemos demostrado la posibilidad de económica de aumentar los salarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución⁸ dicho discurso por parte de los voceros del gobierno contrasta con el escándalo de corrupción PDVSA-Cripto develado por el Fiscal General de la República el 25 de marzo de 2023 (CriptoNoticinas, 25-03-2023), desvío de recursos que se estima en 21.200 millones de dólares (Tal Cual, 23-03-2023).

En mayo de 2022, el presidente Maduro anunció el inicio de un conjunto de privatizaciones de empresas públicas que incluyen las comunicaciones, petroleras, gas y minería. Al respecto dijo: "El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela [...] vamos a sacar -a la venta- entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional y usted podrá convertirse en inversionista [...] Usted se

⁸ Ver Curcio, Pasqualina (2021). Teoría General de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica. Editorial Trinchera. Caracas.

podrá convertir en inversionista de (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela) CANTV, de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios) (Casas Lugo, 2022).

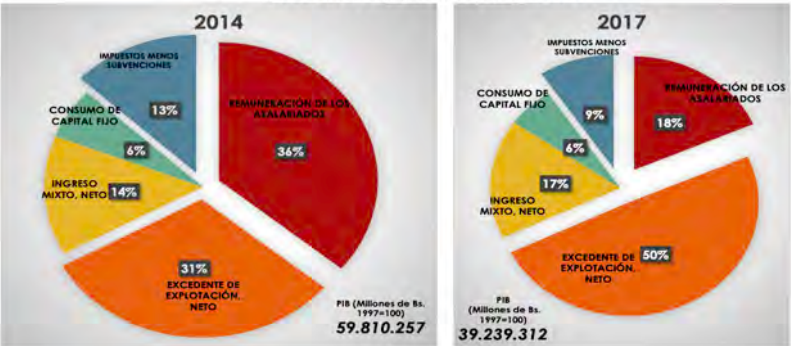
Adicionalmente, el Banco de Venezuela, anunció en mayo de 2022, la venta progresiva de su capital social, como parte del plan del gobierno del presidente Nicolás Maduro para capitalizar las empresas públicas. Se trata del mismo banco que, en 2009 fue estatizado por Hugo Chávez, pero además el primer banco del país con más de 15 millones de clientes (El Economista, 2022).

No disponemos de indicadores sociales que nos permitan realizar un análisis del impacto de estas políticas en lo que a pobreza, desigualdad y condiciones de vida del pueblo venezolano se refiere. No obstante, no es complicado aproximarse a los niveles de pobreza cuando sabemos que el precio mensual de la canasta básica equivale a 135 veces el salario mínimo y las pensiones. De hecho, cifras hasta el año 2017 (incluso antes de que iniciara con mayor intensidad la ejecución de las políticas que favorecen a los grandes capitales) la distribución factorial del ingreso nacional se hizo más desigual.

En el gráfico 6 se comparan los años 2014 y 2017, se observa que en 2014 la parte del PIB que era apropiada por la burguesía, medido por el excedente neto de explotación, representaba el 31%, mientras que a la clase obrera le era destinado el 36%. En 2017, aumentó el porcentaje apropiado por la burguesía a 50%, la mitad del PIB, mientras que lo que se destinó a la clase trabajadora fue el 18% (BCV, varios años).

Finalizamos este recuento de lo que ha sido el neoliberalismo en Venezuela las últimas 5 décadas diciendo que, contradictoria y asombrosamente, las políticas económicas ejecutadas desde el año 2018 a la fecha, han sido comunicadas al pueblo venezolano en el marco de un discurso, no populista, sino socialista, revolucionario y antiimperialista.

Gráfico 6.
Distribución Factorial de la Producción Nacional.
República Bolivariana de Venezuela



Fuente: Banco Central de Venezuela, Cuentas consolidadas de la Nación, <https://www.bcv.org.ve/estadisticas/cuentas-consolidadas-de-la-nacion>.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alba Ciudad 96.3 FM (17 de agosto de 2018). Maduro fija el salario mínimo a 1800 bolívares soberanos: Asumirá el diferencial de nóminas en pequeña y mediana industria por 3 meses. <https://albaciudad.org/2018/08/maduro-salario-minimo-agosto-2018-bolivares-soberanos-petro/>

AFP (25 de mayo de 2022). Banco de Venezuela venderá hasta el 10% de sus acciones. *El economista*. <https://www.economista.com.mx/economia/Banco-de-Venezuela-vendera-hasta-el-10-de-sus-acciones--20220525-0049.html>

Banca y Negocios (02 de enero 2023). Datos | BCV aumentó 252% gasto de intervención cambiaria en 2022: Así se comportó el dólar. <https://www.bancaynegocios.com/datos-bcv-aumento-252-gasto-de-intervencion-cambiaria-en-2022-asi-se-comporto-el-dolar/#:~:text=2022%20termina%20con%20un%20aumento,17%2C49%20bol%C3%ADvares%20por%20d%C3%B3lar.>

Banca y Negocios (13 de junio de 2023). Con US\$70 millones este #13Jun, BCV acumula US\$1.985 millones en intervención cambiaria este año. <https://www.bancaynegocios.com/intervencion-cambiaria-bcv-junio-2023/>

Banco Central de Venezuela (varios años) Cuentas Nacionales. Cuentas Consolidadas de la Nación. <https://www.bcv.org.ve/estadisticas/cuentas-consolidadas-de-la-nacion>

Banco Central de Venezuela (varios años). Estadísticas. <https://www.bcv.org.ve/#>

BBC (8 de mayo de 2009). Cronología de las estatizaciones. https://www.bbc.com/mundo/economia/2009/05/090508_cronologia_estatizaciones_venezuela

Britto García Luis (15 de marzo 2023). Ciclo de Foros sobre la Economía Venezolana [video]. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=WsuC-fwBbF54>

- CADTM (2008). Presidente Chávez: Venezuela no tiene deudas con el BM y con el FMI.. <http://www.cadtm.org/Presidente-Chavez-Venezuela-no>
- Casas Lugo, Roberto (12 de mayo de 2022). Maduro anuncia privatización de hasta el 10% en empresas públicas. *Portafolio*. <https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-nicolas-maduro-anuncia-privatizacion-de-hasta-el-10-en-empresas-publicas-565322>
- Centro de Estudios Públicos (1992). "El Ladrillo". Bases de la política económica del gobierno militar chileno. *Memoria chilena*. <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0032306.pdf>
- CNN. (20 de mayo de 2020). Maduro anuncia una subida del precio de la gasolina en Venezuela y la participación de empresarios privados en el suministro. *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52865355>
- Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Asamblea Nacional*. <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/botones/constitucion-nacional-20191205135853.PDF>
- Correo del Orinoco* (17 de noviembre de 2019). Maduro: proceso de dolarización puede servir para el funcionamiento de la economía. <http://www.correodelorinoco.gob.ve/maduro-proceso-de-dolarizacion-puede-servir-para-el-funcionamiento-de-la-economia/>
- CriptoNoticias* (25 de marzo de 2023). Fiscal de Venezuela confirma: desde la Sunacrip se evadían pagos por venta de petróleo. <https://www.cripto-noticias.com/judicial/fiscal-venezuela-confirma-desde-sunacrip-evadian-pagos-venta-petroleo/>
- Cuba Debate* (01-03-2004). Chávez en el G-15: "El neoliberalismo prometió riqueza y ha multiplicado la pobreza". <http://www.cubadebate.cu/especiales/2004/03/01/chavez-g-15-neoliberalismo-prometio-riqueza-multiplicado-pobreza/>
- Curcio Pasqualina (2019). *La Economía venezolana. Cuentos y verdades*. Caracas: Editorial Trinchera.
- _____ (2021). *Teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica*. Caracas: Editorial Trinchera.

- (2016). *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*. Venezuela: Editorial Nosotros Mismos.
- (2019). *Hiperinflación. Arma imperial*. Venezuela: Editorial Nosotros Mismos.
- El País* (01 de mayo de 2007). Chávez anuncia la salida de Venezuela del FMI y del Banco Mundial. https://elpais.com/economia/2007/05/01/actualidad/1178004773_850215.html
- El País* (16 de mayo de 2002). Hugo Chávez: "El neoliberalismo es el camino de conduce al infierno". https://elpais.com/diario/2002/05/17/internacional/1021586404_850215.html
- El Universo* (18 de noviembre de 2019). Maduro: Transacciones en dólares son una "válvula de escape" para favorecer la economía en recesión. <https://www.youtube.com/watch?v=YoNAJJlGBvA>
- Eric Toussaint (s.f.). La crisis de la deuda en América Latina en los siglos XIX y XX. *Comité para la abolición de las deudas legítimas*. <http://hendrikpangea.org/imagenes/toussaint01.pdf>
- EuropaxCuba (2009). La doctrina del shock, una contra historia del neoliberalismo [video]. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=fwfJ29GADI>
- IESA (1999). En Margarita López y Luis E. Lander (2001), Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998. En Emir Sader (comp.), *El ajuste estructural en América Latina*. Costos sociales y alternativas. Buenos Aires: CLACSO.
- InterPress Service (14-10-1996). Venezuela: Caldera sostiene programa de ajustes y privatizaciones. *Ips noticias*. <https://ipsnoticias.net/1996/10/venezuela-caldera-sostiene-programa-de-ajustes-y-privatizaciones/>
- La Vanguardia* (08-10-2008). Chávez achaca la crisis al FMI y asegura que ese organismo "debería suicidarse" <https://www.lavanguardia.com/economia/20081008/53556481200/chavez-achaca-la-crisis-al-fmi-y-asegura-que-ese-organismo-deberia-suicidarse.html>
- Lega* (s.f.). Resolución del Banco Central de Venezuela que establece que los créditos comerciales en moneda nacional otorgados por la banca de-

- berán ser indexados a la unidad de valor de crédito comercial (UVCC). <https://lega.law/lega-letter-97/>
- Magallanes, Rodolfo (2009). El gobierno de Hugo Chávez: ¿qué lo distingue de los anteriores? *Revista Politeia*, 42 (32), 97-137.
- MINCI (2018). LÍNEAS | Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. <http://www.minci.gob.ve/lineas-programa-de-recuperacion-crecimiento-y-prosperidad-economica-2/>
- Moleiro, Alonso (06 de mayo de 2023). Crece el malestar por los bajos salarios en Venezuela incluso entre los chavistas. *El País*. <https://elpais.com/internacional/2023-05-06/crece-el-malestar-por-los-bajos-salarios-en-venezuela-incluso-entre-los-chavistas.html>
- MPPP (2007). Líneas generales del Plan de desarrollo económico y social de la nación 2007-2013. <http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2007-2013.pdf>
- Nazareth, Carolina (7 de julio de 2021). Ejecutivo celebra 12 años de la nacionalización del Banco de Venezuela para el impulso económico y financiero. *MPPEF* <http://www.mppef.gob.ve/ejecutivo-celebra-12-anos-de-la-nacionalizacion-del-banco-de-venezuela-para-el-impulso-economico-y-financiero/>
- Ocando, Gustavo (23 de marzo de 2023). El «saqueo» en Pdvsa sería de hasta tres veces el presupuesto fiscal 2023 en Venezuela. *TalCual*. <https://talcualdigital.com/el-saqueo-en-pdvsa-seria-de-hasta-tres-veces-el-presupuesto-fiscal-2023-en-venezuela/>
- Palma, Pedro (s.f.). La economía venezolana en el quinquenio 1994-1998: de una crisis a otra. *Pedro Palma*. <https://pedroapalma.com/site/la-economia-venezolana-en-el-quinquenio-1994-1998-de-una-crisis-a-otra/>
- PSUV (24 de enero de 2016). Hace 14 años Chávez puso fin a la especulación de los créditos indexados. <http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/hace-14-anos-chavez-puso-fin-a-especulacion-creditos-indexados/>
- Rangel, Rubí y Reyes, Ernesto (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales. *Política y Cultura*, 37, 35-64.

República Bolivariana de Venezuela. Ley Constituional de Inversión Productiva. <http://fedindustria.org/leyesanc/41310.pdf>

República Bolivariana de Venezuela. Resolución mediante la cual se fija en todo el territorio nacional el precio máximo de venta al público (PMVP) para los productos alimenticios que en ella se mencionan.

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del poder popular para la Defensa. (2020). *Guerra Difusa. Una guerra multidimensional y multi-forme, de carácter no convencional aplicada a la República Bolivariana de Venezuela*. Venezuela: Editorial Hormiguero. <https://www.hormiguero.com.ve/download/guerra-difusa-2020/>

República Bolivariana de Venezuela. Decreto Constituyente mediante el cual se establece la derogatoria del régimen cambiario y sus ilícitos. Gaceta Oficial 41452 (2 de agosto de 2018). <https://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/en-gaceta-oficial-derogatoria-de-ley-de-ilicitos-cambiaros>

República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial 6710 Extraordinaria (20 de julio de 2022). <https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2022/07/Ley-organica-de-las-zonas-economicas-especiales.pdf>

Seijas, Carlos (07 de febrero de 2020). Venezuela cumple 17 años bajo control de precios y sin libertad económica. *TalCual*. <https://talcualdigital.com/venezuela-cumple-17-anos-bajo-control-de-precios-y-sin-libertad-economica/>

Revista Mundo Nuevo. Una mirada plural desde Nuestra América, 1 (1). <https://www.iaea.usb.ve/inicio/revista-mundo-nuevo/tercera-etapa-2022/revista-n%C2%BA-1-noviembre-2022>

Vinogradoff, Ludmila (11 de julio de 1990). Venezuela inicia un proceso de privatización de sus empresas. *El país*. https://elpais.com/diario/1990/07/11/economia/647647209_850215.html

Bases de datos:

Banco Mundial. <https://datos.bancomundial.org/pais/venezuela?view=chart>

Instituto Nacional de Estadística (varios años): <http://www.ine.gob.ve/>

Ministerio del poder popular para la Salud (varios años). Anuario de mortalidad.

QUINTA PARTE:

ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y EL
NEOCOLONIALISMO EN EL GRAN
CARIBE

Neoliberalismo en Panamá; retrospectiva desde el golpe militar de 1968

*William R. Hughes O.*¹

¿Por qué el neoliberalismo?

Para finales de los años sesenta, la valoración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre las economías latinoamericanas era que enfrentaban una crisis de balanza de pagos. Ciertamente, el proceso de sustitución de importaciones canalizó la producción al mercado interno pero ello no disminuyó las importaciones de bienes intermedios y capital fijo, por lo que era demandante neto de divisas. También resalta la importancia de la inversión extranjera en el proceso de sustitución de importaciones y su impacto en la demanda de divisas para las transferencias de utilidades y dividendos, e incluso de intereses de préstamos que realizaban entre filial y casa matriz, y del endeudamiento de los países para cubrir los déficits de cuenta corriente. La CEPAL caracterizó este proceso

¹ Profesor e investigador Titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

de “circulo vicioso en que los desequilibrios en la cuenta corriente obligaron a un creciente financiamiento del exterior; lo que, a su vez, exigió un incremento persistente de los pagos al exterior; esto redundó en presiones sobre la capacidad para importar, que plantearon nuevamente la necesidad de mayores financiamientos externos” (CEPAL, 1970, p. 31)².

La CEPAL urgía al cambio del patrón de acumulación de capital hacia “la diversificación de las exportaciones”³ como mecanismo de generar divisas y enfrentar la crisis de balanza de pagos. Todo ello contrastaba con altas tasas de crecimiento económico para toda la región durante la década del sesenta, lo cual, al entender de la CEPAL, estaba amenazado por aquel deterioro. No obstante, otra circunstancia se verificaba a finales de los años sesenta, como resultado del proceso de acumulación de capital postsegunda guerra mundial. Se trataba del desarrollo del capital financiero internacional, tanto a nivel mundial como en América Latina⁴ conjugado con los denominados “eurodólares”, resultado del financiamiento del “Plan Marshall” y de la guerra de Vietnam, la “guerra fría”, el control por el espacio, entre otras. La situación de América Latina se insertaba en un contexto más general de crisis del capitalismo de finales de los años sesenta, la cual tuvo como manifestación relevante, la “crisis del dólar” (Mandel, 1974 y Zarifian, 1975). Esto configuró una

² En diversos informes CEPAL fue reiterado el impacto negativo de los pagos de utilidades, dividendos e intereses a la inversión extranjera, en el saldo de la cuenta corriente y en el endeudamiento (1968, p 119-120, p. 143). En 1969, se señaló que los pagos al capital extranjero habían representado el 35% de las exportaciones (p.3), y el tema se retomó en distintas partes del documento (p. 14-16, cuadro 21 p.75, p. 82-83, y cuadro 24). 1970, Cuadro 74, p. 105 tiene detalles de los componentes de la balanza de pagos.

³ El informe de 1969, la CEPAL enfatizó la importancia de la diversificación de las exportaciones, en la estrategia latinoamericana.

⁴ Al respecto puede verse en Gorastiaga X (1978), Jiménez (1979) Sunkel (1984) y Marini (1979). Marini, sobre el desarrollo del capital financiero señala: “los bancos norteamericanos que tenían filiales en el exterior eran 11 en 1964 y 125 diez años después, mientras sus activos pasaban de poco menos de 7 a 155,000 millones de dólares. Ese fenómeno, [...] alcanzó también a la banca europea y japonesa, y que se vio incrementado con la producción de excedentes monetarios en países dependientes, particularmente los petroleros [...]”.

cantidad de dinero acumulado en los bancos que requerían ser prestados para poder pagar los intereses de tales depósitos. América Latina se presentaba como un “cliente ideal”; buen desempeño en sus tasas de crecimiento (buen sujeto de crédito), y con la idea de la diversificación de las exportaciones, se esperaba poder pagar los créditos. Pero el acceso “fácil”⁵ al crédito hizo que la reorientación de la acumulación de capitales hacia la diversificación de las exportaciones no fuera tan urgente, lo cual era muy conveniente a los grupos de poder sostenidos por el proceso de sustitución de importaciones, en el cual la inversión extranjera había sido importante protagonista. Jiménez (1979), señala el aumento de las filiales a partir de 1939, cuando se registraba 114 filiales de empresas transnacionales, siendo 259 en 1960 y 950 en 1967. Jiménez (1979)⁶. La constitución de la OPEP y el alza de los precios del petróleo en 1973, afianzaría los depósitos bancarios y la necesidad de su colocación en créditos. Los países exportadores de petróleo de América Latina, México, Venezuela y Ecuador, ahora tampoco tenían urgencia de redefinir sus economías hacia las exportaciones no tradicionales.

El giro hacia el paradigma neoliberal no fue homogéneo en todos los países, pero sí encontró un asidero general en el endeudamiento externo, cuyo límite se mostró a inicios de los años ochenta. Conviene reiterar que el proceso de endeudamiento se gesta con el proceso de acumulación de capitales que se desarrolla postsegunda guerra mundial, que en el caso de América Latina enfatizó la sustitución de importaciones. El episodio emblemático del deterioro de la capacidad de endeudamiento lo fue la declaración unilateral de moratoria por parte de México, en 1982.

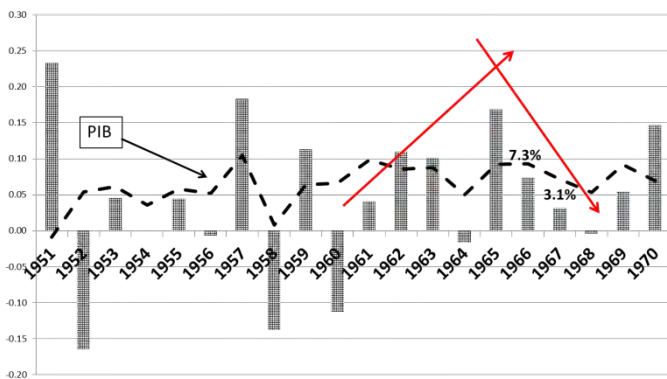
En Panamá, por su parte, la expresión política de la crisis de finales de los años sesenta, significó un golpe militar (como en otros

⁵ Aquí lo “fácil” está en función de las necesidades de los bancos de colocar sus depósitos acumulados y el que la región tenía un buen desempeño económico, pero requería financiar los déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos. El cobro del crédito se vería después.

⁶ El dato lo toma de Vaupel y Curham, (1969, p. 117).

países de América Latina), aunque se trató de dirimir pugnas interburguesas por el control de la administración del Estado, en el marco de una crisis de las formas de dominación, ascenso de la organización y la lucha social, y la disminución de la tasa de ganancia. Durante los años sesenta, sobre todo desde 1965, aunque las variaciones de la tasa de ganancia eran positivas, progresivamente era menor, hasta alcanzar condición negativa en 1968. (Gráfica 1)⁷. Mientras tanto, la magnitud de las ganancias aumentó al 3.5% anual, la inversión en capital creció al 9% anual, durante el período 1950-1968, aunque la inversión neta de capital apenas creció al 0.6% anual, evidenciándose que la mayor parte de las ganancias correspondía a depreciación. La depreciación acelerada del capital fijo constituye un procedimiento regular del capital, para aumentar sus ganancias y reducir pagos de impuestos.

Gráfica 1. Panamá: PIB y variación de la tasa de Ganancia: 1951-1970



Esta tendencia de la tasa general de ganancia en Panamá, se conjugó con el aumento de la captación de excedente por parte del estado a través de los ingresos tributarios, cuya participación aumentó de 9.2% a 10.4% en el período 1963-1968, lo que exacerbó las

⁷ Todas las gráficas incluidas, a menos que se señale lo contrario, han sido elaboradas en base a datos de la Contraloría General de la República, Panamá.

contradicciones interburguesas, en tanto que tal captación del excedente por parte del sector que administraba el estado, se tradujo en una menor tasa de ganancia apropiada privadamente. Otro elemento que afectó negativamente la tasa de ganancia lo fue el aumento de la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el Producto Interno Bruto (PIB), debido al aumento de la actividad productiva que motivó el proceso de sustitución de importaciones, y al aumento de los trabajadores públicos, como resultado del desarrollo institucional del Estado. Esta participación aumentó de 47% del PIB en 1950 a 60% en 1968.

Al igual que América Latina, Panamá tampoco mostraba agotamiento claro del proceso sustitutivo de importaciones, aunque padecía problemas similares a los descritos previamente para el conjunto de la región. La tendencia al agotamiento del esquema de acumulación en Panamá, que progresivamente deterioró la forma de dominación burguesa, se encuentra en las contradicciones que dicho esquema provocó, tanto entre los propios sectores del capital por el control de la administración del Estado, como entre estos sectores y los trabajadores, debido a las formas represivas de dominación política y a la reacción de la burguesía contra los trabajadores, para enfrentar la tendencia de la tasa de ganancia. El golpe militar de 1968 es resultado de la incapacidad de la burguesía de dirimir sus contradicciones mediante mecanismos electorales –la forma histórica de hacerlo– produciéndose una inestabilidad política que afectaba la readecuación del papel de Panamá en la dinámica del capitalismo mundial. Esta funcionalidad histórica fue cumplida desde antes de su separación de Colombia en 1903, y se inscribió en la esfera de circulación del capital, primero con el Ferrocarril Transístmico y luego con el Canal de Panamá. Sin embargo, desde esta separación, y con el beneplácito de los llamados próceres, los Estados Unidos tendrían una influencia decisiva en la definición del papel de Panamá en el marco del desarrollo del capitalismo mundial. Por tanto, el recambio en el esquema de acumulación en Panamá después del golpe de estado de 1968 no obedeció al “agotamiento del modelo de sustitución de

importaciones”, sino, esencialmente, a los requerimientos del capital internacional de redefinir el papel de Panamá en la dinámica del capitalismo mundial, que se debatía, igualmente, en una crisis global. Se trataba de Impulsar un patrón de acumulación sustentado en actividades vinculadas a la acumulación capitalista mundial (banca, reaseguros y zona libre de comercio, configurando la “Plataforma de Servicios Transnacionales) y no tenía el propósito de encontrarle respuestas a la crisis económica-política interna, en ciernes desde finales de los años sesenta, sino que se inscribía en la búsqueda de alternativas a la crisis económica mundial, y como tal, respondía a los intereses del capital transnacional. Este carácter estructural del capitalismo panameño es lo que estaba (y ha estado) en crisis, en todo caso. Una burguesía que históricamente abandonó el desarrollo de opciones propias del capitalismo y optó por reproducirse en función de los requerimientos del capitalismo mundial; terminó haciéndola su propia opción.

Las primeras expresiones de la política económica neoliberal de los años setenta y el acuerdo de 1979 con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

El hito histórico que marca la definición de la política económica hacia el paradigma neoliberal, lo constituye el primer acuerdo de estabilización con el FMI en 1979. El enfoque posterior al golpe militar de 1968, se fundamentó en un híbrido de intervención del estado en algunos sectores productivos, sobre todo para sostener una alianza política⁸ frente a las negociaciones de los tratados sobre el Canal de Panamá, y liberalización completa en los sectores vinculados a

⁸ Posterior al golpe de estado de 1968, se modificó la Ley industrial de 1957, a través del Decreto de Gabinete No. 413 de 30 de diciembre de 1970. Con esta modificación se pretendía concluir una serie de privilegios para el sector industrial, pero la fortaleza de entonces de dicho sector, lo impidió, siendo modificado escasos 8 meses después de aprobado, a través del Decreto de Gabinete No. 172 de agosto de 1971.

la plataforma de servicios transnacionales;⁹ centro bancario internacional, centro de compra-venta internacional en la Zona Libre de Colón, y el centro de seguros y reaseguros. La parte de intervención del estado fue sostenida con crédito externo, hasta donde fue posible. Entre 1975-1978 la deuda externa del sector público aumentó en 181.3% (1168.8 millones de balboas). La relación del déficit fiscal consolidado del sector público, con respecto al PIB fue de 18.6%; 12.4% y 14.8% en los años de 1976, 1977 y 1978 respectivamente. “Panamá” no tuvo dificultades de encontrar financiamiento externo hasta que debió refinanciar la deuda que vencía en 1976-1977, lo que coincidió con la parte final de las negociaciones sobre el Canal. La banca comercial solo mostró disposición de renegociar la deuda vencida, luego de firmados los tratados, el 7 septiembre de 1977.

Algunas acciones correspondientes con las políticas neoliberales definidas como “Consenso de Washington” (Williamson, 1990) se tomaron en la década del setenta. En 1974, se adoptó una serie de medidas lesivas a los sectores trabajadores¹⁰ argumentándose la situación de crisis económica. Igualmente se modificó el Código de Trabajo (Gaceta Oficial, 1976b), adoptado apenas 4 años antes, lesionando los acuerdos colectivos de trabajo, y se crea el impuesto al consumo (Gaceta Oficial, 1976a), que deterioraba el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Otros gastos relacionados con el apoyo a sectores campesinos y de alivio al desempleo, fueron progresivamente reducidos.

Los objetivos explícitos del acuerdo de junio de 1979 con el FMI se centraron en: a) disminuir el déficit fiscal; b) la redefinición del rol del estado en la economía y el consiguiente mayor impulso a la actividad privada; c) disminuir la demanda del sector público por crédito externo neto; y, d) crear progresivamente las condiciones para la liberación de la economía al mercado mundial y para reorientar la

⁹ Manduley (2014), le atribuye la expresión a Herbert de Souza y Gorostiaga (1979) que señala “[...] lo que nosotros hemos llamado plataforma de servicios internacionales” (p.76), sugiriendo su autoría.

¹⁰ Se le denominó “Declaración de Boquete”.

estructura productiva hacia las exportaciones. Recomendó suspender el control de precios, cambios en los aranceles de importación (p. 5).

Sobre el cumplimiento del Acuerdo con el FMI, el Banco Mundial (BM) afirmó que Panamá lo había “cumplido totalmente”. (BIRF (1983, p.4) Las medidas, aseguró, lograron reducir el déficit del 14.8% del PIB en 1978 al 11.6% en 1979, al 5.7% en 1980 y al 5.5% en 1981. Sin embargo, la “mejoría” de los resultados, poco o nada tenían relación con las recomendaciones del FMI. Los ingresos debidos al nuevo Tratado sobre el Canal, significaron el 16.1%, 34.6% y 79.9% de los aumentos en los ingresos corrientes del gobierno central en los años 1979, 1980 y 1981, respectivamente. Las medidas condicionadas del FMI tuvieron un éxito parcial en el gasto público. Tanto el total de salarios como el empleo, aumentó. Durante 1974-1978 los salarios crecieron 7.2% y el empleo 5.4%, y en 1978-1981, tales crecimientos fueron de 16.4% y 8.7%, respectivamente. La inversión disminuyó en 11% en 1979 y creció apenas 3.5% en 1980. Contrariamente, el servicio de la deuda externa (especialmente los intereses) aumentó su participación en los gastos corrientes de 32.6% en 1979 a 45.2% en 1981. Los intereses variaron su participación del 16.7% al 23.1% en los mismos años, mientras que las amortizaciones lo hicieron del 15.9% al 17.5%. La mejoría fiscal resultó favorable al capital financiero que reclamaba el pago de la deuda, que era el objetivo implícito del Acuerdo.

La política neoliberal en los ochenta y la crisis política

El análisis del acuerdo *stand by* de 1979 (1979-1981) con el FMI y de los PAE-I (1983) y PAE-II (1986) con el Banco Mundial, permite argumentar que la pregunta que los guió fue: *¿Cuánto ajuste era necesario para poder pagar la deuda externa?*¹¹. Este fue objetivo esencial de la política

¹¹ Williamson (1990) consigna este elemento, pero no lo presenta como un “consenso de Washington”. En primer lugar advierte que “los 10 temas en torno a los cuales

económica, encubierto con supuestos instrumentos “técnicos”. Los gobernantes hicieron suyo este objetivo, y jamás consideraron responder la pregunta correcta; *¿Cuáles eran las condiciones que debían tener las renegociaciones de la deuda externa, para que, dadas las expectativas de un bajo ritmo de crecimiento económico y de las exportaciones, se pudiera atender el servicio de la deuda; sin que ello atentara con la potencialidad del crecimiento futuro?*¹². La opción que se impuso hizo que los campos de los ajustes se fueran agotando y las dificultades de atender el servicio de la deuda, aumentaran, al mismo tiempo que coadyuvaban al clima de inestabilidad política que se desarrollaba. (Hughes, 2017)

Aun cuando se logró reducir la relación deuda externa-PIB, este indicador se deterioraba al momento que se debía refinanciar la deuda, lo cual se convirtió en una espiral de ascenso rápido, abonada con ajustes más severos en cada ronda de negociaciones. Estos resultados también los confirmó la CEPAL (1986, p. 9)¹³. Aquí también, la mejoría de la balanza comercial y de servicios fue para facilitar las transferencias de excedente al exterior, por ganancias, dividendos e intereses. La balanza comercial se mejoró durante 1980-1986, impulsando las exportaciones y reduciendo las importaciones¹⁴ como recomendaban el FMI y el Banco Mundial. Ello posibilitó financiar las salidas por el deterioro de los términos de intercambio y de pagos

se organiza el documento tratan de instrumentos de política más que de objetivos o resultados” (p.8), aunque, obviamente, tales instrumentos no pueden ejecutarse en abstracto.

¹² Claramente que la valoración de lo “correcto” e “incorrecto” de las preguntas, expresa intereses de clase particulares. La primera, hace del FMI y del BM, los agentes cobradores del capital financiero internacional; la segunda, es contraria a los intereses de los primeros.

¹³ Su balance fue “[...] la evolución de la economía de América Latina estuvo marcada por cambios contradictorios. Mientras las principales variables que miden el funcionamiento interno ... mostraron un mejoramiento moderado, la situación del sector externo se deterioró en forma notoria. Así, al tiempo que se aceleró el ritmo del crecimiento económico y se atenuaron el desempleo y la inflación, empeoraron los términos de intercambio, disminuyó el superávit comercial y se amplió fuertemente el saldo negativo del balance de pagos” (CEPAL, 1986, p. 9).

¹⁴ Estimado en base al Cuadro 6, p.19 de CEPAL, 1986.

netos a los factores del exterior (al capital extranjero, esencialmente), que aumentaron de 3.1% en 1979 a 7.8% en 1986. Tales acciones fueron paralelas al deterioro de los salarios reales. (CEPAL, 1986, p. 36-48)

Con la firma de los Tratados sobre el Canal de Panamá en septiembre de 1977, hubo compromisos políticos del General Torrijos con los Estados Unidos: el repliegue de los militares a los cuarteles, hacer elecciones, la apertura política para permitir el regreso de los exilados, y mejorar las relaciones con los sectores empresariales de oposición política. Representantes importantes del sector empresarial ya habían acompañado a los militares desde el golpe de estado. Asimismo, la alianza política que había sostenido el gobierno militar, había incluido, además de este importante sector empresarial, a sectores del campesinado, de los movimientos obrero y estudiantil, así como un sector de los profesores y maestros. Esta alianza fue sostenida en el gasto público que posibilitó el endeudamiento externo y en la respuesta a algunos reclamos laborales que los trabajadores demandaban desde los años sesenta. El Código de trabajo de 1972 plasmó estos reclamos, pero ya en 1976, el gobierno tuvo que hacerle modificaciones, aduciendo una situación de crisis económica. De manera que, los compromisos con los EE UU implicados con la firma del Tratado y los límites del endeudamiento externo, obligaban a redefinir las alianzas políticas, priorizando las relaciones con el sector empresarial de oposición política y distanciándose de aquellos sectores populares que habían apoyado al gobierno militar.

Aristides Royo es designado por Torrijos como Presidente de la república en 1978. En su primer discurso recogía esta redefinición de las fuerzas políticas en la alianza.

nuestra economía ha venido sufriendo duramente en los últimos años [...] creemos firmemente en las bondades de la inversión privada [...] Nos comprometemos a dialogar permanentemente con

los empresarios para acordar las reglas del juego (Periódico El Matutino, 1978).

Tres días después, el embajador estadounidense en Panamá, Ambler Moss reconocía los esfuerzos “del gobierno recientemente elegido de obtener la confianza y el apoyo del sector privado ...” (Periódico La República, 1978). Se trataba de reducir la acción “interventora” del estado y de darle mayor preponderancia al sector privado.

En cuanto a los ejes del patrón de acumulación estos no se modificaron. Los cambios se dirigían a las alianzas políticas y al estilo de conducción política para llevarlo adelante. El Presidente Royo continuó:

Al país les esperan (*sic*) grandes perspectivas [...] tenemos que luchar por el mejor aprovechamiento de nuestros recursos geográficos y naturales. El nuevo aeropuerto, el puerto pesquero de Vacamonte, el Puerto de Contenedores, la autopista, el Trasiego de Petróleo, la expansión de la Zona Libre de Colón, la Expansión del potencial hidroeléctrico, el desarrollo de las exportaciones agroindustriales forestales, así como el pesquero son expresiones concretas de que tenemos sentadas las bases de infraestructura y de orientación hacia la exportación que permitirán en las próximas décadas un acelerado crecimiento sobre sólidos cimientos económicos (Periódico La Estrella de Panamá, 1978).

Se reproduce aquí, casi íntegramente, lo que se planteó en la Estrategia de Desarrollo Nacional 1970-1980; solo faltó el Centro Bancario, pero no porque fuera excluido (MIPPE, 1970). Allí se reconoció la importancia del recurso “posición geográfica”, agregando, “para el Istmo de Panamá, como para el extranjero” (p. 88) y enlistó un conjunto de actividades vinculadas a la política en cuestión (pp. 61-80).

En la década del ochenta, el FMI firmó con Panamá tres acuerdos “Stand by” (1981, 1983 y 1985), planteándose similares exigencias como las de 1979, aunque ahora la situación fiscal era más

deteriorada, sobre todo, debido a la deuda externa. “En junio de 1985 se llegó a un acuerdo preliminar para la renegociación de 603 millones de amortizaciones del bienio 1986-1986. Además se otorgaron 60 millones de dólares de créditos nuevos” (CEPAL, 1986, p. 65, nota p del Cuadro 38). Con el Banco Mundial, el otro brazo del capital financiero para cobrar la deuda, se firmaron dos Programas de Ajuste Estructural: 1983 y 1986. Las exigencias de política económica eran similares y complementarias a las del FMI. Incluían la venta de empresas estatales, la liberación de precios, interna y externa, modificación de las leyes del sector agropecuario e industrial, con la pretensión real de reducir los subsidios hacia dichos sectores, y modificar el Código de Trabajo. Todo esto se cumplió, pese a una huelga general de los trabajadores que duró 10 días; el régimen militar terminó imponiéndolas, agravándose las condiciones de los trabajadores (Hughes, 1987).

No obstante, el problema fiscal continuó, el desempleo aumentó, el crecimiento económico era débil, y la conflictividad política se acrecentaba. Los intereses representaron el 53.2% del servicio de la deuda en 1978, en 1985 era el 71.3% y para 1987 era de 77.4%; aumentaba la salida de excedente de la economía por concepto de intereses (y amortizaciones) y la deuda seguía siendo un problema. El servicio de la deuda externa del Gobierno Central aumentó entre 1978-1987 en 116.0% y el pago de intereses lo hizo en 214.1%. Esto es expresión de los refinanciamientos sistemáticos¹⁵. La deuda externa aumentó en 26.8% anual durante el período 1970-1978, y durante 1978-1987 lo hizo al 9.1%; el PIB lo hizo al 4.5% y 4% para los períodos respectivos. La reducción de la velocidad de crecimiento de la deuda externa pública del Gobierno Central de Panamá, en el segundo período, oculta que gran parte del aumento de la deuda fue resultado de capitalización de intereses, resultado de los refinanciamientos. Pese a un menor crecimiento anual, el aumento de la deuda durante este

¹⁵ Para 1970-1974 los datos de los intereses corresponden a la Contraloría General de la República, Hacienda Pública y Finanzas. El resto de la información corresponde a Panamá en Cifras, de la misma Institución. Años respectivos.

período, representó el 51% del saldo alcanzado en 1987, que era de 3,721 millones de dólares, en comparación con los 198 millones de deuda externa que se registraba en 1970. Los saldos netos acumulados de la deuda externa fueron negativos en 763 millones de 1981-1986, como resultado de los ajustes impuestos por el FMI y el Banco Mundial, que hicieron todo para que se pagara la deuda externa. La situación económica y política obligaba a hacer ajustes en el bloque de la alianza gobernante, cuestión que reforzaba la política económica contractiva y de pago de la deuda, y agudizaba las contradicciones sociales.

Las políticas de ajuste estructural impulsadas por el BM obligaban al reacomodo de fuerzas, al mismo tiempo que al hacerlo resquebrajaban el sustento político del régimen. Lo último terminó siendo más importante, con lo cual, el bloque gobernante se debilitaba cada vez más. Tampoco tenían opción. Su alianza con agrupaciones estudiantiles, obreras, campesinas, de servidores públicos, magisteriales, y otras similares, siempre fue utilitarista, para lo cual sus dirigencias fueron el instrumento de cooptación.

La invasión de los EE UU a Panamá fue el instrumento a través del cual se definió el carácter de la alianza política a partir de entonces. Todo vestigio de políticas con pretensión de crear condiciones materiales para producir un apoyo organizado de los sectores populares fue erradicado. Aunque en el discurso nunca se abandonan. Esta es la práctica demagógica de la burguesía. Las medidas neoliberales, las del denominado Consenso de Washington se impondrían inflexiblemente, desde entonces.

Impactos de la política neoliberal en Panamá y su afianzamiento después de la invasión de Estados Unidos

Redefinida la nueva alianza política con la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, se aplicarían, ahora sí, plenamente, las medidas neoliberales. Las mismas irían dirigidas a

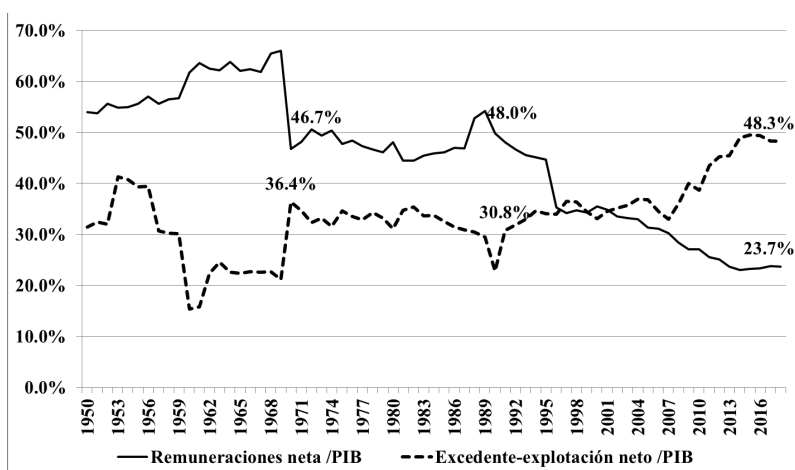
mejorar los niveles de rentabilidad del capital. Se suspendió el control de precios de más de 3 mil productos regulados y se dejó a la suelta “libertad del mercado” (1992 y 1996), se ingresó a la Organización Mundial de Comercio y se redujo drásticamente los aranceles y se liberalizó el comercio exterior, se modificó la estructura tributaria a favor de las grandes corporaciones (1991, 1997 y 2010), se modificó el Código Laboral (1995) afectando la estabilidad y reduciendo el costo del despido, se suspendieron los jubilaciones especiales (1997) y se aumentó la edad de jubilación a éste sector de trabajadores del sector público, se privatizaron las principales empresas estatales, de energía y telefonía (1997), se aumentó el impuesto al consumo (2000), se modificó la ley de pensiones (2005) aumentando la edad de jubilación el número de cuotas para jubilarse, se privatizaron las pensiones y parte de las reservas de los cotizantes, y se aumentó el porcentaje a pagar por parte de trabajador. Paralelamente, se continuó la estrategia de endeudamiento mediante refinanciamientos de capital e intereses, con lo cual la deuda aumentaba como resultado de la capitalización de intereses.

Impacto en el empleo, los salarios y la distribución del ingreso

La gráfica 2 muestra el comportamiento de la proporción de las ganancias y las remuneraciones de los trabajadores del período 1950-2018. El punto de inflexión claro se da después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. La participación de las remuneraciones en el PIB tendió a disminuir hasta los primeros años de los ochenta y, aunque luego muestra un comportamiento al alza, ello no es indicador de mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores, sino que es un efecto numérico debido a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía durante ese período. El PIB variaba en menor proporción a las remuneraciones debido a que el Código Laboral hacía más difícil el despido, aun cuando el desempleo aumentó

en dicho período. Desde la invasión militar, la participación de las remuneraciones disminuye drásticamente, de 48% en 1991 a 23.7% en 2018, manteniendo, sistemáticamente su tendencia a la baja. En sentido contrario se comportó la participación de las ganancias en el PIB¹⁶, variando de 30.8% a 48.3% para iguales años; el grado de explotación de la fuerza de trabajo aumentó significativamente, así como el nivel de concentración del ingreso.

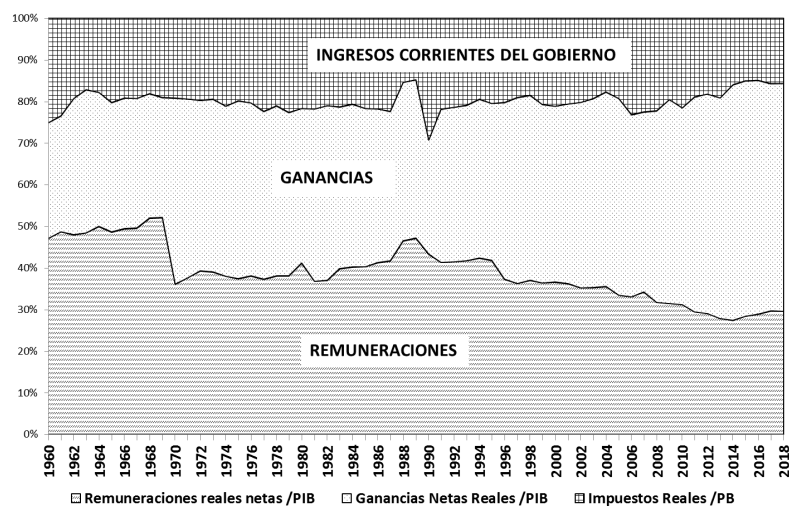
Gráfica 2. Panamá.
Participación de las remuneraciones y
excedente de explotación netos, en el PIB: 1950-2018



Lo expuesto anteriormente señala, también, que el crecimiento de los salarios nada se corresponden con la productividad del trabajo. Mientras el salario promedio creció en 2.9% anual durante 1970-2019, la productividad del trabajo lo hizo al 4.4%. En el período 1990-2019, esta diferencia se acentuó, manteniendo el 2.9% anual el salario promedio, mientras que la productividad del trabajo aumentó en 5.8%. Obviamente, esto se traduce en una menor proporción

¹⁶ En el Sistema de Cuentas Nacionales, a las ganancias brutas se le denomina excedente bruto de explotación.

Gráfica 3. Panamá.
Distribución del PIB real según
sus componentes de Ingreso: 1960-2018



de los salarios en el PIB y un aumento de la parte de las ganancias, como se mostró previamente. Considerando el salario mínimo, como ejemplo, si hubiera aumentado al ritmo de la productividad, este salario en el 2019 debía ser 1,272 dólares, sin embargo, era apenas 583 dólares.

En términos del poder adquisitivo la situación fue más grave. Durante 1970-2019, el aumento de los precios se consumió casi los aumentos de salarios nominales. Hasta 1987, apenas compensaron el aumento de los precios, deteriorándose más la situación desde 2005, cuando el salario nominal aumentó 6.1% y el salario real promedio, apenas en 0.8%. (Tabla 1). Es decir, el salario promedio tenía en 2019, casi el mismo poder adquisitivo de 1970. A partir de 1995, cuando se modifica el Código de Trabajo, aumentó la proporción de trabajadores con salarios mínimos, dado que, al disminuirse el costo del despido, los empresarios optaron por despedir a los trabajadores con más antigüedad y contratar nuevos a salario mínimo. Este sector de

Tabla 1		
PERÍODO	CRECIMIENTO DEL SALARIO PROMEDIO	
	NOMINAL	REAL
1970-2019	2.88%	0.91%
1970-1987	5.64%	0.00%
1980-2019	2.39%	0.93%
1990-2019	2.92%	0.95%
2005-2019	6.09%	0.85%
Fuente: Construido en base a datos de la Contraloría General de la República		

Tabla 2	
AÑO	DESEMPLEO
1971	7.6%
1974	5.8%
1979	8.8%
1987	11.8%
1989	16.3%
1995	14.0%
1999	11.8%
2005	10.3%
2012	4.2%
2019	7.4%
Fuente: Contraloría General de la República, Panamá.	

trabajadores vive en peores condiciones de vida, siendo más afectado por el deterioro del poder adquisitivo del salario.

Cuando en 1995 se modificó el Código de Trabajo, argumentándose que el existente entonces, impedía la generación de empleo. Era un argumento y el interés de fondo era reducir el costo salarial para aumentar las ganancias y con ello mejorar la tasa de ganancia. Al igual que las políticas de “estabilización y ajuste estructural” desde los años sesenta, los organismos internacionales argumentaron que el propósito era crear las bases para el crecimiento sostenido de la economía y el empleo, cuando en realidad se trataba de garantizar el pago de la deuda externa al capital financiero internacional, ahora, acciones lesivas a las condiciones de los trabajadores se afirmaba que era para su bienestar, ocultando el verdadero propósito; mejorar los niveles de rentabilidad de las empresas.

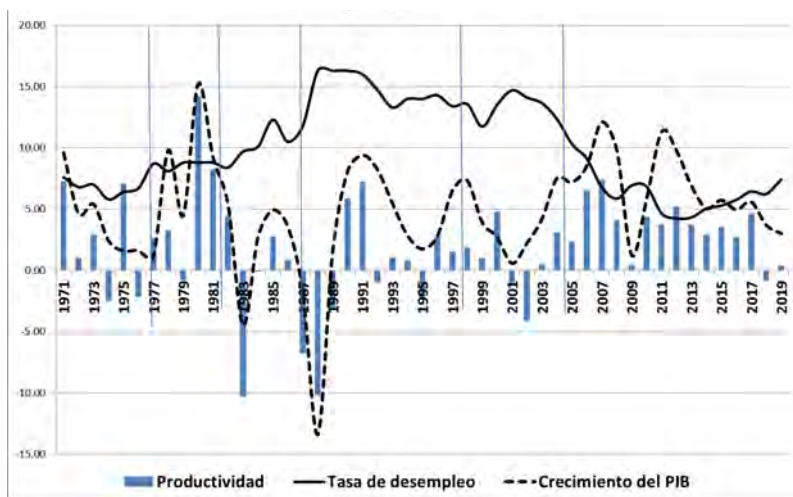
Lo anterior lo evidencian los datos que en conjunto se presentan en este documento. El crecimiento del desempleo no se gesta con la crisis política de 1987-1989, aunque si lo potencia. El alto desempleo ha sido una característica estructural de la sociedad panameña, además que el denominado “desempleo abierto” que es el que aquí

analizamos, oculta el sub desempleo. El promedio de desempleo de los años sesenta fue de 8% y aún en 1971 era de 7.6%. Desde 1974, cuando había bajado levemente al 5.8%, persistentemente aumentó hasta alcanzar el 8.8% en 1979, y 11.8% hasta 1987, cuando se desencadena la crisis política. El nuevo gobierno es instaurado por el ejército estadounidense, el desempleo sumaba el 16.3% que había en 1989 y el aumento resultado de la propia invasión, que destruyó gran parte de los negocios e infraestructura. Pérez Balladares, del PRD, modificó el Código de Trabajo con el argumento ya mencionado de supuestamente bajar el desempleo, el cual estaba todavía en 14%. Lo esencial de las modificaciones: reducir costos laborales, y aunque aparentemente la tasa de desempleo disminuyó al, 11.8% al final de su período, ello fue resultado del aumento del trabajador por cuenta propia (mal llamado empleo informal), el cual había representado el 65% de los nuevos “ocupados” durante 1995-1997. A falta de empleo remunerado, los trabajadores debían buscar sus ingresos por propia cuenta. Todavía en 2005, el desempleo era del 10.3%, pese a las supuestas bondades de las modificaciones laborales.

La ampliación del canal de Panamá, acción que nada tiene que ver con las políticas neoliberales, aunque si obedece a la dinámica del capital transnacional, posibilitó reducir el desempleo al 4.2%, lo cual desapareció en cuanto la obra terminó, volviendo el desempleo a sus niveles históricos, con 7.4% en 2019, previo a la pandemia. (Tabla 2 y gráfica 4) La pandemia ha sido aprovechada por los empresarios, con el apoyo gubernamental y del Ministerio de Trabajo, para reducir costos laborales, mediante despidos y pagos de liquidaciones inferiores a las que corresponden a los trabajadores. Esta práctica ya la habían ejecutado los empresarios con la invasión de Estados Unidos en 1989.

Gráfica 4.

Variación de la Productividad Bruta Promedio (ocupados no indígenas): 1971-2019



Política Fiscal, endeudamiento, políticas neoliberales y tasa de ganancia

El llamado Consenso de Washington contiene un enfoque de política fiscal contractiva: reducir déficit fiscal mejorando la relación ingresos gastos, lo cual, en los años ochenta se tradujo en bajos niveles de crecimiento económico. El objetivo: pagar la deuda externa pública, al mismo tiempo que se reduce la injerencia del Estado en la economía y se “liberan las fuerzas del mercado”. Las circunstancias políticas de los años ochenta no hizo posible avanzar mucho al respecto. Sería después de la invasión que el neoliberalismo se afincaría. La primera acción la hizo el empresario, abogado de empresas transnacionales y Ministro de Hacienda y Tesoro del gobierno postinvasión, Mario Galindo Heurtemate (1991), reduciéndole el impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones. Pérez Balladares (1995) en el siguiente período avanzaría en igual dirección, y Ricardo Martinelli (2013) lo fijaría en 25% para todas las empresas. El promedio

de la participación el ingreso tributario con respecto al PIB, durante 1970-1987, fue de 12%; todavía en 1991 representaba el 12.5%. Desde entonces, como resultado de la política de desgravación a las grandes empresas, de transferencias por la vía de exoneración del impuesto a la renta a las empresas, y de la reducción de aranceles, como parte de la apertura de la economía al comercio mundial, expresó un comportamiento sistemático a la baja, alcanzando el 8.4% en 2019. El elemento compensador a esta baja de los impuestos a las grandes corporaciones lo fue el aporte del Canal de Panamá, que en 2018 afirmó haber aportado directamente 13,300 millones de dólares. Es decir, la renta sustituta por la rebaja de los impuestos a los propietarios de las empresas, nacionales y extranjeras, lo fue el aporte del Canal, por lo que dichos ingresos se constituyen en una transferencia a estas corporaciones. Así se ha manejado lo fiscal; para mejorar los rendimientos del capital.

En igual sentido se manejó la política de endeudamiento. Al igual que América Latina (Hughes, 2021), que ha reforzado aquél “circulo vicioso” que la CEPAL describió a finales de los años sesenta, la práctica en Panamá fue refinanciar intereses con lo cual la deuda progresivamente aumentó sin que hubiera ingresado recurso alguno. Con la pandemia ello se acrecentó. El gobierno de Pérez Balladares aumentó la deuda en 1,351 millones refinanciando intereses vencidos. Durante el siglo XXI, en promedio, el 45% del aumento de la deuda ha sido resultado de intereses. Los déficits fiscales han sido recurrentes debido a los intereses. En consecuencia, el Estado recauda cada vez menos impuestos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y a las actividades vinculadas a la plataforma de servicios transnacionales, ahora con una nueva denominación, “el *hub* logístico”, cubre parcialmente esta reducción con los ingresos del canal de Panamá, y sigue aumentando la deuda pública por medio del refinanciamiento de los intereses, los cuales también reclamarán intereses, en su momento, resultando en una acrecentada incapacidad de atender las demandas sociales de la población en materia de educación, salud, vivienda y servicios básicos.

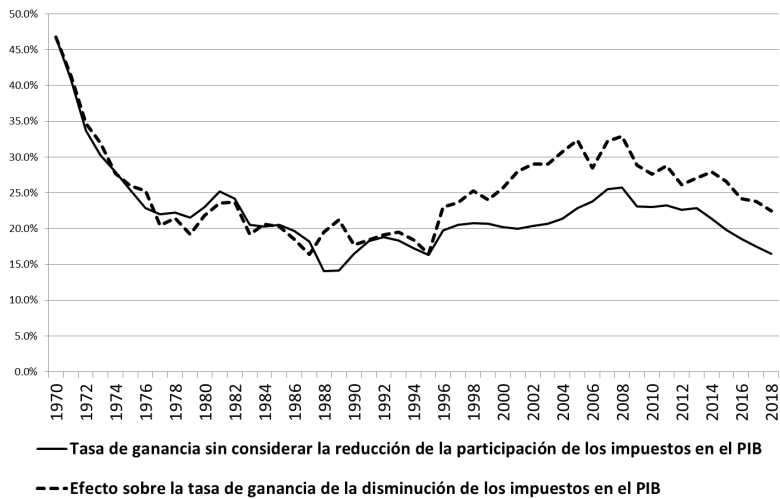
A esto la teoría neoclásica, que soporta el neoliberalismo, le llama “la asignación óptima de los recursos” dado que resulta del supuesto libre mercado, sin intervención del Estado. Sin duda que tal asignación tiene un sello de clase, en tanto que favorece el capital en desmedro de los trabajadores y el conjunto de los sectores populares. Por ello, no sorprende aquel resultado de la política neoliberal. Las privatizaciones de las dos importantes empresas estatales, de telefonía y de generación y distribución eléctrica, que realizó también el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, ha encarecido el servicio, y los supuestos entes reguladores, lo hacen garantizándole la ganancia oligopólica a las empresas extranjeras que las adquirieron. Este proceso de privatización, también ha alcanzado la educación en todos sus niveles, así como la salud. Los promotores de viviendas priorizan inversiones de alta rentabilidad, señalando que los trabajadores de bajos ingresos no son negocio. (Suarez, 2018)¹⁷

Pero los resultados para el capital fueron favorables; alcanzaron su propósito, aunque su temporalidad ha resultado más corta que lo que esperaban, pero ello es resultado de la propia dinámica del capital. El propósito de acrecentar el capital invertido para obtención cada vez mayores ganancias, a la postre termina afectando las capacidades de acumulación del capital, expresándose en la caída de la tasa de ganancia. El sector construcción que en el 2005 representaba poco menos del 5% del PIB, alcanzó el 15% en 2019, y junto al sector inmobiliario constituían el 22% de la economía. La sobre acumulación de capital en el sector produjo altos inventarios de viviendas que superan los 125 mil dólares, además de locales comerciales. En cuanto a la vivienda, el gobierno de Laurentino Cortizo, del PRD, aumentó los valores de las viviendas para intereses preferenciales de 120 mil a 180 mil dólares, tratando de facilitarles las ventas mediante transferencias de los impuestos de los contribuyentes hacia un sector de altos niveles de ingresos.

¹⁷ Elisa Suárez de Gómez, Directora Ejecutiva de CONVIVIENDA dijo que resulta imposible obtener rentabilidad construyendo viviendas por debajo de los \$40,000.

La gráfica 5 muestra el impacto de las medidas neoliberales en la tasa de ganancia. Su comportamiento a la baja desde los años sesenta cambia su trayectoria con el fortalecimiento pleno de las políticas neoliberales después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá. Este “golpe” de estado por un gobierno extranjero, violentando la soberanía y los derechos humanos, posibilitó la recomposición

Gráfica 5. Panamá
Tasa de Ganancia Bruta, 1970-2019 (valores reales)



de las fuerzas políticas alineadas con el denominado “Consenso de Washington”. Se muestra igualmente, que el impacto favorable en la mejoría de la tasa de ganancia, resultado de la mayor participación de las ganancias en el PIB, de aumentos de salarios que terminaban teniendo un poder adquisitivo muy similar al de 1970, mientras que los aumentos de la productividad del trabajo se canalizaban hacia las ganancias, es decir, mediante el aumento de la explotación de la fuerza de trabajo, fueron reforzados con la caída de la participación de los impuestos en el PIB, es decir, con la reducción de los impuestos a las grandes corporaciones y al capital financiero, sobre todo, vinculados a la Plataforma de Servicios Transnacionales. El capital

logra ahora apropiarse de una mayor parte del excedente a costa de sacrificar la atención de las necesidades sociales de los sectores más necesitados.

Conclusiones

La teoría neoclásica es el sustento teórico del neoliberalismo. Tal paradigma teórico se afianza, no solo en América Latina sino a nivel mundial, sobre todo desde finales de los años sesenta. Su avance en cada país resultó de las circunstancias políticas internas, y aunque parezca una perogrullada, es necesario enfatizarla para aquellos que consideran que la economía es exclusivamente un problema “técnico”, pero ciertamente, la conflictividad social marca el ritmo de lo posible de la política económica. Se trataba de darle respuesta a la crisis económica global que el capitalismo mostraba a finales de los años sesenta, cuya manifestación principal lo fue “la crisis del dólar”. En América Latina se correspondió con “el agotamiento de la sustitución de importaciones” como forma dominante de la acumulación de capitales, cuya propia dinámica resultó en la extracción progresiva de excedentes por el capital extranjero.

En Panamá, medidas neoliberales se tomaron desde los años setenta, aunque con mayor discrecionalidad. Se hicieron más claras en los años ochenta como resultado de las exigencias del FMI y el Banco Mundial; del capital financiero internacional que exigía el pago de la deuda externa. La crisis política a la que contribuyó la política neoliberal, hizo lento su avance, aunque se encaminó en la reestructuración de las alianzas políticas del bloque dominante y en abonar el terreno para su ejecución plena y sin restricciones, luego de la invasión militar de los Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Retrospectivamente se observa un claro momento de inflexión del esquema neoliberal, a partir la invasión militar. Su ejecución resultó en el mejoramiento de la tasa de ganancia, tanto general de la economía como de la apropiada directamente por el capital. El desempleo continuó, se aceleró la concentración del ingreso (y de la riqueza),

el poder adquisitivo del salario promedio es casi el de 1970, aumentó la proporción de trabajadores con salario mínimo y la inestabilidad laboral, y con ello el empleo por cuenta propia –llamado informal–, se modificaron las leyes de pensiones, haciéndolas más precarias y más difíciles de alcanzar, y las demandas sociales insatisfechas (salud, vivienda, educación, agua potable, y otros servicios básicos), se acrecentaron. Este conjunto de acciones, que implican un aumento del grado de explotación de la fuerza de trabajo, se fortaleció con el traspaso barato de activos estatales al capital privado (empresas), reduciéndole el impuesto a las grandes corporaciones, transfiriéndoles los ingresos del Canal de Panamá, así como con el endeudamiento público. Sin embargo, desde el 2008, coincidiendo con la crisis mundial, se observa la caída recurrente de la tasa de ganancia, favoreciendo la tesis de la condición inherente de la crisis, y la imposibilidad del capitalismo de generar una sostenibilidad de mayor temporalidad, porque ello implicaría renunciar a su condición de ser. Ello obliga a acentuar la explotación de la fuerza de trabajo, lo cual abre un escenario de mayor conflictividad social y de deterioro de las formas de dominación del capital, ya en proceso, en tanto que el neoliberalismo ha afianzado desigualdad social, la concentración del ingreso y la riqueza, y profundizado la exclusión social.

BIBLIOGRAFÍA

- BIRF (1983). Structural Adjustment Loan (PAE por sus siglas en español), julio.
- CEPAL (1968, 1969, 1979). Estudio Económico de América Latina, Naciones Unidas.
- CEPAL (1986). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas.
- FMI (febrero de 1980). Informe de la Misión, Confidencial, julio de 1979. *Revista Diálogo Social* 120.
- Gorastiaga Xabier. (1978). *Los Centros Financieros Internacionales*. México: ILET.
- (1979). Diez tesis sobre el Canal de Panamá. *Comercio Exterior*, 29(1), 70-79.
- Jiménez, Edgar. (1979). *Las Empresas Multinacionales y el Sistema Político Latinoamericano*. El Salvador: Editores UCA.
- Mandel, Ernest (1974). *El Dólar y la Crisis del Imperialismo*. México: ERA.
- Manduley, Julio (2014). La política económica de Torrijos. De la plataforma de servicios transnacionales al Estado delincuencia. *Revista Tareas*, 146, 97-121.
- Marini, Ruy Mauro (31 de enero de 1979). Centro financiero: Panamá es más que el Canal. *El Universal*.
- Gaceta Oficial (1976a). Ley. 75, se adiciona al Código Fiscal el "Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles con crédito fiscal y otorgan algunas exenciones tributarias" (No.18244, 22 de diciembre).
- Gaceta Oficial (1976b). Ley 95, "Por la cual se modifican algunos artículos del Código de Trabajo y se adoptan otras medidas" (No. 18245, 31 de diciembre).
- Gobierno Nacional (noviembre de 1974). Declaración de Boquete.

Hughes, William (1987). *Crítica a una Imposición. Análisis de las modificaciones de la Ley Industrial, la Ley Agropecuaria, y, el Código de Trabajo, Cuadernos de Coyuntura*. Panamá: Centro de Investigación de la Facultad de Economía, Universidad de Panamá.

——— (2017). *Ajustes estructurales por firma de los tratados del canal y recomposición de las fuerzas políticas (1977-1989)*. Panamá: Facultad de Economía, Universidad de Panamá.

——— (2021). América Latina: una deuda impagable, de usura y de renta perpetua. En Franz Hinkelammert, Henry Mora, Jorge Zúñiga, William R. Huges y Yamadú Acosta (eds.), *Por una Condonación de la Deuda Pública Externa de América Latina* (37-64). Buenos Aires: CLACSO.

Periódico *El Matutino* (13 de octubre de 1978).

Periódico *La República* (16 de abril de 1978).

Periódico *La Estrella de Panamá* (13 de octubre de 1978).

MIPPE (1970). *Estrategia de Desarrollo Nacional 1970-1980*.

Suarez, E. (10 de abril de 2018). *Periódico La Estrella de Panamá*. <http://laestrella.com.pa/economia/convivienda-eleva-proyeccion-ventas-11-para-2018/24057650>

Sunkel, Osvaldo (1984). Pasado, Presente y Futuro de la Crisis Económica Internacional. *Revista CEPAL*.

Williamson, John (1990). What Washington Means by Policy Reforms. En John Williamson (ed.), *Latin America Adjustment. How much has happened?* Washington: Institute for International Economics.

Zarifian Philippe. (1975). *Inflation et Crise Monetaire*. Paris: Editions Sociales.

Los vaivenes del neoliberalismo en el Gran Caribe. Balance de una época

Nayar López Castellanos

Hace medio siglo se instalaba el *primer laboratorio* del modelo neoliberal que el sistema capitalista impuso en el mundo, transformando estructuras económicas, políticas, sociales y culturales. Tal *experimento* se dio en un país latinoamericano a costa no sólo del rompimiento del orden constitucional y del proyecto socialista que conducían el presidente Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile, sino también a partir de un régimen dictatorial de tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 30 mil seres humanos que tenían el legítimo derecho de construir una alternativa sistémica y un futuro de dignidad.

Basado en las ideas de Friedrich Hayek y Milton Friedman, el neoliberalismo modificó el marco de intervención del Estado en la economía, limitó sustancialmente sus *responsabilidades* sociales, profundizó los niveles de explotación, pulverizó la soberanía económica y amplió los marcos de la dependencia estructural, sobre todo cuando Estados Unidos puso en práctica la política del libre comercio a través de múltiples mecanismos y regulaciones.

Esta ofensiva estructural tuvo alcances y diferencias en los países en que el neoliberalismo se implantó, con toda la hegemonía del gran capital, a partir de la fractura y desarticulación de las fronteras económicas nacionales.

En el contexto del ocaso de la Guerra Fría, cuando Fukuyama espetaba el fin de las ideologías y la propia historia, sentenciando que no existía destino diferente al sistema capitalista, el pensamiento neoliberal logró un mayor impacto ante la pretendida pérdida de alternativas sistémicas. A pesar de las resistencias, la década de los noventa del siglo XX fue avasallante no sólo en el avance de esta nueva fase de acumulación capitalista sino también de su ideología y cosmovisión, centradas fundamentalmente en el individuo como motor de las sociedades y antítesis de lo colectivo, esto es, el *darwinismo social*: la ley del más fuerte. Y todo ello basado en el postulado de que la única forma de alcanzar la libertad es justo si el individuo no tiene límites ni regulación alguna por parte de la esfera pública, es decir, la idea del Estado como supuesto limitante de esa libertad.

Así, durante esos años se fueron consolidando, en nuestras sociedades, expresiones de pensamiento enraizadas en el individualismo extremo, la competencia, el arribismo y el consumismo. Frente a la debacle de los derechos sociales que los trabajadores habían conquistado en el pasado y que identificaban en gran medida, desde la perspectiva latinoamericana y caribeña, al llamado Estado nacional desarrollista también denominado *Estado benefactor*, amplios sectores de la población reaccionaron de forma aislada.

Neoliberalismo en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, el neoliberalismo se despliega de forma violenta en múltiples sentidos. Los años en los que se reforman constitucionalmente los Estados para convertirse al modelo, van de la mano de diversas formas del autoritarismo promovido y respaldado por Estados Unidos para frenar la *propagación* del comunismo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, y, después, en oposición

beligerante a cualquier alternativa que cuestionara el *estatus quo* imperial.

Esa violencia no sólo tuvo una relación directa con las dictaduras militares que azotaron a la región durante décadas, sino se expresó en la profundización de las injusticias sociales, la pobreza y la desigualdad extrema. Hubo respuestas diferenciadas, pero todas tuvieron un sello en común: opresión, explotación y exclusión. Señala al respecto Pablo González Casanova:

Si los nuevos movimientos sociales experimentaron la alegría efímera de las democracias que sustituyeron a los dictadores militares, en pocos años descubrieron que sus sucesores imponían la dictadura de las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y una nueva democracia de las minorías, con las minorías y para las minorías. Los nuevos movimientos de la periferia y del centro del mundo, experimentaron en su vida cotidiana las nuevas formas de opresión e injusticia del colonialismo, el imperialismo y el capitalismo (González, 2009, p. 322).

Por eso, resulta significativo reiterar que las dictaduras militares del final de siglo no sólo tuvieron la función de frenar revoluciones y militancias de las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, sino, también, cumplen la tarea de lograr la transición del Estado nacional desarrollista al Estado neoliberal, y procesar la mayor privatización de todo lo público. En algunos casos fue un desmantelamiento enorme, como sucedió en México y Argentina, al rematarse cientos de industrias y empresas, como flotas pesqueras, líneas de aviación, compañías telefónicas, fábricas de zapatos, televisoras, ferrocarriles, entre otras tantas.

La privatización del sector público y el incremento del sector privado contribuyen a mejorar el poder y los negocios de los grandes complejos empresariales y de sus asociados. Organizan un innegable *empresariado global* que domina Estados, mercados y

subsistemas de mediación y de represión. El empresariado global logra incrementos billonarios en las transferencias del excedente producido en las distintas regiones del mundo. El cúmulo de esas transferencias no sólo beneficia a los países centrales frente a los periféricos, ni sólo a las empresas corporativas y sus redes frente a las pequeñas y medianas empresas, sino a las empresas frente a los asalariados. Las víctimas principales del sistema-mundo realmente existentes no sólo son los trabajadores explotados y superexplotados, sino los excluidos, discriminados y empobrecidos. A la categoría de *explotados* escapan, o sienten que escapan, los trabajadores y empleados que alcanzan salarios relativamente altos y condiciones laborales negociadas (González, 2017, pp. 551-552)

Buena parte de estos procesos de privatización se llevaron a cabo bajo el manto de la corrupción sistémica que históricamente ha caracterizado a la región. No sólo consistió en vender a las empresas estatales lo más barato posible, beneficiando a los grupos oligárquicos y a su clase política, sino que se buscó generar un aparente consenso en la sociedad y sus principales actores políticos y económicos, en un intento por legitimar los cambios en las estructuras estatales.

La reconversión del Estado y el proceso de imposición del neoliberalismo, conocido como el *Consenso de Washington*, consistió en un paquete de medidas económicas que fueron introducidas y aplicadas por los gobiernos incorporados a esta ola mundial, y que, para el caso de América Latina y el Caribe, tuvo un momento candente durante la década de los 80, conocida como la *década perdida*, por el desbordado nivel de endeudamiento que tuvo la economía regional en su conjunto, a causa de los préstamos multimillonarios y los intereses *usureros* que condicionaron los principales organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, a cambio de la modificación de las reglas económicas nacionales, para que sus fronteras se evaporaran y así

permitir el libre ingreso del capital transnacional. Estas exigencias se tradujeron en reformas y acciones como las siguientes.

- 1) Equilibrio del presupuesto público reduciendo el déficit fiscal;
- 2) Reconducción del gasto público primando la selección del mercado;
- 3) Reformas fiscales que redujeran los impuestos directos y aumentaran los indirectos;
- 4) Establecimiento de tipos de interés positivos que atrajeran capitales y fomentasen el ahorro interno;
- 5) Tipos de cambio que permitieran orientar la economía hacia el exterior de manera competitiva;
- 6) Liberalización comercial con plena apertura de fronteras;
- 7) Recepción de inversión extranjera directa;
- 8) Privatizaciones del sector público;
- 9) Desregulación en lo referente al mercado laboral, a los controles a empresas y capitales y desaparición de las barreras legales a los movimientos económicos (salvo de mano de obra);
- 10) Garantías a los derechos de propiedad. Este consenso, y su puesta en práctica, da pie para cambios radicales en la política económica occidental. (Monedero, 2008, p. 154)

Aunado a ello, la estrategia del gran capital se fortalece con un considerable desarrollo tecnológico, la creación de mercados financieros globales de gran incidencia en las economías locales, la transnacionalización absoluta del capital, un abierto control de la explotación de los cuantiosos recursos naturales, sobre todo ubicados en el Sur global, y un fortalecimiento mediático que va de la mano del propio crecimiento de los poderes fácticos, como es el caso del crimen organizado.

En términos generales, América Latina y el Caribe han vivido esta época neoliberal de formas diferenciadas. La ola de gobiernos progresistas, de izquierda y revolucionarios que inició en 1998, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, en gran medida respondió

a las consecuencias devastadoras que dejó el neoliberalismo. Hasta la fecha, con todo y sus vaivenes, ha sido una etapa que proyecta a la región en un escenario de cambio permanente, conflictos y contradicciones.

Después de dos décadas del recambio político que la región ha vivido bajo el llamado progresismo, en cualquiera de sus ciclos, un mínimo balance arroja importantes avances, evidentes estancamientos y algunos retrocesos. En general, observamos que no ha sido posible el abandono completo de las estructuras neoliberales insertadas en los Estados desde hace más de cuatro décadas. El despliegue de una amplia batería de políticas sociales sin duda arrojó resultados muy favorables para millones de personas, 40 en el caso brasileño bajo los gobiernos de Lula y Dilma, pero una vez desplazados por la derecha golpista, el retorno al sendero neoliberal fue inmediato, esto es, *todo cambió para quedar igual*. Así como Brasil, Argentina y Uruguay han experimentado procesos similares. En estos casos, el nivel de las transformaciones no logró desarticular el modelo neoliberal, profundamente enraizado en las estructuras del Estado (López, 2022, p. 107).

En la región del Gran Caribe, han sido pocas las experiencias que se han planteado un programa posneoliberal, pues, salvo el caso de Cuba, que mantiene su sistema socialista, ningún otro país se ha planteado un sistema social diferente al capitalismo. Más bien, la mayoría se propuso reconstruir el Estado nacional desarrollista del siglo XX, con algunas iniciativas propias de la izquierda y de otros actores políticos y sociales. En este renglón, El Salvador, Honduras, México y, en cierto sentido, Nicaragua, se han propuesto distanciarse del neoliberalismo, pero sólo Venezuela dejó atrás el modelo y de forma estructural a través del proceso constituyente, tal y como también sucedió, con sus cambios y vicisitudes, en Ecuador y Bolivia.

Ello no significa que algunas naciones insulares no formen parte de proyectos de integración opuestos al modelo neoliberal, siendo el

mejor ejemplo la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el esquema energético de Petrocaribe, como sucede con Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves. Veamos algunas especificidades sobre el neoliberalismo en la región del Gran Caribe.

Variantes del modelo neoliberal en el Gran Caribe

Juan Bosch, concibe el Gran Caribe como el conjunto de países independientes (25) y territorios neocoloniales (20)¹, que están bañados por el Mar Caribe. Constituye una región estratégica en términos geoeconómicos, sobre todo contemplando no sólo su inmensa biodiversidad sino, también, sus cuantiosos recursos naturales, entre los que destacan energéticos y minerales. Por eso, y por su posición geopolítica como puente marítimo entre los continentes, siempre ha sido objeto de disputa entre imperios y potencias, del pasado y del presente.

En conjunto, en el Gran Caribe –ubicado en una extensión marítima de 4,3 millones de km² compartidos entre el Mar Caribe y el Golfo de México, con decenas de puertos de gran dimensión– hay una población que alcanza los 270 millones de personas, estratégicos y variados recursos naturales y energéticos, ecosistemas únicos en el planeta, grandes reservas de agua dulce, una considerable infraestructura militar, sobre todo concentrada en países como México, Colombia y Venezuela, y un mosaico social y cultural de vasta diversidad. (López, 2019, p. 14)

¹ En esta región, bajo el status de países independientes, se encuentran Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Con condiciones neocoloniales de distinto signo, integran la región Aruba, Bonaire, Curazao, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, San Eustaquio, Sint Maarten y Saint Martin (López, 2019, p. 13).

Aunque las naciones del Gran Caribe padecen problemáticas sociales determinantes, como los intervencionismos estadounidense y europeo, la migración, la violencia, el impacto del cambio climático, entre otras, presentan notables diferencias, no sólo en su entorno cultural y formas de gobierno, por ejemplo, sino en su historia y sus estructuras económicas. Por ello, cuando referimos el avance del neoliberalismo en la región, hay que diferenciar ejes, alcances y grados de su desarrollo. Y mucho menos podemos considerar respuestas comunes.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

PAÍS	1979* 1980 1981** 1984***	1989* 1990 1991** 1993***	2000 2001* 2002**	2009* 2010	2019* 2020
Colombia	42	56.1**	53.8**	40.0	39.8
Costa Rica	24**	26.2	27.5	19.0	19.4
El Salvador	-	-	49.1	49.8	30.7
Honduras	-	80.5	57.4*	53.6	52.3*
México	37***	47.8*	48.8	44.5	37.4
Nicaragua	-	73.6***	65.1*	58.3*	-
Panamá	42*	42.8**	29.8	27.1*	14.6*
República Dominicana	-	-	32.5	40.0	21.8
Venezuela	25**	40.0	44.2	24.9	-

Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL / Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Sobre la base de encuestas de hogares de los países del 2022. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) / CEPAL (2004), “Una década de desarrollo en América Latina, 1990-1999”, Santiago.

En este sentido, la intensidad del modelo se puede medir de acuerdo con los parámetros de sus consecuencias sociales, de cómo se mantuvo o se amplió el nivel de la pobreza y la desigualdad, que de por sí el propio sistema capitalista entraña. Podemos señalar que la parte continental tuvo el mayor impacto social, esto es, países como México, Venezuela, Colombia y las naciones centroamericanas. En el caso de la parte insular, caracterizada por economías altamente

dependientes de sus ex metrópolis, el neoliberalismo tuvo un impacto estructural diferenciado, a pesar de que se dio una modificación importante de sus dinámicas económicas, expresada, sobre todo, en una mayor consolidación de la presencia y el control del capital transnacional. En la siguiente tabla, con información de la CEPAL, podemos valorar indicadores de los índices de la pobreza en algunos países de la región, como un parámetro general.

Por ello, para generar un balance acertado sobre características y efectos del neoliberalismo en el Gran Caribe, se debe reconocer una amplia diversidad de procesos, actores políticos y económicos, niveles de dependencia, contexto socioeconómico e, incluso, efectos de los conflictos políticos, las guerras y las formas y los grados de la intervención estadounidense.

Para el caso de Centroamérica, en particular, tras el fin del conflicto armado regional (Nicaragua 1990, El Salvador 1992 y Guatemala 1996), y firmados los acuerdos de paz respectivos, las fuerzas políticas conservadoras logran reconfigurarse y consolidar sus espacios de poder no sólo económico sino también dentro de las estructuras del Estado, impulsados, en gran medida, por el propio proyecto neoliberal.

Esta nueva élite está dominada por grupos económicos con intereses regionales y vinculaciones con empresas transnacionales cuyo primer objetivo es profundizar la integración de Centroamérica al proceso de globalización. Además, en Centroamérica el complejo Estado-sociedad está orientado a beneficiar (aún más) a los sectores más pudientes, fenómeno que se reforzó con el impulso de políticas neoliberales a lo largo de las últimas décadas (Martí, 2015, p. 22).

De igual forma, las resistencias populares al neoliberalismo tuvieron grados diferenciados de respuesta, de éxitos y fracasos. Recordemos en primera instancia al levantamiento zapatista de 1994, justo el primero de enero, día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio

entre Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN), el cual elevó su voz no sólo en contra de la exclusión histórica de las comunidades indígenas sino también como rechazo al neoliberalismo que, para ese año, ya había causado efectos sociales desastrosos en México. Hoy, el movimiento protagonizado en buena medida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sigue representando una de las más emblemáticas y exitosas alternativas sistémicas a esta fase del capitalismo, pese a los acosos contrainsurgentes y la militarización. Otras experiencias se han sumado, tanto en el ámbito social como institucional.

El zapatismo encarna entonces, y ha sabido encarnar, uno de los movimientos más originales y significativos contemporáneos opuestos a la “lógica del capital”, a su incontenible afán de lucro y a su inevitable violencia. No, por supuesto –depende del hundimiento del “socialismo realmente existente”–, proponiendo una salida específicamente socialista y menos a la vieja usanza, pero sí señalando con la mayor energía y claridad de qué manera el neoliberalismo y la globalización en manos del capital financiero y de las corporaciones significan hoy destrozo y devastación para la mayoría de los pueblos del mundo (Flores, 2010, p. 418).

Las resistencias populares se dieron en otros países de la región. Es por demás conocida la capacidad de movilización del pueblo colombiano, tan intensa como la represión permanente y el asesinato selectivo de líderes sociales, sobre todo ambientalistas, que desde las esferas del Estado se ha dado desde hace varias décadas en esta nación. También se han desarrollado iniciativas de protesta contra el neoliberalismo en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y en el complejo Haití.

En el plano estatal, el mejor ejemplo se encuentra en Venezuela. Con el preámbulo del *caracazo* de 1989, como respuesta popular al paquete de medidas neoliberales impuesto por Carlos Andrés Pérez, en 1998 el comandante Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales

con la reivindicación de justicia social, antiimperialismo y anti neoliberalismo, iniciando la llamada revolución bolivariana que, en un primer paso, se dejó sentir en una Asamblea Constituyente, fundante de un nuevo Estado, y que no sólo retomó la rectoría de la economía abandonando al Consenso de Washington, sino que se planteó luchar contra el sistema capitalista y transitar hacia el socialismo a partir de la idea de un Estado comunal.

De esta forma, tenemos a un país del Gran Caribe que durante este siglo ha transitado fuera del marco del neoliberalismo a pesar de coexistir en un mercado mundial hegemonizado por el modelo del capitalismo. En El Salvador, durante los dos periodos presidenciales (2009-2019) en que gobernó el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se vivió cierto viraje al programa neoliberal, aunque al carecer de mayoría en la Asamblea Nacional, el cambio no logró reflejarse de forma más estructural y terminó siendo muy limitado.

En el caso mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su proyecto denominado *Cuarta Transformación*, si bien ha construido una infraestructura institucional de programas sociales y variadas becas de estudio para jóvenes, de corte individualizado, no ha desarticulado la estructura económica neoliberal, al mantener mega proyectos que conformaban el Plan Puebla Panamá (Tren Maya, Corredor Interoceánico, Proyecto Integral Morelos), y mecanismos, como el ahora llamado Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá (TMEC), además de toda la política de apertura a la inversión extranjera. Ha sido una etapa de contrastes, pues, a la vez, fortaleció la industria petrolera bajo el control del Estado, reforzando también la industria eléctrica y dejando para explotación exclusiva estatal el litio, mineral tan cotizado en el mercado internacional actual.

Particularidades económicas regionales

A pesar de la clara diversidad de economías en la región, siendo México, Colombia y Venezuela, los países que tienen mayores estructuras en el ámbito productivo y exportador, por sus cuantiosos y diversos recursos naturales, la gran mayoría se caracterizan por sustentar su base económica en el sector de servicios, la agroexportación, la maquila y, sin duda, el turismo. Pero, además, sobre todo en las naciones insulares, su sistema económico es altamente dependiente de las grandes potencias capitalistas que siguen no sólo teniendo territorios bajo condiciones coloniales, sino que ejercen un férreo control de las naciones independientes a través de sus clases políticas y económicas.

Por último, en términos de *realpolitik*, ¿qué país del Caribe hoy o ayer puede desafiar a los principales intereses imperialistas representados militarmente por los derechos de los Estados Unidos -líder en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ONU- y económicamente por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el FMI y el Banco Mundial, sin correr el riesgo de invasión o de desestabilización? En un mundo donde <el poder hace el derecho>, los países del Caribe anglófono no tienen la libertad de trazar sus propios destinos porque ellos no hacen las reglas ni las leyes, ni tampoco las ponen en práctica. Debido a que los líderes políticos y económicos de los países del Caribe anglófono por tradición se han alineado con las fuerzas imperialistas, hablar de independencia y soberanía en la región tropieza con un montón de patrañas retóricas de principios del siglo XXI (Allahar, 2014, p. 39).

Desde mediados del siglo XX se intensificó la actividad turística en el Gran Caribe, convirtiéndose en una rama central de las economías, pensando sobre todo en las naciones insulares. Con el paso del tiempo, esta poderosa industria, controlada fundamentalmente por los

grandes monopolios hoteleros y del transporte, impactó en múltiples espacios de la región, como el ecológico, incluso sustituyendo las prioridades estatales en la inversión económica, al priorizar el ámbito turístico por sobre las actividades agrícolas de exportación. En este sentido, diversas miradas interpretan al turismo como una nueva *economía de plantación*.

La revolución del transporte en la era del petróleo hizo del Caribe uno de los principales destinos turísticos, cuando los viajes internacionales dejaron de ser un privilegio de las élites en las naciones industrializadas. El turismo se conecta en la región con los intereses estadounidenses, incluso las navieras que trasladaban productos agrícolas solían llevar visitantes. Destino principal hasta 1958 fue Cuba y sobre todo La Habana. Pero el gran salto se dio a partir de 1960, como parte del cambio de preferencias a favor de la modalidad de sol y playa, el auge de la aviación comercial y el turismo de masas. La inversión de empresas extranjeras del sector y la necesidad del flujo de visitantes, entre los que predominan los estadounidenses, europeos y canadienses, hace que se considere a esta actividad un nuevo tipo de “economía de plantación”. Se suma la llegada de cruceros, que aportan menos ingreso y contribuyen a generar desperdicios. Los enclaves turísticos significaron la afectación de ecosistemas que antes estuvieron entre los mejor preservados (Funes, 2013, p. 21-22).

De esta forma, el turismo se convirtió en la fuente principal de ingresos de buena parte de las naciones insulares, rama también primordial en la parte continental de la región *gran caribeña*, aunque no determinante de sus economías. Independientemente de sus propias inversiones locales, en general, la actividad turística está controlada de forma significativa por monopolios transnacionales. Ello explica por qué en gran medida la dependencia se mantiene en estas economías.

En la era del capitalismo global es evidente que las economías capitalistas dependientes del Caribe no son realmente <<libres>> para explotar y desarrollar sus recursos nacionales en consonancia con los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. Lo cierto es que la diversificación económica no ha reducido la dependencia económica. La mayoría hemos pasado de ser economías agroexportadoras a economías impulsadas por el turismo y dependientes de las remesas. Hablando de turismo, George Lamming se lamentó de que <<la fuente de nuestra mayor humillación es, a la vez, la fuente de nuestra mayor esperanza económica>> (L. Allahar, 2008, p. 38).

En la vorágine del neoliberalismo y la hiper concentración de la riqueza, reflejadas en los circuitos de la especulación, las bolsas de valores, el lavado de dinero y las amplias cadenas de la corrupción sistémica, algunos países del Gran Caribe se convirtieron en atractivos y jugosos paraísos fiscales que hoy en día ocupan los primeros lugares en el ámbito mundial.

De los dieciséis paraísos fiscales que hay en el Caribe destaca por su importancia las Islas Cayman, que es el paraíso fiscal más grande del mundo, el quinto centro financiero del planeta y tiene sólo una población de 40,000 habitantes (Rahn, 2004). En este lugar, como en la mayoría de los paraísos fiscales, las Cortes de Justicia son honestas, los administradores competentes, por lo que el valor está dado en el secreto y la falta de búsqueda del origen de estos grandes movimientos, ya que la mayoría de las inversiones son institucionales, prácticamente son muy limitadas las personales. Pero en Cayman no está el dinero, generalmente se invierte en Estados Unidos, y estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares, que no ha entrado físicamente a los bancos de la isla y se ha movido electrónicamente. En Islas Cayman hay 600 bancos y, de los 50 más importantes del mundo, están 47. En este sistema operan miles de fondos de inversión y

varias decenas de miles de empresas extranjeras (Arnaiz y Darchary, 2009, p. 48).

Así, el impacto del neoliberalismo en el Gran Caribe tiene múltiples dimensiones, similitudes y diferencias. En términos generales, el mercado financiero se convirtió en la columna vertebral de las economías neoliberales, las cuales funcionan alrededor de los intereses del capital que no tienen consideración alguna de carácter social. Así, cuando se dan las grandes reformas constitucionales que permiten el nacimiento del Estado neoliberal, las estructuras fundamentales del poder económico y político se adecúan al interés macroeconómico y dejan a un lado el impulso productivo de las economías. Sin duda, se genera una reconversión hacia el ámbito especulativo y se fortalece el sector de los servicios, identificado, en buena medida, con la volatilidad de las propias fuentes de trabajo y una mayor dependencia de la tecnología externa a partir del carácter hegemónico de los grandes monopolios.

Por ejemplo, en el terreno financiero se imponen las lógicas de la banca al servicio del capital y alejado por completo del financiamiento de las inversiones con carácter productivo. El pensamiento tecnocrático, baluarte de la gestión institucional dentro del Estado neoliberal, se convirtió en el referente fundamental que impuso las coordenadas de la actividad bursátil. Como en su momento lo señalara el derechista Vicente Fox, cuando fue presidente de México (2000-2006), su gobierno fue *de empresarios, por los empresarios y para los empresarios*. Esa es la mentalidad neoliberal en su máxima expresión. Y este sí es un rasgo común del neoliberalismo en la región del Gran Caribe, y del mundo en general: la racionalidad de los dueños del poder económico y sus representantes en el poder político, como es el caso de Fox y los presidentes mexicanos abiertamente neoliberales. Primero el capital y después el capital, en el inter, los explotados, los pobres, los prescindibles.

Una de las naciones del Gran Caribe que había gozado de la fama de disfrutar del Estado benefactor durante décadas fue Costa Rica,

también conocida como la *Suiza de América Latina*. A pesar de ello, sus clases dirigentes y empresariales fueron orientando de forma paulatina la economía al entorno neoliberal, llegando a firmar el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), en el año 2007, tras un referéndum en el que el sí ganó por un estrecho margen. En los años recientes, esta nación centroamericana ha ido consolidando su incorporación al capitalismo neoliberal.

Todo esto, por otra parte, se hace posible, no solo por la influencia de ciertas tendencias y desequilibrios de alcance planetario que impactan desde fuera, sino en virtud de los arreglos institucionales que a lo interno propician esta dinámica, los cuales fueron diseñados progresivamente a lo largo de los últimos tres decenios. En particular los siguientes: a) las formas de regulación de la banca, que privilegian la rentabilidad por encima de cualquier otro criterio y renuncian a exigir que esas instituciones operen teniendo en cuenta consideraciones sociales y económicas más amplias; b) la completa liberalización de los flujos de capitales; c) la estrecha visión ortodoxa que se ha tratado de imprimir en la gestión del Banco Central; d) la presunta “autonomía” que se le ha querido dar a éste, la cual ha redundado principalmente en su subordinación a los intereses de la banca comercial y su total opacidad frente a los mecanismos de la democracia (Vargas, 2016, p. 157).

En el terreno social, el neoliberalismo profundizó los niveles de pobreza y desigualdad en la mayor parte de la región, sobre todo por la disminución de las responsabilidades sociales del Estado, del financiamiento al campo, del abandono y decrecimiento de los presupuestos en la salud, la educación y la cultura, de la privatización de las empresas estatales y a partir también de las reformas laborales en perjuicio de los trabajadores, fundamentalmente a través de su desregulación.

La transición del Estado nacional desarrollista hacia el Estado neoliberal en las últimas dos décadas del siglo XX representó para los pueblos latinoamericanos una disminución sustancial de las responsabilidades sociales que existieron durante el siglo XX, con todas las variantes de los países en cuestión. La reconversión del papel del Estado en el manejo de la economía y su entrega al mercado, implicó una reducción sustancial de los presupuestos destinados a rubros de gran importancia como salud, educación, vivienda, empleo. Afirmar que el neoliberalismo generó importantes grados de pobreza no implica pensar que ésta no existía antes; todo lo contrario, lo que hizo el modelo impuesto desde hace más de tres décadas fue profundizar no sólo la pobreza, sino también potenciar los niveles de marginación, desigualdad, violencia y migración, llevándolos a grados extremos (López, 2018, p. 14).

Como saldo compartido en el Gran Caribe, se puede señalar que el abandono de esas responsabilidades estatales se refleja en la conformación de la llamada *ciudadanía de mercado*, noción que se refiere a que las políticas compensatorias y de seguridad social focalizadas determinan que las necesidades sociales deben ser atendidas por el propio mercado, claro, para quienes tengan la capacidad adquisitiva.

Mínima inversión social del Estado, es decir, bajas tasas de gasto público en salud, educación, pensiones, empleo, deporte, cultura, etc. El Estado orienta el gasto hacia la competitividad de las empresas y por tanto no invierte en políticas que estimulen la demanda ni en escuelas, hospitales, canchas de deporte, casas de la cultura, misiones sociales, etc. Al contrario, mercantiliza estos sectores o los devuelve al espacio de las familias (Monedero, 2008, p. 139).

El tema de las privatizaciones también incidió en algunas naciones insulares, aún en las que se mantienen bajo algún tipo de condición neocolonial, como es el caso de Puerto Rico, denominado de forma eufemística como *Estado Libre Asociado* de Estados Unidos. Todavía antes de la pandemia, en 2019, se impulsó la privatización de las empresas de electricidad bajo el control estatal dirigido por la Autoridad de Energía Eléctrica. Como en otros casos de la región, la venta de la empresa resultó perjudicial para la población.

En poco más de un año los efectos del privatizador han sido devastadores para el pueblo. Más de siete aumentos a los costos energéticos más diez apagones de 100 mil o más abonados y si fuera poco un apagón general que dejó al país a oscuras por aproximadamente treinta y seis horas. Sin contar las continuas interrupciones diarias por los pasados dos meses de forma consecutiva y diariamente en los primeros cinco lugares de más consumidores. En adición cientos de millones de dólares en equipos electrodomésticos dañados y sin contar los efectos a los centros hospitalarios, al extremo que estuvo sin servicio eléctrico por más de veinte horas el principal hospital del país (Figueroa, 2023, p. 197).

La reducción de las capacidades económicas y sociales del Estado, haciendo énfasis en los espacios o instituciones que atendían aspectos prioritarios para la población, como la salud, cobró parte de sus facturas en la pandemia de la Covid-19. A pesar del enorme y valioso esfuerzo del personal médico abocado a la atención de la emergencia sanitaria, los sistemas de atención a la salud, en general, se vieron rebasados en gran medida por el abandono estatal y la falta de inversión, y también porque finalmente el neoliberalismo, directa o indirectamente, privilegió el fortalecimiento de la atención médica desde el espacio privado.

Basta con revisar los saldos de la pandemia en nuestra región, para entender por qué tanta pérdida de vidas que no sólo se

originaron por el abandono social del Estado neoliberal. También se trata de una realidad multifactorial en la que, por ejemplo, varios de nuestros países ocupan los primeros lugares en la lista mundial de las principales enfermedades originadas por un patrón de consumo alimenticio que, en buena medida, provocan diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, cáncer, entre otras, porque en ese patrón están productos con altas cantidades de azúcar, sal y grasas saturadas. Y es que el capitalismo, al centrar su prioridad en la acumulación en las minorías que sostienen al modelo, y no en la vida, también mata. Aquí las cifras.

MUERTES POR COVID-19 EN EL GRAN CARIBE

PAÍS	RANKING MUNDIAL DE MUERTES POR CADA 100 MIL HABITANTES	ÍNDICE DE MORTALIDAD (POR CADA 100 MIL HABITANTES)	ÍNDICE DE MORTALIDAD (POR CASOS CONFIRMADOS)	NÚMERO TOTAL DE MUERTES
Perú*	1	665.84	4.9%	219,539
EU*	14	341.11	1.1%	1,123,836
Trinidad y Tobago	23	311.18	2.3%	4,355
Colombia	28	279.74	2.2%	142,339
México	32	260.73	4.5%	333,188
Surinam	38	239.33	1.7%	1,404
Santa Lucía	41	222.73	1.4%	409
Bahamas	45	211.83	2.2%	833
Granada	46	211.52	1.2%	238
Barbados	50	201.48	0.5%	579
Panamá	51	201.48	0.8%	8,609
Costa Rica	55	181.48	0.8%	9,245
Belice	59	173.03	1.0%	688
Guyana	63	165.02	1.8%	1,298
Antigua y Barbuda	68	149.09	1.6%	146
Jamaica	78	118.67	2.3%	3,514

Guatemala	80	112.65	1.6%	20,182
Honduras	81	112.18	2.4%	11,111
San Vicente y las Granadinas	83	110.86	1.3%	123
San Cristóbal y Nieves	93	88.36	0.7%	47
Cuba	99	75.31	0.8%	8,530
El Salvador	103	65.22	2.1%	4,230
República Dominicana	120	40.41	0.7%	4,384
Venezuela	135	20.59	1.1%	5,854
Haití	160	7.54	2.5%	860
Nicaragua	174	3.70	1.6%	245

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Universidad John Hopkins, disponible en <<https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality>>. Datos recopilados hasta el 10 de marzo de 2023.
* Se colocan ambos países para tener una coordenada comparativa con los países que integran el Gran Caribe.

Independientemente de que algunos de estos países tuvieron números muy bajos en contagios y muertes, lo cierto es que el impacto de la pandemia fue multidimensional, y afectó de forma sustancial al Gran Caribe en su conjunto, no sólo con el daño causado a las familias, incluyendo a quienes sobrevivieron al contagio, pero quedaron con secuelas, sino, también, con la pérdida de empleos y las condiciones socioeconómicas que profundizaron la pobreza de millones de familias.

Balance en tiempos de colapsos

De esta manera, el neoliberalismo impone su dominio en el Gran Caribe. Se trata de una región mosaico, espejo de una diversidad que se

expresa en las formas como la fase neoliberal del capitalismo impactó a este conjunto de naciones. No obstante, en términos generales, el modelo consolidó el carácter dependiente del capitalismo *gran caribeño*.

El proceso de reestructuración económica global avanzado por el neoliberalismo en los proyectos de libre comercio, son una manera de *reinventar el subdesarrollo*. Esto es, al no alterar las desigualdades en la remuneración de los trabajadores a escala mundial y profundizar estas mediante la competencia global de los niveles de salarios para atraer inversiones (China *versus* Santo Domingo en la industria del vestido), se reproduce una estructura de intercambio desigual; en el intercambio de valores en el mercado global es viabilizada por el proceso de desreglamentación nacional y re-reglamentación transnacional promovida por el neoliberalismo en los tratados de libre comercio (Pantojas, 2011, p. 182).

Más fuerte que los huracanes que azotan al Gran Caribe cada año, el neoliberalismo se presentó ante la región con efectos negativos, marcando un franco retroceso de las diversas conquistas laborales y sociales que dejó el siglo XX. Aunque fuera de forma diferenciada, la agudización de los niveles de producción, de extractivismo y consumismo que marcó el modelo como sus principales objetivos estructurales, no sólo han mantenido y/o aumentado los niveles de pobreza y desigualdad en la región, sino que han profundizado la dependencia y, por supuesto, consolidado patrones de desarrollo ajenos no sólo a las necesidades de cada país, sino fuera del alcance de su propia capacidad económica.

Esta realidad ha determinado que el Gran Caribe sea un protagonista multifacético del colapso ecológico en marcha, siendo relevante por una clara profundización de la crisis socioambiental en una buena parte de las naciones de la región. Sin duda, los números arrojan posibilidades de catástrofes cada vez más intensas y frecuentes.

El neoliberalismo, esta fase depredadora que el capitalismo ha impuesto desde hace ya 50 años, constituye, a la vez, el reflejo de una crisis profunda del propio sistema en la medida en que no sólo ha provocado profundas transformaciones económicas en los últimos años, sino que también ha generado un rechazo societal, tanto en los países del Gran Caribe como en el resto de América Latina y otras regiones del mundo. El gran desafío, desde cualquier óptica, radica en cómo mantener el pensamiento crítico que comparte el objetivo de proyectar otras formas de existencia política, económica, social y cultural, en la que el ser humano sea la prioridad, y no el capital y la cosmovisión de una vida anclada en la acumulación de lo material, sin importar que ello represente muerte, devastación societal y colapso ecológico.

BIBLIOGRAFÍA

- Allahar, Anton L. (2014). La supuesta independencia caribeña: ¿mito o realidad? En Jacqueline Laguardia Martínez (coord.), *El Caribe, sus islas y el difícil camino de independencia, identidad e integración*. Cuba: Editorial de Ciencias Sociales y Ruth Casa Editorial.
- Arnaiz, Stella Maris y Dachary, Alfredo César (2009). *Geopolítica, recursos naturales y turismo. Una historia del Caribe mexicano*. México: Universidad de Guadalajara.
- Figueroa Jaramillo, Ángel R. (2023). Deuda y Privatización en Puerto Rico. Las Alianzas Público Privadas y su agenda neoliberal de regalar la Autoridad de Energía Eléctrica. En Julio C. Gambina y Héctor Torres (comps.) *La deuda en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: CLACSO.
- Flores Olea, Víctor (2010). *La crisis de las utopías*. España y México: Anthropos, FCPyS/CEIICH-Universidad Nacional Autónoma de México.
- Funes Monzote, Reinaldo (2013). El Gran Caribe. De las plantaciones al turismo. *RCC Perspectives* 7. <http://www.jstor.org/stable/26241163>
- González Casanova, Pablo (2009). *De la sociología del poder a la sociología de la explotación: pensar América Latina en el siglo XXI*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores y CLACSO.
- (2017). *Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina*. México: Akal.
- López Castellanos, Nayar (coord.). (2018). *Procesos migratorios en la Centroamérica del siglo XXI*. México: La Biblioteca/Universidad Nacional Autónoma de México.
- (coord.). (2019). *El Gran Caribe: dimensiones geopolíticas*. México: La Biblioteca/Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2022). La ruta histórica del Estado neoliberal latinoamericano. Fracaso, rupturas y continuidades. En Jaime Ríos Burga y Moisés K. Rojas Ramos (comp.) *¿Es el fin del neoliberalismo en América Latina?* Perú: ALAS y CLACSO.

- Martí i Puig, Salvador (2015). Centroamérica: un balance de 25 años. Desigualdad, violencia y Estados débiles. En Nayar López Castellanos (coord.), *Democracia y política en la Centroamérica del siglo XXI*. México: La Biblioteca/Universidad Nacional Autónoma de México.
- Monedero, Juan Carlos (2008). *Disfraces del Leviatán: el papel del Estado en la globalización neoliberal*. Venezuela: Centro Internacional Miranda y MPPEs.
- Pantojas García, Emilio (2011). De la plantación al resort: El Caribe en la era de la globalización. En Milagros Martínez y Jacqueline Laguardia (comp.), *El Caribe en el siglo XXI: coyunturas, perspectivas y desafíos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Vargas Solís, Luis Paulino (2016). El Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica (1984-2015): Devenir histórico y crisis. *Revista Rupturas*, 6(1), 147-162. <http://investiga.uned.ac.cr/rupturas/>

México 1983-2018: 35 años de neoliberalismo

Josefina Morales¹

Medio siglo de crisis estructural abierta en la década de los setenta

El largo periodo de recesiones recurrentes en el capitalismo mundial se inicia con la devaluación del dólar el 15 de agosto de 1971 al retirar el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el tipo de cambio fijo del dólar en relación con la onza troy de oro de 35 dls., acordada en Bretton Woods en 1944 para la reorganización del sistema financiero mundial y se crearon el Fondo Monetario Mundial (FMI) y el Banco Mundial (BM), un año antes de terminar la segunda guerra mundial (Fux, 2022).

En la década de los setenta se exhibe ya la presencia de una crisis sistémica multidimensional, particularmente en Estados Unidos.

¹ Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y tutora y profesora del Posgrado de Estudios Latinoamericanos y del Posgrado de Geografía de la UNAM.

Este país registra la pérdida de su autosuficiencia energética y se habla ya de la problemática ambiental. La denuncia de los papeles del pentágono en junio de 1971, el escándalo del Watergate que llevó a la renuncia a la presidencia de Richard Nixon en agosto de 1974 y la derrota de Estados Unidos en Vietnam ponen en entredicho la hegemonía mundial de Estados Unidos.

A mediados de ese decenio aparece la inflación emparejada con una recesión, fenómeno inédito denominado estanflación, estancamiento con inflación, y la problemática del financiamiento público se exhibe en el déficit fiscal del Estado y de varias entidades subnacionales, como la quiebra de las finanzas públicas de Nueva York. Le siguen en esa década una serie de quiebras bancarias en distintos países del primer mundo; situación que se prolonga a los siguientes decenios. “Durante el periodo de 1980 a 1996 por lo menos dos tercios de los 181 países que son miembros del FMI tuvieron problemas bancarios”².

El incremento de los precios del petróleo y la crisis petrolera internacional detonada por un conflicto geopolítico en el medio oriente, la guerra del Yom Kipur entre varios países árabes e Israel en 1973, se entremezcla con el endeudamiento internacional y el incremento de las tasas de interés que desembocan en la crisis 1981-1982. Y también se presenta, en esa década, un incremento de los precios de diversos minerales. Al mismo tiempo se registran altas tasas de desempleo que, detrás de la recesión, anunciaban la crisis del régimen fordista de acumulación.

La CEPAL contabiliza que en 1980 la deuda externa de América Latina era de 242 mil millones de dólares, en 1990 de 418 mil millones, en 2000 alcanzó 1.2 billones y en 2019 registró 2.2 billones de dólares [...] (CEPAL, 1995 y 2020). Y, por intereses a lo largo de esas cuatro décadas hemos pagado 5 billones de dólares. Números, datos, que nos enfrentan a dimensiones astronómicas que no podemos

² Lindgren, C., G. García y M. I. Saal (1996), *Bank Soundness and Macroeconomic Policy*. Washington: IMF. Citado por Amieva Huerta y Urriza (2000).

imaginar. Los acuerdos con el FMI para asegurar el pago de la deuda abren paso a la década perdida en Nuestra América. Sobre la deuda externa hay que recordar que, en abril de 1985, Fidel Castro decía que pagarla es “una Imposibilidad económica, una imposibilidad política, una imposibilidad moral” (Castro, 1985).

David Harvey señaló que “Desde los ’70 el capitalismo global ha experimentado un problema crónico de sobreacumulación” cuya volatilidad la interpreta como “ajustes espacio-temporales” que han fracasado. Considera que el origen de la crisis de 1973 “fue el colapso mundial de los mercados inmobiliarios [...] seguido casi inmediatamente por la virtual bancarrota de la ciudad de Nueva York en 1975” (Harvey, 2005, p. 100).

A esta crisis estructural, el capital monopolista responde con tres grandes transformaciones que abren paso al neoliberalismo que se impone con violencia sobre los pueblos de América Latina. Así lo demostró el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, antecedido por el golpe militar en Brasil en 1964, en Bolivia en 1971 y el 27 de junio de 1973 en Uruguay, a los que continúa el golpe de 1976 en Argentina que deja más de 30000 desaparecidos.

Las tres transformaciones estructurales son una nueva revolución industrial en el ámbito del proceso productivo, una revolución en el proceso de trabajo y una regresión en el papel del Estado, encabezados, en América Latina, con la imposición del FMI de los programas de ajuste y privatización para asegurar el pago de la deuda externa e infligir la apertura de nuestras economías.

Ese complejo proceso desemboca en una nueva fase de la internacionalización del capital, en la denominada globalización, entre cuyos ejes están los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la privatización de la empresa pública; al mismo tiempo que emerge un nuevo predominio del capital financiero en el proceso de acumulación y reproducción del capital.

Para Manuel Cazadero, “las revoluciones industriales han sido transformaciones de las formas de existencia del capital, de los procesos de organización del trabajo productivo, del papel del Estado

frente a la sociedad y la economía y, por último, de la base energética. Puede afirmarse que cada revolución industrial está constituida, a su vez, por revoluciones en el capital, el trabajo, el Estado y la energía” (Cazadero, 1997, p. 11). Y, con ello, transformaron la economía mundial.

La reestructuración de la industria manufacturera de Estados Unidos, soportada en gran medida por la III revolución industrial centenaria y la reconfiguración del proceso de producción que desplaza las fases más intensivas en fuerza de trabajo hacia los países periféricos, vía la maquila, se generaliza. Impulsados inicialmente por el Banco Mundial se abren nuevos territorios denominados Zonas Procesadoras de Exportación (EPZ por sus siglas en inglés, Export Processing Zones), inicialmente en las zonas fronterizas que se caracterizan por ser tierra de nadie, donde no hay leyes para la protección de los trabajadores ni del medio ambiente.

Zonas procesadoras de exportación 1975-2006				
	1975	1986	1997	2006
Núm. de países	25	47	93	130
Núm. de zonas	29	136	854	3500
Empleo		1580000	22500000	66000000
México	67214	249833	903736	1202134
China			18000000	40000000
Fuente: OIT [1988] Economic and social effects of international enterprises in export processing zones, Ginebra. ONUDI [2009], Industrial Development Report 2009, Viena.				

México negocia el primer TLC con Estados Unidos Estados Unidos entre 1992 y 1993 y entra en vigor el 1 de enero de 1994, el mismo día del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Siguieron los tratados firmados con Chile en 2003 y con los países centroamericanos y la República Dominicana (DR-CAFTA) en 2004, Perú en 2009 y Colombia en 2012. En total, Estados Unidos tiene

catorce TLC con veinte países del mundo, cuatro de esos tratados son con nueve países de El Gran Caribe. México tiene 32 acuerdos, entre los que destacan once con países de la Unión Europea.

Tratados de Libre comercio que garantizan la libre circulación al capital, tanto productivo, inversión extranjera directa, como financiero, pero no permiten la libre circulación de la fuerza de trabajo que va a adquirir nuevas dimensiones numéricas en la migración de trabajadores sin documentos. Al capital le aseguran, además, instancias especiales para dirimir controversias, jurados del Banco Mundial que se crean expofeso en Nueva York.

La crisis resurge a finales de los años 90, detonándose en Asia, en los llamados Tigres Asiáticos que habían registrado altas tasas de crecimiento en las décadas previas. Situación que llevó a Paul Krugman a hablar del retorno de la depresión (Krugman, 2000). Casi simultáneamente se registra en Estados Unidos, después del ciclo corto económico más largo de su historia durante el gobierno de Clinton, la crisis financiera en el ámbito de las empresas tecnológicas, de las empresas.com y a las pocos años emerge la crisis inmobiliaria y los derivados en el mercado de valores. Y en 2008-2009 surgirá con fuerza la denominada gran crisis, no resuelta hasta ahora.

En Nuestra América surge un nuevo escenario con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999 que abre un periodo de grandes transformaciones con gobiernos democrático-popular-nacionalistas que podríamos considerar que cierra en 2012. En Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en Brasil con Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Paraguay con Fernando Lugo. Gobiernos que contaron con recursos provenientes del auge de los precios internacionales de las materias primas. Progresismo que se conjuntaba con el gobierno socialista de Cuba y el gobierno de la V República de Venezuela con Hugo Chávez de 1988 hasta su muerte en 2013.

Y frente a los TLC buscan una integración alternativa. Chávez mando al ALCA, propuesto por Estados Unidos, AL CARAJÓ en 2005

y propone, con Cuba, la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA).

La lucha de los sectores conservadores contra los gobiernos progresistas adquirió las características de una guerra híbrida de amplio espectro, que a partir de la guerra económica contra los pueblos y las naciones va de la guerra mediática en medios tradicionales de comunicación y en las redes a la invasión militar, a la guerra judicial y a golpes de Estado blandos y militares en Bolivia, Ecuador, Brasil [...] Al tiempo que se extrema el criminal bloqueo contra Cuba.

La formación de un capitalismo neocolonial en México

Antecedentes

La crisis final del modelo de industrialización de sustitución de importaciones en los años setenta que había impulsado la consolidación del capital monopolista en nuestro país en donde se entrelazaban el capital extranjero, el nacional y el del Estado, conformando lo que Alonso Aguilar definía como el capitalismo monopolista de Estado (Morales, 1995), llevó, a partir de 1976, en el contexto de la crisis estructural del capitalismo mundial señalada, a la baja de la tasa de crecimiento económico y al crecimiento de la inflación y del endeudamiento público externo con crecientes déficits públicos y a la devaluación del peso después de haber mantenido un tipo de cambio estable, de 12.50 pesos por dólar desde los años cincuenta; y también nos arrastró, en ese mismo año, a la firma de la primera Carta de Intención con el FMI para garantizar el pago de la deuda externa y hacer recaer sobre los trabajadores el costo de la misma con raquíuticos aumentos salariales, los denominados “topes salariales” (Chávez, 1996). Variables que se desbordaron negativamente en los dos primeros años de la década de los ochenta.

Esta dinámica de la relación inflación-bajo crecimiento³ se contuvo por unos años por el *boom* petrolero producto del descubrimiento de importantes yacimientos en el sureste y en el mar del Golfo de México (1979-1982), Cantarell el más importante. Petróleo que se destinó, en su mayor parte, a la exportación. En 1983 el petróleo representó 13% del PIB con una producción de más de tres millones de barriles diarios; sus exportaciones llegaron a representar 70% del total y su contribución a las finanzas públicas alcanzó más del 40% de la recaudación total (Castañeda y Villagómez, 2006).

José López Portillo afirmó en su último informe de gobierno en septiembre de 1982, frente a esta situación tan vulnerable y compleja, con una demagogia extrema, “Ya nos saquearon. México no se ha acabado. Ya no nos saquearán” y previamente había afirmado que defendería al peso “como un perro”. Afirmaciones que, desde luego, no se cumplieron. También decretó una efímera “nacionalización” / “estatización” de la banca comercial que su sucesor, Miguel de la Madrid, anuló. En 1983 se creó el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (FICORCA) propuesto por Ernesto Zedillo para salvar de la quiebra a las 20 empresas más grandes del país que debían 20 000 millones de dólares. Zedillo, ya presidente, lo convirtió en el malhadado FOBAPROA (Fondo Bancario para la protección del ahorro) que ha significado miles y miles de millones de pesos del presupuesto público que podrían haberse destinado a las necesidades de la mayoría de la población y a una mayor inversión del sector público. Y, para colmo, ese fondo bancario está hoy, en gran parte, en manos de los fondos financieros transnacionales como BlackRock.

³ Conocido en Estados Unidos como estanflación.

GATT-BTI-TLCAN-TMEC: de la privatización a la desnacionalización

Tras este galimatías de letras se oculta uno de los principales instrumentos de la dominación imperialista sobre nuestros pueblos, los Tratados de Libre Comercio, que impusieron la apertura indiscriminada de las economías nacionales al capital extranjero, la privatización de la empresa pública y su efímera transnacionalización, así como la destrucción de los mercados internos y la reorientación de la producción hacia la exportación, vía la maquila, engarzándose a la cola de las llamadas hoy cadenas globales de valor.

Impusieron la libre circulación de capital, de mercancías y de inversión productiva y financiera, pero no de la fuerza de trabajo. Así fomentaron la emigración indocumentada de millones de compatriotas al demandante mercado de trabajo estadounidense.

Durante la negociación del TLCAN (1992-1993) el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (diciembre 1988-noviembre 1994) realizó trascendentales reformas, incluso constitucionales, que deberían llamarse con propiedad contrarreformas. Entre las más importantes están las realizadas a la ley de la minería, a la de la inversión extranjera, la financiera encabezada por la autonomía del Banco de México, al artículo tercero de la Constitución sobre la educación pública y la reforma de los artículos 27 y 28 sobre la propiedad pública que abrió la puerta para la privatización, extranjerización y desnacionalización de la empresa pública. Uno de los mejores trabajos sobre el tema es el libro de John Saxe-Fernández (2002), **La compraventa de México**, referencia indispensable sobre el tema. Del discurso demagógico se distinguían los vocablos de “solidaridad” y “modernización”; sobre esta última Jorge Carrión señalaba que confundían modernización con retroceso.

Como he señalado en otros trabajos es indispensable tener en mente la dimensión de la riqueza pública construida a lo largo de medio siglo como resultado de la revolución mexicana. Los activos

públicos representaban cerca de las dos terceras partes de los activos nacionales, entre los que destacaban los energéticos (petróleo y electricidad), el agua, ferrocarriles, carreteras, aviación, la mitad de la siderúrgica, la tercera parte de la minería, los ingenios azucareros, infraestructura agropecuaria (distritos de riego, silos de almacenamiento) y los servicios de salud y educación pública. En el sector financiero estaban la Nacional Financiera (Nafinsa) para apoyar el desarrollo industrial, el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), la banca de financiamiento al campo (Banrural) y la banca para la construcción de infraestructura (Banobras). También se había creado, a mediados de los setenta, el Instituto para el Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Oficialmente en 1982 se registraban 1 155 organismos estatales, 750 empresas de participación mayoritaria, 65 de participación minoritaria, 263 fondos financieros, como fideicomisos, y otros 107. Para 1988 la desincorporación y liquidación había afectado a 703, ya sea por venta, liquidación, transferencia o fusión (Rey, 1983; Aguilar, 1998 y Concheiro, 1996, p. 76).

La crisis alcanzó el ámbito de la política: la descomposición del partido en el poder (PRI) se exhibió con el asesinato en marzo de 1994 de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial oficial, el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de ese mismo año y el “suicidio” de su hermano Mario, ex fiscal general, en septiembre de 1999 en Nueva York. Entre 1989 y 1994 se registró el asesinato de 265 activistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), formado por Cuauhtémoc Cárdenas después del fraude electoral de 1988,⁴ y durante el gobierno de Ernesto Zedillo se registraron alrededor de otros 500 asesinatos de activistas electorales.

⁴ Noria Research, sin fecha, consultado 11 de junio de 2023 en noria-research.com/matar-candidatos-en-mexico-el-prd-en-los-90

La privatización, la recomposición del Estado y de la oligarquía

En febrero de 1995, en medio de la mayor recesión registrada en las últimas décadas del país, avanzado el proceso de privatización de la empresa pública con Salinas de Gortari caracterizado por el fraude y el compadrazgo, durante el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo que correspondía al segundo año de vigencia del TLCAN, se firma el acuerdo marco entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, por el que Estados Unidos facilitó un préstamo por 51 000 millones de dólares quedando como garante las exportaciones petroleras cuyo valor se depositó en un banco de Nueva York (Morales, 1997, pp. 202-204). El gobierno estadounidense entregó de inmediato 30 000 millones de dólares, 15 000 que debieron ser devueltos *ipso facto* a Estados Unidos, pues correspondían a fondos de las jubilaciones de trabajadores de ese país.

Con las privatizaciones se abre un proceso de recomposición de la oligarquía y de la recomposición del Estado, terriblemente fraudulento y corrupto (Concheiro, 1996 y Morales, 2017). La vieja fracción oligárquica-bancaria encabezada por Manuel Espinosa Yglesias, el dueño del banco más grande del país, Bancomer, fue desplazada desde la estatización de la banca en 1982 y en el proceso de privatización no se le permitió volver a adquirir el banco. Salinas, en un capitalismo de compadrazgo, entregó la banca a un pequeño grupo de empresarios arribistas y fraudulentos, como el tabasqueño Carlos Cabal Peniche⁵, que rápidamente llevaron a la quiebra al sistema bancario y abrió paso a la conformación de una nueva fracción de la oligarquía que se consolidaría con el proceso que va de la privatización a la recomposición del Estado con la formación de nuevas entidades autónomas, la formación de asociaciones público-privadas y la ofensiva

⁵ Empresario que huyó de México en 1994 y estuvo preso tres años en Australia por su práctica bancaria fraudulenta.

brutal contra las organizaciones sindicales de los trabajadores y organizaciones políticas y sociales de carácter popular.

En la recomposición de la oligarquía destaca Carlos Slim, que a partir de la adquisición de Telmex en el proceso de privatización, pasa de un mediano empresario que tenía una casa de bolsa y una o dos empresas industriales, a convertirse en una década en el más importante oligarca del país y uno de los hombres más ricos del mundo, con la creación de América Móvil en el ámbito de las modernas tecnologías en telecomunicaciones y desarrollar, entre otros, al Grupo Carso que participa en infraestructura ferroviaria, petróleo y minería. También Germán Larrea, el segundo oligarca nacional, además de su emporio minero fortalecido, adquiere parte importante del sistema ferroviario nacional, al que ya Salinas le había quitado el transporte de pasajeros.

La privatización pasa rápidamente a un efímero proceso de internacionalización de la gran empresa mexicana (Vidal, 2005 y Coll-Hurtado, et al. 2007). que termina en una desnacionalización encabezada por la venta de la banca privada de capital mexicano al capital extranjero, mayoritariamente español, realizada durante el gobierno de Vicente Fox, el primer sexenio panista. Venta por 12 500 millones de dólares que se realiza en el mercado de valores, por lo cual no pagan ni un peso de impuesto.

Otro de los sectores desnacionalizados es el de la minería. La Ley Minera de Salinas de 1992 (Delgado, et al., 2001 y Morales, et al. 2016). En el artículo 6° se declara a la minería como actividad de utilidad pública y preferente “sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Esto permite entregar los fondos mineros al gran capital privado mexicano y abrir su posterior privatización y extranjerización dar a Germán Larrea uno de los más grandes yacimientos de cobre del país. **La caridad**, la mayor reserva de cobre del país, se entrega a Larrea en la segunda oferta pública que se realiza, así como

la histórica mina de Cananea en 1989⁶. Larrea, tras la huelga de los trabajadores de 2007 a 2009, ni tardo ni perezoso le cambió el nombre para intentar borrar su historia⁷.

Salinas también cambió el artículo 130 de la constitución para dar mayor participación abierta al clero católico; el artículo tercero para acotar el derecho a la educación pública de educación superior y los artículos 27 y 28 para abrir el paso a la privatización de la electricidad y del ejido, histórica formación colectiva en la agricultura consolidada durante el reparto agrario del cardenismo en los años treinta del siglo pasado. Y también se desfiguró al otrora sector de los trabajadores al dar un golpe al sindicato de los trabajadores petroleros al meter preso a su secretario general Joaquín Hernández Galicia y a disminuir drásticamente el peso político de la Confederación de Trabajadores de México dirigido por su sempiterno dirigente Fidel Velázquez.

El saldo: un capitalismo neocolonial

En la nota que publiqué en el número cero del boletín del GT Crisis y economía mundial de CLACSO, **Nuestra América XXI. Alternativas y desafíos**, septiembre de 2016, señalé diez grandes transformaciones como resultado del TLCAN, de las que destaco ahora seis: crecimiento inestable e insuficiente entre crisis recurrentes; privatización y desarticulación de la planta productiva; reiterada ofensiva contra el trabajo; la emigración y la privatización de los bienes comunes; el contenido lesivo en asuntos de seguridad nacional y las crecientes resistencias sociales enfrentadas con su criminalización y represión. Ayotzinapa presente en el corazón de la patria.

La desnacionalización es de trascendencia histórica. El sector financiero, mayoritariamente extranjero, incluido el inmobiliario,

⁶ La huelga de los mineros de Cananea en 1906 es considerada como uno de los movimientos sociales precursores de la Revolución Mexicana.

⁷ El conflicto entre los trabajadores mineros de Cananea y otras minas de Larrea siguen sin solución en 2023.

sobrepasa el peso económico conjunto del petróleo, la electricidad y la agricultura, con más del diez por ciento. En gran parte, la nueva generación de oligarcas, venden al capital extranjero sus empresas. Y, desde hace varios años, por ejemplo, la siderúrgica Hylsa, que fue la joya de la familia del otrora Grupo Monterrey, se vendió a Arcelor-Mital, capital italo-argentino en 2005; y la cervecería Modelo a una cervecera alemana. Ahora ni la cerveza modelo ni los helados Santa Clara, otrora símbolos nacionales, son mexicanos. La inversión extranjera directa acumulada entre 2000 y 2018 alcanzó 531 358 millones de dólares. La industria automotriz y de autopartes, de capital extranjero, realizó, en ese último año, exportaciones que representaron 31.5% del total.

Este proceso culmina con el llamado Pacto por México impulsado en los primeros meses del sexenio de Enrique Peña Nieto para privatizar el petróleo. Con el abandono de las refinerías se fue consolidando la pérdida de nuestra soberanía energética. En 2018 se importó de Estados Unidos el 77% del consumo nacional de gasolina.

Uno de los procesos más lesivos en la estructura económica fue el creciente peso de la manufactura exportadora, fundamentalmente maquiladora. La maquila, el último eslabón de la cadena de producción manufacturera, caracterizado por ser intensivo en fuerza de trabajo y generadora de poco valor agregado, adquirió un crecimiento extraordinario, con fuerte dependencia del ciclo industrial estadounidense. En 1985 registraba 760 establecimientos, 193 en material y accesorios eléctricos y electrónico, 108 en la confección y 63 en autopartes; en 2006, reportó 2810 establecimientos totales, de los cuáles 423 y 464 estaban en las ramas mencionadas. Los trabajadores pasaron de 211 298 a 1 202 134 en el mismo lapso. Hasta mediados de los años ochenta, las mujeres eran la mano de obra predominante en el sector obrero y a partir de la aparición de la industria de autopartes fue creciente la participación masculina; para 2006, los hombres representaban el 45.6 por ciento.

Con Felipe Calderón⁸ que llegó al poder con el fraude electoral en diciembre de 2006 que se cometió contra Andrés Manuel López Obrador, después del desafuero orquestado por Fox en 2005 y detenido por la movilización popular, se abrió uno de los más negros periodos de nuestra historia contemporánea. So pretexto de la lucha contra el narcotráfico se desató una guerra que hundió en sangre al territorio nacional al tiempo que se tejía alianza entre Genaro García Luna, secretario de seguridad pública, con el cartel de drogas más poderoso del país, el cartel de Sinaloa encabezado por Joaquín el Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos desde enero de 2017. Se registraron decenas de miles de asesinatos y centenares de desaparecidos. Hoy, Genaro García Luna ha sido juzgado en Nueva York y condenado por cinco cargos relacionados con el narcotráfico. Está preso en Estados Unidos

Calderón también impuso en su último mes de gobierno una lesiva reforma laboral que abrió paso al outsourcing.

El neoliberalismo impuso asimismo un cambio cultural que va de las ciencias sociales a la vida cotidiana. Y en el tema que examinamos desapareció el vocablo maquila y sus estadísticas nacionales e internacionales, a lo más dejaron una estadística en México muy elemental sobre la industria exportadora y maquiladora. Ahora se habla de las cadenas globales de valor. Para ilustrar el impacto cultural del neoliberalismo recojo parte de una presentación, no publicada, que realicé en el museo Carrillo Gil en el 20° aniversario del TLCAN.

El cumpleaños

El primer minuto del primero de enero de 1994 el México profundo sacudió al país: los indígenas Tseltales, Tsotsiles, Ch'oles, To-po-lab'ales y Zoques de Chiapas dijeron ¡Basta! y se levantaron en

⁸ Hoy conocido popularmente como Comandante borolas, ya que en los primeros días de gobierno se vistió una enorme casaca militar. Borolas fue un personaje de La familia Burrón, uno de los grandes comics populares del país (de 1948 a agosto de 2009).

armas contra el supremo gobierno. Ese primer minuto correspondía, al mismo tiempo, al primer minuto del primer día del primer año en que el gobierno había anunciado que México ascendería al primer mundo: entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN.

El cumpleaños número 20 se festeja en grande: las reformas de las que presume el PRI revivido, el dinosaurio que encontramos al despertar, coronan al TLCAN: lo que no se consiguió en 1993, a pesar de las previas reformas del artículo constitucional 130 que abrió paso a la jerarquía eclesiástica, el cual había sido cancelado por la Reforma, con mayúscula, de 1857; y del artículo 27 que privatizó el ejido; y de otras tantas nuevas leyes para entregar al capital extranjero los fondos mineros del país y casi todas las actividades económicas, eso que no se consiguió entonces, se obtiene ahora. No se abrieron en 1994 al capital extranjero los energéticos y se postergó 10 o 15 años la apertura agrícola, financiera y en telecomunicaciones.

Las actuales reformas, contrarreformas deberíamos llamar, dejan al trabajo indefenso frente al capital, abren las telecomunicaciones al capital extranjero y, sobre todo, la madre de todas las reformas, entrega al capital extranjero los recursos energéticos nacionales: el petróleo, el gas, la electricidad, el agua, el aire [...]

Veinte años después, aquéllos que el tango dice que veinte años no es nada, aquéllos que alguien nos dijo alguna vez, cuando de niños leíamos aventuras, que no es lo mismo **Los tres mosqueteros** que **Veinte años después**, vivimos el cumpleaños que los nuevos poderes fácticos, nacionales y extranjeros, festejan a lo grande.

Sí, el país no es el mismo. Ha cambiado, sí, de crisis en crisis y con un mediocre crecimiento económico general, que algo dice y nada dice, porque ha habido un crecimiento desigual, por actividades y por regiones, por ciudades. Y también ha cambiado el pueblo todo, la sociedad misma, ya no somos los mismos, empezando porque tenemos veinte años más los que vivíamos aquel primero de enero de 1994, cuando los indígenas zapatistas dijeron aquí estamos, y porque nacieron más de 30 millones de mexicanos en estos veinte años.

En la industria crecieron algunas actividades manufactureras que nos han convertido en un país exportador industrial: la Ford, la General Motors, la Wolkswaguen, Nissan y Chrysler exportan los automóviles que fabrican los obreros mexicanos; la Sony exporta televisores, Delphi autopartes y ahora hasta la cerveza modelo que se exporta ya no es de capital mexicano. Es más, somos parte, se dice, de las cadenas globales de valor; lo que no se dice es que con la maquila somos el eslabón más débil de la cadena, el de la fuerza de trabajo más barata, una de las más baratas del mundo; el eslabón del que en cualquier momento de crisis se puede prescindir y lanzar a la calle a miles de trabajadores.

Mas la privatización y la apertura, la política de no hacer nada más que abrir la casa, barrerla y quedarnos con la basura, con la deuda, con los trabajadores sin empleo, para que venga el capital extranjero y los grandes capitales mexicanos engorden y se asocien en relaciones peligrosas, nos llevaron a un proceso que pasó de la privatización a la desnacionalización que reproduce la dependencia y el subdesarrollo. Hoy, veinte años después, México, la cuna genética del maíz, importa maíz y México, país petrolero, importa cerca de la mitad del consumo de gasolina, porque los gobiernos panistas que recibieron miles y miles de millones de dólares por la exportación de petróleo, más de cuatro veces lo que recibió el inefable López Portillo, no fueron capaces de construir ni siquiera la barda de una refinería. Hoy somos el décimo país exportador de automóviles del mundo, pero más de la mitad de los autos que se venden aquí son importados [...]

Y nos vuelven a prometer el cielo, el mar y los pescados: que tendremos energéticos baratos, trabajo, mejores salarios, mejor nivel de vida [...] y lo que tenemos son deudas más deudas y un ingreso que no alcanza. Ya ni la burla perdonan [...]

El país ha cambiado: las ciudades más importantes del norte del país, de la frontera con Estados Unidos, crecieron mucho más que las del centro y las del sur; ahí se instalaron las nuevas industrias maquiladoras y de exportación y Juárez se convirtió en el municipio más proletario del país, desde antes del TLCAN, Tijuana ya no sólo es

la ciudad del mayor tránsito internacional y maquilador, también se dice que tiene importantes complejos electrónicos, y León-Silao, en Guanajuato, se convirtió en los últimos 15 años en otro polo automotriz y San Luis va para allá que vuela y Querétaro modernas plantas de la industria aeronáutica.

La ciudad de México, por el contrario, se desindustrializó y ha vivido una transformación acelerada de su configuración urbana: pensemos en Santa Fe, territorio urbano de las grandes corporaciones y de condominios que se vendieron en dólares; en el nuevo Polanco, la remodelación del centro histórico o en la proliferación de plazas comerciales y de tiendas Oxxo en cada esquina que transforman el comercio cotidiano de los barrios. Todo ello con un crecimiento explosivo del comercio informal, de las periferias sin límite, del trabajo informal, que un día intentan desaparecer de algunas zonas para reaparecer en otras multiplicado, si no es que en el mismo lugar [...]. El sector inmobiliario devora las ciudades por todo el país y crea el Nuevo Veracruz y el Nuevo Acapulco y proliferan las periferias urbanas de las casas feo (GEO) hoy en crisis [...]. El aparato priísta, el que encontramos al despertar de la pesadilla panista, se reprodujo con las mismas y peores mañas. Ahí está el presidente del PRI del DF, hijo del rey de la basura de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, con su corte de edecanes en prostitución: sin comentarios.

El pueblo, las clases sociales han cambiado, millones de mexicanos se fueron pa'l norte sin papeles y con papeles. Acaso uno de los cambios más sensibles son los millones de jóvenes hijos de la crisis y del neoliberalismo. Los ninis que ni estudian ni trabajo porque no hay escuela ni trabajo, porque el futuro no existe frente al espejismo del consumismo cotidiano que va, como decía un joven profesor español, del vivir consumismo pantalón, consumisma camisa y consumismos zapatos a los miles de jóvenes, que hoy vemos en México, y no tan jóvenes, individualistas de la clase media que abarrotan los centros comerciales y no se despegan de sus celulares ni sus Ipad.

En ese complejo social, mezcolanza sin mezcla, todavía enraizada en el México profundo, la historia se pierde y se entrevera y las

corrientes subterráneas del México Profundo se escabullen en las resistencias populares.

Posdata: El 6 de julio de 2018 la coalición Juntos Haremos Historia gana las elecciones y Andrés Manuel López Obrador se convierte, con más de 30 millones de votos, en el presidente de México número 22 desde 1917. Con este triunfo, se abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Monteverde, Alonso (1988). La venta de las empresas estatales en México. Estrategia. *Revista de Análisis político*, 82, 7-30.
- Amieva Huerta, Juan y Urriza González, Bernardo (2000). Crisis bancarias: causas, costos, duración, efectos y opciones de política. *CEPAL, Serie política fiscal*, 108 (enero).
- Castañeda, Alejandro y Villagómez, Alejandro (2006). Análisis histórico de la relación macroeconomía-petróleo de México: 1970-2006. *Documentos de trabajo del CIDE*, 375 (noviembre).
- Castro, Fidel (1985). *La deuda externa. Selección de textos de Fidel Castro, feb-sept.* Cuba (1985, 1ª Edición): Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. Venezuela (1986): Editorial Pomare. Brasil (1986): L&PM Editores. Selección realizada por Marta Harnecker.
- Cazadero, Manuel (1997) *Las revoluciones industriales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Chávez Ramírez, Paulina Irma (1996). *Las cartas de intención y las políticas de estabilización y ajuste estructural de México: 1982-1994*. México: IIEC-UNAM.
- CEPAL (1995). *América Latina y el Caribe: series estadísticas e indicadores de la deuda externa 1970-1993*.
- _____ (2020). Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020.
- Coll-Hurtado, Atlántida, Morales, Josefina y Vidal, Francisco (2007). Plantas industriales de empresas mexicanas en el extranjero. Mapa en *Nuevo Atlas Nacional de México*. México: Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Concheiro, Elvira (1996). *El gran acuerdo. Empresarios y gobiernos en la modernización salinista*. México: IIEC-Era.
- Delgado Wise, Raúl y del Pozo Mendoza, Rubén (2001). Minería, Estado y gran capital en México. *Economía e Sociedad*, 16, 105-127.

- Fux, Gastón (2022). A 50 años de la inconvertibilidad del dólar al oro. *En Defensa del Marxismo* 58 (febrero).
- Harvey, David (2005). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. En Leo Panitch y Clin Leys (eds.), *El nuevo desafío imperial*. Buenos Aires: CLACSO.
- Krugman, Paul (2000). *El retorno de la economía de la depresión*. Barcelona: Crítica.
- Lindgren, C., G. García y M. I. Saal (1996). *Bank Soundness and Macroeconomic Policy*. Washington: IMF. Citado por Juan Amieva Huerta y Bernardo Urriza González (2020). Crisis bancarias: causas, costos, duración, efectos y opciones de política. *CEPAL, serie política fiscal*, 108 (enero).
- Morales, Josefina (1995). Imperialismo, subdesarrollo y capitalismo monopolista de Estado. (Contribución de Alonso Aguilar). En Ruy Mauro Marini y Margara Millán (coords.), *La teoría social latinoamericana. La centralidad del marxismo* (59-84). México: El Caballito, Tomo III.
- (1997). *México y Cuba. Dos experiencias frente a la reinserción internacional*. México: IIE, Universidad Nacional Autónoma de México.
- (2017). Las transformaciones del Estado bajo los Tratados de Libre Comercio. El caso de México. *Anuario de Estudios Políticos Latinoamericanos*, 3, 131-147.
- Morales, Josefina y Téllez, Isidro (2016). Minería: acumulación neocolonial por desposesión en México bajo el TLCAN. En Jaime Estay (coord.), *La economía mundial y América Latina, ante la continuidad de la crisis global* (329-353). México: BUAP, Facultad de Economía y CLACSO.
- Rey Romay, Benito (1983). *La ofensiva empresarial contra la intervención del Estado*. México: Siglo XXI, IIEc, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Saxe-Fernández, John (2002). *La compraventa de México: una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos*. México: Plaza y Janés.

Vidal, Francisco (2005). ¿En dónde están los grandes grupos industriales mexicanos? En Josefina Morales (coord.), *México. Tendencias recientes de la geografía industrial* (pp. 73-84). México: IG-Universidad Nacional Autónoma de México.